



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

13^a REUNIÓN – 6^a SESIÓN ESPECIAL

3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don **AMADO BOUDOU**,
y del señor presidente provisional del Honorable Senado,
senador don **GERARDO ZAMORA**

Secretarios:

Señor don **JUAN H. ESTRADA** y señor don **JUAN H. ZABALETA**

Prosecretarios:

Señor don **LUIS G. BORSANI**, señor don **MARIO DANIELE** y señor don **JOSÉ LEPERE**



PRESENTES:

AGUILAR, Eduardo Alberto
 AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia
 ARTAZA, Eugenio Justiniano
 BARRIONUEVO, Walter Basilio
 BASUALDO, Roberto Gustavo
 BERMEJO, Rolando Adolfo
 BERTONE, Rosana
 BLAS, Inés Imelda
 BORELLO, Marta Teresita
 CABRAL ARRECHEA, Salvador
 CASTILLO, Oscar Anibal
 CATALÁN MAGNI, Julio César
 CIMADEVILLA, Mario Jorge
 CREXELL, Lucila
 DE ANGELI, Alfredo
 DE LA ROSA, María Graciela
 DI PERNA, Graciela Agustina
 ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz
 FELLNER, Liliana Beatriz
 FERNÁNDEZ, Anibal Domingo
 FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle
 FUENTES, Marcelo Jorge
 GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
 GARRAMUÑO, Jorge Alberto
 GIMÉNEZ, Sandra Daniela
 GIUSTINIANI, Rubén Héctor
 GODOY, Ruperto Eduardo
 GONZÁLEZ, Pablo Gerardo
 GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
 GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio
 HIGONET, María de los Ángeles
 IRRAZÁBAL, Juan Manuel
 ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle
 JUEZ, Luis Alfredo
 KUNATH, Sigrid Elisabeth
 LABADO, María Esther
 LATORRE, Roxana Itatí

LEGUIZAMÓN, María Laura
 LINARES, Jaime
 LUNA, Mirtha María Teresita
 MANSILLA, Sergio Francisco
 MARINO, Juan Carlos
 MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo
 MAYANS, José Miguel Ángel
 MICHETTI, Marta Gabriela
 MONLLAU, Blanca María del Valle
 MONTENEGRO, Gerardo Antenor
 MONTERO, Laura Gisela
 MORALES, Gerardo Rubén
 MORANDINI, Norma Elena
 NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
 ODARDA, María Magdalena
 PEREYRA, Guillermo Juan
 PÉRSICO, Daniel Raúl
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PILATTI VERGARA, María Inés
 REUTEMANN, Carlos Alberto
 RIOFRÍO, Marina Raquel
 ROJKÉS de ALPEROVICH, Beatriz Liliana
 ROLDÁN, José María
 ROMERO, Juan Carlos
 ROZAS, Ángel
 SANZ, Ernesto Ricardo
 SOLANAS, Fernando Ezequiel
 URTUBEY, Rodolfo
 VERNA, Carlos Alberto
 ZAMORA, Gerardo

AUSENTES, CON AVISO:

MENEM, Carlos Saúl
 RODRÍGUEZ SAA, Adolfo
 SANTILLI, Diego

AUSENTE, CON LICENCIA:

MEABE, Josefina Angélica

SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág. 3.)
2. **Pedido de licencia de la señora senadora Josefina Meabe.** (Pág. 3.)
3. **Suspensión en sus funciones del señor presidente del Honorable Senado. Moción de tratamiento sobre tablas.** (S.-2.411/14.) (Pág. 3.)
4. **Cuestión de privilegio.** (S.-2.774/14.) (Pág. 5.)
5. **Suspensión en sus funciones del señor presidente del Honorable Senado. Moción de tratamiento sobre tablas.** (S.-2.411/14.) (Continuación.) (Pág. 7.)
6. **Pedido de licencia de la señora senadora Josefina Meabe. (Continuación.)** (Pág. 20.)
7. **Manifestaciones.** (Pág. 21.)

8. **Cuestión de privilegio.** (Pág. 21.)
9. **Cuestión de privilegio.** (Pág. 22.)
10. **Cuestión de privilegio.** (Pág. 22.)
11. **Asuntos reservados.** (Pág. 23.)
12. **Mensajes por los que se solicitan acuerdos y retiro de un pliego.** (Pág. 24.)
13. **Incumplimiento de los tratados sobre el río Uruguay.** (S.-1.855/14.)

Exclusión del senador Menem. (S.-712/13.) **Mociones de preferencia con despacho de comisión.** (Pág. 25.)
14. **Modificación del IVA.** (O.D. N° 294/14.)

Autorización de salida y regreso de tropas al país. (O.D. N° 316/14.) (Pág. 26.)

15. **Reestructuración de la deuda 2005-2010 y el pago soberano local.** (O.D. N° 328/14.) (Pág. 27.)
16. **Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo.** (O.D. N° 325/14.)

Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. (O.D. N° 326/14.)

Regulación de las relaciones de producción y consumo. (O.D. N° 327/14.) (Pág. 125.)
17. **Homenaje al doctor Pablo Verani.** (S. 2.198/14.) (Pág. 166.)
18. **Declaración de emergencia de un departamento de la provincia de Río Negro.** (Pág. 166.)
19. **Manifestaciones.** (Pág. 166.)
20. **Apéndice.**

I. **Convocatoria a sesión especial.** (Pág. 167.)

II. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 168.)

III. **Actas de votación.** (Pág. 231.)

IV. **Inserciones.** (Pág. 239.)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 y 10 del miércoles 3 de septiembre de 2014:

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito al señor senador Cabral a izar la bandera nacional en la mástil del recinto.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Cabral procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. *(Aplausos.)*

2

PEDIDO DE LICENCIA DE LA SEÑORA SENADORA JOSEFINA MEABE

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura al pedido de licencia presentado por la señora senadora Josefina Meabe.

Sr. Secretario (Estrada). — La nota está dirigida al señor presidente, y dice: “De mi

mayor consideración, me dirijo a Ud., y por su intermedio al Honorable Cuerpo que integro, a fin de solicitarle se me autorice una licencia en el cargo por el término de 45 días por razones de salud. Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente. Josefina Meabe de Mathó”.

Sr. Pichetto. — Con goce de haberes.

3

SUSPENSIÓN EN SUS FUNCIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO. MOCIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. (S.-2.411/14)

Sr. Morales. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — ¿Es sobre el tema de Meabe?

Sr. Morales. — No. Una cuestión previa antes de votar.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Qué lástima que, lamentablemente, tengamos que arrancar todas las sesiones que usted presida, señor vicepresidente, con un planteo que ya hicimos en una sesión anterior en la que vino el señor jefe de Gabinete.

En esta oportunidad, obviamente, hay temas centrales que tienen que ver con un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo para cambiar sedes de pago y algún esquema de reestructuración más otro proyecto que tiene que ver con una Ley de Abastecimiento y otras cuestiones ya habladas en la reunión de labor parlamentaria.

Como anticipáramos en dicha reunión, no vamos a soslayar en ninguna sesión su presencia en términos de los planteos y reproches que hacemos.

En primer lugar, como hemos dicho en la sesión anterior, reiteramos el pedido de licencia para que usted se aparte, se tome licencia, y le permita al cuerpo trabajar tranquilamente. Tenemos bastantes problemas y diferencias de fondo en cuestiones que tienen que ver con el país. Pero hay otros temas transversales en los que estamos de acuerdo, como el caso de la lucha contra el narcotráfico, más otras iniciativas que están en tratamiento. Y su presencia, en verdad, entorpece el funcionamiento, tal como lo hemos dicho.

En esta oportunidad, quisiéramos que el cuerpo considere un proyecto de resolución que hemos presentado. Planteamos textualmente en

estamos dispuestos a hacerlo con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Linares. – De acuerdo.

Sr. Presidente. – Se van a votar ambos pedidos de preferencia con dictamen de comisión.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.

14

MODIFICACIÓN DEL IVA (O.D. N° 294/14) AUTORIZACIÓN DE SALIDA Y REGRESO DE TROPAS AL PAÍS (O.D. N° 316/14)

Sr. Presidente. – Se propone hacer una sola votación para el proyecto modificatorio de la ley del IVA como también para la iniciativa por la que se autoriza la salida de tropas de fuerzas nacionales del territorio nacional.

Sr. Romero. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero. – Señor presidente: creo que al ser temas diferentes, deberían votarse por separado, más allá de que sé que no va a haber debate.

Respecto de la iniciativa vinculada con el IVA, voy a solicitar que se me dé permiso para abstenerme de votar. Y no se trata de hacer una valoración positiva o negativa del proyecto sino, por el contrario, si hay reducción de impuestos en un país que tiene una alta carga tributaria, es bueno que se apruebe. Lo que sucede es que como tengo intereses por herencia de una empresa periodística, no quiero que alguien pueda interpretar que el sentido de mi voto tenga alguna clase de conflicto de intereses. Por ello es que hago la solicitud de que se me permita abstenerme de votar.

El otro tema sí quiero votarlo.

Sr. Presidente. – De acuerdo. Se van a hacer dos votaciones.

Se va a votar el pedido de abstención del senador Romero.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Tiene la palabra la señora senadora Morandini.

Sra. Morandini. – Señor presidente: con relación al proyecto vinculado con el IVA, también voy a solicitar que se me permita abstenerme de votar. Además, quiero hacer una consideración.

Se trata de una iniciativa que no ha pasado por la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Como la tendencia en el mundo, efectivamente, es bajar los impuestos a las empresas periodísticas para favorecer la información plural, que es la base del debate democrático, que no se haya enviado el proyecto a la Comisión de Medios es una confesión de la concepción que tiene este gobierno de reducir las empresas periodísticas, la pauta oficial, cuando pone el signo peso adelante sin que se termine de entender que en un sistema democrático lo que produce la empresa periodística es un valor simbólico, que es la libertad de expresión.

En lugar de estar hablando de alícuotas, que además no cumplen con el principio de igualdad –no voy a entrar a decir por qué el corte se hace en una cantidad y no en otra–, hago la consideración de que esta misma ley –también tenemos los decretos por los que se cambian deudas tributarias–...

Sr. Mayans. – Hay senadores de primera y de segunda.

Sr. Presidente. – Está claro, senadora. ¿Usted estaba pidiendo permiso para abstenerse?

Sra. Morandini. – Sí...

Sr. Presidente. – Vamos a poner a consideración el permiso para abstenerse.

Sra. Morandini. – ... pero además, voy a hacer las consideraciones...

Sr. Presidente. – Hubo acuerdo de todos los bloques de que no hubiera debate en estos temas.

Sr. Mayans. – Hay senadores de primera y senadores de segunda.

Sra. Morandini. – Pero me exime de cumplir lo acordado porque lo que se acordó en labor parlamentaria...

Sr. Presidente. – No, no exime a nadie.

Sra. Morandini. – Vinimos a una sesión...

Sr. Presidente. – Muchas gracias.

Pongo a votación el pedido de la senadora Morandini para abstenerse. El del senador Romero ya fue aprobado.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobado.

Senadora Negre de Alonso, ahora tiene la palabra.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: como la autorización de traslado de tropas a Haití está fuera de término, pido autorización para abstenerme. Le quiero decir al ministro de Defensa que es una cuestión humanitaria dejar dos meses más de lo que correspondía a los muchachos que están cumpliendo esa misión.

Sr. Presidente. — Pongo a votación el pedido de autorización para abstenerse de la senadora Negre de Alonso.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobado.

Pongo a votación la modificación a la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

Sr. Sanz. — Más allá de que no hay debate, queda constancia de nuestra disidencia en particular.

Sr. Presidente. — Sí. ¿Quiere hacer referencia a ello?

Sr. Sanz. — Hemos presentado por escrito la disidencia, pero que quede constancia, dado que se va a votar a libro cerrado.

Sr. Presidente. — Queda constancia.

Se va hacer una sola votación en general y en particular, con dos abstenciones, de la senadora Morandini y del senador Romero.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 59 votos afirmativos y 2 abstenciones.

—El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sr. Presidente. — Aprobado. Se convierte en ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.²

Pasamos ahora a votar por separado, como pidió el senador Romero, el proyecto de ley sobre autorización de las tropas para salir fuera del territorio nacional. Tenemos la abstención de la senadora por San Luis.

Respecto del proyecto de modificación de la Ley de Impuesto al Valor Agregado que acabamos de votar, aclaro que el senador Sanz dejó constancia de las disidencias, que están por escrito y constan en la versión taquigráfica.

Sr. Secretario (Estrada). — Constan en el orden del día.

Sr. Presidente. — Claro. El proyecto fue votado a favor en general y con disidencias parciales.

Continúa la votación del proyecto de ley sobre autorización de salida de tropas fuera del territorio nacional.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 55 votos a favor, 6 votos en contra y 1 abstención.

—El resultado de la votación surge del acta correspondiente.³

Sr. Presidente. — Quedan autorizadas las tropas.⁴

15

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA 2005-2010 Y EL PAGO SOBERANO LOCAL (O.D. N° 328/14)

Sr. Presidente. — Corresponde la consideración del expediente 307/14, Orden del Día N° 328, proyecto de ley por el que se declaran de interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010 y el pago soberano local que comprende al ciento por ciento de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: ¿la declaración relacionada con las *scholas* del papa Francisco la votamos?

Sr. Presidente. — No, pero la podemos votar al final. Avancemos en el debate.

Sr. Pichetto. — ¿Por qué no la votamos si tenía dictamen de la comisión? Me pidieron que hubiera dictamen; hubo dictamen de la Comisión

1 Ver el Apéndice.

2 Ver el Apéndice.

3 Ver el Apéndice.

4 Ver el Apéndice.

III

ACTAS DE VOTACIÓN

Descripción:

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2

Miembros del cuerpo: 72

Presidente: BOUDOU, Amado

VOTOS EMITIDOS

Votación: NOMINAL

Presentes: 61 Ausentes: 11 AMN: 30

SENADO
de la Nación Argentina

Fecha: 03/09/2014 15:06:35

Acta: 1

Afirmativos: 59
Negativos: 0
Abstenciones: 2
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
Aguilar, Eduardo Alberto	SI	54	Latorre, Roxana Itati	SI	61
Aguirre, Hilda Clelia	SI	2	Leguizamón, María Laura	SI	37
Artaza, Eugenio Justiniano	AUSENTE		Linares, Jaime	SI	44
Barrionuevo, Walter Basilio	SI	4	Luna, Mirtha M. T.	SI	27
Basualdo, Roberto Gustavo	SI	40	Mansilla, Sergio Francisco	SI	55
Bermejo, Rolando Adolfo	SI	17	Marino, Juan Carlos	SI	24
Bertone, Rosana Andrea	SI	52	Martínez, Alfredo Anselmo	SI	8
Bias, Ines I.	SI	28	Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
Borelio, Marta	SI	41	Meabe, Josefina Angelica	AUSENTE	
Cabral, Salvador	SI	50	Menem, Carlos Saúl	AUSENTE	
Castillo, Oscar Anibal	SI	9	Michetti, Marta Gabriela	AUSENTE	
Catalán Magni, Julio César	SI	53	Monllau, Blanca María del Valle	SI	7
Cimadevilla, Mario Jorge	SI	20	Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
Crexell, Carmen Lucila	SI	69	Montero, Laura Gisela	SI	25
De Angeli, Alfredo Luis	SI	10	Morales, Gerardo Rubén	AUSENTE	
De la Rosa, María G.	SI	48	Morandini, Norma Elena	ABS.	43
Di Perna, Graciela Agustina	SI	65	Negrete de Alonso, Liliana Teresita	SI	39
Elias de Perez, Silvia Beatriz	SI	26	Ordaz, María Magdalena	SI	48
Fellner, Liliana Beatriz	SI	31	Pereyra, Guillermo Juan	SI	68
Fernández, Anibal	SI	14	Pérez, Daniel Raúl	SI	49
Flóre Viñuales, María Cristina del Valle	SI	63	Pérfort, Naidenoff, Luis Carlos	SI	6
Fuentes, Marcelo Jorge	SI	16	Pichetto, Miguel Ángel	SI	15
García Larraburu, Silvina Marcela	SI	51	Rijatti Vergara, María Inés Patricia	SI	62
Garramuño, Jorge Alberto	AUSENTE		Reutemann, Carlos Alberto	AUSENTE	
Jiménez, Sandra D.	SI	57	Riofrio, Marina Raquel	SI	33
Giustiniani, Rubén Héctor	SI	46	Rodríguez Saá, Adolfo	AUSENTE	
Godoy, Ruperto Eduardo	SI	34	Rojkes de Alperovich, Beatriz Liliana	SI	13
González, Pablo G.	SI	12	Roldán, José María	SI	66
Guastavino, Pedro Guillermo Angel	SI	32	Romero, Juan Carlos	ABS.	19
Guinle, Marcelo Alejandro Horacio	AUSENTE		Rozas, Ángel	SI	21
Higonet, María de Los Angeles	SI	58	Santilli, Diego César	AUSENTE	
Irrazábal, Juan Manuel	SI	36	Sanz, Ernesto Ricardo	SI	23
Iturrez de Cappellini, Ada Rosa del Valle	SI	30	Solanas, Fernando Ezequiel	SI	47
Juez, Luis Alfredo	SI	45	Urtubey, Rodolfo Julio	SI	5
Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	56	Verna, Carlos Alberto	SI	59
Labado, María Ester	SI	11	Zamora, Gerardo	SI	29



LUIS GUSTAVO BORSANI
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACIÓN

SUSANA B. MENEZ
DIRECTORA
PROSECRETARIA PARLAMENTARIA
H. SENADO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

IV

INSERCIONES

1

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU

**Regulación de las relaciones
de producción y consumo
(O.D. N° 327/14)**

Señor presidente:

Voy a comenzar aludiendo al “poder”. En la visión foucaultiana, en todo lugar donde hay poder, el poder se ejerce. Se ejerce en determinada dirección. No sabemos quién lo tiene, pero sí sabemos quién no lo tiene. Y el Frente para la Victoria sí que hace sentir el ejercicio del poder. Y en el contexto de un gobierno de autoproclamados pseudomarxistas con añoranzas de un pasado revolucionario, que se perciben a sí mismos como miembros de una vanguardia esclarecida, y así se comportan cuando concurren a este Congreso. Entonces, sabemos quién no tiene el poder. No lo tenemos los legisladores disidentes, ignorados, destratados, cuyos proyectos “duermen el sueño de los justos” y nunca obtienen respuestas de funcionarios ineficaces y sospechados de corrupción ya que no logran traspasar en las respectivas comisiones la barrera del número. No lo tienen –al poder– los millones de alumnos padecientes de una educación pública devaluada en esta “década ganada”. No lo tienen los pueblos originarios, cada vez más segregados y marginados, invisibilizados y con sus derechos conculcados. No lo tienen los ciudadanos-hermanos en situación de pobreza, incluidos, según el discurso del gobierno, pero en el consumo, mas no en otros derechos esenciales. No lo tienen los trabajadores que ven menguados sus salarios, producto de su trabajo, por la retención de ganancias. No lo tienen los enfermos que deben peregrinar a los centros urbanos para la atención de su salud. No lo tienen los productores de trigo, de maíz, los tamberos, los ganaderos que esperan políticas en beneficio de esos sectores. No lo tienen los jubilados que mueren mientras la ANSES apela sus sentencias. No lo tienen los trabajadores suspendidos, licenciados y despedidos por la caída de las ventas, entre otros efectos negativos del modelo –¿modelo?– en marcha.

No lo tienen quienes sufren la caída del poder adquisitivo con una inflación cada vez más veloz. Sí, lo tiene –al poder–, el frente gobernante y lo concentra cada vez más en el Poder Ejecutivo.

Y es el Ejecutivo el que nuevamente remite una ley cerrada, con modificaciones de última hora que no inciden para nada en lo sustancial. Los proyectos remitidos desde el Ejecutivo tienen el sesgo de la improvisación y de la desprolijidad, parecen responder más a una cuestión de temperamento –no de carácter– que a

una necesidad real que dé respuesta a los problemas acuciantes.

La Ley de Abastecimiento no es nueva, tiene su origen en la ley 20.680, sancionada en 1974 y que desde su misma implementación perjudicó a las pymes, que durante largos años fueron víctimas de clausuras arbitrarias.

Por otra parte, señor presidente, detrás de proyectos con aparente buenas intenciones, el Frente para la Victoria –como decía un filósofo– le hace trampas al lenguaje y solapa la realidad. Así, por ejemplo, la responsabilidad del Estado es en realidad la protección de la ineficiencia, la ineficacia, la negligencia y la corrupción. La expropiación de Ciccone es el intento de ocultamiento de uno de los casos de corrupción más resonantes que involucra al vicepresidente en ejercicio y, ahora, en este paquete, detrás de la protección justa de derechos de usuarios y consumidores consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional, aparece el tema de la intervención sobre el sector privado, violando la Constitución Nacional, particularmente, en lo que se refiere al derecho de propiedad privada y a la libertad económica y de empresas. Esta ley daña la defensa de la competencia y el derecho de asociarse y de ejercer toda industria lícita.

¿Cuántas leyes más aprobará este Senado con mayoría oficialista, que se deban luego recurrir a la Justicia por violar nuestra Constitución?

Ciudadanos calificados han expresado ante los legisladores, que estamos frente a un diseño que ya no existe en el mundo, de igual modo profesionales del derecho han manifestado que la ley 24.307, en su artículo 29, ratifica la suspensión del ejercicio de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por la Ley de Abastecimiento. Esta ley mencionada le da legalidad a la suspensión de la Ley de Abastecimiento. El decreto 2.284/91 señala que la Ley de Abastecimiento sólo puede ser restablecida mediante la declaración de emergencia del abastecimiento, formulada por el Honorable Congreso de la Nación y este Congreso nunca declaró la emergencia de abastecimiento para restaurar la aplicación de la Ley de Abastecimiento.

Señor. presidente: el decreto 722/99, que declaraba el estado de emergencia de abastecimiento a nivel general –de conformidad con las previsiones del artículo 4° del decreto de necesidad y urgencia 2.284, del 31 de octubre de 1991, ratificado por la ley 24.307, restableciendo el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680 y sus modificatorias– fue invocado para restablecer la vigencia de la Ley de Abastecimiento. Ante esa declaración de emergencia, el procurador, que es el máximo asesor jurídico de la Nación, concluyó: “Habiendo cesado los antecedentes de hecho que sirvieron de causa a su dictado y por las cuales se declaró

la emergencia de abastecimiento, no parece razonable afirmar su vigencia”.

Por lo expuesto, señor presidente anticipo mi rechazo.

2

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MANSILLA

**Proyecto de ley de reestructuración de la deuda
2005-2010 y el pago soberano local
(O.D. N° 328/14)**

Señor presidente:

Nosotros, la República, todos los habitantes de la Nación, hemos concluido con nuestros acreedores exitosos procesos de reestructuración de deuda, pagando más de 190.000 millones de dólares, sin afectar los objetivos propuestos por este gobierno, de priorizar el crecimiento y la inclusión social. En el año 2006 se pagaron nueve mil quinientos treinta millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, desinteresándolo y para así evitar que el organismo de crédito entienda que puede participar de las decisiones soberanas. Los acreedores aglutinados en el Club de París aceptaron un original mecanismo de cumplimiento de las obligaciones que permitirá inversiones y que el acuerdo pueda sustentarse, habiendo ya desembolsado seiscientos cuarenta y dos millones de dólares estadounidenses, como primer pago. El acuerdo por Repsol y los acuerdos transaccionales que se concretaron en el ámbito del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –CIADI– se suman como prueba irrefutable de la capacidad y voluntad de pago. No está de más señalar y destacar el cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las obligaciones asumidas. No es posible decir que la Argentina no cumplió en el plazo con alguna de las obligaciones asumidas, con nuestra responsabilidad como gobierno. He dicho en otra intervención, y lo ratifico, que la Argentina respeta los privilegios que, como Nación, debe a sus habitantes, por lo que no asume compromisos que puedan perjudicar y afectar a los argentinos, a nuestra soberanía.

Voy a repetir, de fundamentos de la ley en discusión, cuáles serían las consecuencias de aceptar sin cortapisas el “fallo Griesa” y la inmodificable terquedad, cerrazón y desprecio a las consecuencias que sostienen los fondos buitres y sus traductores nacionales, estos últimos más preocupados en una parte de su interesada audiencia que en el futuro y sustentabilidad nacional: “Se evidencia, entonces, que la República Argentina posee vocación de diálogo y negociación con todos y cada uno de sus acreedores. Sin embargo, los fondos buitre se niegan a mantener una negociación en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para ambas partes. La República Argentina no puede negociar un acuerdo con los demandantes en la causa NML sin afectar sus reservas de manera significativa.

El fallo del juez Griesa obliga a pagar a los fondos buitre en el mismo momento en que se pague a los tenedores del canje los vencimientos de intereses. Los propios buitres admiten, asimismo, que el fallo del juez Griesa implica obligaciones adicionales para el país por un mínimo de 7.500 millones de dólares estadounidenses, es decir, más de un 25 por ciento del saldo de reservas internacionales del país. Es evidente que un golpe de esa magnitud implica un desproporcionado perjuicio para la Argentina. Por otra parte, bastaría con que sólo el 80 por ciento de los *holdouts* consiga el mismo trato que los fondos buitre para que esa suma se transforme en 15.000 millones de dólares estadounidenses. Además, si el 92,4 por ciento de los bonistas que entraron al canje reclamaran lo mismo, en el marco de la cláusula RUFO...”.

Como se dijo, la Argentina cumple sus compromisos y el fallo Griesa/fondos buitre exorbita el objeto de cualquier contienda y de ésta en particular y afecta derechos de terceros, impidiendo el cobro de fondos depositados para cumplir distintas obligaciones a las sometidas al pleito que resolvió desatinadamente el juez Griesa. Los juicios, sus sentencias deben afectar sólo a las partes en litigio y no alcanzar situaciones extra proceso. Griesa no lleva un proceso universal, de convocatoria plena, los acreedores hoy perjudicados no participaron ni pudieron defenderse de la arbitrariedad a las que se las somete. Intenta romper con consecuencias generales un acuerdo mayoritario que debería obligar a minorías especulativas.

La paradoja es que se nos denuncia por incumplimiento o acusa de incumplidores a los argentinos, quienes realizamos todos los esfuerzos para pagar. Estos agoreros sólo miran su interés, ya sea fondo buitre, asociado a ellos, coro a salario o es un oportunista político que cree que toda voz que parezca opositora es canto de sirenas para cautivar votos descontentos y allí pone el mezquino esfuerzo.

La ley que defiende y que debería ser votada por todos los representantes provinciales en este Senado no admite otra conducta y voto que su aprobación en salvaguarda de los intereses nacionales.

No voy a ampliar más, señor presidente. Adhiero en todo a los fundamentos y al texto de la ley, la que votaré afirmativamente.

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GUASTAVINO

**Sistema de Resolución de Conflictos
en las Relaciones de Consumo
(O.D. N° 325/14)**

Señor presidente:

En la reforma constitucional de 1994 se incorporaron a nuestra Carta Magna los denominados “derechos de tercera generación”.

El artículo 42 establece claramente:

“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

“Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.

Estas disposiciones a su vez fueron reglamentadas por la ley 24.240, de defensa del consumidor, sancionada en 1998 y modificada posteriormente en el año 2008 por la ley 26.361 que le introdujo importantes reformas.

A mi entender, el O.D. N° 325/14 es el proyecto más importante que nos encontramos debatiendo hoy. Un proyecto que ha quedado opacado frente a determinadas observaciones a la modificación de la Ley de Abastecimiento y a la creación del Observatorio de Precios.

Tiene, a mi juicio, la misma significación que tuvo, hace décadas, la creación del fuero laboral.

Era evidente que, en la víspera del advenimiento del peronismo, eran muchas todavía las resistencias a la consolidación del derecho laboral en la Argentina. Dentro de ellas, las primeras que tenían delante sus impulsores eran las más previsibles, los empleadores y los representantes de las corporaciones. ¿Quiénes otros, si no, que el propio *establishment* —fuertemente formado en la tradición liberal y ferviente defensor de ella— podía ver en el derecho laboral, normas de excepción?

Bueno, esto me hizo recordar situaciones que se vivieron en el Plenario de Comisiones la semana pasada. Estas resistencias que son históricas, y a las que estamos acostumbrados.

Siempre que se han otorgado derechos a los más indefensos ha existido una resistencia de los sectores concentrados, oligopólicos y monopolísticos.

Tal cual sucedió con el derecho del trabajo, en donde en caso de duda se está a favor de la parte más débil, hoy estamos legislando para la parte más débil nuevamente: el consumidor.

La teoría del libre mercado no decía que hipotéticamente empresario y consumidor se encontraban en igualdad de condiciones en el contexto de un mercado libre regido por la regla de la oferta y la demanda.

Bueno, claramente esto no es así, ya que el consumidor es frecuentemente víctima de abusos como consecuencia de detentar una situación de inferioridad en el mercado.

El proyecto remitido contempla tres aspectos fundamentales que me interesa resaltar:

1. Un Servicio de Conciliación Previa en las relaciones de Consumo también denominado COPREC;

2. Una instancia administrativa —Auditoría de las Relaciones de Consumo—.

3. Un nuevo fuero —justicia federal y nacional en las relaciones de consumo—.

Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo —COPREC—

El proyecto crea un “Servicio de Conciliación Previa en las relaciones de consumo” —COPREC—, similar al SECLO —Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria.

Esta será una instancia conciliatoria obligatoria, previa y gratuita para el consumidor y usuario, competente para dirimir los conflictos derivados de las relaciones de consumo cuyo monto no exceda de un valor equivalente a 55 salarios mínimos, vitales y móviles.

Las partes podrán contar con asistencia letrada aunque la misma no es obligatoria. La autoridad de aplicación, dispondrá de un servicio de patrocinio jurídico gratuito para aquellos usuarios o consumidores que lo soliciten.

Esto me parece importante de resaltar, ya que el consumidor, de desearlo, puede contar con un patrocinio totalmente gratuito.

En caso de incomparecencia del proveedor o prestador, se establecerá multa. La tercera parte de la multa será entregada al usuario o consumidor, siempre que no supere su reclamo.

La auditoría en las relaciones de consumo

El proyecto asimismo crea la Auditoría en las Relaciones de Consumo, una instancia administrativa que funcionará con posterioridad a la intervención del COPREC.

Los auditores estarán facultados para determinar el resarcimiento del consumidor o usuario por el daño sufrido en las relaciones de consumo, hasta un monto equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles, siempre que no se hubiere arribado a un acuerdo conciliatorio ante el COPREC.

La asistencia letrada en este caso tampoco será obligatoria.

El reclamo deberá interponerse mediante un formulario, acompañando y ofreciendo prueba.

Dentro de los 3 días de recibido el reclamo, se citará a audiencia pública, la que se realizará dentro de los 10 días siguientes. El procedimiento será oral y se dejará constancia mediante grabación filmica, bajo sanción de nulidad.

El auditor cuenta con amplias facultades de impulso e instrucción, y deberá adoptar las medidas para mejor proveer que estime convenientes con la finalidad de comprobar la verdad material de los hechos.

Nuevamente me parece sumamente importante resaltar:

— La creación de una instancia administrativa para reclamos de montos menores.

– La no obligatoriedad de asistencia letrada –generalmente cuando la persona de a pie ve que tiene que recurrir a un abogado desiste de la acción, al parecer existe más miedo a los abogados que a los proveedores.

– Que la audiencia sea pública –el control del pueblo–.

– Plazos cortos.

La justicia federal y nacional en las relaciones de consumo

Considero que estamos frente a un hecho histórico. Es trascendental para el derecho del consumidor la creación de un fuero específico, esto va a otorgar una autonomía judicial por la que se ha bregado desde distintos sectores durante muchísimos años.

Hasta ahora las causas vinculadas a reclamos de consumidores navegaban por distintos fueros, a partir de ahora vamos a tener un lugar donde ir a discutir y debatir esta problemática que nos afecta a todos.

Como dije, se crea un nuevo fuero judicial, con asiento en la Capital Federal, que estará compuesto por ocho juzgados federales y nacionales de primera instancia y una Cámara Federal y Nacional de Apelaciones compuesta por dos salas con tres vocales cada una.

Además, se crean tres fiscalías y tres defensorías públicas oficiales.

Los juzgados de primera instancia serán competentes en aquellas causas en donde el monto de la demanda no supere los 55 SMVM –220.000 pesos.

La Cámara en cambio actuará:

– Como tribunal de alzada de los juzgados federales en relaciones del consumo.

– Como tribunal competente en el recurso directo del artículo 39 de esta ley.

– Como instancia revisora de las sanciones administrativas aplicadas en el marco de:

a) Ley de Lealtad Comercial, ley 22.802.

b) Ley de Defensa del Consumidor, ley 24.240.

c) Ley de Defensa de la Competencia, ley 25.156.

El proceso se regirá por los principios de:

– Celeridad,

– Inmediación,

– Economía procesal,

– Oralidad,

– Gratuidad, y

– Protección para el consumidor o usuario.

Por estas razones, la convicción y el apoyo a este proyecto; porque entendiendo que a través de la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor, de la creación del fuero específico de derecho del consumidor, se podrán recuperar millones de pesos que se pierden por acciones indebidas del conjunto de las empresas que trabajan en la economía producidos por:

– La letra chica de los contratos bancarios,

– La letra chica de las financieras,

– La falta de servicio de las compañías de telefonía celular,

– La falta de reparación de los electrodomésticos en tiempo y forma.

Sólo por nombrar algunas a los que todos los que estamos sentados acá en algún momento sufrimos en carne propia.

Es por lo expuesto, señor presidente, que esta nueva normativa, este fuero del consumidor, nos va a permitir discutir todos estos temas y poder acceder a la JUSTICIA con letras mayúsculas.

4

**SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU**

**Proyecto de ley de reestructuración de la deuda
2005-2010 y el pago soberano local
(O.D. N° 328/14)**

Señor presidente:

Hoy estamos aquí para declarar de interés público la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010, así como el pago soberano local. Como todos sabemos, recientemente el juez Thomas Griesa falló en contra de nuestro país con el objetivo de atacar a la Argentina y a su moneda.

Es dable destacar que la posición del magistrado es una expresión de una disputa imperialista local, dada entre la fracción neoliberal conservadora versus la liberal centrada en un único estado global.

Hemos visto y oído todo tipo de acusaciones contra nuestro pago soberano. Sin embargo, poco se ha dicho sobre lo que representa: una clara advertencia para la comunidad internacional acerca de que también está sometida a normas monetarias internacionales que rigen en beneficio de unos pocos. Hoy Italia, Portugal, Chile y todo miembro de la comunidad internacional que contrae deuda se preguntan cómo ejercerán operativamente sus derechos a la independencia económica.

Quiero resaltar que el propósito de reestructurar nuestra deuda no es avanzar hacia el proteccionismo o romper con el resto del mundo, como erróneamente se plantea. El objetivo es cumplir con nuestro deber. Más que nunca pretendemos saldar este problema para demostrar que es posible confiar en este país, que se puede invertir aquí y que estamos más preparados para defender nuestra soberanía política.

Quieren prohibirnos acceder al sistema financiero internacional, no quieren que potenciemos nuestras riquezas humanas y naturales, tampoco que demos valor agregado de nuestro trabajo de punta.

Ha llegado la hora de salir de falsas dicotomías para continuar demostrándole al mundo nuestra capacidad. No nos va a avasallar ningún fondo buitres, ni ningún tribunal al servicio de éstos. Tampoco vamos a permitir

que pongan en un falso lugar a nuestro país. Esta es la Argentina del crecimiento.

Hace menos de una semana ocurrió un hecho fundamental para el país: el satélite Arsat 1 salió desde Bariloche hacia la Guayana Francesa, como claro ejemplo de lo que somos capaces los argentinos. También es signo de una política enfocada a la apertura inversionista. Porque queremos una patria justa, libre y soberana, a la par de un mundo más justo y solidario.

Esta embestida contra la Argentina podría ser contra cualquier otro país, cuestión que no queremos que suceda. Por eso hoy, más que nunca, ratificamos nuestra postura e insistimos en que siempre vamos a creer en el crecimiento general y nunca nos inclinaremos por el beneficio de unos pocos.

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LUNA

**Proyecto de ley de reestructuración de la deuda
2005-2010 y el pago soberano local
(O.D. N° 328/14)**

Señor presidente:

Queremos reafirmar la convicción de este espacio político de continuar con la decisión de Néstor Kirchner de superar la Argentina de los viejos y recurrentes problemas y de adueñarnos de herramientas que nos permitan construir nuestra autonomía.

Como él nos expresó: “Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, sabemos que ésta es la oportunidad del cambio, de la transformación profunda”. Y nosotros estamos decididos a acompañar este momento histórico.

El proyecto que hoy venimos a abordar es una nueva demostración de la voluntad de negociación impulsada por el Gobierno nacional, tendiente a defender la soberanía de nuestro Estado y, con ello, los intereses de todos los argentinos.

En primer lugar debemos decir que este gobierno ha tenido que asumir el compromiso de pago de gobiernos anteriores que de forma inescrupulosa han empeñado el futuro de los argentinos. Deudas contraídas a tasas de interés usureras, que nos han sumido en un estancamiento económico y en una polarización social sin precedentes, colapsada en el año 2001.

Hoy, en ejercicio del poder soberano del país, sin vulnerar la autonomía nacional, el Gobierno nacional vuelve a reafirmar el rumbo de las negociaciones iniciadas en 2003, al declarar de interés público su reestructuración soberana realizada en 2005 y 2010, así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al 100 por ciento de los tenedores de títulos públicos.

En primer lugar, repudiamos el exceso de jurisdicción y la arbitrariedad de la corte de Griesa, que

supone que nuestro país viole la legislación de orden público y los contratos que nuestro país suscribió con los acreedores titulares del 92,4 por ciento de la deuda soberana, estableciendo un desigual tratamiento entre los acreedores argentinos. Esta situación no sólo es inadmisiblesino totalmente impracticable.

Por ello remarcamos, en sintonía con los fundamentos de esta iniciativa, que las medidas de la Corte de los Estados Unidos han sido ilegítimas e ilegales. Avalar el pedido de fondos especulativos que pueden poner en jaque no sólo la economía nacional de un país sino todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda es ir en contra del criterio reiteradamente expresado por nuestro país y por muchas naciones hermanas, de no subordinación a la presión corporativa y especulativa internacional.

La propuesta elaborada por el Ejecutivo, sumada a las últimas incorporaciones, constituye la única iniciativa que propone una respuesta concreta para responder a los compromisos asumidos. No hacemos demagogia, no planteamos respuestas mágicas, sino que actuamos y ponemos en práctica herramientas legales y legítimas para evitar que las reservas de los argentinos sean mauseadas por especuladores.

Puntualmente rescatamos el aporte para la creación de una comisión bicameral que estudiará la deuda contraída por el Estado nacional, permitiéndonos conocer quiénes fueron los grandes protagonistas del endeudamiento de nuestro país. Con nombres y apellidos, vamos a conocer quiénes idearon el camino al *default*.

No vamos a permitir que el ahorro de la Nación, que se obtuvo gracias a políticas acertadas tendientes a generar un crecimiento sostenido de la economía nacional, sea utilizado de forma especulativa para el enriquecimiento de fondos privados.

Menos aún acatar a una Corte Suprema que avala prácticas especulativas, y desvalida el compromiso de la República Argentina, quien ha demostrado con creces su voluntad de pago, su respeto a las normas internacionales y su responsabilidad frente a compromisos asumidos con terceros países.

Somos conscientes de que sólo una economía en crecimiento puede asegurar solvencia externa en el mediano y el largo plazo, por ello es coherente que en términos de oportunismo especulativo hoy sea el momento para reclamar a nuestro país. La recuperación económica, que ha tratado de desmentirse a través de apocalípticos pronósticos de economistas responsables del desastre de los años 90, es imposible de ocultar. Hoy tenemos un país solvente, que puede cumplir con sus compromisos gracias a una gestión que cuidó del patrimonio y del ahorro de todos los argentinos.

Por ello queremos remarcar que la medida puede adoptarse en función de la solidez que el modelo de producción, trabajo y crecimiento sustentable, con inclusión social, iniciado en 2003 y que en función de la voluntad política de un proyecto nacional hoy reafirma, como lo hizo en 2005 sin apoyo alguno del Fondo Monetario In-

ternacional, a no doblegarse frente a intereses que quieren incidir en una estrategia de reducción de la deuda con medidas incompatibles con posibilidades de crecimiento.

En el orden internacional debemos decir que este fallo dejó en evidencia las consecuencias de no contar con un mecanismo internacional de renegociación de la deuda, colocando al sistema financiero internacional en una situación de imprevisibilidad. Debemos garantizar marcos legales que permitan a los Estados soberanos garantizar estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional, dado que este fallo de la Corte genera claros desincentivos a los acreedores para entrar en reestructuraciones de deudas al no generar marcos de previsibilidad, coherencia y legitimidad de acuerdos tomados entre partes soberanas.

Por ello, mientras seguimos trabajando como país y como región, exhortante a la comunidad internacional en la definitiva formulación de normas y principios globales que regulen las reestructuraciones de deudas de forma equitativa, debemos ampararnos en normas legales que garanticen continuar el flujo de pagos.

Por eso volvemos a insistir en que estamos convencidos de que esta iniciativa que hoy nos ha enviado el Ejecutivo nacional es la mejor herramienta que tenemos para poder continuar con los compromisos asumidos sin quedar sujetos a las trabas que desde afuera y de forma arbitraria se nos imponen. Debemos garantizar que los flujos de pago sean distribuidos a los acreedores según lo acordado.

Tenemos un gobierno independiente que no va a comprometer el proceso de crecimiento impulsado desde el año 2003. Porque tenemos en claro que nuestra responsabilidad no es sólo con los acreedores sino también con quienes pueden sufrir la distribución de la carga que supone atender los servicios de la deuda: los sectores social y económicamente más vulnerables.

Sin lugar a dudas, la reestructuración de la deuda pública 2005-2010 y su declaración como servicio público refleja la voluntad y la fortaleza de nuestro gobierno para oponerse a quienes desde la extorsión buscan lucrar con las reservas soberanas de todos los argentinos.

Hoy estamos votando por la recuperación de la dignidad nacional, por la revalorización de la autoestima del pueblo argentino y por un Estado presente que, con responsabilidad, continúe con un modelo la superación de la crítica vacía que apuesta siempre al fracaso de nuestro modelo.

6

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BORELLO

**Proyecto de ley de reestructuración de la deuda
2005-2010 y el pago soberano local
(O.D. N° 328/14)**

Señor presidente:

Nos vamos a oponer a la ley que habilita una nueva reestructuración voluntaria de la deuda y a cambiar la jurisdicción de pago voluntario a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y de 2010, porque las consecuencias de estas medidas que ha tomado el gobierno impactarán negativamente en la economía que

ya se viene manifestando en el aumento de la inflación, en la desocupación, en la falta de inversiones y en las dificultades de las provincias para pagar sus deudas en dólares.

Estamos profundizando la recesión con esta política errática respecto al manejo de los fondos buitres. Por eso es necesario encontrar una salida racional y responsable a este grave problema, ya que estamos en una economía que hace mucho tiempo que no crece y ahora con una inflación del 35 por ciento.

Señor presidente: estos nuevos instrumentos para el pago de la deuda reestructurada son absolutamente innecesarios, ya que la ley 26.886 le ha otorgado al gobierno, hace ya un año, las herramientas jurídicas necesarias para solucionar la situación con los fondos buitres. Incluso esa misma norma ha sido incumplida por el ministro de Economía, quien nunca explicó al Congreso los pasos llevados adelante en el litigio. Además, con esta ley puede aumentar el riesgo y agravarse la situación actual si algunos bonistas rehúsan el cambio de lugar de pago o entienden que se ha violado el contrato suscrito oportunamente, a la vez se podría aumentar sensiblemente la cantidad de bonos en litigio, haciendo peligrar la totalidad de la deuda reestructurada.

El país no necesita una ley, y mucho menos esta ley. Además, se recurre tardíamente al Congreso, cuando hasta ahora han conducido el trámite de la deuda sin efectuar ni la más mínima consulta o abrir el debate de ideas. Estamos dispuestos a discutir con todo el arco político una política de Estado que resuelva definitivamente el legado del kirchnerismo para retomar la senda del crecimiento que la presidenta ha abandonado. También aprovecho la ocasión para advertir sobre las consecuencias en la economía real de seguir en este sendero: caída de inversiones, aumento de la inflación, baja de empleo, acentuación de los conflictos sociales.

Para finalizar, considero que esta reestructuración es prácticamente impracticable. Pretende ratificar por ley la violación de los compromisos asumidos contractualmente, perjudicando además seriamente la imagen del país, que necesita inversiones para su desarrollo y no puede comprometer el futuro del país, ya que el desacato hipoteca el futuro y cierra la posibilidad de financiamiento en los mercados internacionales.

7

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPELLINI

**Sistema de Resolución de Conflictos en las
Relaciones de Consumo
(O.D. N° 325/14)**

**Observatorio de Precios y Disponibilidad de
Insumos, Bienes y Servicios
(O.D. N° 326/14)**

**Regulación de las relaciones de producción
y consumo
(O.D. N° 327/14)**

Señor presidente:

Las iniciativas legales cuyo tratamiento nos toca hoy, a mi entender son necesarias y no son otra cosa más

que continuadoras de las políticas inclusivas que este gobierno viene realizando.

Sucede que se trata de un “paquete” formado por tres proyectos de ley orientados a incorporar, a la normativa vigente, una serie de medidas para:

- Proveer al desarrollo socioeconómico de nuestro país, armonizando los legítimos intereses de los diversos “eslabones” que se indican en las “cadenas” de producción y valor.

- Aplicar una protección más intensa y efectiva a los derechos que asisten a los consumidores y usuarios.

- Propiciar la solución satisfactoria y definitiva de las diversas controversias que a diario se producen en el complejo y enmarañado ámbito de las relaciones de consumo. Así como también...

- Unificar los criterios sancionatorios adoptados por la Secretaría de Comercio en materia de derecho del consumidor y el usuario.

Para el cumplimiento de estos loables objetivos, se postulan la creación de nuevos órganos públicos; habilitando, al mismo tiempo, novedosos mecanismos de intervención gubernamental en las distintas etapas de los procesos económicos; así como también emprendiendo flamantes vías de reclamación para consumidores y usuarios, tanto en la esfera administrativa como en la esfera judicial.

Entre los nuevos órganos públicos se cuenta el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, que funcionará en la órbita de la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.

Este flamante “observatorio” tendrá como función primordial el monitoreo, el relevamiento y la sistematización de los precios y la disponibilidad de los bienes y servicios producidos, comercializados y/o prestados en el contexto del mercado argentino.

De conformidad con lo estipulado en el proyecto respectivo, el nuevo órgano apunta a detectar actitudes, actos y comportamientos que puedan resultar distorsivos respecto de los procesos económicos que tienen lugar en nuestro mercado interno; facilitando, de esta manera, la aplicación de la ley 26.680, conocida como Ley de Abastecimiento.

La utilidad que el “observatorio” podría revestir, como una “herramienta” para el cumplimiento de los objetivos, serían:

- Promoción de la producción económica y el desarrollo social.
- Reindustrialización de la economía nacional.
- Expansión del mercado interno.
- Mejora genuina de la competitividad.
- Distribución equitativa del ingreso.

- Reforzamiento de la protección brindada a los “eslabones” más débiles de la “cadena de valor”, en particular, de consumidores y usuarios.

- Facilitación del acceso por parte de estos últimos a información veraz, completa y útil sobre precios.

- Introducción de previsibilidad en la dinámica de variación de precios y salarios.

Señor presidente, podemos afirmar que este “observatorio” constituirá un instrumento de singular relevancia para el normal funcionamiento de nuestro mercado interno y el progreso socioeconómico nacional y también debo destacar, con particular énfasis, que busca defender los derechos de los consumidores y usuarios argentinos.

Paralelamente, otra de las piezas que forman parte del “paquete” legislativo, tiene por objeto introducir modificaciones en la ya aludida Ley de Abastecimiento. Ello, con la finalidad específica de permitir a las autoridades públicas dictar normas destinadas a regir las etapas del proceso económico –producción, distribución, intermediación y comercialización– en todo lo referente a:

- Los márgenes de utilidad.

- Los precios de referencia.

- Los niveles máximos y mínimos de precios.

Podemos decir, señor presidente, que la presente iniciativa está orientada a garantizar el interés económico general, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. En orden a ello, básicamente, se propone facultar a la Secretaría de Comercio para controlar, prevenir y, eventualmente, sancionar:

- La elevación artificial o injustificada de los precios.

- El acaparamiento de materias primas o productos.

- Todo tipo de actos de naturaleza monopólica.

El artículo 5° del proyecto establece un “abanico” sancionatorio, en el cual se contemplan: un régimen de multas de singular amplitud; la prerrogativa para clausurar el establecimiento involucrado; e, incluso, la potestad para inhabilitar al empresario infractor.

Señor presidente, ahora quiero considerar brevemente la tercera de las iniciativas en cuestión. Es decir, aquella que postula la creación de nuevas vías procedimentales para la protección de los consumidores y usuarios.

Estos novedosos canales dedicados específicamente y exclusivamente a la protección de consumidores y usuarios, constituyen un conjunto integral y ordenado denominado: “Sistema Nacional de Resolución de Conflictos”.

A modo de sumaria reseña, cabe señalar que tan auspicioso conjunto contempla la instauración de tres mecanismos institucionales. A saber:

– COPREC –Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo–; de carácter obligatorio y gratuito para el consumidor o usuario.

– Auditoría de las relaciones de consumo.

– Fuero judicial –federal y nacional– para las relaciones de consumo; integrado por ocho juzgados de primera instancia y una cámara de apelaciones conformada por dos salas.

Cabe destacar que las contundentes medidas propuestas, destinadas a conformar el sistema nacional de resolución de conflictos, transformarán radicalmente la defensa de los derechos del consumidor y el usuario en la República Argentina.

En efecto, la nueva tríada procedimental que estamos creando, reforzará el sistema normativo “protectivo”, por las siguientes características:

– Prevención.

– Contralor público.

– Cercanía hacia los justiciables –muy especialmente, de la “parte débil” a la que se pretende brindar protección; en el caso, consumidores y usuarios.

– Celeridad procedimental.

– Especialidad, y

– Efectividad.

A grandes rasgos, se puede aseverar que la primera instancia conciliatoria permitirá solucionar de manera rápida, amistosa, efectiva y barata gran parte de los conflictos que cotidianamente se producen en el polifacético y ajetreado ámbito de las relaciones de consumo.

En idéntico sentido, forzoso resulta destacar la creación de un fuero judicial especial para la atención y resolución de los pleitos relativos a dichas relaciones. Esta medida responde a un profundo anhelo de la doctrina jurídica más prestigiosa y acreditada.

La misma merece una ponderación especialmente elogiosa, toda vez que, por sí sola, será capaz de contribuir en forma decisiva a consolidar los principios de celeridad, especialidad y efectividad que, como ya ha sido indicado, todo sistema jurídico de tinte “protectivo” debe poseer para cumplir acabadamente con su cometido.

Al respecto, bien ha dicho el señor secretario de Comercio, Augusto Costa: “Los nuevos jueces especializados tendrán la tarea de facilitar que los reclamos de los consumidores lleguen a buen puerto y de una manera lo más rápida posible para que esa situación de falta de equivalencia que muchas veces hay entre las empresas y los consumidores se vea limitada”.

Con buen tino, el citado funcionario concluyó sus apreciaciones afirmando: “Vamos a tener un fuero del consumidor para defender a todos los usuarios de los distintos bienes. Así que es un paso muy importante para que todos los consumidores estén más protegidos”.

A la luz de las consideraciones precedentes, no resulta extraño, señor presidente, que importantes asociaciones civiles abocadas a la defensa de los consumidores

y usuarios se hayan manifestado a favor de éstas las iniciativas, las que han resaltado con beneplácito:

– La instancia conciliatoria originaria.

– Su accesibilidad desde cualquier punto geográfico del país –accesibilidad que, cabe añadir, le imprime un sentido auténticamente democrático y federal.

– El fuero especializado en las relaciones de consumo. Así como también...

– Los criterios articuladores del sistema de multas implementado por el proyecto.

Análogos ecos ha receptado el proyecto por parte de Consumidores Libres, entidad dirigida por el diputado nacional –m.c.– Héctor Polino, quien también remarcó las bondades de:

– La implementación de un ámbito de conciliación.

– La instauración de un fuero especial para los conflictos pertenecientes a las relaciones de consumo.

– Los parámetros adoptados en materia sancionatoria.

En semejante sentido se ha expedido el Movimiento en Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, y el Medio Ambiente, también conocido por sus siglas: Modecuma. Su representante, el señor Miguel Fortuna, ha expresado el “total acuerdo” de la institución con la iniciativa diseñada y presentada por el Poder Ejecutivo nacional para la mejor defensa de los derechos correspondientes a consumidores y usuarios.

No menos auspiciosos han sido los comentarios que, al respecto, ha efectuado la Unión de Consumidores de la Argentina. En efecto, su representante, Fernando Blanco Muño, afirmó que la entidad está de acuerdo con “todo lo que sea la consolidación de los derechos de los usuarios”, asegurando –paralelamente– que acompañará las iniciativas legislativas –a las que catalogó de “paso trascendente”– en los distintos ámbitos de debate legislativo.

Pero aún hay más, señor presidente, ya que los elogios recolectados por el “paquete” normativo propulsado por el Poder Ejecutivo no se limitan al ámbito de los consumidores y usuarios. Además, la tríada de iniciativas legislativas ha obtenido buena recepción en diversos ámbitos empresariales.

Así, verbigracia, el titular de la Confederación General Empresaria –CGERA– también se ha manifestado a favor del “paquete” de proyectos de ley presentado por el Poder Ejecutivo nacional por ante este Honorable Congreso Nacional.

Señor presidente: como todos sabemos, resulta muy difícil lograr semejante coincidencia entre las repercusiones producidas en sendos ámbitos.

En otras palabras, constituye un signo altamente positivo y elocuente la bienvenida que los proyectos han registrado, tanto en el sector de los consumidores y usuarios, por un lado, como en el ambiente de los productores y comerciantes, por el otro lado.

Es, en definitiva, por todas las consideraciones precedentemente volcadas, señor presidente, que voto a favor de los proyectos bajo análisis.

8

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU

**Regulación de las relaciones
de producción y consumo
(O.D. N° 327/14)**

Señor presidente:

Como usted sabe, la ley para intervenir sobre la fijación de precios, margen de utilidad o establecer referencias de precio existe desde 1974 con el tercer gobierno del general Juan Domingo Perón.

Mucho han dicho al respecto que seremos como Cuba, Venezuela o que se trata de una estatización del mercado. La realidad es más simple: no buscamos ser ningún otro país, hoy sólo pretendemos ser una Argentina más justa. Por ello, quiero destacar que la modificación de esta ley tiene como única finalidad brindar más herramientas y soluciones a nuestros ciudadanos desde el Estado, que resalto: lo integramos todos. ¿Acaso no consumen los empresarios, al igual que el resto de la población?

Como muchos sabemos, desde hace un tiempo los argentinos venimos sufriendo una serie de avasallamientos respecto a los precios del abastecimiento de productos y servicios. Son numerosas las herramientas que se han establecido para revertir dicha situación, sin embargo, no es suficiente, así como no se alcanza el margen que tiene el Estado para aplicar medidas en pos de una regulación justa.

Los que históricamente deben pagar la falta de regulación pertenecen al eslabón más débil de la sociedad, así como quienes se benefician de esta situación son un puñado de grupos concentrados que se apropian de la riqueza de todos los argentinos. Estamos ante una dicotomía de regulación del Estado o imposición de mercado.

No es un dato menor; la ley de 1974 rigió hasta 1991, momento en el que, a través del decreto 2.284/91, se instaló la “desregulación del comercio”. A mis pares, a los ciudadanos, a los empresarios, les pregunto: ¿Existe realmente la falta de regulación? ¿No estamos ya en condiciones de afirmar que si no regula el Estado, regula el mercado y, como sabemos, esta regulación trae consecuencias socialmente injustas?

El único inciso que nunca se suspendió fue el que permite al gobierno aplicar ciertas multas. Pero, como todos sabemos, las multas vienen siendo paradas mediante la Justicia, que ni siquiera contaba con un fuero penal conveniente. Los perjudicados, una vez más, son nuestros ciudadanos, los principales consumidores.

El eje hoy debemos ponerlo en ellos, en los consumidores. Por eso queremos modificar la Ley de Abastecimiento y crear un fuero penal para los consumidores. El Estado está integrado por tres poderes, y no alcanza con que articulemos en conjunto entre este Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, si el Poder Judicial no tiene instancias donde atender y resolver este tipo de problemáticas. Así las cosas, creemos fundamental tener un conocimiento adecuado y regular precios, disponibilidad, sumado a la capacidad de imponer sanciones a quienes discontinúen el abastecimiento o prestación de servicios o productos. Resulta indispensable que la Justicia procure, vele y cuente con las herramientas necesarias para que nadie actúe como si el mercado fuese un poder superior a estos tres que están compuestos por los 40 millones de argentinos.

9

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ELÍAS DE PEREZ

**Observatorio de Precios y Disponibilidad
de Insumos, Bienes y Servicios
(O.D. N° 326/14)**

Señor presidente:

La creación del observatorio propuesta por el oficialismo, vista en el contexto del plexo normativo que hoy nos proponen aprobar, tiene reminiscencias que nos trasladan desde la idea del panóptico, esbozada por Jeremy Bentham con las críticas emitidas por Foucault.

La comparación con el panóptico de Bentham es clara. Nada más gráfico que la forma en que lo describe Foucault:

“En la periferia, una construcción en forma de anillo en el centro, una torre, ésta, con anchas ventanas que se abren en la cara interior del anillo. La construcción periférica está dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de la construcción [...]

”Basta entonces situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. Por el efecto de la contraluz, se pueden percibir desde la torre, recortándose perfectamente sobre la luz, las pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la periferia. Tantos pequeños teatros como celdas, en los que cada actor está solo, perfectamente individualizado y constantemente visible. El dispositivo panóptico dispone unas unidades espaciales que permiten ver sin cesar y reconocer al punto [...]

”La visibilidad es una trampa”.

El proyecto del oficialismo pretende conformar un organismo técnico con representantes ministeriales y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Claro que los representantes de las organizaciones sociales son elegidos por la autoridad de aplicación, por lo que no garantiza que la sociedad esté representada legítimamente, sino que directamente es el gobierno el

que “legítima” con una organización “amiga” la composición del observatorio. Hasta aquí la falacia kirchnerista en estado puro. Intento de apariencia democrática maquillando un concepto profundamente autoritario.

Pero el proyecto avanza además estableciendo entre las facultades del observatorio:

- Requerir toda documentación relacionada con el giro comercial de la empresa; información relacionada con costos, rentabilidad, etcétera.

- Podrá recomendar a la autoridad de aplicación la publicación de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios.

Resulta fácil imaginarse a este supuesto organismo técnico observando desde el centro, cual panóptico benthamiano. Se trata, cuanto menos, de inducir a los factores económicos a un estado consciente permanente de visibilidad que garantice el funcionamiento automático del poder. Eso sin mencionar el riesgo que significa que todas las atribuciones otorgadas a este organismo no se constituyan en mecanismos de “persecuciones” a empresas que el gobierno considere “enemigas”, permitiéndoles actuar en detrimento de ellas, favoreciendo a empresas “amigas del gobierno”.

Foucault describe el dispositivo panóptico como una “máquina de disociar la pareja ver - ser visto”. En efecto, quien se encuentra en alguna de las celdas de la periferia es siempre visto sin poder jamás ver a aquel que lo observa desde la torre central; en cambio, quien esté situado en ésta lo ve todo, sin ser jamás visto. Nada más cercano al mecanismo pergeñado en este proyecto. Máxime si tenemos en cuenta que el mismo gobierno que justifica en la figura de acceso a la información sobre precios y disponibilidad de insumos la posibilidad de publicar total o parcialmente la documentación que se solicita a las empresas es el que esconde estadísticas oficiales, que no publica datos esenciales como los índices de pobreza o inflación en nuestro país, que genera toda una estructura burocrática imposible de recorrer a los fines de conseguir datos sobre inversiones, planes sociales —el Plan Más Cerca es un ejemplo claro de ello—, que no publica en páginas de Internet sus cuentas, que no transparenta las cláusulas de los contratos que firma en cuestiones tan esenciales como las relacionadas con YPF, Chevron, Vaca Muerta, por poner algunos ejemplos.

Como contrapartida a su política del ocultamiento, este gobierno pretende crear un observatorio para publicar de forma “extorsiva” la información privada de las empresas, que hacen a sus estrategias de desarrollo y que, por definición básica, tienen como fin el lucro y obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios.

Quizás por falta de insumos tecnológicos el proyecto no prevé la instalación de telepantallas, emulando al libro 1984. O quizás se trata de productos importados y, para desgracia del oficialismo, no pueden entrar a nuestro país.

Francamente el modelo de Estado al que pretende llevarnos el oficialismo nada tiene que envidiarle a la imaginación de George Orwell. Por el contrario, no me sorprendería empezar a encontrar por las calles carteles con la consigna “Cristina te vigila”, en lugar del Gran Hermano.

El mecanismo que crea el gobierno con este observatorio no tiene ningún contralor, dado que los integrantes del observatorio serán representantes de ministerios y representantes de organizaciones de defensa al consumidor, elegidas por el gobierno, sin ningún viso de transparencia ni equilibrio de intereses.

Con qué incentivo una persona o un grupo de personas generan y desarrollan una empresa, con todo lo que significa en inversión, en puesta en trabajo un capital monetario, generación de empleos, cuando es el mismo gobierno el que los desincentiva, propiciando este tipo de organismos estatales que buscan “amenazar” a aquellos que no son bien vistos o que no se alinean a los caprichos gubernamentales.

Por supuesto, este observatorio tampoco alienta a capitales extranjeros a invertir y desarrollar una empresa en nuestro país, cuando pueden ser sujetos de una persecución de parte del mismo gobierno, en miras de favorecer a algunos, perjudicando los negocios de otros, tomando decisiones arbitrarias y sin pautas objetivas de acción.

En la justificación se hace referencia a que la creación de este observatorio es una forma de reglamentación del artículo 42 de la Constitución Nacional. Nada más lejos de este objetivo.

El artículo 42 establece que las autoridades deberán proteger los derechos de usuarios y consumidores, en relación con su salud, seguridad e intereses económicos, ofreciendo la posibilidad de obtener información veraz y adecuada, defendiendo a los consumidores de las posibilidades de distorsión de mercado, monopolio y calidad y eficiencia de los servicios públicos.

En este caso, para la consecución de estos parámetros constitucionales, existen mecanismos y facultades que ya cuenta la Secretaría de Comercio y el gobierno en sus distintas áreas, que hacen innecesario este mecanismo de extorsión que puede significar el observatorio. Aun así, nuevamente en tónica orwelliana, el proyecto del oficialismo casi nos propone crear policía del pensamiento.

En ninguno de sus artículos, este proyecto de ley establece un trato universal, uniforme a todas las empresas que producen o comercializan en el país. Todo lo contrario, no establece ninguna pauta razonable —entendido como la razonabilidad de los actos de gobierno, en contraste con la arbitrariedad— que genere confianza en este observatorio y su accionar.

A su vez, con la intención de reglamentar el artículo 42, se cae en la creación de un organismo que choca con los preceptos de otros artículos de la Constitución Nacional, como el artículo 14, desde el momento que

prescribe que todos los ciudadanos del país gozan de derecho de trabajar y de ejercer una industria lícita.

En el caso que el gobierno y la Secretaría de Comercio tengan la sospecha de que una empresa no está ejerciendo lícitamente su trabajo, debe denunciarlo en los canales correspondientes, pero no puede ejercer “presión” mediante mecanismos como los que busca implementar este observatorio.

Creo que debemos ser muy cuidadosos con la fisión del modelo de Estado hacia la que nos están llevando. No vaya a ser que uno de estos días, haciendo uso de la cadena nacional, la presidenta nos diga que estamos nominados para dejar el país.

10

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BORELLO

**Regulación de las relaciones
de producción y consumo
(O.D. N° 327/14)**

Señor presidente:

La reforma de la Ley de Abastecimiento conlleva en sus fundamentos la defensa de las relaciones de consumo. Estos derechos son propios del progreso cultural del hombre, los que habiendo ya pasado en un primer lugar por los derechos individuales, luego a mediados del siglo, evolucionaron hacia el reconocimiento de los derechos sociales o de segunda generación, para avanzar un escalón más reconociendo los derechos de tercera generación. Estos son derechos que tienden a proteger el medio ambiente, la lealtad en las relaciones de consumos y de utilización de servicios, los derechos que hacen a la identidad y pluralidad cultural, etcétera.

Sin embargo, estos derechos, consagrados en la reforma constitucional del año 1994, no habilitan a que el Estado ejerza un poder de policía más allá de lo que el derecho constitucional le permite, aun si el fundamento es el de buscar proteger otro derecho.

Esta es la clave para que se pueda vivir en una sociedad organizada. El control jurisdiccional de constitucionalidad, como garantía institucional de la vigencia del Estado constitucional de derecho, se fundamenta en el principio de la supremacía de las normas constitucionales, a las cuales no sólo debemos respetar, sino que además tenemos la obligación de que todas las normas jurídicas infraconstitucionales se amoldasen a las normas constitucionales para lograr un sistema jurídico sólido.

La reforma de la ley 20.680 excede las facultades habilitadas por la Constitución Nacional; más precisamente, excede el artículo 76 de la Carta Magna.

Lo que está en juego es la “división de poderes”. De eso estamos hablando, ni más ni menos. Esa división de poderes que se gestó al amparo del constitucionalismo moderno y que sentó las bases de la República.

Sabido es por todos que el Estado moderno quizá viene asumiendo una relevancia y un rol que otrora no tenía y que la praxis política y de gobierno han ido desbaratando paulatina e implacablemente aquella división en aras de un Estado que actúa y gestiona.

Considero que el avance y prepotencia de un Poder Ejecutivo no puede bajo ningún concepto ni excusa horadar los cimientos de aquella institucionalidad primera.

La división de poderes tiene todavía un cierto valor disciplinario y ordenador del Estado. Tiene la función de disciplinar y limitar el uso del aparato estatal por los tenedores del poder.

Esto fue ya señalado por la Corte en el año 1957, que hizo propia la opinión del doctor Sebastián Soler, un profundo conocedor del derecho, el cual manifestó en el caso “Mouviel, Raúl O. y otros”: “Es preciso agregar también que lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo por sí solo, tampoco lo puede aunque cuente para ello con una autorización legal..., ciertamente el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la administración, ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido expresa implícitamente conferidos. Es ése un principio uniforme admitido como esencial para el mantenimiento e integridad del sistema de gobierno adoptado por la constitución...”.

El proyecto viola lo establecido en el artículo 76 de nuestra Carta Magna, violándolo flagrantemente, ya que pone en cabeza de la Secretaría de Comercio, un poder que no le es propio, y además el mismo puede ser utilizado sin la mínima garantía de debido proceso, derecho también pasado por alto en el proyecto enviado por el ejecutivo.

No es posible que un Estado de derecho, como el de la Argentina, tenga un funcionario del Poder Ejecutivo que actúe con discrecionalidad imponiendo sanciones o realizando determinadas tareas que no le son propias ni al funcionario ni al poder del Estado del cual depende.

Quiero adelantar mi posición negativa y de rechazo al proyecto de ley de abastecimiento por considerarlo altamente negativo y preocupante, ya que puede desembocar en consecuencias realmente perjudiciales para el país.

Esta ley de abastecimiento propone mecanismos de mayor regulación de precios, control de márgenes y cantidades que, desde mi perspectiva, son perjudiciales, porque avasalla el ámbito de decisión de las empresas privadas y es claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad y perjudica la actividad empresarial, las inversiones y, por consiguiente, al empleo.

Señor presidente: el Ejecutivo lo único que busca es poseer mayores mecanismos sancionatorios. El proyecto de ley le atribuye al Poder Ejecutivo el derecho de intervenir discrecionalmente en la actividad y en las decisiones de las empresas establecidas en el territorio nacional. Rechazamos por unanimidad el proyecto que se envió al Congreso, señor presidente. Entendemos que

es inconstitucional, que viola la propiedad privada y el derecho a ejercer industria lícita, y la consecuencia que tendrá será la de llevar al país a una mayor recesión, a un mayor desempleo y al aumento de la informalidad en lo que es la actividad comercial y productiva, lo que es negativo para la actividad económica.

11

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MICHETTI

**Regulación de las relaciones
de producción y consumo
(O.D. N° 327/14)**

Señor presidente:

Pensaba hace un rato en las veces que, en mi rol de diputada de la Nación primero, y senadora actualmente, me ha tocado intervenir para tratar proyectos enviados por el Ejecutivo y cómo la mayoría de las veces tengo que empezar planteando que lo que vamos a discutir en apariencia nada tiene que ver con lo que se quiere aprobar en realidad. Esta vez no es la excepción y me gustaría que, al menos, podamos sincerar lo que el Ejecutivo pretende votar hoy.

Hoy se quiere votar una herramienta que permita generar elementos de presión, para poder concentrar más poder desde el gobierno en una pelea contra un nuevo enemigo: los empresarios. Así quieren desviar la atención de la incapacidad y los desmanejos económicos que están teniendo un impacto en la inflación, en el poder de compra y en la desocupación alcanzando niveles inesperados. El impacto de esta crisis, como siempre, ataca a los más vulnerables.

Después de 11 años de gobierno y de un período de espectacular crecimiento interno y externo se ha perdido la oportunidad de generar condiciones estructurales de desarrollo y capacidad de empleo genuino, evitando el asistencialismo como moneda de cambio.

De lo que se trata hoy es de retomar una herramienta en desuso como es la Ley de Abastecimiento, que atrasa 40 años, como la mayoría de las propuestas de este gobierno, para intervenir en el sector privado, para lograr que éste se ajuste a un relato, que ya a esta altura, de fantasioso, está pasando a ser trágico. Pero como vienen haciendo sistemáticamente, y para que hasta inclusive a algunos sectores de la oposición les permita acompañar las iniciativas licuando tal vez su culpa y su indecisión, presentan esta intención con títulos que nada tienen que ver con el sentido de lo que se trata.

Más aún, de manera cínica, presentan iniciativas cuyos títulos son exactamente lo contrario de lo que provocan. La Ley de Abastecimiento y la concentración de atribuciones en manos del gobierno, que proponen principalmente, vienen a reforzar un ambiente de desinversión cuyas consecuencias, una vez más, van a parar en manos de los consumidores, de los más vulnerables.

Es increíble entonces que el Poder Ejecutivo presente esta iniciativa como de defensa de los consumidores.

La verdad es que tenemos una enorme cantidad de normativa que puede perfectamente ser analizada y perfeccionada para que sea mucho más aplicable y pueda proteger, efectivamente, a los consumidores y usuarios que hoy no están protegidos. Y ahí yo sí concuerdo con los funcionarios. Hoy no están protegidos, pero es mentira que los vamos a proteger con esta ley que está absolutamente direccionada a otra cosa.

Puedo nombrarles algunas de todas las normas relativas a la protección de los consumidores y usuarios que tenemos, más allá, obviamente, de lo que se encuentra contenido en el Código Civil: las reglas de justicia contractual y el régimen de responsabilidad objetiva de daños derivados de productos elaborados. La represión de conductas anticompetitivas de la ley de defensa a la competencia, 22.662. La Ley de Lealtad Comercial, 22.802, los entes reguladores de servicios públicos. El control de los sistemas y contratos de ahorro previo para fines determinados y la ley de defensa al consumidor, 24.240.

A nivel nacional contamos con un Tribunal de Arbitraje de Consumo en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, y a nivel provincial muchas provincias cuentan con leyes que establecen procedimientos administrativos para la conciliación de conflictos en las relaciones de consumo. Éstas son: Catamarca, Misiones, La Rioja, Salta, Chaco, San Luis, Mendoza, Tierra del Fuego, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sumado a esto, contamos con otros instrumentos que generan información para el consumidor, a la vez que ayudan a la transparencia. En lo público, el INDEC, organismo que hoy está cuestionado por la manipulación de sus números y, en lo privado, las asociaciones de consumidores.

Una experiencia interesante que podemos traer a colación es el Consejo Económico Social de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta de creación de tribunales vecinales –de menor cuantía–, incluso con jueces lego. Destacable también es el buen funcionamiento del sistema de mediación, al poderse considerar exitoso en conciliar sin necesidad de recurrir a los tribunales.

¿Queremos defender a los consumidores? Pongamos en funcionamiento el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Saben qué lograríamos? Que este tribunal, cuyos miembros deben ser designados por el Poder Ejecutivo nacional, previo concurso, sancione la realización de acuerdos o prácticas prohibidas por la ley relacionadas con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general. Estamos hablando de empresas que, por su posición en el mercado, pueden fijar, directa o indirectamente,

precios de productos, empresas que no posibilitan que terceros compitan con ellos, etcétera. Esto también es defender a los usuarios y consumidores.

También podríamos atender los 33 proyectos del Senado y más de 50 en Diputados que proponen modificaciones en la ley de defensa de los consumidores. Muchos de estos profundizan en el acceso de la información por parte de los consumidores y la necesidad de educación al consumidor, parte fundamental en el derecho del consumidor que hoy el oficialismo dice que quiere proteger. Podríamos discutir cómo agilizar los procedimientos vigentes para lograr una más rápida respuesta a cada reclamo.

Podemos buscar la manera de que, además de las sanciones, las multas y los reclamos redunden en mejor calidad para los usuarios.

Podemos avanzar en lograr mayor transparencia e información en cuanto a las condiciones y los precios de venta. Éstos son sólo algunos ejemplos, de una larga lista de opciones, para optimizar un sistema que es bueno y podría ser mejorado.

Podríamos acompañar el servicio de conciliación previa de relaciones de consumo y la creación de la Auditoría en las Relaciones de Consumo propuesta en el proyecto que se nos presentó hoy, pero dentro de un marco que sume todas las herramientas que nombré anteriormente.

Entonces, la verdad es que yo a esta altura me pregunto, con total sinceridad, si queremos hacer un proyecto, si queremos trabajar en serio por la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, que creo que definitivamente tiene que ser así; hace once años que ustedes gobiernan y no entiendo por qué hoy tenemos empresas absolutamente concentradas, tenemos sectores que hacen y deshacen a su antojo, tenemos empresas que en las contrataciones públicas, como se dijo acá, ganan siempre, o en la mayoría de los casos, y ahí nadie pone el ojo, nadie pone ninguna transparencia de ningún tipo. Y, además, son empresas que se han súper enriquecido y concentrado en estos últimos años. Muchas vinculadas a funcionarios de alto rango.

Queda claro entonces que lo que se busca no es defender a los consumidores. Lo que se busca es una secuela de la experiencia “Moreno” en la Secretaría de Comercio. Quiero concentrarme en la propuesta de reforma a la Ley de Abastecimiento, que tiene su origen en la ley del 74.

Veamos cuáles eran las condiciones de la época. En el año 73 y 74, se produce un proceso de alta inflación. 60 por ciento en el año 1973 con tarifas, precios y salarios congelados, un dólar congelado que terminó teniendo un dólar paralelo con un 60 por ciento de brecha con el oficial. La inflación en ese momento comía competitividad y rentabilidad, y el Estado en ese momento se pone a discutir y a debatir un proyecto de ley que luego se llama Ley de Abastecimiento, 20.680. Ese contexto nos habla de una particularidad importante en términos de cómo nace esta herramienta que hoy

volvemos a tomar. Es un contexto determinado que me gustaría saber si lo tenemos o no. Pareciera, según la respuesta de los funcionarios en la reunión plenaria, a la que asistimos, que no.

En los propios fundamentos y antecedentes de esa ley, que además debo decir que fue una ley con un debate en el cual se modificaron muchísimas cosas del proyecto original y no sólo eso, sino que se produjo un consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas de entonces. Con lo cual los miembros informantes del proyecto terminaron siendo un diputado radical y un diputado del Partido Justicialista. Lo que nos muestra que era realmente una situación en la que todos consideraban que era necesaria esta ley y por eso la trabajaron juntos.

En esos antecedentes y en esos fundamentos en varias oportunidades se menciona claramente que el proyecto viene a atender de inmediato y enérgicamente los problemas de la coyuntura. En los fundamentos se dice: “En síntesis, venimos a dotar al Ejecutivo y a los organismos de aplicación de un instrumento más idóneo para actuar en la coyuntura”. Luego, hacia el final, dice: “sobre esto se resumen las principales modificaciones que el Poder Ejecutivo propone [...] a la Ley de Abastecimiento más orgánica, más ágil y más apta para afrontar los problemas de la coyuntura”. O sea que quede bien claro que la herramienta, el instrumento de la Ley de Abastecimiento del 74, surge en un contexto determinado, se produce con un consenso determinado y, en sus propios fundamentos, dice que es una herramienta para atender una coyuntura específica.

Pregunto entonces: ¿estamos ante una crisis?, ¿están pidiendo herramientas extremas porque estamos frente a una coyuntura extrema? Les pido respuestas. Si es no, no tiene más sentido seguir debatiendo esta pretendida ley porque se tornaría abstracta y si es así entonces los invito a respetar la institucionalidad y acompañar mi dictamen de minoría en el cual propongo derogar la ley 20.680, el decreto 722/1999 y el artículo 4º, del decreto 2.284/1991. Entendiendo que la Ley de Abastecimiento es una ley que fue creada en la década del 70 en otro contexto económico que no tiene nada que ver con el actual.

Este dictamen, aparte de derogar la Ley de Abastecimiento, plantea que en caso de que exista una situación de desabastecimiento grave de productos o servicios de primera necesidad que afecten la vida o la salud de la población, que no parece ser el caso frente a la falta de respuesta del oficialismo, el Congreso y el Poder Ejecutivo podrán declarar la emergencia pública y aplicar las normas correspondientes en materia de defensa al consumidor y de la competencia.

Es decir que se necesitará el apoyo del Congreso, por ser una situación específica de desabastecimiento, evitándose abusos indebidos como podrían aplicarse con la Ley de Abastecimiento. Esa situación específica podría ser ésta..., pero ustedes la niegan.

Somos un espacio de convicciones muy claras y defendemos la institucionalidad en todas sus facetas.

Comparto con las mayorías opositoras en este Senado el reclamo generalizado por el desmanejo que se hace del Estado, llevándonos a un nivel de descontrol en las cuentas públicas, a un aumento de la emisión y de la expansión de la base monetaria, a una expansión del gasto público que no sólo genera una inflación descontrolada, sino que provoca el desarrollo de heramientas, siempre por fuera de la normalidad, para tratar de contener ese desajuste.

Lo que me cuesta entender es que esa mirada hacia el Estado no encuentre el mismo reflejo en algunos partidos políticos de la oposición cuando se trata de ocho juzgados nacionales de consumo, con sus respectivas secretarías y estructuras, que siguen sumando cargos y gasto público en un Estado que tiene cómo hacerle frente a estas instancias de apelación una vez fracasada la vía administrativa en sus fueros provinciales ordinarios. En todo caso, si creemos que es necesario podemos fortalecerlos, pero no seguir creando nuevas estructuras. Nuestro espacio no va a acompañar estos proyectos de ley porque creemos que nuevamente nada tiene que ver la intención que se declama con el instrumento que se nos trajo hoy al Congreso para aprobar.

12

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MORALES

**Sistema de Resolución de Conflictos
en las Relaciones de Consumo
(O.D. N° 325/14)**

**Observatorio de Precios y Disponibilidad
de Insumos, Bienes y Servicios
(O.D. N° 326/14)**

**Regulación de las relaciones
de producción y consumo
(O.D. N° 327/14)**

Versiones taquigráficas del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos y Garantías, de Industria y Comercio, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda llevado a cabo los días 19, 20 y 26 de agosto de 2014.

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Azul¹ del Honorable Senado de la Nación, a las 17 y 18 del martes 19 de agosto de 2014:

Sr. Presidente (Fuentes). — Buenas tardes.

Contamos con quórum de todas las comisiones que han sido convocadas a los efectos de dar tratamiento al expediente sobre P.E.-298/14, sobre establecimiento

de un sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo; al expediente P.E.-299/14, sobre la creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, y al expediente P.E.-300/14, sobre establecimiento de una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo. Previo a comenzar a discutir la metodología que vamos a desarrollar en estos días, atenta a la convocatoria de distintos sectores interesados, voy a darle la palabra al presidente de la Comisión de Derechos y Garantías que me la ha solicitado.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — Muchas gracias.

Me parece importante aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con la convocatoria de este plenario, porque los expedientes que se han puesto a consideración, el proyecto 298/14, que hace referencia al sistema de resolución de conflictos en las instancias administrativas y fundamentalmente a lo que se relaciona con la Ley de Abastecimiento, y el proyecto 300/14, fueron girados primeramente a la Comisión de Derechos y Garantías; en segundo lugar, a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y luego, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A partir de ese giro, que ocurrió con fecha 5 de agosto, el 7 de agosto se giraron a las comisiones. El día miércoles pasado el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, nos convoca para analizar la mecánica de trabajo de estos proyectos, que son potentes, discutidos, y se lleva a cabo una reunión. En mi carácter de presidente de la Comisión de Derechos y Garantías quiero dejar a salvo que no fue una reunión de carácter particular, sino porque soy presidente de la comisión, y esta comisión es cabecera, justamente, es estos proyectos. En la reunión, que se llevó a cabo en su despacho —me había acompañado el presidente de mi bloque, el senador Gerardo Morales— nosotros habíamos acordado como mecánica de trabajo la siguiente: en primer lugar, en el día de la fecha únicamente se iba a escuchar a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo y a algunos integrantes de las asociaciones de defensa del consumidor.

Sr. Presidente (Fuentes). — Perdón con respecto a la observación del giro...

—El señor senador Petcoff Naidenoff realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Fuentes). — Pero la metodología la discutimos después.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — Usted discuta la metodología; yo voy a hacer referencia a lo que acordé con el presidente de la bancada que lo representa a usted.

Nosotros habíamos acordado que en el día de la fecha se abordaba el primer proyecto de ley, que es el que tiene que ver con la creación de juzgados nacionales y federales en el ámbito de las relaciones de consumo, la auditoría en el ámbito de las relaciones de consumo

¹ Se deja constancia de que este salón no cuenta con la acústica adecuada para el buen registro taquigráfico.

y las nuevas instancias administrativas para escuchar a asociaciones de defensa a consumidores y a integrantes del Poder Ejecutivo. Y se había acordado, desde el punto de vista político, y así fue la convocatoria para el plenario de las comisiones, que efectuamos desde la Comisión de Derechos y Garantías, que para la ley que modifica la Ley de Abastecimiento, la ley tan polémica, se iba a fijar la mecánica de trabajo a implementar para que participen asociaciones, pequeños y medianos productores, en fin, todos a los que, de alguna manera, esta ley les puede o no afectar. Inclusive, el tratamiento o abordaje de ese proyecto seguramente iba a tener vista la semana siguiente.

En horas de la mañana, justamente cuando estoy arribando en un vuelo desde mi provincia, tomo conocimiento de que la Comisión de Asuntos Constitucionales convoca a un plenario —como cabecera la Comisión de Asuntos Constitucionales— para abordar el tratamiento de los tres proyectos: los dos primeros que fueron citados y el del observatorio de precios, que estaba en cabeza de la Comisión de Industria y Comercio.

Esta discusión no es por una cuestión de vedetismo político tendiente a qué comisión le toca presidir en el marco de un plenario; eso pasa a segundo plano, si se quiere, hasta es anecdótico. Lo que sí es muy fuerte es cuál es la idea de este cambio de posición, porque si se trata de que la Comisión de Asuntos Constitucionales cree tener competencia en esta materia, pues bien, seguramente habrán hecho el planteo al presidente del cuerpo, esto es, al licenciado Boudou. Porque cuando uno solicita el giro de un expediente, es el propio presidente quien debe resolverlo. Entonces, si la Comisión de Asuntos Constitucionales, que no tiene competencia en el marco de las atribuciones del Reglamento para ser cabecera de los temas que vamos a abordar, quiere integrarse, me parece muy bien que se integre, pero que lo solicite a la Presidencia, y lo que yo quisiera es que se me extienda la resolución de la Presidencia de la incorporación de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pues, de lo contrario, esa convocatoria es nula, no tiene validez y hay que avanzar con la convocatoria que nosotros realizamos de conformidad con el acuerdo político que llevamos a cabo con el presidente del bloque que representa el senador Fuentes y otros compañeros de su bancada.

Sr. Presidente (Fuentes). — Muchas gracias. Previo a darle la palabra, voy a proceder a leer la nota que, con fecha de hoy, presentara ante el señor presidente del Honorable Senado de la Nación, el licenciado Amado Boudou:

“Me dirijo a usted en relación a los proyectos de ley que tramitan los expedientes 298/14, 299/14 y 300/14 a efectos de solicitarle tenga bien a modificar el giro dispuesto a dichos expedientes en virtud de las consideraciones que brevemente paso a exponer.

”En este sentido, es necesario recordar que nuestra Constitución, como ley suprema, establece en su artículo 42 que ‘Los consumidores y usuarios de bienes

y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control’.

”En este orden de ideas es oportuno recordar que el Reglamento de este cuerpo dispone en su artículo 61: ‘Corresponde a la comisión de Asuntos Constitucionales: dictaminar sobre lo relativo a todo asunto de directa e inmediata vinculación con la interpretación y aplicación de la Constitución Nacional y de los principios en ella contenidos...’

”La mera lectura de estos artículos evidencia que la Comisión de Asuntos Constitucionales es, a todas luces, la que debe intervenir como comisión cabecera en el tratamiento de los tres proyectos remitidos por el Ejecutivo nacional.

”Hago reserva de ampliar estos fundamentos, si se considera necesario.

”En virtud de lo hasta aquí expuesto, le solicito se disponga que la Comisión, de Asuntos Constitucionales sea la cabecera de los tres proyectos mencionados en el primer párrafo de la presente”.

Simplemente, si queremos discutir o no la competencia, debo indicar que en el giro inicial, erróneo giro inicial, ni una sola de las comisiones en ninguno de los temas fue convocada de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Como presidente y en salvaguarda de las atribuciones a comisión, hice el planteo que he plasmado en esta nota.

Tiene la palabra...

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — ¡Un minuto! ¡Una interrupción!

Sr. Presidente (Fuentes). — Tiene la palabra...

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — ¡No! Una interrupción.

Sr. Presidente (Fuentes). — Le doy la interrupción.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — No. Quiero ver la resolución. La resolución de la Cámara.

Sr. Presidente (Fuentes). — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — No, no... ¡Perdón! ¡No!

Sr. Pichetto. – ¿Me permite? Había pedido la palabra, ya que me corresponde hacer una clarificación sobre el tema. Además, por el hecho de haber sido mencionado por el señor Petcoff Naidenoff, creo que me corresponde hacer una clarificación sobre el tema.

Indudablemente, lo que él acaba de comentar con respecto a cómo iba a ser el procedimiento es totalmente cierto y no voy a desmentirlo.

Ante la presentación formulada por el señor senador Fuentes, nosotros hemos reconsiderado la cuestión con respecto al tratamiento de manera individual de los proyectos y consideramos que las tres iniciativas tienen que ver con un marco de definición del gobierno de la política que hace a la cuestión en debate y que no puede escindirse y discutirse un proyecto ahora y otro después.

Y, fundamentalmente, consideramos que el núcleo clave de este proyecto es la reformulación de la Ley de Abastecimiento. Una ley que, además, mejora la anterior, que incluso la atenúa, porque el contenido de la del 74 es mucho más complejo, más duro. Desde el punto de vista de que hasta habilita la detención –si alguno lo desconoce– por parte del Estado del empresario que actúe distorsionando algún esquema de mercado.

Pero la actual Ley de Abastecimiento requería una modificación, un conjunto de normas que tienen que ver con la fijación de precios en la cadena, tienen que ver con un análisis de cómo se conforman los precios en la Argentina e, indudablemente, el fuero del consumidor y el observatorio son normas complementarias a esta norma central y principal, que es la nueva normativa y la nueva estructura de la Ley de Abastecimiento.

Por lo tanto, nosotros entendemos, además de la cuestión constitucional, que –me parece– ha sido debidamente explicada, en orden a que esto es cabecera, la Comisión de Asuntos Constitucionales, desconocemos el porqué la Secretaría Parlamentaria no puso en el ámbito de Constitucionales este tema. Cuando el artículo 42 es muy claro y habla de las regulaciones en materia de los derechos de los usuarios y consumidores.

Así que la decisión que hemos tomado es abrir un debate conjunto, comenzar el día de mañana. Nosotros vamos a solicitar a los presidentes de las comisiones; también, a usted como presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, porque esa comisión de ninguna manera ha sido lesionada, está dentro de la participación del debate, lo mismo la Comisión de Industria.

Que los presidentes convoquen para mañana a una agenda, tanto a los funcionarios nacionales como a los distintos representantes de las cámaras y comencemos un debate y una discusión con todos los actores. PlanTEAMOS una convocatoria para las once de la mañana. Por parte del gobierno nacional van a estar presentes el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Justicia y el secretario de Justicia, Julio Alak y Julián Álvarez; el secretario de Comercio Augusto Acosta. Y, luego, las distintas entidades y cámaras que estamos ya haciendo la invitación para tratar durante todo el día, desde las once de la mañana en adelante, el conjunto

de las normas para poder hacer un debate integral sobre ellas.

Vamos a ver cómo evoluciona mañana esta discusión, este debate y fijaremos si hace falta su continuidad o si entendemos que se agota mañana, procedemos a evaluar la decisión de emisión de dictamen.

Me refiero a que mañana estaríamos en condiciones de comenzar con el conjunto de los actores que vienen discutiendo públicamente. Creemos que este es un buen ámbito para que vengan a discutirlo juntamente con los funcionarios nacionales. Discutirlo frontalmente, decir cada uno lo suyo y lo que haya que analizar y, eventualmente, corregir. Estamos dispuestos a tomarlo con un sentido positivo, esto lo ha dicho la propia presidenta de la Nación.

Esta es la explicación que le tenía que dar. Me parece lógico darla. Y, también, hay una resolución que ya tomó la Cámara con respecto a la reasignación de giro hecha en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). – Mientras tanto, esperamos la resolución de la presidenta, porque la resolución no es menor. Si no hay resolución de la Presidencia, este tema lo tiene que resolver el pleno, lo tiene que resolver la Cámara o de lo contrario hay que seguir con la agenda de la convocatoria que nosotros efectuamos.

Pero lo que no quiero dejar pasar por alto, independientemente de los errores de giro, que más de una vez se dan con cierta frecuencia y hasta con cierta picardía, es que la Comisión de Derechos y Garantías no es que no tenga competencia sino que no debe resultar como comisión cabecera para los asuntos que vamos a considerar. Porque, fundamentalmente, en el artículo 75 del Reglamento que hace referencia a la segunda parte, expresamente al artículo 42 de la Constitución Nacional, implica la temática de los usuarios y consumidores, dice que será competente sin perjuicio de la competencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Lo quiero dejar sentado, porque me parece a mí que acá hay dos cuestiones. Yo lo he dicho desde el primer momento, no se trata de una cuestión de vedetismo político, de quién pueda presidir un plenario, eso pasa a un segundo plano. Ahora, cuando la cuestión es cercenar un debate, cambiar reglas de juego preestablecidas, limitar el tiempo de los que tienen que exponer, habíamos acordado tratar determinados temas y no la Ley de Abastecimiento, que requiere un debate mucho mayor y profundo, me parece que es complejo.

Por eso, le digo al señor senador Fuentes, en su carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ha pedido la palabra el señor senador Artaza, pero estamos a la espera de la resolución de la Presidencia; porque sin la resolución de la Presidencia, lo que hay es un simple pedido y una solicitud, con todo derecho, en su carácter de integrante y presidente

de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero no fue resuelto el tema.

Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias, senador.

Tiene la palabra el señor senador Artaza.

Sr. Presidente (Artaza). – Certifico absolutamente las palabras del señor senador Naidenoff. Como presidente de la Comisión de Industria también me vi absolutamente avasallado y sorprendido por el cambio de giro de los proyectos, sobre todo porque era producto de un acuerdo –como bien lo explicitó el presidente del bloque del oficialismo– y uno se pregunta por qué. Evidentemente, hay una decisión política del gobierno que lamentamos. En un momento en el que el gobierno va a necesitar consensos sobre todo en las situaciones sociales y económicas difíciles en las que nos encontramos. Y nosotros estamos dispuestos a discutir estos tres proyectos y en alguno podemos tener alguna coincidencia, pero también muchas disidencias que queremos debatir aquí.

Creo que el gobierno trata de evitar la agenda que habíamos preparado en la que íbamos a escuchar a todos. Primero citamos a los sectores y asociaciones de usuarios, luego a las cámaras empresarias de todo el país. Los habíamos citado preparando una agenda. ¿Se quiere evitar esa discusión? Me parece que hay una decisión política y, por eso, vamos a esperar la certificación del presidente del Senado, como lo ha pedido el senador Naidenoff. Si no es así, debemos continuar con la agenda de convocatorias que habíamos hecho dentro de las comisiones correspondientes.

Y, si se llama decisión política constitucional, a la competencia de esta comisión que preside el senador Fuentes, ¿es porque tienen miedo de que haya planteos de inconstitucionalidad? Si se trata en otras comisiones, también va a haber planteos de inconstitucionalidad. Por ese lado no deberían preocuparse. Si hay planteos de inconstitucionalidad se van a presentar igual haya o no cambio de giro.

Y la otra duda es si hay una desconfianza política. ¿Por qué no tratarlos, dentro de un acuerdo, con el correspondiente giro originario que tenía cada uno de los proyectos, señor presidente?

Sr. Presidente (Fuentes). – Se está confeccionando la lista de oradores. Hasta el momento tengo anotados a los señores senadores Morales, Morandini, Rodríguez Saá y Anibal Fernández.

Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Gracias. Quiero volver sobre el planteo de la aplicación estricta del Reglamento. En ese planteo corresponde que presida la reunión de este plenario de comisiones el señor senador Naidenoff, que es el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías.

Creo que la resolución de Presidencia no está hecha. Debe estar Boudou ahí –si está– redactando la resolución porque no la hicieron; si no, tendrían que estar los antecedentes. Por lo tanto, ni siquiera han tenido el cuidado de cubrir las cuestiones reglamentarias. Y

en este aspecto podrán hacer cualquier cosa; y nos parece que es una falta de respeto. Podrán hacer con nosotros cualquier cosa, pero no pueden incumplir el Reglamento que ha sido aprobado por dos tercios de la Cámara y que se establece claramente en el artículo 90.

Y en el artículo 89 dice: “Cada asunto o proyecto se destinará a una sola comisión”. Y el debate sobre qué comisión es la que corresponde, no es menor. “La Presidencia o en su caso la Cámara, de acuerdo con lo previsto en el artículo 90 puede resolver que pase a estudio de más de una comisión cuando la naturaleza del asunto así lo aconseje. En este caso las comisiones procederán reunidas”. Entonces, estamos en el caso de que hay que determinar cuál es aquella comisión; luego vienen las otras que, por competencia, pueden intervenir en el debate. Y acá viene a cuento, a partir del proyecto 298 y 299 que remite el Poder Ejecutivo el artículo 75, porque por algo hemos escrito un reglamento y por algo tenemos comisiones escritas en el reglamento que tienen competencias. Quiero leer la competencia de la Comisión de Derechos y Garantías del artículo 75 del Reglamento que dice: “Corresponde a la Comisión de Derechos y garantías: dictaminar sobre lo relativo a los derechos humanos y sus garantías constitucionales. Asimismo, lo atinente a la implementación de programas y políticas de información, esclarecimiento, difusión y educación respecto al consumo y sobre todo asunto o proyecto orientado a promover la defensa de los derechos de consumidores y usuarios, para equiparar la situación de éstos frente a la de los proveedores de bienes y servicios. Será también competencia...”. Es decir, la competencia natural, en función de la naturaleza y del objetivo de los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo, se encuadra en el 75. No pueden hacer presidir con la Comisión que se les antoje. Sin perjuicio de que está bien que se agregue la Comisión de Asuntos Constitucionales. Nosotros no hacemos reparo en esa cuestión. Pero no puede presidir. El que tiene que presidir este plenario es el senador Naidenoff, no el senador Fuentes. Y han hecho esta maniobra para que usted presida, dé palabra y maneje el Frente para la Victoria los tiempos y los ritmos de este plenario. No es una cuestión de quién aparece o no; nosotros reclamamos la aplicación y el cumplimiento del reglamento y que quien tiene que presidir este plenario es el senador Naidenoff.

Y en el artículo 90 cuando hay dudas sobre el destino de un proyecto –y aquí podríamos plantear la situación de la duda– dice: “Si al destinarse un asunto existiese duda acerca de la comisión a que compete, la decidirá en el acto la Cámara”. Este no es el caso, el caso es el que sigue: “Ingresado un asunto a la Mesa de Entradas y a partir de su publicación en la Lista de Asuntos Entrados en el sitio Intranet del Senado –que es el caso frente al que estamos–, ...los señores senadores dispondrán de siete días hábiles para formular observaciones en cuanto al giro dispuesto para los expedientes”. En este caso la presentación del senador Fuentes está dentro de los siete días. “Las observaciones serán formuladas

y debidamente fundadas por escrito...” —que es lo que acaba de leer el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales— “...y dirigidas a la Presidencia, la que resolverá en el plazo de tres días hábiles”. Nosotros queremos ver, como lo ha pedido el senador Naidenoff, la resolución del presidente porque ni siquiera la firmó, ni está hecha. Y si la están haciendo, la deben estar terminando y poniéndole número en este momento.

Entonces, nosotros advertimos sobre esta situación. Ordenemos el tema. Ustedes quieren aprobar mañana, si puede ser a las nueve de la mañana los tres proyectos, porque está la orden de Casa de Gobierno, del Poder Ejecutivo. Quieren llevarse todo por delante. Tengan un poco de respeto. Por lo menos cumplamos la cuestión reglamentaria. Quien tiene que dar o no la palabra y ordenar es el senador Naidenoff y no el senador Fuentes. Y esta es una cuestión importante, porque tiene que ver con la competencia natural de la Comisión de Derechos y Garantías, que justamente tiene que ver en estos proyectos y en especial con el 298 y el 299. Después viene la cuestión de las agendas que, por lo que ha planteado el presidente del bloque del Frente para la Victoria es diferente a la que habíamos acordado. Se había dispuesto trabajar en el primer proyecto que creo que es el 298; ahora la decisión del Ejecutivo y del bloque de la mayoría es tratar los tres proyectos, entonces mañana vienen todos los funcionarios. Y se ha planteado la posibilidad de que se firme el dictamen. No puede ser que hagan esto. Nosotros necesitamos una audiencia pública a la que podamos invitar a distintas voces, no sólo a los representantes del Poder Ejecutivo, que está bien que vengan mañana. Estaría bueno que agregaran a Kicillof, el ministro de Economía, porque uno de los proyectos de ley aborda la cuestión del artículo 20 de la Ley de Ministerios y modifica la cuestión de las competencias del Ministerio de Economía, que es un tema central porque está en línea con la lógica de los proyectos. Y también se ha planteado que viene el secretario de Comercio; entonces, también, la cuestión de las modificaciones a las competencias del secretario de Comercio. Tiene que venir también, además de todos los funcionarios que se han mencionado, el ministro Kicillof a explicar la filosofía, porque con esta reforma pasa a ser el superministro. Entonces, hay ahí un tema. Luego, tienen que venir las instituciones, presidente.

Con estos temas después el hilo se corta por lo más delgado. Cuando el gobierno se meta con —que es lo que ha venido haciendo, pero ahora quieren tener marco legal— los márgenes de contribución, las utilidades, precios, esto y lo otro, primero va a producir lo que siempre ocurre con la aplicación de estas leyes que es el desabastecimiento. Después, el hilo se corta por lo más delgado y los que se terminan perjudicando son los productores. Nosotros queremos hacer escuchar al interior, a los productores; y cuando se perjudican los productores —porque los grandes pueden aguantar, pueden bancarse un año y medio— los que se perjudican son las pymes, las microempresas y se perjudica, fundamentalmente, el interior y el trabajo en el interior.

Nosotros queremos escuchar la voz de productores, de las asociaciones de usuarios y consumidores y de todas las entidades que involucran el abordaje de estas tres leyes con tranquilidad.

Por eso, planteamos que tiene que haber una agenda. Si bien mañana vienen los funcionarios, la semana que viene hay que continuar con las audiencias públicas para un debate profundo de leyes que son importantes, que generan estrépito y que ya han generado un debate.

Por eso, señor presidente, insisto con que el presidente tiene que ser el senador Luis Petcoff Naidenoff y en esto le pido al Frente para la Victoria, que se quieren llevar todo por delante, que cumplamos el reglamento y que sea el presidente de Derechos y Garantías el que coordine el manejo de esta reunión plenaria, en primer lugar. Y, después, que podamos hacer una agenda que nos permita un debate profundo de estos tres temas.

Sr. Presidente (Fuentes). — Les recuerdo que el presidente del bloque del Frente para la Victoria manifestó que iba a haber una concurrencia de las representaciones empresariales, trabajadores y asociaciones de consumidores en los tiempos que sean necesarios. Por eso, propongo agotar esta etapa de competencia para luego entrar en la discusión de lo que va a ser la metodología de trabajo para garantizar el más amplio debate posible.

Tiene la palabra la senadora Morandini.

Sra. Morandini. — Es para ratificar todo lo que se ha dicho acá en el sentido de competencias, y quiero hacer una reflexión en el sentido del desabastecimiento, el “des” como negación y el “abastecimiento”, al que está siendo sometida la democracia. Porque si estas leyes vienen a confesar la preocupación de las góndolas vacías, lo que se está vaciando de sentido es a la democracia. No es una cuestión formal, nada más, de competencia, porque ésta no es la primera vez que somos atropellados, que somos convocados a plenarios en los que ni siquiera se respeta el número del quórum, que se alteran las reglas del juego. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está desabasteciéndose es el sistema democrático. Se está desabasteciendo culturalmente, porque incluso cuando uno escucha los argumentos con los que se defienden estas leyes hay una concepción de poder autoritario que nos atropella en la formalidad, cuando preside quien no debe presidir, porque no se ha cumplido con todo lo que se ha señalado aquí del reglamento.

De modo que me parece que es mucho más serio, no es una cuestión administrativa y de reglamento. Cuando el reglamento no se cumple lo que se va vaciando, claramente, es el sistema democrático y está siendo sustituido por una concepción de régimen que es una concepción de poder.

Sr. Presidente (Fuentes). — Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — Estamos en momentos difíciles. El narcotráfico en Rosario hoy ha tenido una nueva víctima. Cuentas entre los narcotraficantes. Creo que

son 170 muertes las que se llevan en el año en Rosario por el narcotráfico. En la provincia de Buenos Aires se acaba de descubrir una banda delictiva de la Bonaerense que operaba en La Matanza, Tres de Febrero y otros partidos del Gran Buenos Aires. Es la que hacía los secuestros exprés, robos, etcétera, con un jefe de la policía y varios comisarios y subcomisarios. Narcotráfico e inseguridad, hechos de ayer y de hoy que se repiten en una sucesión enorme de graves acontecimientos.

Tenemos todo el problema de la deuda, gravísimo problema. No sé si estamos en *default* o no estamos en *default*, pero sí sé que estamos con gravísimos problemas en los que tenemos que poner las energías de toda la Nación para defender a la Nación.

Estamos en presencia del tratamiento de tres leyes que, por el momento, tienen un unánime y contundente repudio de enormes fuerzas representativas del país. Son sectores, pero un repudio contundente. La presencia de los senadores y de los asesores está mostrando la importancia del tema. Entonces, acá el reglamento no es una cuestión secundaria. Estamos discutiendo cómo vamos a tratar el tema. Si se nos anticipa, por parte del presidente del bloque del Frente para la Victoria, que mañana vamos a escuchar y si es posible vamos a terminar, así lo dijo él, aunque el presidente de Asuntos Constitucionales dijo que íbamos a escuchar a todos y el tiempo que fuera necesario debería interpretar yo, quien presida y quien ordene la metodología no es una cuestión secundaria. El Frente para la Victoria tiene mayoría en todas las comisiones, o sea que cuando votemos va a poder imponer su voluntad. Pero debemos respetar las formas y creo que es contundente el reglamento.

“Corresponde a la comisión de Derechos y Garantías: dictaminar sobre lo relativo a derechos humanos y sus garantías constitucionales. Asimismo, lo atinente a la implementación de programas y políticas de información, esclarecimiento, difusión y educación respecto al consumo y sobre todo asunto o proyecto orientado a promover la defensa de los derechos de consumidores y usuarios, para equiparar la situación de éstos frente a la de los proveedores de bienes y servicios. Será también competencia de la comisión todo asunto vinculado a la implementación de procedimientos tendientes a asegurar en la relación de consumo, los derechos consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional –sin perjuicio de la competencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales– a favor de los usuarios y consumidores referentes a la protección de la salud y de la seguridad, la calidad de bienes y servicios, y a la participación de los organismos de control”.

De la lectura es obvio que en todo lo que compete al artículo 42, la cabecera específica es derechos y garantías. Entonces, si estamos en un conflicto deberá resolverlo el cuerpo y si no yo pido que acepten cumplir el reglamento que no los perjudica absolutamente en nada.

Por otro lado, creo que estamos ante la gravedad de una nueva pretensión de tratamiento exprés para

que, sin discusión, escuchemos lo que quieran escuchar y, después, sin discusión, van a dictaminar. Sin discusión. Estas leyes que traen son leyes que pueden afectar muchos derechos que por lo menos merecen la posibilidad de ser discutidos y otorga facultades al Ministerio de Economía bastante importantes. Se crean nuevos tribunales, se crean competencias, se avasalla a las provincias. Entonces, me parece que, además de escuchar a los que están a favor –los del gobierno– y los que están en contra que se han expresado, que lo vamos a escuchar, como los empresarios, etcétera, merece un debate. Estamos para debatir, discutir y encontrar las correcciones necesarias para dictar leyes que sirvan a la República. Entonces, pido una reflexión. Nosotros pedimos una reflexión.

Hemos asistido a la convocatoria que hizo la semana pasada la Comisión de derechos y garantías. Al mediodía, nos encontramos con la sorpresa de que la convocante también era Asuntos Constitucionales, y tenemos un problema de competencias. Si nosotros no lo podemos dirimir, tendrá que ser el cuerpo el que lo dirima. Eso es lo que corresponde. Entonces, pido sensatez. Aceptemos que presida derechos y garantías y hagamos una agenda acordada entre todos.

Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias, senador.

Tiene la palabra el señor senador Aníbal Fernández.

—El señor senador Artaza solicita una interrupción.

Sr. Presidente (Artaza). – Defendiendo la cabecera de la Comisión de Industria y Comercio para el proyecto 300/14, leeré simplemente un párrafo del artículo 70 del reglamento. Atribuciones de esta comisión: “Además le corresponde dictaminar sobre lo relativo al régimen de abastecimiento y comercialización interna, racionalización del consumo y de la distribución de bienes en el mercado interno, fijación y control de precios de los bienes de consumo, represión de *trusts* y monopolios ilícitos, normalización, tipificación e identificación de las mercaderías en el comercio interno, aplicación y fiscalización del sistema de pesas y medidas, normativa que asegure la lealtad comercial y todo otro asunto referente al ramo de comercio”.

Por eso, insistimos en que hemos sido sorprendidos nuevamente a pesar de este acuerdo político. Entendemos, y estábamos dispuestos a escuchar a todos los sectores. Espero que pueda ser así y se pueda lograr; si no, la convocatoria que hemos hecho no sería seria para todos los sectores sindicales, de trabajadores, de asociaciones de consumidores y cámaras empresariales, sobre todo del interior del país que nos han expresado su preocupación.

Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias, senador.

Tiene la palabra el señor senador Aníbal Fernández, continuará la senadora Michetti y, hasta ahora, no hay nadie más anotado.

Sr. Presidente (Fernández). – Me parece que las explicaciones dadas van en el sentido, en primer lugar, de una explicación necesaria, porque si no parecería que uno pasara por encima de los presidentes de las comisiones de Industria y de Derechos y Garantías, y ése no es el objetivo. Va de suyo que son comisiones que deberán participar en una discusión de las características de las que estamos llevando a la práctica.

Estamos hablando de los derechos de los consumidores, de la protección de esos derechos, de la defensa de la competencia, de servicios públicos y eficiencia, y de la previsión y solución de los conflictos. Todos estos elementos son los que componen el artículo 42 de la Constitución.

Yo no creo que tengamos que hacer demasiado esfuerzo para razonar que cada vez que se analice la Constitución en sí misma, la discusión pasa por la Comisión de Asuntos Constitucionales. No es un esfuerzo muy grande lo que hay que hacer.

Ahora bien, ¿cuál es la discusión, sin ir a lo que significaría una valoración subjetiva del futuro? Estamos discutiendo algo que no tiene mucho sentido. Estamos planteando la necesidad de un debate lo más amplio posible. Hemos pedido a los funcionarios que van a venir del Poder Ejecutivo que podamos cotejar con las partes más importantes que se están oponiendo en este momento, para que en vez de que primero hable el Ejecutivo y, después, las partes, podamos sentar a ambos en el lugar y que el Ejecutivo le responda a las partes. ¿Qué mejor forma de debatirlo? No lo habíamos hecho nunca. Creemos que la entidad, la estatuta de la discusión requiere de un amplio debate de estas características, novedoso si se quiere, pero queremos que sean los propios funcionarios del Poder Ejecutivo los que respondan a aquellos que son los que están vertiendo en estos días, por un montón de lugares, dichos que, según nuestra manera de pensar, no se conciben con la realidad, pero tienen todo el derecho del mundo a expresarlo. Me parece que el lugar adecuado es éste y ante los funcionarios del Poder Ejecutivo para comprender la profundidad de lo discutido. Entonces, estamos yendo a un punto determinado.

Nadie le quita los derechos a las comisiones como corresponde, que tienen que formar parte de la decisión y por ellas debe pasar la discusión que estamos llevando a la práctica, pero estamos convencidos de que cada vez que se trata una reglamentación, de alguna manera, de un artículo de la Constitución, como es en este caso el artículo 42, no puede obviarse a la Comisión de Asuntos Constitucionales. No hay forma de que se pueda explicar a través de un reglamento. El reglamento para nosotros es la condición *sine qua non*, pero siempre detrás de la Constitución Nacional. Lo que estamos planteando es eso. Estamos yendo al manejo específico de lo que corresponde. Hay una decisión específica.

Si hubo un error se corrigió y si se corrigió, no se está obviando a las otras comisiones. Insisto, muy por el contrario, se las está incluyendo, pero en la

cabeza de esta discusión está la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y no queremos abortar ningún tipo de debate. Muy por el contrario, abrir el debate, dar la mejor discusión que se pueda, que no quede nadie insatisfecho en cuanto a poder expresar en este recinto todo lo que tengamos por decir y que lleguemos a un punto en donde ese dictamen, cuando se llegue al dictamen, haya sido tamizado suficientemente por todas y cada una de las partes que han participado de este tema.

Entonces, nadie cercena las posibilidades democráticas. Nadie cercena la participación de nadie. Todos tienen oportunidad de poder hablar, hacer las preguntas del caso y discutir, entre los funcionarios del Poder Ejecutivo y las entidades empresarias, de todas las formas posibles para que no queden dudas por resolver. Si hay cosas por modificar que tengan la importancia y la estatuta, es decir, sean lo suficientemente grandes, las modificaremos.

Queremos dejar abierto un debate lo suficientemente amplio como para que no se pueda decir que estamos frenando absolutamente nada, muy por el contrario.

Insisto, la cabecera es la Comisión de Asuntos Constitucionales. La decisión ha sido rectificada por un error y ese error había que corregirlo. Si se hubiese puesto la Comisión de Deportes, ¿la cabecera hubiese sido la Comisión de Deportes? No es así. Nadie puede negar que las comisiones de Derechos y Garantías y de Industria y Comercio deben participar de este tema; pero nadie puede negar, mucho menos todavía, que una reglamentación de un artículo de la Constitución no pase por Asuntos Constitucionales. Va de suyo que no hay explicación más innecesaria que la que estamos vertiendo en este momento. Llevemos a la práctica el mejor debate que se pueda para que nadie se quede con nada por decir. Me parece que estamos yendo al punto que nos interesa.

Sr. Presidente (Fuentes). – La senadora Morandini le solicita una interrupción.

Sr. Presidente (Fernández). – Terminé.

Sr. Presidente (Fuentes). – Senadora Michetti: ¿le da la interrupción a la señora senadora Morandini?

Sra. Michetti. – Sí.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.

Sra. Morandini. – Estamos hablando de derechos y los derechos son el lenguaje de la deliberación. No hay que ir a buscar legitimación todo el tiempo en la Constitución porque, entonces, cada ley que este Congreso trate va a tener que ir a buscar legitimación en la Constitución. Por eso, digo que lo que se está vaciando es el sistema democrático. Los derechos son el lenguaje de la deliberación. Por eso, estamos acá, pero si cada vez tenemos que ir a buscar legitimación en la Constitución, entonces estamos en problemas.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra la señora senadora Michetti.

Sra. Michetti. – La verdad es que es bastante violenta la situación, a pesar de que ahora sé que le ha llegado la ratificación de que el presidente de la Cámara le da el *okay* al pedido de que Constitucionales sea cabecera.

Lo cierto es que si un ciudadano común nos estuviera escuchando y estuviera escuchando este debate, me parece que no entendería muy bien cuál es el fondo de la cuestión, porque se dicen muchas cosas un poquito por arriba. Me da la impresión de que no podemos obviar la importancia que tiene el hecho de ser o no cabecera de un tema. Es obvio que todos van a participar. Por algo se está pidiendo con tanto esfuerzo y tanta necesidad, y aparte violentándonos porque la verdad es que hasta recién, que no teníamos la comunicación, el senador Fuentes estaba presidiendo sin tener la autorización de hacerlo.

Sr. Presidente (Fuentes). – No, la comunicación estaba hecha. No estaba aquí la copia, senadora. La corrijo. Por favor...

Sra. Michetti. – Yo le pido, por favor, que nos respetemos.

Sr. Presidente (Fuentes). – Te vas a manchar los dedos con la tinta.

Sra. Michetti. – Porque la verdad...

Sr. Presidente (Fuentes). – Senadora, disculpe.

Sra. Michetti. – Tratemos de ser adultos.

Lo que digo es que creo que definitivamente no es lo mismo tener o no la cabecera, porque justamente –para que lo sepa cualquiera que esté mirando y escuchando este debate– quien tiene el manejo de la cabecera de un tema tiene el manejo de los tiempos. Por supuesto que va a haber... Me imagino que no vamos a tener una cosa tan animal ni tan bestial de firmar el despacho en dos segundos, pero quien decide cuándo se terminó el debate y cuándo se firma el despacho es la comisión cabecera. Entonces, no podemos mentirnos: es importante tener la cabecera o no tener la cabecera en el debate del tema. No nos tomemos el pelo en este sentido, porque creo que la discusión es una discusión que hace a un tema importante.

Entonces, primer tema: me parece que tienen que ser un poco más prolijos. Es una barbaridad lo que pasó recién. No puede ser que sigamos en esta cosa de pasar por arriba de cualquier situación en el Senado de la Nación. Estamos en una de las instituciones más importantes de la República. Este tipo de cosas no son buenas: no lo son para nosotros; no lo son, sobre todo, para la gente. Tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Este tipo de jugarretas no hace a recuperar la confianza.

El segundo tema es que coincido plenamente con lo que se ha dicho acá respecto de que por algo el reglamento le pone especificidad a las comisiones, y por algo hay muchas comisiones y no sólo la de Constitucionales. Porque si no, es obvio que el 90 por ciento de los temas que tratamos, si no el ciento por ciento –estoy tratando de pensar qué cosa no–, tienen una raigambre

y una legitimidad necesaria en la Constitución. Ahora, hay varias comisiones y hay varias temáticas separadas en comisiones con una especificidad dada por el reglamento justamente para que se pueda ejercer un mecanismo ordenado de discusiones y debates, y no que todo esté concentrado en la Comisión de Constitucionales. Esto me parece demasiado brutal.

Por otro lado, el tema de fondo es un tema muy importante, muy trascendente. Mediante los proyectos que llegaron estamos intentando revivir una ley del año 74, con pequeñas modificaciones. No coincido con el senador Pichetto respecto de que estas son grandes o importantes modificaciones: no lo son; son algunas modificaciones. Menos mal que por lo menos le sacan la cárcel a los que pueden incurrir en lo que el Poder Ejecutivo va a decidir si es o no problema de abastecimiento o lo que fuera. Pero la verdad es que no son grandes modificaciones. Y estamos reviviendo una ley del año 74, que terminó como terminó en el país, y todos lo sabemos.

Entonces, es un tema...

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Fuentes). – No interrumpen.

Sra. Michetti. – Sí, está vigente, pero estaba el Poder Ejecutivo autolimitado a ejercer lo que esa ley le permitía ejercer. Por algo estaba autolimitado también. Y durante muchos años estuvo autolimitado. Justamente, esa es la pregunta: ¿por qué ahora se “desautolimita” y empieza a revivir esa ley?

Señores: tengamos en cuenta que acá se viene una discusión seria. Si esta discusión llega a tener un día de debate –como me da la impresión, por las palabras que escuché de algunos senadores del oficialismo, que puede suceder–, la verdad, vamos a cometer un error muy grande y nos vamos a encontrar con graves problemas, más importantes aun que los que ya tenemos en la economía. No vamos a ir en el buen sentido. Así que creo que tenemos que tener en cuenta que mañana este debate de ninguna manera puede terminar.

Solamente quiero dejar sentado eso.

Sr. Presidente (Fuentes). – A los efectos de la aclaración de la consulta efectuada por el señor presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, paso a leer la siguiente nota:

“Buenos Aires, 19 de agosto de 2014.

”Señor secretario parlamentario:

”En virtud de la presentación efectuada en la fecha por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Marcelo Fuentes, en el sentido de reclamar, por razones constitucionales y reglamentarias, ser cabecera del tratamiento de los expedientes P.E.-298, P.E.-299 y P.E.-300 del año en curso, y considerando justificados sus argumentos expuestos en dicha presentación, le solicito el inmediato giro de dichos expedientes en el sentido solicitado, todo ello de conformidad con las facultades que fueran conferi-

das en la sesión preparatoria del día 28 de febrero del corriente año.

”Saluda a usted atentamente,

”Licenciado Amado Boudou, presidente del Honorable Senado de la Nación”.

Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.

—El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Fuentes). — Mantengamos el nivel, senador Morales, que veníamos bien.

Sr. Cimadevilla. — Fresquita la resolución: no se alcanzó a orear todavía.

Sr. Presidente (Fuentes). — Y acá se corrió la tinta, senador. Quédese tranquilo.

Sr. Cimadevilla. — Mi intención es sostener los argumentos que se vienen esgrimiendo por parte del senador Naidenoff.

Si nosotros nos apegamos a la interpretación amplia que hace el senador Fernández sobre las atribuciones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, todos los proyectos de ley tendrían que ir a la comisión de negocios constitucionales. Todos. Porque concretamente dice el reglamento que deberá dictaminar sobre todo lo relativo a todo asunto que directa e inmediatamente esté vinculado con la interpretación y aplicación de la Constitución Nacional. Obviamente, todas las leyes tendrían que ir a la comisión de negocios constitucionales.

Nadie niega la participación de la comisión, pero en este caso concreto hay que ir a la especificidad. Porque el artículo 75 del reglamento, cuando habla de la Comisión de Derechos y Garantías, específicamente menciona al artículo 42 de la Constitución Nacional. Es decir que no puede quedar absolutamente ninguna duda de que la cabecera de este plenario debe estar en la Comisión de Derechos y Garantías. No hay, como usted dice, señor, otra interpretación posible. La especificidad del artículo 75 desplaza la generalidad que le da a la comisión de negocios constitucionales el artículo 61. Habla de los derechos consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

No hay otra posibilidad de interpretación que no sea ésta. A esto me quiero referir. Forzar otro tipo de interpretación, desplazar la presidencia que naturalmente tendría la Comisión de Derechos y Garantías, hace que comencemos mal este debate. Y perdónennos, pero pensamos con algunas reservas los deseos que ustedes expresan de que éste sea un debate transparente, cristalino, limpio y amplio, porque empezamos mal.

Sr. Presidente (Fuentes). — Gracias, senador.

¿Algún senador o senadora más?

—No se realizan manifestaciones.

Sr. Presidente (Fuentes). — Señores: cuarto intermedio para mañana a las 11 de la mañana. Gracias.

Mañana van a estar presentes todo el día...

—La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Fuentes). — Ahora la vamos a circular, senadora.

—La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Fuentes). — Arriman a la Presidencia las propuestas.

Hoy el señor jefe de Gabinete se comprometió a hacer las gestiones con las distintas cámaras que han firmado el documento del grupo “G6” para que estén presentes; se va a invitar a las centrales obreras y se va a invitar a la asociación del consumidor, entre otros. Eso es lo que está programado.

Usted arrímeme la propuesta, senadora, y haremos la invitación.

—Son las 18 y 12.

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Azul¹ del Honorable Senado de la Nación, a las 11 y 32 del miércoles 20 de agosto de 2014:

Sr. Presidente (Fuentes). — Buenos días.

Retomando después del cuarto intermedio que realizamos ayer, quiero informar a los señores senadores que, en la intención de que las exposiciones abarquen el mayor espectro de representación posible y aprovechando la presencia de los señores funcionarios, vamos a cambiar el mecanismo de exposición.

El mecanismo tradicional hasta ahora era que los funcionarios exponían y luego se retiraban; pero hoy los señores funcionarios van a hacer el esfuerzo de permanecer el tiempo que dure la audiencia a los efectos de que los expositores de las asociaciones puedan también formularles las preguntas que quieran, a fin de hacer el debate en el escenario de este recinto y no simplemente decir algo y luego salir a hablar con las cámaras.

En el tiempo que hemos tenido, y atento a los pedidos formulados por los senadores hasta ahora —lo cual no implica que sea definitivo, porque dedicaremos todo el tiempo necesario, ya que tenemos el día de mañana, el viernes y el martes también—, vamos a comenzar la reunión con las exposiciones del señor Jorge Milton Capitanich, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación; del doctor Julio César Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; de Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación y de Augusto Costa, secretario de Comercio de la Nación.

A la solicitud formulada, a su vez se superponen las solicitudes de varios senadores. Respecto de las invitaciones formuladas por la Comisión de Derechos

¹ Se deja constancia de que este salón no cuenta con la acústica adecuada para el buen registro taquigráfico.

y Garantías, el doctor Carlos Tambussi no asiste por problemas de agenda y presentará su opinión por escrito. El doctor Fernando Blanco Muiño, presidente de la Unión de Consumidores de Argentina va a estar presente así como también el doctor Héctor Polino, de Consumidores Libres; el doctor Osvaldo Riopedre, por Adecua; la doctora Claudia Collado, por ADELCO y, finalmente, el doctor Ricardo Gil Lavedra.

En cuanto a las solicitudes efectuadas por la comisión que preside el senador Eugenio Artaza, estará presente el doctor Héctor Polino.

Asimismo, por propio interés expondrán los siguientes representantes: el doctor Horacio Bernstein por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y Héctor Bassano por ADDUC.

Por otro lado, la senadora Negre de Alonso presentó una completa lista que se superpone con las de otros senadores. Los contactos fueron hechos y si bien algunos confirmaron su presencia, otros no; lo cual no implica que en el transcurso de la jornada podamos tenerlos presentes.

—El señor senador Morales se acerca a la Presidencia y realiza manifestaciones al presidente Petcoff Naidenoff.

—El señor Presidente Fuentes dirigiéndose al presidente Naidenoff:

Sr. Presidente (Fuentes). — ¿El enojo era con vos o conmigo?

—El señor presidente Naidenoff realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Fuentes). — Me tranquilizo. Lo digo para empezar bien el día.

En cuanto a la senadora Negre de Alonso y dos senadores más: el señor Claudio Cesario, por la Asociación de Bancos Argentinos y el señor Jaime Campos, por la Asociación Empresaria Argentina.

Cabe destacar que solicitamos la unificación de personería a fin de que no hablen varios representantes de un mismo espacio.

Continuamos: el señor Máximo Fonrouge, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que si bien figura como no contactado, ha confirmado su presencia.

Luego la Federación de Colegios de Abogados, FACA, nos ha hecho llegar una extensa nota a través de la cual manifiesta que distintas comisiones van a intervenir y discutir y luego verán qué van a hacer.

Fueron contactados, pero aún no confirmaron su presencia: IDEA; Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas; Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere; Cámara Argentina Norteamericana, Juan Manuel Vaquer; Mesa de Enlace, Eduardo Buzzi y Asociación Civil Será Justicia, Guillermo Lipera.

La señora senadora Montero presentó un listado que entregó a las 9 y 35 de hoy. Sin embargo, las autoridades o especialistas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME no confirmaron su asistencia. Por su parte, el doctor Sabsay no puede asistir por encontrarse de viaje. Respecto de las autoridades y los especialistas de Protectora, Asociación Nacional de Defensa del Consumidor, no nos suministraron datos de contacto, con lo cual en el momento en que puedan tenerlos nos los acercan.

Asimismo, no fueron suministrados datos de contacto en cuanto a las autoridades o especialistas de la Asociación de Comerciantes y Emprendedores de Mendoza.

—El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Fuentes). — ¿Pero está enojado usted o no?

—El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Fuentes). — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Estaba un poquito enojado con algunas intromisiones que son de afuera del Senado; no con usted.

Sr. Presidente (Fuentes). — Le agradezco tanto.

Sr. Morales. — Lo que quiero decir, presidente, es que los senadores Naidenoff y Artaza son los que van a coordinar los pedidos de invitaciones que están siendo enviados. Entonces, le pediría que coordinen con usted para saber quiénes van a exponer hoy. Creo que habría que ponerse de acuerdo. Obviamente, en primer lugar lo harán los funcionarios —como ha sido planteado— y luego algunas cámaras, para continuar el día martes de la semana que viene —eventualmente el miércoles— con la cantidad de sugerencias que se están planteando.

Señor presidente, coordinen ustedes en la mesa. Los senadores Naidenoff y Artaza harán lo propio en cuanto a las peticiones del bloque de la Unión Cívica Radical. Si otros senadores de los bloques de la oposición también quieren, coordinaremos y ordenaremos bien el tema, porque hay que invitar a las personas, a las entidades y debemos hacerlo con tiempo. Me estoy refiriendo a los que vendrán la próxima semana.

Entonces, definamos ahora quiénes expondrán hoy, porque me parece que se encuentran presentes algunos representantes de las cámaras. Y, luego, en cuanto a todas esas listas que leyó, podemos quedar para el día martes; pero que el ordenamiento sea realizado por usted y por los senadores Naidenoff y Artaza.

Sr. Presidente (Fuentes). — Quiero explicar que ya está definido quiénes van a hablar hoy. Simplemente, me limité a leer —atento a las acusaciones que se habían formulado de que se pretendía tener un debate cerrado, acotado y sin expositores— la cantidad de contactos que

se han hecho. Los expositores de hoy están claramente definidos y en un momento los voy a anunciar.

Ha pedido el uso de la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Presidente, en la misma línea que acaba de expresar el senador Morales, en un diálogo que hemos mantenido simplemente a los fines de ordenar la audiencia, les voy a acercar un listado a usted y a los senadores mencionados, Naidenoff y Artaza.

Recién hemos conversado con los representantes de las distintas entidades, quienes nos han alcanzado un listado que leeré a fin de llevar un orden de exposición. Luego de que hablen los funcionarios de nuestro gobierno, expondrán: Miguel Blanco, por IDEA; Luis Etchevehere, por la Sociedad Rural Argentina; Jaime Campos, por AEA; Máximo Fonrouge, por el Colegio Público de Abogados; Guillermo Lipera, por Será Justicia; Carlos Garetto, por ConinAgro; Pablo Taussig, por ACDE; Juan Vaquer, por AMCHAM; y Ricardo Marra, por la Bolsa de Cereales. Estos son los invitados que están inscritos en ese orden. Por supuesto que hay más entidades que se van a ir incorporando...

–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Pichetto. – Bueno, acerquen a la mesa los nombres de los que van a hablar.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra la senadora Michetti.

Sra. Michetti. – Yo había enviado ayer al presidente de la Comisión de Derechos y Garantías una lista. Acabo de escuchar alguno de los nombres que acaba de leer el senador Pichetto, pero faltarían dos o tres. Supongo que los tiene el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, entonces creo que habría que incorporarlos en la misma lista. No sé cuál es la decisión.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). – El listado no lo terminó de leer el senador Fuentes, pero quiero dejar constancia de que se encuentran agregados no solamente Juan Vaquer, por AMCHAM, sino Jaime Campos, Claudio Cesario, Luis Miguel Etchevehere, Guillermo Lipera, Máximo Fonrouge, Javier González Fraga, Roberto Lavagna, Miguel Peirano, Martín Lousteau, Diego Petrecola, Alfonso Prat Gay, Carlos Garetto, Ricardo Laska, Pedro Apaolaza, Claudia Collado, Patricia Deferrari, Rubén Stiglis, Pablo Michelli, Hugo Moyano, Pablo Taussig, Miguel Blanco y Juan Rey Kelly.

Sr. Presidente (Fuentes). – Perdón. Con respecto a los diputados que van a hablar, ¿cuando empiecen el debate ellos vamos nosotros también?

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). – ¿Qué diputado va a hablar?

Sr. Presidente (Fuentes). – Lousteau y Prat Gay, por ejemplo.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). – Sí, los invitamos.

Sr. Presidente (Fuentes). – Sigamos.

Quiero ratificar la voluntad de escuchar la mayor cantidad de expositores independientemente de las dificultades de ordenamiento, que durante el día lo vamos a solucionar. Decía mi abuela: “sobre la marcha se acomodan los melones”. No veo por qué hay impedimento de continuar mañana, jueves, o el viernes escuchando a todo el mundo. Así que no sé por qué vamos a hacerlo ahora y luego vamos a volver el martes. Sugiero que entre los jefes de bloques charlen sobre esta cuestión oportunamente.

Atento la moción presentada por el senador Morales, se va a ir coordinando la participación de los presidentes de las distintas comisiones y van a ir conformando un ordenamiento de la lista de expositores, a los efectos de evitar superposiciones y exclusiones. Previo a comenzar con los señores funcionarios, mientras eso se va a ordenando, me pide la palabra el senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Gracias, señor presidente.

Quiero hacer una consulta porque durante las reuniones previas habíamos acordado un funcionamiento en cuanto al tratamiento de este tema, pero después no se cumplió y nos vemos en esta reunión posterior al mensaje que emitió la presidenta de la Nación anoche y que todos escuchamos.

Me parece que la presidenta se dirigió a todos los argentinos y en especial a la oposición haciendo un planteo de la necesidad de la unidad nacional para enfrentar una situación compleja que tenemos con el tema de la deuda externa, de los fondos buitres. El Poder Ejecutivo envió un proyecto que ingresó al Senado de la Nación con el número 307/14 y por las palabras que la presidenta expresó anoche se infiere la urgencia del tratamiento de un tema que nos preocupa a todos los argentinos y especialmente a los legisladores nacionales que estamos presentes.

Me parece que todos estamos muy preocupados por la cuestión de la defensa de los derechos de los usuarios, y somos autores de muchos proyectos de ley de la necesidad de la creación de un fuero especial para los usuarios, de un observatorio, y de hecho vemos el debate que ha producido el proyecto de Ley de Abastecimiento, pero me parece que acá hay una cuestión fundamental que hace al marco económico nacional, que es el planteo que anoche realizó la presidenta. Es una pregunta al bloque de la mayoría, si va a haber –aprovechando la presencia del señor jefe de Gabinete– alguna referencia a lo anunciado por la presidenta, dado que por sus palabras evidentemente hay una urgencia del tratamiento del proyecto enviado por el Ejecutivo respecto de la deuda externa. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – La verdad es que es un tema importante y acaba de ingresar en el Senado ese proyecto. La Secretaría Parlamentaria lo ha girado a la Comisión de Presupuesto como cabecera y Relaciones Exteriores, y para la semana que viene estamos convocando –proba-

blemente el día miércoles— una reunión para empezar a abordar este tema. Seguramente vamos a estar invitando al jefe de Gabinete y a funcionarios del área económica. Esperamos poder contar con un respaldo de todos los sectores porque es muy importante para el país.

Ahora vamos a abocarnos al tema que ha sido motivo de esta convocatoria. El miércoles próximo estamos convocando a ambas comisiones. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). — Tiene la palabra el senador Artaza.

Sr. Presidente (Artaza). — Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente, como nosotros teníamos un cronograma cuando fue girado este proyecto a nuestras comisiones, tanto la de Derechos y Garantías como Industria, quiero pedirles la colaboración a las otras comisiones porque en definitiva a quienes vamos a defender supuestamente en estas leyes —y no tengo duda de que va a ser así en estos proyectos de ley— son a los consumidores, a los usuarios, y nosotros cuando hacemos reuniones con usuarios son valiosos los aportes que hacen y, de hecho, son muchos.

Así que démosle espacio también y pongamos voluntad. No voy a nombrar a todos, pero tengo pedidos por parte del nordeste argentino, de Corrientes y de otras provincias para ser escuchados. Por eso les pido que hagamos un esfuerzo para el martes tener también una reunión como ésta para poder contar con la presencia de diversas asociaciones de consumidores, que son los destinatarios de estos tres proyectos de ley. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). — Gracias. Vamos a dar inicio entonces a la ronda de exposiciones. En primer lugar, invito al señor jefe de Gabinete a comenzar la misma. Adelante, por favor.

Sr. Capitanich. — Muchas gracias, señor presidente y a los demás presidentes de las distintas comisiones que forman parte del tratamiento de este proyecto y, obviamente, a todos los señores senadores y señoras senadores que están aquí acompañándonos, como así también a los distintos sectores de carácter económico y/o social que pretenden exponer su posición respecto de la iniciativa promovida por parte del Poder Ejecutivo.

En efecto, nos parece muy importante hacer una breve introducción respecto a estas tres iniciativas que forman parte del tratamiento legislativo que se inicia en el día de la fecha, pero antes es muy importante hacer una síntesis respecto a tres temas que son de debate previo. Esto es, el rol del Estado en el funcionamiento del sistema económico; segundo, el funcionamiento de las cadenas de valor en la República Argentina y sus efectos desde el punto de vista de las disputas por la apropiación de los excedentes de la cadena de valor; y por último, la aplicación estricta del artículo 42 como manda constitucional a los efectos de establecer el marco regulatorio que permita la defensa de los derechos de

los usuarios y consumidores y, en ese contexto también, el funcionamiento adecuado del sistema económico.

En este sentido, creemos que el primer escenario de debate en la República Argentina —y esto se ha observado muy claramente en los medios de comunicación— tiene que ver con el rol del Estado. Existen posiciones minimalistas desde el punto de vista de su rol; esto es un sesgo ideológico determinado que implica aborrecer de la función regulatoria del Estado en el funcionamiento del sistema económico, que implica sostener que la intervención del Estado en la economía es absolutamente negativa, para el sistema de incentivos para la generación de inversiones y empleo. No es ésta la posición del Poder Ejecutivo, no es ésta la posición de nuestro bloque. Entendemos nosotros claramente que en la economía moderna el rol del Estado cumple un rol absolutamente insoslayable, fundamentalmente para establecer una capacidad regulatoria que implica definitivamente sostener los mecanismos de incentivo a la inversión y al empleo, pero sobre todo en los parámetros de distribución equitativa y justa del ingreso.

Y nosotros lo hemos podido observar básicamente por una diferenciación cualitativa esencial. El Estado implica claramente la administración por parte de un gobierno en un periodo determinado de tiempo. El gobierno administra al Estado sobre la base de un mandato popular y es la voluntad popular la que elige los gobiernos por un plazo determinado en el marco del acatamiento irrestricto a la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio. Por eso el rol del Estado en el ejercicio de la capacidad regulatoria tiene la legitimidad de origen de un gobierno elegido por la voluntad popular, mientras que efectivamente las corporaciones que representan intereses determinados no tienen la convalidación de legitimidad de origen proveniente efectivamente del mandato y la voluntad popular. Ésa es una diferencia cualitativa esencial que genera una primera contradicción de análisis: democracia versus corporaciones. Las corporaciones que ustedes representan obviamente defienden sus respectivos intereses y es muy adecuado en democracia abierta y plural poder sostener puntos de vista distintos.

Básicamente, el rol del Estado tiene por objetivo garantizar el bienestar general, propiciar la defensa del interés general y promover el bien común, y en ese contexto nosotros tenemos que defender a los que no tienen voz, a los más débiles de la cadena, a los que están excluidos de procesos de amplificación desde el punto de vista comunicacional. Y para eso es absolutamente necesario contar con herramientas idóneas, tangibles, apropiadas, que permitan finalmente resolver los problemas emanados de la competencia de la autoridad regulatoria.

Por eso nosotros observamos claramente la necesidad de tener un rol del Estado con capacidad regulatoria que implique procesos de intervención en el desenvolvimiento de la actividad económica para estimular la inversión tanto pública como privada, a los efectos de

sostener empleos de buena calidad. Y en este sentido observamos siempre que la historia argentina ha determinado muy claramente que solamente pretenden que el Estado intervenga cuando están en juego sus propios intereses. Ahora, cuando finalmente el Estado interviene para proteger los intereses de los más débiles están fustigando el tema admitiendo o diciendo que el problema del gasto público a su vez genera un problema de desequilibrio de carácter macroeconómico. Y nosotros entendemos claramente que el Estado cumple un rol absolutamente indubitable en el proceso tanto de la capacidad de acumulación económica en términos de capital, en términos de garantía de empleo y empleabilidad y en la sostenibilidad desde el punto de vista de la calidad en la distribución del ingreso.

Ésta es una primera cuestión que debe ser debidamente aclarada y resuelta como condición previa de debate; es decir, el rol del Estado, la capacidad regulatoria del Estado y lo que significa esa capacidad regulatoria del Estado para proteger el eslabón más débil de la cadena, que es el pequeño y mediano productor y que es el usuario y el consumidor de bienes y/o servicios.

La segunda cuestión que nos parece importante remarcar es que durante nuestra gestión hemos estado trabajando con aproximadamente treinta y seis cadenas de valor. Las cadenas de valor determinaron claramente una composición desde la producción hasta el consumo. Y en ese contexto desde el punto de vista de la producción y el consumo hemos observado claramente que existe un funcionamiento inadecuado, incorrecto en muchas de las cadenas de valor que tienden a generar una distorsión de apropiación del excedente por parte de grupos concentrados respecto al eslabón más débil de la cadena, y eso se observa objetiva y claramente.

Muchas veces nosotros observamos que un pequeño o un mediano empresario no puede comunicar ni formalmente su protesta ni tampoco lo vamos a ver en este escenario; porque si una gran empresa ve que expresa su posición contraria a un sector o a un grupo económico concentrado, sabe que después va a tener el correlato de la discriminación, que no le van a garantizar la provisión de los bienes que suministra ese gran grupo económico, que le fijarán precios inadecuados o que establecerán los mecanismos típicos para evitar procesos de elusión de acuerdos de precios, que son desde descuentos, bonificaciones, recargas en el sistema de transporte y su costo. Es decir, artilugios que lo único que permiten es que los grupos concentrados se apropien de parte del excedente de la riqueza en detrimento del eslabón más débil de la cadena. Y en estas circunstancias de un funcionamiento inapropiado de las cadenas de producción con tendencia a una concentración a su vez se promueve formación de precios, y esa formación de precios no solamente perjudica a los dos extremos de la cadena sino que perjudica el proceso de formación de precios, la estructura de precios relativa de la economía y, naturalmente, los sistemas de incentivos.

O sea, si hay un grupo concentrado de la economía que genera un proceso de intervención unilateral en la formación de precios tiene doble efecto. Primero, reduce el poder adquisitivo del consumidor con su mayor precio y, en segundo lugar, disminuye el sistema de compensación del precio del productor con menor precio. Entonces, existe una cadena de intermediación que tiende a la concentración y que, a su vez, perjudica las dos puntas del eslabón de la cadena. Y si en ese sentido no existe capacidad regulatoria del Estado, finalmente tendemos a una mayor concentración de la economía, a una estructura de precios relativos de la economía en forma distorsiva que genera una distribución inequitativa del ingreso y que a su vez perjudica el poder adquisitivo del consumidor y los sistemas de compensación de precios al productor. Esto no es un relato, ésta es la verificación objetiva del comportamiento en los procesos de formación de precios de la economía en la República Argentina. No es casualidad precisamente que muchos grupos concentrados no tengan un programa de inversión para aumentar la capacidad instalada sobre la base de incremento de la oferta provocando, de un modo unilateral, el incremento a nivel de precios de determinado tipo de bienes y servicios.

Todos sabemos que el sistema económico funciona sobre la base de producción de bienes y servicios y que los servicios son regulados o no regulados, y que los bienes en general tienden a generar un sistema de precios sobre la base de mercado y señales de precios de mercado, y obviamente depende de la formación de precio doméstico y también de precio internacional. En este contexto nosotros consideramos que es absolutamente gravitante pensar que los procesos de concentración y de distorsión de precios relativos generan un mecanismo de generación de impactos desde el punto de vista de las expectativas.

Todos sabemos que en la estructura de formación de precios y sus consecuencias respecto a la formación de precios relativos también generan expectativas respecto a la tendencia de aumento de impuestos y a su vez generan consecuencias funestas para el desenvolvimiento del sistema económico en su conjunto. Existen dos opciones muy claras. Cuando existe capacidad regulatoria del Estado desde el punto de vista de servicios públicos con capacidad regulatoria de carácter monopolístico, obviamente se fija un programa de inversión, los niveles de fijación de tarifas y la prestación de la oferta sobre la base de la satisfacción de la demanda. En cambio, cuando no existe un sistema de servicios regulados, la concentración económica o el poder del más fuerte se apropia de gran parte del excedente y fija condición de precio afectando el poder adquisitivo del usuario y/o consumidor.

Lo mismo ocurre respecto al tema de formación de precios en la estructura de bienes. Cuanto mayor concentración económica existe —es decir, producción monopolística u oligopólica de un determinado tipo de bien—, naturalmente mayor tendencia existe desde el punto de vista de la apropiación de parte del excedente

de la cadena de valor. Y esto lo vemos claramente en lo siguiente. Por ejemplo, provisión de agroquímicos, provisión de farmacología de carácter animal, provisión de determinado tipo de medicamentos de laboratorio de farmacología de carácter humano. En general, existe una multiplicidad de bienes que se producen, que se expenden en el mercado y que, a su vez, los laboratorios trabajan sobre aquellos que tienen un mayor *mark up* o excedente. En consecuencia, esa diferencia en el nivel de precio lo ubica como posición monopólica y genera una apropiación incorrecta o indebida de los excedentes.

Esto es en lo que me parece necesario poner blanco sobre negro, porque si no existe capacidad regulatoria del Estado, si no existe capacidad de observación desde el punto de vista del nivel de producción de insumos, bienes intermedios, bienes finales y precios, si no existe capacidad de verificación en el comportamiento del sistema económico, entonces el Estado presenta dificultades respecto a regular adecuadamente el sistema de incentivos tanto para la producción, para el incremento de oferta, para el sostenimiento en los mecanismos de provisión de bienes de calidad definida, para garantizar efectivamente el comportamiento adecuado de los eslabones extremos de la cadena

En definitiva, no se trata de un intervencionismo estatal exacerbado, se trata simplemente de una capacidad regulatoria del Estado con el objeto de optimizar el funcionamiento del sistema económico. Y esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica, es una cuestión de sentido común, el mismo sentido común respecto a la representación de los intereses corporativos cuando existen problemas en la provisión. Por ejemplo, en la República Argentina existen muchos grupos concentrados de la economía que tienen un precio de energía más barato que es lo que les garantiza la tasa de rentabilidad; desde la provisión de aluminio hasta acero, por citar algunos casos. Y me parece que es necesario observar que el Estado tiende a generar una capacidad regulatoria para proveer bienes estratégicos que impliquen la provisión de insumos bienes intermedios para la constitución de un modelo económico de carácter sustentable que garantice expansión de la demanda agregada, que promueva la inversión y que a su vez garantice aumento y diversificación de exportaciones para lograr estabilidad macroeconómica de largo plazo.

Tercera cuestión, aparte del Estado y la cadena de valor. Nosotros tenemos una manda constitucional, que es el artículo 42 de la Constitución. El artículo 42 de la Constitución Nacional dice: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de

los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación [ésta, que estamos proponiendo] establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.

Por tanto, rol del Estado, funcionamiento de la cadena de valor y manda constitucional son los tres elementos que han inspirado efectivamente a propiciar estas iniciativas de carácter legislativo, atento a la composición de la matriz productiva, abierta y diversa que tiene la República Argentina, matriz productiva en donde existe interacción con bienes finales, intermedios e insumos nacionales e importados que a su vez tienen un rol preponderante en la fijación de la estructura de precios relativos de la economía y obviamente en la definición de la tasa de rentabilidad de las empresas, de las empresas, del excedente de la cadena de valor y del poder adquisitivo del salario en el marco de la distribución equitativa, funcional y espacial del ingreso.

En ese contexto, lo que nosotros queremos presentar sintéticamente es lo siguiente. Primero, la implementación del fuero del consumidor. El general Juan Domingo Perón instrumentó claramente una política de reivindicación de los derechos del trabajador con el fuero laboral. Nosotros entendemos que esas medidas permiten que hoy que el pueblo trabajador goce y disfrute de sus derechos, desde el medio aguinaldo hasta la jornada laboral, hasta la representación sindical de sus trabajadores, hasta el sistema de seguridad social, hasta vacaciones pagas. Es decir, derechos que hoy son indiscutibles, pero que en su momento obviamente fueron objeto de drástica división y polarización de la sociedad y del pueblo argentino. En ese contexto lo que nosotros observamos claramente es que el fuero del consumidor es una impronta que la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la manda constitucional del artículo 42 establece a partir de esta iniciativa.

Por lo tanto, este fuero de consumidor lo que hace es establecer una etapa conciliatoria previa que permite una instancia administrativa para la auditoría de las relaciones de consumo y un nuevo fuero en el ámbito de la justicia federal y nacional en las relaciones de consumo. La instancia conciliatoria es obligatoria, previa, gratuita para el consumidor y entenderá en reclamos por montos hasta 55 salarios mínimos vitales y móviles. Los acuerdos serán homologados por la Secretaría de Comercio y en caso de incumplimiento se prevé la ejecución ante el nuevo fuero. Y éste es el dato más significativo de la relación. Primero, ¿en qué situación estábamos hoy? Situación en donde un consumidor hacía un reclamo y verdaderamente pasaban años y años y no había un sistema de penalización respecto a su reclamo, ni una reparación de sus reclamos o si la había no era sobre

lo que efectivamente pretendía el consumidor respecto a esa reparación del daño.

En consecuencia, lo que nosotros hoy establecemos es un sistema de conciliación obligatoria, de intervención vía juez administrativo, de resolución rápida y eventualmente una apelación de carácter judicial, a los efectos de resguardar y hacer cumplir efectivamente los derechos del consumidor. La justicia federal y nacional en las relaciones de consumo se regirá por algunos principios que son esenciales: celeridad, inmediación, economía procesal, oralidad, gratuidad y protección para el consumidor. Y obviamente entenderá en reclamos de hasta 55 salarios mínimos, vitales y móviles. El nuevo fuero especial es un proceso más breve que el sumarísimo, inclusive. Se concentrará en una sola audiencia en la que el juez podrá dictar sentencia. O sea, celeridad más rápida que el juicio sumarísimo y una capacidad efectivamente para resolver el problema.

Se crean en la Capital Federal ocho juzgados de primera instancia y en la Cámara de Apelaciones con dos salas, y la Cámara Nacional de Apelaciones en las relaciones de consumo entenderá en los recursos deducidos contra las sanciones establecidas en el marco de las leyes de defensa del consumidor de lealtad comercial y de defensa de la competencia. La concesión de dichos recursos no tiene efecto suspensivo.

Me parece que es importante remarcar lo siguiente. El conjunto de iniciativas, que son regulación de producción y consumo, de fuero del consumidor –que expliqué previamente– y observatorio de precios, tiene que ver con las modificaciones a las leyes 20.680; 22.802, de lealtad comercial; 24.240, de defensa al consumidor, y 25.156, de defensa de la competencia. En ese contexto dentro de las modificaciones que propiciamos está esto que es una ley específica en materia de observatorio de precios y disponibilidad de bienes y servicios, que estará presidido por el secretario de Comercio e integrado por un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de representantes ministeriales y también de asociaciones de usuarios y consumidores.

¿Cuál es el objetivo de la creación de este observatorio? La facultad de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en todo el territorio de la Nación. Y este sentido debe existir en máximo nivel de transparencia. Hoy la tecnología permite que el sistema informático pueda verificar cualquier transacción a través de la automatización de los procedimientos. O sea, hoy un consumidor va a cualquier tipo de expendio de un supermercado, genera la adquisición del bien, tiene el código de barras, tiene el sistema de registro automático del nivel de precios, registra la operación y ese registro de operación también constituye en forma paralela la documentación respaldatoria para el cumplimiento de las obligaciones de carácter impositivo y/o previsional.

Definitivamente, lo que entendemos es que el observatorio de precios no tiene otro sentido que el de

verificar el comportamiento desde el punto de vista de producción de insumos, bienes y precios sobre la base de la información disponible. Obviamente, este observatorio de precios puede hacer un nivel de evaluación desde el punto de vista de comportamiento de precios. Es absolutamente indispensable garantizar la transparencia en el funcionamiento de precios; precios que determinen la evolución de cada uno de los componentes en el desenvolvimiento de la actividad económica, porque eso hace a la verificación del comportamiento de las cadenas de valor, las cadenas productivas y la matriz de insumo-producto, que es la base para garantizar la competitividad de la economía y el uso eficaz y eficiente de instrumentos de política económica para adoptar una perspectiva de crecimiento sostenido de la economía. También, obviamente, se podrán requerir documentación e informes, garantizar y proveer la sugerencia en materia de publicación de precios.

Por último, creo que éste es un tema clave y esencial que tiene que ver con lo que hemos observado como mayor dedicación de esfuerzo de grupos corporativos respecto a objeciones, pero en definitiva lo que queremos transmitir claramente es que la ley 20.680, denominada de abastecimiento, es una ley que rige en la República Argentina y rige en virtud del decreto 722 del año 1999 y rige en el marco de la ley de digesto Jurídico, de la ley 26.939, aprobada recientemente. Por lo tanto, lo que ha propuesto esta iniciativa de carácter legislativo es, precisamente, generar la exclusión de aquellos elementos que entendemos no constituyen el uso apropiado de la capacidad o facultad regulatoria o atribuciones del Estado. Ejemplo, lo que contenía el artículo 2º, inciso g), referido a la intervención temporal de empresas; ejemplo a lo que contenía el artículo 5º, incisos b) y j), relativo a la pena de arresto para infractores; ejemplo, el artículo 12, inciso h), que establece la prisión preventiva o que establecía; ejemplo, el artículo 26 en donde se preveía expresamente la declaración de utilidad pública y expropiación de bienes y establecimientos en caso de la emergencia.

Nosotros consideramos que es absolutamente indispensable observar que la iniciativa que se propicia en el marco de una ley que regule las relaciones de producción y de consumo, en definitiva, tiene por lo menos dos cuestiones esenciales o medulares.

Primero, la exclusión de sanciones de tipo penal con la implementación de sanciones de carácter pecuniario; o sea, se excluyen arrestos de hasta noventa días, la publicación de la sentencia condenatoria contra el inspector, la suspensión del uso de patentes y marcas por el lapso de tres años, la prisión de seis meses a cuatro años y se deroga la facultad expropiatoria del Poder Ejecutivo.

Del mismo modo, también, la intervención temporal de empresas, acordar determinado tipo de exenciones impositivas, en fin, determinado tipo de sanciones que a nuestro entender y al entender, claramente, de la autoridad máxima que es la presidenta de la Nación

constituyen objeciones que resultan salvadas expresamente a partir de esta nueva iniciativa.

Entonces, lo que nosotros observamos, claramente, es que en el plexo normativo, en el conjunto de iniciativas, se establecen algunos principios que son esenciales. Primero, la garantía de la intervención de la capacidad regulatoria del Estado de un modo razonable, equilibrado entre partes, protegiendo el eslabón más débil de la cadena. Segundo, excluyendo sanciones de carácter penal que han resultado inaplicables a través de la historia y que no constituyen sistemas apropiados para el proceso de regulación económica de una sociedad moderna.

Y en este contexto es necesario que la Unión Europea en el año 2013 fijó multas por 2.600.000 de dólares, que Estados Unidos tiene capacidad de intervención desde la ley Sherman hasta mecanismos de ley antitrust, precisamente, para regular adecuadamente los procesos de formación económica.

Lo que se establece, claramente, en esta iniciativa de carácter legislativo es el incremento de los techos de multa. Es la deslealtad comercial de quinientos mil a cinco millones, aquí de un millón a diez millones, estableciendo la autoridad de aplicación en el ámbito del Ejecutivo nacional tal cual lo prevé la ley 26.939.

Y, por último, otro principio que nos parece muy importante, el principio *solve et repete* –pague, después reclame–, respecto a la aplicación de las multas. Porque una sanción de carácter pecuniario que tiene dilaciones en el tiempo, que puede ser recurrida en forma sistemática, no garantiza, precisamente, protección para el usuario o para el consumidor.

La multiplicidad de reclamos, tanto de compañías telefónicas o de usuarios de compañías telefónicas de celular o también de funcionamiento de electrodomésticos o incluso de vehículos, ha originado una experiencia debidamente aquilatada para la redacción de este proyecto de ley.

Por lo tanto, nosotros consideramos que estas iniciativas, no solamente la marca del artículo 42 de la Constitución Nacional, promueve la protección del eslabón más débil de la cadena productiva y, obviamente, de los usuarios y consumidores y genera una participación eficaz, razonable del Estado para generar los incentivos para la inversión y el empleo.

Precisamente, todo lo contrario a lo que se ha manifestado oportunamente a través de distintos medios de comunicación. Porque entendemos que el Estado debe tener herramientas y debe tener la capacidad de intervención a los efectos de garantizar el funcionamiento eficiente, razonable del sistema económico y sobre todo garantizando competitividad para establecer una visión de corto, mediano y largo plazo.

Ésta es la síntesis de lo que nosotros queríamos plantear y que a su vez, no solamente el decreto 722 del año 1999 ratifica la vigencia anterior 20.680 y la 26.939, del digesto Jurídico, sino también dictamen emitido por el procurador del Tesoro que ratifica su vigencia.

Por lo tanto, entendemos que las iniciativas que nosotros hoy propiciamos resuelven su aplicación de una manera racional, eficaz y dinámica al comportamiento de la economía moderna. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias, señor ministro.

A los efectos del método de desenvolvimiento de la reunión, en bloque van a hablar los tres funcionarios. Al terminar la exposición de los funcionarios va a quedar abierto el uso de la palabra a los señores senadores.

Invito al señor secretario de Justicia, Julián Álvarez, a realizar su exposición.

Sr. Álvarez. – Muy buenos días a todos y a todas.

El jefe de Gabinete acaba de explicar, detalladamente, cada uno de los proyectos y el contexto en el cual se enmarcan.

A mí me interesaría destacar algunas cuestiones concretas, algunas cuestiones de los resultados concretos que arroja el sistema actual y los resultados concretos que tendría que arrojar el sistema que se viene.

Pero, en primera medida y previo a eso, quiero convocarlos a una cuestión muy importante, porque con esta discusión, con este epicentro de discusión que significa la Ley de Abastecimiento, estamos dejando de lado toda otra discusión, nosotros la consideramos incluso mucho más relevante, que es el lado de los consumidores. El lado del artículo 42 de la Constitución, el lado de consumidores que somos los cuarenta millones de argentinos, porque los empresarios también son consumidores, y estos consumidores que hasta hoy no tienen o tienen herramientas deficientes para defenderse.

La verdad es que hablando de Venezuela y “la mar en coche”, más allá de hablar de las modificaciones a la Ley de Abastecimiento, estamos ocultando un tema que es central, como lo son las herramientas que otorga este nuevo sistema para los consumidores.

La realidad es que si ocultamos ese debate, esa discusión y cuáles son las herramientas y los derechos que tienen los consumidores, los consumidores, por más que sancionemos estas leyes, no van a conocerlas. Si los consumidores no las conocen, no van a reclamar; no van a saber cuáles son sus derechos, estrategias ni mecanismos para reclamar.

Entonces, más allá del debate y la discusión –yo les propongo hacerlo artículo por artículo– de la Ley de Abastecimiento, digo que no tiremos la pelota afuera de la cancha, enunciando un concepto laxo. Analicemos artículo por artículo y les aseguro que estas modificaciones a la Ley de Abastecimiento hacen exactamente todo lo contrario a lo que están manifestando. Justamente, es un sistema mucho más liviano, concreto y pragmático de la ley que existe en la Argentina desde el año 1974; es una norma que se encuentra vigente.

Más allá de esa discusión, en la que nosotros proponemos analizar artículo por artículo, les pido y los convoco a hablar también de los consumidores. Hablemos de los consumidores. No ocultemos la discusión sobre

los consumidores hablando de cómo esto va a regir en el mundo y las cuestiones macroscópicas de la vida.

En virtud de cómo rige esto en los consumidores, traje un expediente judicial. Lo que está acá es un expediente judicial. —*Muestra el expediente.*— Es un expediente mío, es un caso personal. Como consumidor le reclamé a una empresa un derecho que tenía, que ahora lo voy a explicar. La carátula es: Álvarez, Alejandro Juan —está mal caratulada porque mi nombre es Álvarez, Alejandro Julián— contra una empresa aérea internacional y otros. La empresa que vendía el viaje, que me vendió un paquete turístico, y una tercera empresa también involucrada en este paquete turístico. Son tres demandados. Este expediente 22.788 de 2007, Juzgado 26, Secretaría 52 Comercial, origen en la justicia comercial, tiene su hecho antecedente en febrero de 2006. Es un hecho que sucedió en febrero de 2006.

Gané el juicio. ¿Saben cuándo cobré la sentencia? El mes pasado. Nueve años pasaron para ganar un juicio. ¿Saben cuánto cobré el mes pasado? 4.000 pesos. ¿Saben cuánto gasté en hacer el juicio? 25.000. Tardé nueve años en cobrar un reclamo, cobré 4.000 pesos y gasté 25.000.

Ésta es la razón por la cual los consumidores hoy no pueden ejercer el artículo 42 de la Constitución. Ésta es la razón por la cual nosotros estamos enviando estos proyectos de ley al Congreso. Esto es lo que tenemos que discutir.

Les cuento qué pasó con el juicio sucintamente. Compré un paquete turístico, viajé a Centroamérica, el avión hacia escala en Bogotá. Cuando bajé por un desperfecto del avión, cambiaron de avión a uno más chico. No me subieron al avión y un grupo de pasajeros nos quedamos en Bogotá. Nos dijeron que no nos preocupáramos y nos dieron un *voucher*, era un pasaje para cualquier lugar del mundo. Firmamos el convenio. Cuando llamamos al 0800 de la empresa, nos dijeron: “No, ahí no”. Llamamos de vuelta, y nos dijeron: “No, ahí tampoco”. Llamamos nuevamente y nos dijeron: “No, no tenemos ni vamos a tener en los próximos tres años un pasaje para usted a ningún lugar del mundo”.

Entonces, mandamos una carta documento, que costó 20 pesos. Mandamos otra carta documento, 20 pesos más. Mandamos una tercera carta documento, 20 pesos más. Fuimos a una mediación. Tuvimos que pagar los 600 pesos de honorarios del mediador, 660 pesos. Por supuesto, la empresa no vino. Terminamos la mediación, que fue en octubre de 2006 y no vino ninguno de los tres demandados. Total, sabían que era imposible reclamarles y que si les reclamábamos no tenía ningún sentido.

Iniciamos la demanda. ¿En dónde iniciamos una demanda de estas características? En la justicia comercial, como dice esta carátula. La demandada plantea incompetencia. ¿Qué dice el juez? “Soy incompetente.” ¿Qué dice la Cámara? “Es incompetente.” Seis meses. Fuimos a la justicia civil, que es lo que sugería la sentencia. La demandada plantea “incompetencia.” ¿Qué

dice el juez? “Soy competente.” ¿Qué dice la Cámara? “Es incompetente.” Fuimos a la justicia civil y comercial federal. ¿Qué dice el juez? “Soy incompetente.” ¿Qué dice la Cámara? “Es competente, conforme la jurisprudencia.”

En marzo de 2008, dos años después, logré determinar qué juez debía resolver este reclamo, que terminó siendo de 4.000 pesos.

Hasta septiembre de 2011 estuvimos produciendo prueba: oficio al Correo Argentino para que diga sobre la veracidad de la carta documento; oficio a la empresa de viajes para que diga si había vendido el viaje o no, declaraciones testimoniales, a la empresa de turismo subsidiaria, a la Subsecretaría de Transporte Aéreo para que diga si el viaje había existido; un mandamiento de constatación a la aerolínea para que diga si había sucedido esto con los pasajes, etcétera. La aerolínea y la empresa también produjeron prueba, diciendo que los pasajes estaban sobre vendidos y lo demostró en el hecho.

En septiembre de 2011 terminó la prueba, cinco años después. En diciembre de 2011, autos para alegar. Alegamos. En junio de 2013 se produjo la sentencia de primera instancia y en diciembre de 2013, la sentencia de la Cámara. Hace un mes me llegó un cheque de 4.000 pesos.

Esto es lo que no tiene que existir más. Los consumidores no tenemos ninguna herramienta para reclamar y esto es lo que intentamos solucionar con este paquete de leyes. Discutamos eso. Discutamos si están bien los proyectos de ley. Nosotros intentamos que sean lo más sencillo y pragmático posible, pero puede haber mejores ideas.

Para que no pase esto de la competencia, creamos un fuero, el fuero de consumidor, como explicaba recién el jefe de Gabinete. Para que no pase lo de la incomparecencia en la mediación de los empresarios, dijimos que la mediación es obligatoria y le aplicamos una multa a la empresa si no viene a la mediación.

Creamos un sistema estatal de mediación, pero también dejamos que exista un sistema privado, porque es un *mix* entre el SECCO, que pasa hoy entre las relaciones de trabajo, y la mediación privada, que en general se reclaman daños y perjuicios en los accidentes de tránsito, que es por iniciativa privada. Son dos tipos de reclamo para que los consumidores tengan doble forma de llegar: por un abogado o solos, si se animan, con el Estado ayudándolos, poniéndoles un defensor. El sistema es gratuito; un fuero nuevo, intervenciones rápidas, polaridad. Sentencia en el mismo momento de la audiencia oral, capacidad del juez para decir “esta prueba no es necesario hacerla.” Eso estamos generando. La verdad es que si no están de acuerdo, manifiéstelo; porque hablando de la Ley de Abastecimiento y, como decía recién, “la mar en coche”, estamos ocultando esto que los consumidores tienen que conocer. Los consumidores tienen que saber que ahora llamando a un 0800 de la Secretaría de Comercio,

mandando un mail o enviando señales de humo van a tener a un Estado que los va a estar protegiendo, van a tener un sistema judicial que los va a estar protegiendo. Los empresarios lo tienen que saber. Los empresarios necesitan reglas claras. Éstas son reglas claras. Hay un fuero, jueces que van a determinar cosita por cosita, jurisprudencia por jurisprudencia, cómo se debe ejercer la relación de consumo. Piden reglas claras, ¿qué más claro que esto?

Lo otro no son reglas claras. No saber a qué fuero ir, tardar 9 años en hacer un reclamo... Ésas no son reglas claras. Eso es confusión. Ésos son mecanismos para desalentar el reclamo. Eso es lo que hace que los servicios de atención al cliente –yo aseguro que todos los que estamos presentes, absolutamente todos, llamamos una o varias veces por año a los servicios de atención al cliente de distintas empresas– y fíjense cómo nos tratan. Si no, “andá a reclamarle a Magoya” tendría que ser la respuesta de la atención telefónica. Vamos a buscarlo a Magoya que no existe hoy.

Entonces, esto es lo que hace que no tengamos posibilidad de reclamo. No hay un sistema atrás acompañando, por supuesto, la existencia de millones de consumidores. Hoy hay millones de consumidores. Hace 11 años no había millones de consumidores; hace 11 años no había 60 millones de celulares en la República Argentina; hace 11 años la mayoría de los argentinos no tenían Internet en su casa; hace 11 años la mayoría de los argentinos no tenía televisión por cable. Ni hablar de las vacaciones, de la posibilidad de adquirir un vehículo. Ni hablar de todo eso.

Entonces, concretamente, estamos hablando de esto; y, concretamente, estamos hablando, cuando hablamos de la Ley de Abastecimiento, de una ley vigente. ¿Por qué no discutíamos esto el año pasado o el otro sobre la Ley de Abastecimiento? Si la ley estaba vigente. ¿Cuál era la razón por la cual esta discusión no se daba hace 5 años, hace 15 años? ¿Por qué no se discutía esto? Si la ley estaba vigente. Nosotros estamos derogando cosas de la ley, después veamos artículo por artículo. Nosotros derogamos un montón de cosas de la ley que eran cuestionables, pero estaba vigente. Cuestionable, pero estaban vigentes todos los artículos de la Ley de Abastecimiento y los derogamos. ¿Qué estamos discutiendo entonces? Estamos discutiendo el intervencionismo estatal.

¿Saben cuántas multas aplicó la Unión Europea durante el año pasado? 2.600 millones de dólares. ¿Saben cuántas multas aplicó Estados Unidos? Mil millones de dólares. ¿Saben cuántas multas aplicó Corea del Sur? 255 millones de dólares. ¿Saben cuántas multas aplicó China? 241 millones; Japón, 225 millones de dólares. ¿Saben cuántas multas aplicó la Argentina este año por el sistema de precios cuidados? 35 millones de pesos, que no pagó nadie. ¿Saben por qué? Porque apelaron y están en un sistema judicial que les va a resolver el tema dentro de 10 años. Multas por el sistema de precios cuidados, 35 millones de pesos y 2.600 millones de

dólares la Unión Europea. ¿De qué estamos hablando? La ley era la misma ley que está vigente. ¿Qué estamos discutiendo?

La verdad que es una sorpresa. Los planteos descolocan y generan sorpresa, es pinchar la pelota y tirarla fuera de la cancha. Alegría por estar discutiendo acá y que los empresarios estén todos presentes para poder debatir cara a cara, artículo por artículo, proyecto por proyecto el significado de este paquete de leyes que, como dijo la presidenta de la Nación, pretende empoderar a los consumidores.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra el señor secretario de Comercio.

Sr. Costa. – Simplemente, quiero hacer una breve exposición sobre la visión de la Secretaría de Comercio respecto a este paquete de iniciativas; y quiero empezar recalcando lo que dijo Julián. Es un paquete de iniciativas, porque parte de una visión integral por parte del Poder Ejecutivo respecto a qué se necesita para que los consumidores puedan ejercer plenamente sus derechos. No son iniciativas aisladas. No son propuestas de reformas arbitrarias, ni desesperadas ni basadas en una coyuntura que algunos quieren interpretar de alguna manera, sino que es simplemente la respuesta sobre qué está dando el Estado a partir de las iniciativas del Poder Ejecutivo a las falencias que tiene el sistema actual para que el artículo 42 de la Constitución pueda ser plenamente ejercido por parte de los consumidores. No quiere decir que hoy no haya derechos. No quiere decir que hoy no existan, desde el punto de vista teórico o racional, los derechos de los consumidores, sino que por cómo está todo el sistema actual no siempre se puede ejercer plenamente.

Entonces, nosotros estamos partiendo de esa visión. El que quiere mirar la cosa desde una reforma puntual a una ley vigente está pifiando completamente en el enfoque, porque no está entendiendo qué es lo que se está debatiendo.

Primero, agradezco la posibilidad de estar acá para compartir nuestra visión y los invito a todos a mirar la cuestión integral, qué es lo que hizo el jefe de Gabinete y qué es lo que hizo también el secretario de Justicia. Acá hay que ver el paquete en su conjunto.

Este paquete de leyes tiene como fondo una realidad que nadie puede discutir: la desigualdad inherente a las relaciones de consumo y de producción. Es decir, la relación entre un consumidor y una empresa es desigual por naturaleza y cualquiera que fue víctima de algún abuso, de algún engaño, de alguna falta de compromiso con una empresa y tuvo que ejercer su reclamo –como Julián con la compañía aérea– sabe de lo que estamos hablando. Uno se enfrenta con una organización más pequeña, más grande, pero es un consumidor contra una organización y en esa relación hay una desigualdad que nadie puede objetar. Del mismo modo que una pequeña empresa que se encuentra en un determinado lugar de una cadena de valor, también sufre de relaciones desiguales con otros actores de la cadena de valor que

tienen posición dominante, poder monopólico, poder oligopólico. Por lo tanto, también a lo largo de las cadenas de valor, como decía el jefe de Gabinete, desde el productor al consumidor hay relaciones desiguales.

Entonces, nosotros podemos tomar dos alternativas para discutir esto. Los manuales de economía introductorio en el ciclo básico común o en el primer año de la carrera de economía obsoletos, que venden situaciones irreales de que somos todos consumidores libres, iguales o que vivimos en un mundo de competencia perfecta y tomamos nuestras decisiones y cada uno hace lo mejor para uno y así hace lo mejor para toda la sociedad... Podemos partir de ese manual berreta que es el trasfondo de muchas opiniones que uno escucha respecto a lo que se trata el rol del Estado o podemos partir de la realidad. Y podemos partir de una realidad que, como bien describió el jefe de Gabinete, no tiene nada que ver con ese mundo. Entonces, partiendo de una visión integral y de la realidad, me parece que este paquete de leyes le está dando a los consumidores y al Estado herramientas para que se puedan ejercer plenamente los derechos de todos los argentinos en su rol de consumidores. Porque si uno se pone a pensar qué es lo que necesita un sistema que permita este pleno ejercicio, por un lado necesita un Estado que pueda equilibrar estas relaciones desiguales, que pueda generar las condiciones para que todos puedan actuar de una manera en la cual no se vulneren sus derechos, ya sea en el rol de consumidor, ya sea en el rol de pequeña empresa que quiere participar en un mercado. Porque acá también se habla de la libertad empresarial, la iniciativa empresarial, pero la libertad empresarial y la iniciativa empresarial de todas las empresas, no de las monopólicas. Y cuando una pequeña empresita convive en un mundo de tiburones, de grandes empresas, hay que darle a esa pequeña empresita la libertad para que pueda actuar porque, si no, se la comen cruda, que es lo que pasa en muchas cadenas de valor donde hay actores que tienen una posición, un poder, que determina tal situación de igualdad en la que todo el resto del ecosistemas es rehén o dependiente de ese actor.

Entonces, si el Estado no tiene herramientas para equilibrar esas relaciones, ¿cómo puede un pequeño empresario tener libertad de empresa? Está completamente restringida la libertad de empresa, y esta es la realidad de la economía argentina como es la realidad del sistema económico internacional; no es que este país sea distinto al resto, sino que así son todos los países y en todos los países la libertad empresarial termina donde empieza otra libertad empresarial, y para eso está el Estado, y para el eso el Estado tiene que tener herramientas. Entonces, ¿cómo estamos nosotros mirando la cosa? Como una expansión de derechos basada, por un lado, en favorecer el cumplimiento de las condiciones que tienen que cumplirse para que para que un consumidor esté empoderado. ¿Qué quiere decir empoderado? Que pueda llevar adelante sus acciones de consumo con las herramientas suficientes como para que se puedan ejercer plena y realmente sus

derechos. ¿Y qué necesita un consumidor? En primer lugar, una cuestión básica: información para tomar sus decisiones de consumo. Algo tan elemental como para saber qué estoy comprando, cuánto estoy pagando lo que estoy comprando, qué alternativas tengo y cuáles son los precios de las alternativas, la calidad de cada uno de los bienes o servicios que contrato, algo que, si van a los manuales berreta, lo van a encontrar como condición para que un consumidor sea soberano. Pero esa soberanía del consumidor, que es la base de toda la construcción respecto a la teoría liberal tradicional, muchas veces está cercenada, porque las propias estrategias empresariales restringen la capacidad del consumidor de tomar decisiones informado, de mil maneras distintas, y por eso tiene que estar el Estado velando por el cumplimiento de este principio básico: que todos tengamos información para tomar decisiones, y por eso hay legislación y hay herramientas que nos permiten regular la forma en la cual se les tiene que presentar la información en los paquetes de los alimentos a los consumidores. Pese a las regulaciones, muchas veces —todos ustedes son consumidores— le cambian el *packaging*, le ponen una tirita roja arriba que dice, por ejemplo, “extra-calcio refortificado” y te cobran diez veces más, y en realidad lo que está adentro es lo mismo y engañan al consumidor. Entonces, uno va y cree que con eso se le abre una nueva dimensión en el cerebro, pero en realidad es lo mismos que hubiese pagado diez veces menos, con todo el engaño de lo que los empresarios llaman “marketing”, pero que muchas veces es desinformación y engaño, con lo que se viola el principio básico de la toma de decisiones del consumidor. Entonces, para eso tiene que estar el Estado.

También, como es un caso claro de los últimos tiempos, cuando las maniobras especulativas llevan a la pérdida de referencia de precios de los consumidores, también tiene que estar el Estado restableciendo lo que le habían robado, que son las referencias de precios. Por eso, una política como la de precios cuidados es una política de defensa a los derechos del consumidor, porque permite, a partir de la referencia de precios, que cada uno pueda tomar decisiones informado. Ése es un aspecto central.

Si no tenemos herramienta ni legislación para poder ejercer plenamente esa función del Estado en materia de empoderamiento de los consumidores, somos todos consumidores ciegos que simplemente tomamos decisiones y que, seguramente, pagamos de más, no consumimos lo que necesitamos y eso, por supuesto, es una violación de un derecho que uno tiene a poder elegir.

Segundo aspecto importante: uno, más allá de las informaciones que tiene que tener para tomar decisiones de consumo, tiene que estar informado sobre sus derechos como consumidor. Por eso es muy importante y es una responsabilidad de todos, y no de algún área del gobierno en particular, tener una política de difusión permanente de los derechos de los consumidores, que cada uno sepa a qué tiene derecho y a qué no; que cuando a Julián le dan un *voucher* que no sirve para

nada, sepa que tiene derecho a quejarse, adónde tiene que ir, que se avasallaron sus derechos, y para eso todos, el Estado, las asociaciones de consumidores, tenemos que generar las condiciones para que haya información. Por eso es preocupante y peligroso que, cuando estamos en este momento discutiendo leyes que favorecen a los consumidores, en los principales diarios y en los principales portales de internet aparezca “Ley de Abastecimiento: debate en el Senado”, porque en realidad ahí estamos poniendo una venda en los ojos a la gente y no les estamos permitiendo ver que lo que estamos discutiendo acá son expansiones de los derechos de los consumidores. Y si no hacemos que los consumidores vean que tienen derechos, por más que estén informados, comprenden, cuando se viola algún derecho, si no saben lo que pueden hacer, van a estar muy limitados.

Y el tercer aspecto central para poder empoderar definitivamente a los consumidores es que la Justicia sea ágil, eficiente y que tenga una orientación pro consumidor. Por eso el proyecto de ley que crea la nueva instancia de conciliación previa en las relaciones de consumo, la nueva auditoría del consumidor y el nuevo fuero de justicia del consumidor viene a coronar todas las políticas que viene llevando adelante el gobierno en materia de información, en materia de expansión de derechos para que los consumidores puedan decir que el artículo 42 de la Constitución se cumple. Por eso es tan importante ser conscientes de lo que significa y del impacto que va a tener para la vida de la gente el proyecto del nuevo fuero del consumidor, la nueva justicia para los consumidores, porque si no existe esa justicia que ante un reclamo actúa, responde rápidamente y no en seis, ocho, diez u once años, que es lo que hoy tiene que esperar un consumidor para que se dé lugar a algún reclamo, cuando se da lugar, cuando un consumidor no se ve desincentivado porque no encuentra respuestas y deja de hacer reclamos, deja de intentar ejercer sus derechos, cuando eso no ocurre la Justicia tarda seis u ocho años. Por lo tanto, tampoco es un incentivo para que las empresas se esfuercen por prestar mejores servicios al cliente, se esfuercen por evitar situaciones donde lo que compró el cliente no es lo que se le entregó porque sabe que no tiene consecuencias.

Entonces, no es una legislación antiempresarial la que instaura nuevas instancias para que el consumidor pueda hacer los reclamos y que se responda a sus reclamos. Eso no es antiempresario; eso es pro consumidor, y las empresas van a tener que actuar en consecuencia. Por supuesto que hoy una empresa –voy a citar las de los casos más denunciados en las oficinas de defensa al consumidor–, una gran telefónica, una empresa proveedora de servicios de Internet, de cable, una concesionaria, no tiene que sentir que se está avanzando sobre su iniciativa privada, sobre sus derechos, no. ¿Se está afectando el statu quo? Sí, por supuesto, porque ahora las empresas van a tener que van a tener que responder de otra manera ya que los consumidores van a más empoderados para poder ejercer sus dere-

chos, pero eso no es antiempresario; eso es equilibrar relaciones desiguales. Y al que no le gusta, que lo diga, así podemos establecer otra discusión. O el que diga que el Estado no tiene que tener esta función, también que lo diga, que es interesante el debate y me parece que hay que darlo.

Juntamente, entonces, con todo este nuevo sistema de derecho para los consumidores, el Estado necesita contar con herramientas para intervenir en otro tipo de relaciones desiguales, que también terminan redundando en lo que el consumidor recibe como bienes o como servicios al momento de hacer sus compras, que tiene que ver con todas las relaciones que se dan a lo largo de la cadena de valor. Si lo que uno entiende, como presentaba el jefe de Gabinete, es que el Estado tiene que promover una distribución de los ingresos justa y equitativa a lo largo del cadena de valor; que el Estado tiene el rol de defender a los actores más débiles –pequeños productores, consumidores–, es importante tener herramientas para asegurar la competitividad sistémica de la economía. Porque cuando hay un actor con posición dominante en un segmento clave de una cadena de valor, encarece artificialmente los precios del bien que vende, y eso después derrama para abajo, haciendo que todos los bienes sean más caros: los que paga el consumidor, los que se exportan. Está afectando los intereses económicos de todos los argentinos, porque los consumidores tienen que pagar más caro y porque la economía es menos competitiva.

Entonces, ¿no hacen falta herramientas para que, en situaciones donde hay pocos oferentes o donde algunos tienen un poder monopólico –hay situaciones en las que se justifica–, el Estado pueda limitar el poder de mercado, el poder que tienen ciertos actores para generar perjuicio a todos los demás? Para nosotros es importante que el Estado tenga esa herramienta. Por eso también es importante que, al tener esa herramienta, fomente al mismo tiempo la mejora del acceso de todos los consumidores a los bienes y servicios que necesitan para satisfacer sus necesidades diariamente, que es que lo está en el fondo de toda la discusión.

Para hacer esto el Estado tiene, por lo menos en lo que son las principales leyes de la Secretaría de Comercio, dos grandes tipos de leyes vigentes, aplicables y que están disponibles para que la autoridad de aplicación –en este caso, la Secretaría de Comercio– intervenga con esta lógica. Son las leyes que evitan abusos en materia de desinformación o de estrategias empresariales para quitarles referencias a los consumidores, como son la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Lealtad Comercial, que permiten, por ejemplo, establecer regulaciones para el tipo de información que tiene que proveerse. Establece claramente cuáles son los derechos de los consumidores en materia de garantías, en materia de que se cumpla con lo pactado. Si se violan esas disposiciones, entonces la Secretaría de Comercio actúa en consecuencia: sanciona y permite que se cumpla con lo que se tiene que cumplir. Porque acá no es cuestión de que haya una oficina del Estado

sancionando con multa para acá y multa para allá. Ojalá nouviésemos que poner ninguna sanción, porque eso quiere decir que en todos los paquetitos que están en el supermercado se cumple con toda la información, que no se viola ningún derecho del consumidor. ¡Ojalá! ¿Para qué queremos poner multa, si el objetivo de la multa es que no se haga lo que se está sancionando?

Por otro lado, tenemos leyes para regulación de las relaciones de producción y consumo, que son la Ley de Defensa de la Competencia y la ley 20.680, que, a partir de la propuesta que nosotros estamos presentando, le queremos poner de nombre “nueva ley de regulación de las relaciones de producción y consumo”, porque es lo que en esencia es. Esa ley, en primer lugar, está disponible desde hace 40 años para que la apliquemos. En segundo lugar, no parte de una situación idílica de manual de texto, sino que parte de la realidad: una empresa controla toda la producción de chapas en la Argentina; una empresa controla la producción de polietileno, que es un insumo clave para la industria plástica; una empresa controla la producción de PET, otro insumo clave para la producción plástica –de botellas de gaseosa, por ejemplo–; una empresa controla la producción de aluminio; cuatro empresas, la producción de cemento; una sola empresa explica el 80 por ciento de la venta de panificados en la Argentina –una empresa; 80 por ciento de la venta de panificados!–; dos empresas controlan el 82 por ciento de la oferta de leche; dos empresas controlan el 60 por ciento del mercado de galletitas; cinco cadenas de supermercado explican y concentran la venta minorista. Y puedo seguir. Ésa es la realidad de la economía argentina. Para eso, el Estado necesita que todo el universo de actores que orbita alrededor de estos grandes jugadores pueda desarrollarse sin ser avasallado, sin que sus derechos sean vulnerados o atropellados por actores que lo pueden hacer, porque tienen la capacidad, simplemente por el tamaño que tienen y el lugar donde están en la cadena de valor.

¿Qué tenemos para decirles a las miles y miles de pequeñas empresas que orbitan alrededor de todos estos grandes jugadores? Que gracias a las políticas de este gobierno orbitan alrededor de esos jugadores, porque si no, se las hubiesen comido. Porque el Estado argentino en los últimos once años ha desarrollado políticas en materia fiscal, monetaria, cambiaria, de ingresos, para generar un mercado interno dinámico; todo el crédito productivo para las pequeñas empresas, para que puedan competir, participar de cadenas de valor muy monopolizadas. Además, por supuesto, todas estas políticas permitieron que a estas empresas también les vaya bien. No es que se generó un perjuicio a estas empresas que estoy nombrando, que ustedes conocen; les fue muy bien y les sigue yendo bien.

Entonces, ¿qué tenemos que hacer con una economía que tiene esta estructura productiva para equilibrar relaciones de poder desiguales, sin avanzar sobre la iniciativa empresarial, que es otro de los preceptos

que parece que son importantes, y que nosotros compartimos también?

Cuando en las discusiones respecto de las leyes... Porque nosotros tenemos discusiones; no le rehuimos al diálogo. Nos juntamos con representantes de diferentes cámaras, con actores que representan a grandes empresas y pequeñas empresas de diferentes sectores; consumidores; trabajadores. No le tenemos miedo a discutir; lo hacemos. Lo que no hacemos es aceptar que nos traigan un programa de gobierno, que nos lo pongan en la mesa y que lo pasemos al Congreso, o que saquemos resoluciones sin pensar qué está detrás de eso. Discutimos.

Entonces, cuando en alguna reunión planteo que esta es la economía argentina, ¿qué hay que hacer para que las pequeñas empresas, para que los consumidores se vean protegidos? Porque de eso se trata. ¿Una pyme cómo compite? “Bájénle los impuestos”. Más allá de que podemos discutir el esquema tributario a las pequeñas empresas y a las grandes empresas, ¿alguien cree que si a una pequeña empresita que compite con estos grandes jugadores le bajamos un poco los impuestos; si, por ejemplo, se trata de una empresa proveedora de una gran cadena de supermercados, no le van a bajar el precio que le pagan, de forma tal que finalmente la baja de impuestos se la queda la gran cadena de supermercados? ¿O le van a pagar lo mismo cuando se enteren de que están pagando menos impuestos? Hay que ser muy ingenuo.

Por lo tanto, lo que hay que tener en claro, si vamos a generar condiciones para que se desarrolle la iniciativa privada, es cómo se democratiza el acceso a los mercados. Y eso se llama instrumentos para la defensa de los más débiles. Lláménlo como quieran.

Entonces, hay que escuchar todas las voces. No hay que escuchar la voz de los que se autodenominan los empresarios o los representantes del bien común, y que no tienen ningún problema en agitar: “si se aprueba esta ley, va a haber desempleo, va a haber menos inversión, van a subir los precios”. Una ley que, como me parece que queda claro, tiene vigencia de 40 años, está plenamente disponible y no se aplica todos los días. Porque la lógica en la cual se tiene que aplicar esta ley es cuando falló todo lo demás. ¿Cuándo falla todo lo demás? Cuando, ante una situación de abuso flagrante, se convoca a la empresa, se le plantea el caso y la empresa no cambia su actitud, no tiene la intención mínima de revertir esa política que está perjudicando a una pequeña empresa, a un conjunto de pequeñas empresas o a los consumidores. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Felicitarlo y dejarlo ir, en nombre de la iniciativa privada? Tiene que tener un instrumento, no para aplicar: sólo para aplicar en el caso en que el perjuicio sea tan grande que si no tenemos el instrumento estemos afectando la vida de todos los argentinos y de la iniciativa empresarial, que no está siendo representada en la discusión mediática, pero que es importante que acá sea escuchada también.

Así que, en principio, esto es lo que nosotros venimos a discutir. Y, por supuesto, quedamos a disposición para cualquier duda puntual o inquietud que podamos conversar, a fin de ponernos de acuerdo en lo que estamos haciendo acá. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). – Muchas gracias, señor secretario.

Se cierra así la primera etapa de las exposiciones y queda abierta la lista de oradores para los senadores.

Hasta el momento en la lista se encuentran anotados los siguientes señores senadores y señoras senadoras: Sanz, Negre de Alonso, Artaza, Naidenoff y Morales. Asimismo, Morandini, Michetti y Cimadevilla.

A continuación, tiene la palabra el senador Sanz.

Sr. Sanz. – Gracias, presidente.

Quiero hacer nuevamente mención a una queja que es la que hemos formulado oportunamente por la ausencia en este debate de un funcionario que nos parece clave, que es el ministro de Economía de la Nación. Aquí debería estar sentado el ministro de Economía de la Nación, por varias razones. Primero, porque lo que estamos discutiendo no es simplemente una ley vinculada al consumo, a los consumidores y al fuero de la Justicia, en el que pueden reclamar los consumidores, sino que acá estamos discutiendo cosas mucho más importantes: estamos hablando de la economía real de la Argentina. Precisamente, una economía que, siguiendo la convocatoria que acaban de hacer los dos últimos funcionarios que hablaron, nosotros no queremos meter debajo de la alfombra, ni queremos ocultar.

El debate hoy es sobre la economía, sobre el rol del Estado en la economía, sobre las consecuencias de la mala praxis en la economía y, fundamentalmente, sobre datos concretos en materia de recesión, de desocupación, de desempleo, de caída de las exportaciones, de déficit fiscal, de caída de consumo, etcétera, etcétera.

Lamentablemente, no vamos a poder discutir esto, mano a mano, con quien hoy es la cabeza del ministerio. Sin embargo, a la misma hora en que nosotros comenzamos a debatir este tema, él estaba informando en una conferencia de prensa. Nos hubiera gustado mucho tenerlo. De todas maneras, vamos a asumir el compromiso de discutir lo verdaderamente importante.

Y rescato, rescato, las palabras iniciales del jefe de Gabinete. Prefiero la franqueza del jefe de Gabinete cuando pone la pelota en el lugar que corresponde y dice que, como condición previa, tenemos que discutir sobre el rol del Estado; y no, luego, lo que acabo de escuchar, de que pareciera que acá nos estamos engañando con otra cosa –como dicen los dos funcionarios que hablaron al final– y que no queremos discutir cuál es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es esa, el rol del Estado; y recojo el guante de lo planteado por el jefe de Gabinete.

Precisamente por eso queríamos tenerlo al ministro de Economía, porque la verdad es que cuando uno discute sobre el rol del Estado y lo hace con miembros del

oficialismo que han estado o han tenido protagonismo durante los últimos veinte años, pareciera que uno se puede aprovechar de alguna ventaja de las contradicciones ideológicas que hay en el discurso.

En cambio...

Sr. Presidente (Fuentes). – Senador, senador... A partir de la intervención del senador Giustiniani hablando precisamente de la relevancia que tendrá el debate sobre la deuda externa en este recinto, tenga la seguridad de que la presencia del señor ministro la va a tener para poder discutir todas estas cuestiones.

Sr. Sanz. – Perfecto.

Sr. Presidente (Fuentes). – Por lo tanto, no estoy disculpando al señor ministro. No estaba en una conferencia de prensa en un camping, sino que estaba informando sobre un tema trascendente relativo al proyecto que ha elevado la señora presidenta al Congreso. Así que tenga la seguridad de que va a estar en ese debate.

Sr. Sanz. – Podría haber estado acá también. Listo. Para que quedemos empatados.

Cuando se habla del rol del Estado, me hubiera gustado que, por lo menos, él lo defendiera desde una posición de no contradicción con esta corta historia de los últimos veinte años.

Digo esto porque resulta que hoy escuchamos –y lo dijo el jefe de Gabinete–, hablar de un Estado que ideológicamente se coloca hoy en la posición de la intervención, de la regulación, por supuesto que con los adjetivos que él ha dicho: inteligente, una regulación o una intervención eficaz y demás, pero con una presencia, cuando el mismo partido político que hoy gobierna la Argentina, en los noventa nos hablaba desde otra posición, inclusive con muchos protagonistas que tuvieron protagonismo muy fuerte en esos años.

Resulta ser que hoy nosotros debemos asistir a un debate sobre el “estadocentrismo”, es decir, la presencia del Estado como eje y centro del debate económico, cuando en los noventa el mismo partido político nos llevó al debate del “mercadocentrismo”. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es la verdadera cara? ¿Cuál es la verdadera posición?

Ahora, fíjense los resultados de los dos extremos: el “mercadocentrismo” de los noventa, pretendiéndonos hacernos creer que el mercado por sí solo era generador y distribuidor de riqueza, y ahora el “estadocentrismo”, pretendiéndonos hacernos creer que el Estado por sí solo es generador y distribuidor de riqueza. Al final del camino, fíjense cuáles son las consecuencias: en los noventa, un tejido productivo y social destruido; el Estado que sirvió solamente para el desguace y para hacer negocios; un Estado que sirvió para incrementar fenomenalmente los casos de corrupción; y, ahora, al final de estos años, con guarismos económicos y un modelo productivo que están pareciéndose.

Invito a los funcionarios y, sobre todo, al secretario de Comercio Exterior, que cuando hable de empresas y de pequeños y medianos, salgan de la comodidad de

los despachos de la Capital Federal y vayan al interior. Vayan a ver las pequeñas empresas, a los pequeños y medianos productores y a los comerciantes del interior: ¡Están en la lona, secretario! ¡En la lona! ¡Se están fundiendo! ¡No saben cómo llegar a fin de año! ¡Ustedes están hablando de entequeiras y los pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes de la Argentina no saben cómo llegar a fin de mes, qué a fin de año! ¡Se están financiando en las cuevas! ¡Las cuevas que les compran los cheques al 10 por ciento mensual! ¡Y ustedes están hablando de la defensa del consumo! ¡La defensa del consumo requiere de una economía de empresas sólidas y no de corporaciones sólidas! ¡De pequeñas y medianas empresas de la producción sólidas, que hoy están en terapia intensiva! ¡Salgan al interior! ¡Salgan a la calle! ¡Dejen la comodidad de los despachos! ¡La economía argentina se está cayendo a pedazos y ustedes nos están hablando de entequeiras!

Lo mismo que el secretario de Justicia, que nos viene a retar con el tema del fuero. ¿Sabe una cosa? Si en ese lugar, en vez de usted hubiera estado un jubilado argentino, hubiera sido mucho más real, porque lo que le toca peregrinar a un jubilado argentino todos los días es mucho más que los ocho años de su juicio para cobrar al final menos de lo que usted reclamaba.

Hay jubilados que ni siquiera se podrían sentar ahí, porque cuando les toca cobrar se murieron. ¡Se murieron! Porque ustedes han hecho de las apelaciones mortuorias de los jubilados una verdadera condena. ¡Los obligan a catorce, doce o diez años para tramitar un juicio, para cobrar una mala liquidación hecha por el propio Estado! Así que si vamos a hablar de fueros especiales, ¡los jubilados tienen hoy un fuero previsional que no es ninguna garantía! Señor secretario de Justicia, ¡no es ninguna garantía que si se crea un fuero especial para los consumidores les vayamos a dar mejores derechos! Primero, con el fuero especial de los jubilados hagan lo que tienen que hacer.

Pero vamos a seguir porque el debate que ha planteado el jefe de Gabinete es extraordinario en términos políticos: el rol del Estado. Vamos a ver entonces al Estado, el Estado que en los noventa el mismo partido político que hoy gobierna lo convirtió en ausente y que en estos años pretende convertirlo en omnipresente. El Estado, ¿cuál? ¿El Estado omnipresente de Moreno? ¿El Estado omnipresente que con la birome en la mano destruyó la cadena de la carne, la cadena de la leche, la cadena del trigo y la cadena del maíz? ¿Esa es la intervención inteligente y eficaz del Estado? 10 millones menos de cabezas de ganado, la mitad de las hectáreas de maíz, 8 mil tambos que se perdieron en la República Argentina solamente porque un señor con una birome en la mano decidió un día “este exporta, este no exporta, este importa, este gana, este pierde”. Eso es lo que quieren concentrar en una ley. Quieren escribirlo en una ley. ¿Lo que les fracasó en la práctica sin ley, ahora lo quieren tener en una ley? ¿Para qué? ¿Para seguir fracasando? Ese es el Estado presente del que hablan ustedes.

Ahora vamos al Estado ausente de esta gestión. Porque en ustedes conviven estas mismas cuestiones de la década: el Estado presente o ausente. El Estado ausente con YPF. ¿Dónde está esa cadena de valor con YPF? ¿Dónde está la lucha contra las corporaciones? ¿Dónde está el Estado que protege a los consumidores? Desde que se estatizó YPF las naftas subieron más del ciento por ciento. Y tenemos versiones taquigráficas de reuniones en el Senado en las que participaron funcionarios y senadores del oficialismo que decían: “Vamos a estatizar YPF para garantizarle a los consumidores precios justos, razonables, que no van a quedar a expensas de los malos de Repsol”. Ahora que YPF es estatal hubo un aumento de las naftas y los combustibles del ciento y pico por ciento. ¿Y los consumidores dónde están? ¿No tienen fuero? ¿Cuál es el problema? ¿Hay que crearles un fuero para que vayan a hacerle una demanda a la YPF estatal? No, ésa es responsabilidad de ustedes. Es responsabilidad del gobierno.

El otro Estado ausente hay. Hay una ley en el país, la de defensa de la competencia, la ley 25.156 da todas las herramientas para poder luchar contra los monopolios, las corporaciones y contra las concentraciones. Esta ley crea el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia que ustedes, el gobierno, nunca quiso crear. Es una tremenda omisión del sistema institucional argentino. Tanto que hablan de tribunales, de Justicia y demás: ¿por qué no crean el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia? Once años llevan en el poder, nunca lo quisieron crear. ¿O es que ahora nos vamos a comer ese discurso berreta? Porque hay manuales berreta y discursos berreta, secretario. El suyo de recién ha sido un discurso berreta impropio de esta Cámara, donde no somos amateurs y sabemos bien la realidad, y nadie va a venir a correrlos con discursos berretas y manuales berretas.

Si quiere combatir las corporaciones tiene que ir al espectro de la obra pública, del juego, de los bancos y de tantos otros modelos que hay en la Argentina donde hay muchas corporaciones y cartelización, donde hay muchas ganancias y en once años ustedes no hicieron nada, absolutamente nada para modificarlo. Resulta que ahora vienen acá con una lista y dicen “los que fabrican galletitas son nada más que dos”. ¿Y qué hicieron ustedes para que en vez de dos no haya veinticinco produciendo galletitas en once años? Los que fabrican cemento son dos. ¿Y qué hicieron ustedes? Yo le agregó: los que ganan licitaciones de obra pública en la Argentina también son muy poquitos y las licitaciones de obra pública no se firman en ninguna empresa privada, no se otorgan en empresas privadas; se otorgan en despachos públicos. ¡En despachos públicos!

Si usted quiere combatir la corporación, la concentración y la cartelización, mírese para adentro, mire para adentro. Y termino. Señor jefe de Gabinete: la presidenta anoche ha convocado a la unidad nacional y le digo a usted porque sé que usted puede ser un buen referente para transmitir esto. Hoy es un momento muy difícil para la vida de la Argentina y no sólo por el tema

de la deuda externa. Es muy difícil porque la economía real está generando estragos: argentinos que se están quedando sin empleo; perdiendo el empleo.

Un dato que tuvimos no pudimos ir a buscar al INDEC porque nos mienten. 370 mil cuentas sueldo menos en el sistema bancario en un año. Ahí tiene usted el empleo perdido. 370 mil cuentas sueldo menos en el sistema bancario. Hay que ir a las ART para ver cuál es la nómina del personal a cubrir por accidente de trabajo que pasan las empresas. Miles y miles de bajas todos los meses en las nóminas de las ART.

Entonces, si la presidenta nos quiere convocar para la unidad nacional, estamos dispuestos; porque nos preocupa, porque les queda un año y medio de transición y como están haciendo las cosas, cada vez la cosa está peor y cada vez se está poniendo más difícil y queremos ayudarlos en la transición porque queremos ser protagonistas de la Argentina que viene, pero en la transición ustedes tienen que dejarse ayudar. Sin soberbia, sin venir acá a marcarnos la cancha con discursos ideológicos. Hoy la cosa pasa por una cuestión más pedestre que las cuestiones ideológicas: empleo, recesión, economía que se cae, déficit fiscal, inflación que está llegando al 40 por ciento. De esas cosas queremos discutir. Y si siguen con la postura de querer buscar culpables afuera se los digo no tan en broma, pero casi en serio: si quieren buscar culpables, agarren uno de estos celulares de última generación, junto a todo el gabinete y que se haga una *selfie*, ahí va a encontrar a los culpables, señor presidente.

Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias, senador. Primero y fundamental, el debido respeto a los estilos oratorios siempre ha sido el ámbito donde todos expresamos y las intenciones que cada uno tenga. Le pregunto: ¿hay alguna pregunta concreta?

Sr. Sanz. – No, sólo los comentarios.

Sr. Presidente (Fuentes). – Entonces, previo a seguir con el debate quiero invitar a las entidades presentes, para facilitar los trámites, a que hagan llegar las preguntas concretas a través de la secretaría de la comisión. Es decir, las observaciones que hayan formulado las distintas cámaras, corporaciones y asociaciones sobre la ley, les pido que mientras los senadores debaten apartándose del tema, las vayan presentando en secretaría.

Tiene la palabra el señor Álvarez para la respuesta.

Sr. Álvarez. – ART, YPF, previsional, jubilados, la transición, el mundo... Quisiera saber, concretamente, por qué no hace alguna pregunta con relación a los artículos de los proyectos de ley. Quisiera saber por qué no pregunta concretamente...

—El señor senador Sanz realiza manifestaciones fuera del micrófono que no se alcanzan a percibir.

Sr. Presidente (Fuentes). – ¡Por favor! Hemos escuchado con todo respeto las exposiciones, gracias.

Sr. Álvarez. – Sabe qué creo, ya que lo noto muy enojado, que usted en el fondo está tranquilo porque piensa que los proyectos están bien. Usted piensa que los proyectos están bien. Si no, los podría haber criticado. Podría haber dicho “este artículo no está bien”, “este artículo dice una cosa, podría decir otra”. ¿Cuál es el aporte al hablar de todas esas generalidades? Creo que ninguno. Ahora, usted destacó y en esta cuestión macroscópica en la que no se habló de los proyectos, el rol del Estado, la necesidad de hablar del rol del Estado.

Yo voy a leer algo: “El Poder Ejecutivo advierte que ese aumento de precios en constante ascenso en general no es consecuencia de factores reales con incidencia en los mismos, sino producto de medios artificiales imputables a la especulación y a la intermediación onerosa. En esas condiciones, resulta deber fundamental e importa a una de las funciones primordiales del rol Estado, sin desmedro del sano estímulo y salvaguardia de la producción, concurrir a la debida tutela de los consumidores, previniendo los abusos que se cometen contra los mismos a favor de la insuficiencia de organización en la defensa de su indudable derecho a satisfacer las más primordiales necesidades”. Mensaje del Poder Ejecutivo de la Nación al elevar el proyecto de la ley nacional de abastecimiento, sancionada en febrero de 1964 –por su presidente– durante el gobierno de Arturo Umberto Illia. Esto decía Illia en 1964. Es exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros hoy.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sr. Negre de Alonso. – Estaba muy concentrada escuchando las discusiones.

Yo voy a empezar por el final, por el tema del secretario de Comercio. En realidad, cuando uno escuchaba al secretario de Comercio, es como si pudiera existir un país sin unidad productiva. Y hablar de que la empresa, la empresa, la empresa... ¿Podemos existir sin unidades productivas? ¿De qué país nos está hablando? Como él habla de manuales berretas...

En realidad, la unidad productiva está conformada por otros pequeños grupos de unidades productivas internas y externas. Interna: los trabajadores, el capital, el *management*. Externa: los consumidores, los proveedores. Entonces, cuando el secretario de Comercio viene a hablarnos de empresa, viene a hablarnos de unidades productivas. Y cuando hablamos de unidades productivas tenemos que tomar todos los sectores que conforman la unidad productiva y que, como lo dice “la moderna y calificada doctrina”, no son únicamente los sectores externos sino también los sectores internos.

Y ahora voy a las cuestiones puntuales.

En primer lugar, presidente, usted sabe que nosotros somos unos eternos defensores del federalismo. Y esta ley tiene un ataque tronal y un impacto directo sobre el federalismo.

No es una facultad delegada por las provincias a la Nación, pero además de no ser una facultad delegada, hay atribuciones concurrentes, pero nunca fue concu-

rente la atribución de juzgamiento. Y la atribución de juzgamiento, que es de nuestros estados provinciales, ha sido verificada por la Corte Suprema de Justicia en distintas composiciones, pero también una reciente composición del año 2004, 2006, en el caso Zavalia, etcétera. Donde dice que salvo que alguno de los miembros de la relación jurídica esté dentro del fuero federal, es el fuero ordinario de las provincias el competente para entender en estas cuestiones.

Yo lamento lo que le ha pasado al secretario Álvarez. No podemos partir de una patología o de diez patologías, porque el país está compuesto por la Ciudad de Buenos Aires y por el resto de las provincias argentinas. Lo que pasa en el fuero nacional comercial es un problema de la Ciudad de Buenos Aires. Y debe atenderse desde este punto de vista, pero que con el proyecto de ustedes, en realidad, lo fortifican y van diezmando la Ley Cafiero.

Mi provincia, por ejemplo, adhirió a la ley del consumidor y tiene una ley sumamente ágil. Cinco días para resolver el juez, diez días en total para que el juzgado de primera instancia resuelva hacer una apelación, organismos administrativos, dinámicos, etcétera. Entonces, el problema de un juez de comercio nacional no es el problema de la Argentina profunda y de toda la Argentina; porque nuestros estados provinciales dentro de la Constitución Nacional y de la ley protegen, tienen las leyes de adhesión; casi todas las provincias tienen las leyes de adhesión y protegen a los consumidores en la relación como corresponde, pero también a la empresa como unidad productiva. ¿Para qué se reformó la Constitución? ¿Para qué se dictó la ley Cafiero? Venimos reiterando, la justicia tiene que pasar a la Ciudad de Buenos Aires y seguimos creando tribunales nacionales. Ahora creamos una cámara nacional además de la cámara federal. ¿Y, entonces, dónde está el cumplimiento de la Constitución?

Hay otra cuestión que quiero decir y con respecto a lo que enfatizó el jefe de Gabinete. Es como un caballo de Troya el proyecto, aparenta una cosa y trae otra cosa adentro. El jefe de Gabinete dice no va a haber más arrestos, no va a haber más pena de cárcel, sacamos del fuero penal y llevamos al fuero contencioso administrativo.

Permítame, presidente de la comisión que encabeza esto, una pequeña lectura de tres líneas de una persona, absolutamente, identificada con el oficialismo. Y que es el juez Zaffaroni. El juez Zaffaroni ha dicho en su *Tratado de derecho penal* —me van a permitir un minuto— que este intento de pasar las infracciones desde la justicia penal a la justicia contenciosa administrativa no es otra cosa que privar del derecho de defensa que tiene el proceso penal en sanciones que son definitivas. Porque no me digan que no es una sanción definitiva aplicar una multa y que para poder apelar, recurrir y recorrer todo el camino judicial haya que cumplirla previamente.

Ha dicho: “Esta tendencia a otorgar a la administración—o sea, a ustedes, al Poder Ejecutivo—la potestad de juzgar ilícitos en primera instancia, ya que normalmente se prevé el debido control jurisdiccional en instancias superiores, acarrea una serie de problemas complejos a resolver [...]. Acarrear deplorables consecuencias para la garantía de los derechos individuales.” Esto lo dice el juez Zaffaroni en el *Tratado de derecho penal*, tomo II, capítulo 3. Consecuentemente, no es como el señor jefe de Gabinete dice que es muy importante derogar, pasarlo al fuero contencioso. La realidad es que la ley 19.549, señor jefe de Gabinete, dice que los actos administrativos son lícitos mientras la justicia no los revoque. Y quien se encuentra afectado a purgar acto administrativo no tiene ningún tipo de defensa desde el punto de vista penal, cuando la sanción como los propios ministros, dice el juez Zaffaroni, es penal no tiene ningún tipo de garantías penales. Entonces, muy por el contrario no es que beneficia este cambio de jurisdicción. Afecta al federalismo. Nos quita una facultad que no se la delegamos a la Nación...

Sr. Presidente (Fuentes). — Senadora.

Sra. Negre de Alonso. — Es propia nuestra...

Sr. Presidente (Fuentes). — Disculpe, el señor senador Pichetto le solicita una interrupción.

Sra. Negre de Alonso. — Disculpe. Sí.

Sr. Presidente (Fuentes). — Muy amable.

Sr. Pichetto. — Usted sabe el respeto que le tengo en el plano del debate jurídico. Me parece realmente, me causa sorpresa sostener el principio de la prisión en términos de un esquema contravencional en el proceso económico. Me parece vetusto, es un modelo anacrónico de un Estado que metía en prisión sin ningún tipo de... La verdad es que ese argumento de Zaffaroni no es aplicable a este debate de la Ley de Abastecimiento.

En este sentido, yo lo considero altamente positivo que se haya sacado la figura de prisión para este tipo de hechos, que se regularán por aplicación de multas con todo el reclamo en sede administrativa y, eventualmente, en sede judicial como marca el proceso en Argentina. Mantener la prisión, un verdadero absurdo, sinceramente.

Quería hacerle este comentario, porque me parece que no es aplicable lo que dice Zaffaroni al tema en debate. Le agradezco.

Sr. Presidente (Fuentes). — Gracias, senador.

Sra. Negre de Alonso. — Dije que era un caballo de Troya, que aparentaba una cosa y adentro tenía otra estos proyectos de leyes.

Yo estoy diciendo que se mantenga la prisión. Le estoy diciendo y le estoy citando la ley 19.549, que establece que los actos administrativos tienen legitimidad mientras el Poder Judicial no los revoque y que hace que este tipo de sanciones que son gravísimas, algunas para las unidades productivas, cinco millones, se apliquen, tengan legitimidad y esto puede implicar gravísimas consecuencias, que como la unidad productiva tiene

sectores internos y tiene sectores externos, afecta a todos. Cuando se rompe la cadena de pagos –y los que hemos participado en el proceso de 2001 lo sabemos– no es sostenible un país.

Entonces, las cosas las tenemos que tomar con la debida realidad y seriedad.

Por otro lado, quiero decir que hay gravísimas inconstitucionalidades y peligro de violación de la propiedad privada. Cuando la Secretaría de Comercio se transforma en prácticamente un Poder Judicial paralelo. Fíjense ustedes que entre las facultades que le da, le da la facultad de ordenar pericias en los documentos, en los libros de las empresas, etcétera. Cuando eso no puede ser ordenado por un funcionario administrativo de ninguna manera. Esto se da de bruces con la Constitución Nacional.

Entonces, resumo en tres o cuatro cuestiones. Creo que el proyecto de ley tiene artículos *visus* de flagrante inconstitucionalidad.

Segundo, considero que esto es una afectación más del federalismo. El federalismo está siendo afectado desde todo punto de vista, cuando nos hacen imputaciones de impuestos coparticipables para imputar a determinadas cuestiones o cuando se le compensan las deudas de los impuestos coparticipables a Aerolíneas Argentinas o a cualquier otra empresa de las que sabemos ver en la ley de presupuesto, eso también es afectación del federalismo. Ésta es una afectación más al federalismo. No es facultad delegada por las provincias. Son concurrentes, pero no en el juzgamiento. El juzgamiento –en esto la doctrina es unánime– a estos hechos es facultad excluyente y exclusiva de las provincias argentinas. Ésos son los tres planteos.

Sr. Presidente (Fuentes). – Va a responder el señor secretario de Justicia.

Sr. Álvarez. – Usted tiene razón. La responsabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor es concurrente. El artículo 1º dice que es concurrente a nivel local, provincial o nacional. Esto es: todos pueden entender sobre la defensa del consumidor. Por eso, existen en la mayoría de los municipios oficinas de defensa al consumidor; en las provincias, oficinas de defensa al consumidor y en la Nación, la oficina de defensa al consumidor.

También tiene razón en que la atribución del juzgamiento es competencia de cada una de las provincias. La atribución del juzgamiento y también las normas de derecho procesal son atribuciones de cada una de las provincias. Por eso, nosotros escribimos el artículo 77 del título VI, “Disposiciones finales”, que dice: “Invitación. Invítase a las jurisdicciones locales a adecuar sus regímenes procesales y procedimentales o a adherir a la presente ley”. Estamos redactando un proyecto de ley que en los casos donde tiene facultades delegadas se invita a las provincias a adherir. Por eso, estamos haciendo foros en todo el país para explicar estos proyectos de ley y conversando con los distintos gobiernos provinciales. La semana que viene tenemos una reunión del Cofejus, Confederación Federal de Ministros de

Justicia, para discutir letra por letra la norma jurídica e invitar a las provincias a adherir, es decir, la cuestión jurisdiccional, como recién expresaba la senadora.

Pero aclaro que no estamos invadiendo porque estamos creando ocho juzgados de primera instancia y dos cámaras para la justicia federal y nacional de la Ciudad de Buenos Aires.

–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Álvarez. – No, porque hay delitos federales. Hoy tenemos Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, Cámara Federal Civil y Comercial. Y sí, hay justicias que funcionan más rápido que las otras. Buenísimo. Quizás, haya sistemas mejores que este que estamos proponiendo. Apliquémoslo, cambiemos éste proyecto de ley para tener sistemas más rápidos todavía, si es posible un sistema más rápido. Si en su provincia hay un sistema más rápido que este, apliquémoslo. Si éste es más rápido estaría bueno que también lo apliquen.

Entonces, como la responsabilidad es concurrente, tenemos distintas fases de intervención. La mediación, como la responsabilidad es concurrente, la va a poder hacer la Secretaría de Comercio en todo el país. Si acordamos con una provincia, que lo haga la provincia; lo podrá hacer la provincia, porque la responsabilidad es concurrente. Entonces, nos tendremos que poner de acuerdo provincia por provincia sobre cómo vamos a aplicar un sistema que tiene responsabilidad concurrente.

En el sentido de la creación de un fuero, éste es el punto de comienzo de una generación de fueros en todo el país, como pasó con la justicia del trabajo. Cuando se creó la justicia del trabajo, se creó primero en la Capital Federal, después en la provincia de Buenos Aires, después otra provincia, otra provincia y otra más. En el fuero contencioso administrativo hoy todavía se están creando juzgados en distintas provincias. Con relación a ese tema, no hay un problema concreto.

La Ley Cafiero, 24.588, establece que la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial en determinadas materias. Ésta no es una materia que esté a cargo de la Ciudad de Buenos Aires hoy. No, es una materia que está a cargo, como explicaba recién con el ejemplo –era simplemente un ejemplo–, a veces de la justicia comercial nacional, a veces de la justicia civil nacional, a veces de la justicia civil y comercial federal nacional, a veces de la justicia en lo contencioso administrativo federal y, a veces, de la justicia en lo penal económico, todos fueros que no son de la ciudad. Estamos distribuyendo competencias que hoy tiene la Nación.

Ya termino...

–El señor senador Rodríguez Saá solicita una interrupción.

Sr. Presidente (Fuentes). – Es una interrupción.

Sr. Rodríguez Saá. – ...nacional de la Capital Federal es la Justicia local. ¿Cómo que no es así? Es la Justicia local.

Sr. Álvarez. – No.

Sr. Rodríguez Saá. – Hay dos justicias: la local y la federal. Usted, como es porteño, no entiende de estas cosas, pero tiene que entenderlas.

Sr. Álvarez. – Soy de Lanús. Estamos cerca.

Pero usted tampoco es porteño y usted sí entiende. (Risas.)

–El señor senador Rodríguez Saá realiza manifestaciones fuera del micrófono.

Sr. Álvarez. – ¿Por qué si usted no es porteño y yo tampoco, usted entiende y yo no?

–El señor senador Rodríguez Saá realiza manifestaciones fuera del micrófono.

Sr. Álvarez. – Está bien. No es porque no soy porteño.

–El señor senador Rodríguez Saá realiza manifestaciones fuera del micrófono.

Sr. Álvarez. – Mire, la Justicia de la ciudad hoy tiene la justicia contenciosa, la justicia contravencional. Hay una justicia contenciosa y una justicia contravencional. Además, hay un procedimiento de delegación y de transferir distintos fueros, como es el fuero de familia, el fuero civil y algunos delitos penales, como el fuero correccional. Este proceso no está concluido. No está sucediendo en este momento. De hecho, estamos por firmar un convenio con la Ciudad de Buenos Aires donde le transferimos competencias y todavía la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no lo aprobó.

Si en el marco de estas competencias, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires considera que por un convenio con Nación hay que otorgar esas competencias, perfecto; pero hoy no las tiene. Hoy no tiene la justicia civil, comercial y en lo contencioso administrativo federal. No corresponde a la ciudad. No son de la ciudad. Hoy están a cargo del gobierno nacional, no de la ciudad. Entonces, después se podrá delegar...

–El señor senador Rodríguez Saá realiza manifestaciones fuera del micrófono.

Sr. Álvarez. – Generaremos un convenio y podremos delegar esas facultades. Es así. No estamos redistribuyendo materias ya delegadas.

Con relación a la facultad de pedir información de los libros. Eso ya estaba.

Le puedo destacar algo que sí no está más, que era el artículo 12 de la vieja Ley de Abastecimiento. Decía: “Para el cumplimiento de su cometido, los funcionarios actuantes podrán: Allanar en horas hábiles y días de funcionamiento”. Ahora lo sacamos y pusimos: “Ingresar e inspeccionar”. El Poder Ejecutivo nacional no

puede más allanar, como decía antes, como sí podía o puede, al no estar sancionada la ley. Puede “ingresar o inspeccionar” y, para hacerlo, necesita la anuencia del empresario. Eso es judicial.

Me dice la senadora: “O la orden de allanamiento de un juez”. Si el Poder Judicial otorga una orden de allanamiento es como siempre, pero esto ya existe.

Con relación a lo de Zaffaroni, lo del derecho penal, en definitiva usted al final dijo “lo que yo quiero decir es que la aplicación de multas es el problema”. O sea que lo del derecho penal no, porque el derecho penal que antes existía lo estamos sacando, lo estamos eliminando. No hay más derecho penal para los empresarios en estos casos. Antes había, ahora no hay más derecho penal para los empresarios; pero sí hay aplicación de multas. ¿Sabe qué senadora? Con relación a la aplicación de multas es más difícil aplicarles multa a los empresarios con esta nueva ley.

El artículo 7º decía que para la fijación de las sanciones de toda índole, pecuniarias o personales, se tomará en cuenta en cada caso –antes decía– la dimensión económica de la empresa, negocio o explotación, el efecto e importancia socioeconómica de la infracción. Ahora agregamos tres incisos más. Para aplicar una multa el Estado no va a tener solamente dos requisitos, ahora va a tener cinco. Antes tenía dos. Con esta ley vigente se tenían dos requisitos: la dimensión económica de la empresa y el efecto e importancia socioeconómica de la infracción. Ahora se tienen cinco requisitos. También se tiene que analizar la posición en el mercado del infractor, qué posición ocupa en el mercado el infractor. También, se tiene que analizar el lucro generado por la conducta sancionada y su duración temporal; y, también, se tiene que analizar el perjuicio provocado al mercado o a los consumidores. O sea, contrario a hacer esta reforma esta modificación más severa. En los dos casos que acaba de enunciar la senadora, y lo propongo como ejercicio para todas las preguntas, salvo en las multas, en todos los casos donde hicimos reformas la situación de los empresarios es mejor que en la condición anterior. Salvo en las multas. Lo repito, salvo en las multas la condición de los empresarios, con esta nueva ley, es mejor que en la ley anterior.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Con respecto a esto, la apreciación por parte de la posición en el mercado, el lucro obtenido, ¿quién la realiza? La realiza un órgano administrativo. En nuestro sistema el contralor de los actos administrativos y de los actos parlamentarios están a cargo del Poder Judicial. Entonces, queda sometida la unidad productiva–así me gusta llamarlo–; usted no, pero el secretario ha denostado, permanentemente, como si pudiéramos existir si no hubiera unidad productiva. Entonces, es para poder conceptualizar que no existe empresa sin trabajadores, sin capital, sin consumidores, sin proveedores, etcétera. Me gusta hablar de unidad productiva y queda sujeto a la voluntad de un

funcionario administrativo sin ningún tipo de revisión judicial previa. A eso me he referido cuando he hablado y he citado al juez Zaffaroni.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra el señor secretario de Comercio.

Sr. Costa. – Senadora, respecto a su valoración o conceptualización de las unidades productivas, creo que coincido con usted. De hecho, lo que voy a solicitar, porque me parece que es parte de esta reunión, que hablen todos y que escuchemos todas las voces que tienen que ver con la producción, con el consumo y con el trabajo. Acá están los representantes de trabajadores, representantes de la sociedad de consumidores, representantes de pequeñas empresas, del campo, representantes de las grandes empresas. Entonces, están acá, van a estar hablando y es parte del debate y nadie menosprecia ni nada, todo lo contrario. De hecho, creo que muchos de los que están acá si no los invitábamos nosotros no iban a poder tener su voz como no la tienen en el debate mediático que, lamentablemente, está muy distorsionado. Eso por un lado.

Respecto a la cuestión de las...

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Está muy equivocado el secretario. El secretario acaba de decir que si no estuvieran los funcionarios del Ejecutivo acá no se les hubiera garantizado el derecho a ser escuchados todos los que están. Este Parlamento se caracteriza por escuchar a todas las voces en cada una de las leyes. No hace falta que venga el Poder Ejecutivo. Es un Parlamento abierto, transparente y de puertas abiertas a la comunidad. Le pido que se rectifique, porque yo como senadora me siento afectada.

Sr. Costa. –No me rectifico, porque me consta que algunos de los que están acá si no eran convocados por el Ejecutivo no estarían. Es simplemente una aclaración y es importante que también se escuchen esas voces.

Por último, me parece una cuestión importante que se tenga en cuenta lo que acaba de leer el secretario de Justicia del artículo 7º sobre la propuesta de ley que es, justamente, algo central que también se está invisibilizando un poco y que es que cualquier tipo de disposición relacionada con la ley 20.680 considera tamaño de la empresa, posición en el mercado...

Es decir, acá se puede tener una política clara de diferenciación entre lo que es una pyme y una gran empresa. Por lo tanto, no es una legislación, o por lo menos es una propuesta, que no considere la realidad de cada una de las empresas al momento de llevar adelante las sanciones o las acciones y las discusiones que surgen. Porque esto parece ser que muchas veces no se está poniendo a relevancia. Me parece que es homogénea para todos y, el señor va a aclarar muy bien, tiene en cuenta cuestiones centrales para diferenciar empresas.

Sr. Presidente (Fuentes). – Antes de darle la palabra al próximo senador, vuelvo a ratificar la invitación,

aprovechando la presencia de los señores funcionarios, de que los miembros representantes de cooperaciones que han hecho objeciones acompañen las preguntas. Hasta ahora, únicamente, me han arrimado dos preguntas. Entonces, Sociedad Rural, Unión Industrial, que están los representantes, AEA, por favor, mándenme las preguntas por escrito.

Una vez que terminan los senadores y que agotamos esta etapa, aprovechando la presencia de los funcionarios, voy a pasar a preguntarles y a leerles a los senadores las observaciones que las entidades han hecho.

Van a hablar, por supuesto. Hay una lista de invitados que van a hablar, pero paralelo a eso he pedido las preguntas. Es una atribución que tengo. Quiero las preguntas para poder dárselas a los funcionarios.

Tiene la palabra el senador Artaza

Sr. Presidente (Artaza). – Señor presidente: independientemente, de los derechos de los consumidores, de los usuarios que hemos defendidos a través de diversas legislaciones aquí en el Congreso de la Nación, con lo cual podemos estar absolutamente de acuerdo. ¿Cómo no estar de acuerdo en defender a los usuarios? ¿Cómo no estar de acuerdo, cuando estamos viendo hoy los abusos de ciertas empresas monopólicas como sucede con las telefónicas?. Por la que hemos recibido y recibe hoy el actual presidente de la Comisión de Derechos y Garantías más reclamos, incluso que los bancos en su momento; incluso que los precios, los abusos que hay. Por eso es que pedimos el servicio público de la telefonía móvil, que la tienen los sectores más vulnerables. ¿Cómo no estar de acuerdo con eso?

Nos gustaría que, inmediatamente, teniendo ya herramientas como tiene hoy el Estado, como lo puntualizó el senador Sanz, y sabemos que tenemos herramientas que tiene hoy el Estado, ¿cómo no estar viendo qué está pasando con los precios en las provincias? Un correntino que va, carga y llena el tanque de nafta le sale 450 pesos en la Capital y resulta que le sale 700 en la provincia. Pero tiene hoy herramientas el gobierno. Por eso, obviamente, que nos sacamos del derecho de los usuarios que venimos trabajando hace tiempo en las diferentes comisiones, pero nos parece hoy que esta herramienta que presenta los tres proyectos del Poder Ejecutivo es una herramienta secundaria para el control hoy de los precios. Es una herramienta secundaria. Diría tanta gente joven para una herramienta tan añeja, ya utilizada en 1939 cuando comenzó la guerra o, después, en el 74 o en los 90. Gente joven, inteligente, ¿cómo aparecen con una herramienta tan vetusta, con todo respeto, y que ya no ha funcionado?. Hay otras herramientas para controlar los precios.

Les hemos aportado desde acá, desde el Senado de la Nación, por ejemplo, proyectos que están en el Senado y en Diputados para bajar el IVA a los productos de la canasta familiar y, sin embargo, el oficialismo no se digna a tratarlos. Es decir, no podemos tratar la baja del IVA en los productos de la canasta familiar. Ésa es una herramienta que se puede tener para controlar los pre-

cios, o bien avanzar en la profundización de los precios cuidados. Les hemos pedido que en los supermercados haya góndolas claramente identificadas, no mezcladas para confundir al ama de casa o a la persona que va a comprar, al usuario.

Tiene hoy herramientas el gobierno para controlar los precios. Por eso preguntamos si tan inocua nos resulta, aunque podemos estar de acuerdo con el observatorio, podemos estar de acuerdo con todo lo que se haga para controlar los precios. Pero la primera pregunta al jefe de Gabinete seguramente será si se prevé una crisis aún mayor de precios y de inflación y por eso sacan este paquete de leyes. Ésta sería la primera pregunta: si estamos en una crisis o si todavía no se ha profundizado la crisis. Porque en la Argentina parece que nadie se hace cargo de esto; parece que no es por las acciones del gobierno que suben los precios, sino pese a las acciones del gobierno. Y creo que en esto tenemos que ser conscientes de que hay otras herramientas, y no bajar las asignaciones familiares, no cobrarles ganancias a los trabajadores y no ponerles un tope a los salarios. Lo que no entiende el gobierno es que hay inflación, que debe subir los salarios. Entonces, tenemos otras herramientas, y no esta que nos parece absolutamente fuera de tiempo, respetuosamente, y que nunca ha funcionado.

De todas maneras, para ser breve, para escuchar además, sobre todo, a los consumidores, a los usuarios, que es a quienes tenemos que proteger, y después también a las cámaras, por supuesto, estamos de acuerdo y podemos llegar a coincidir, pero los gobiernos nacionales y populares deben saber que tenemos que regular a las corporaciones —como yo estoy hablando—, como he tenido una lucha, y la sigo teniendo, por los bancos que subsidiamos con 20 mil millones de dólares. Frente a las mineras tenemos que tener también esta misma decisión cuando hablamos de corporaciones; frente al juego, frente a las grandes corporaciones.

Pero, no obstante ello, quiero hacer preguntas que tienen que ver técnicamente con el proyecto 298/14 del Poder Ejecutivo, sobre todo, y esto va para el secretario de Comercio. Primero, que no está previsto el reclamo colectivo que hacen las asociaciones de usuarios, sino que hay solamente acompañamiento cuando se hace la presentación judicial, pero no está previsto que participen —esto ayer lo hablaba con Polino, representante de otra de las asociaciones de usuarios—. Y después, nos preocupan las multas tan altas para las pequeñas y medianas empresas del interior del país. Nos han expresado sus preocupaciones por las multas. Ustedes dicen que es menos dura que las anteriores y vetustas leyes que se pusieron en vigencia y que no pudieron detener el Rodrigazo, que no pudieron detener el alza de los precios, pero dan permiso para proceder al secuestro de todos los elementos contables por treinta días, es decir, si permite allanarlos sin permiso judicial pero no tiene autorización para requerir información a terceros, por ejemplo a la AFIP, el secreto fiscal, el secreto bancario. Esta es una pregunta lisa y llana: ¿qué pasa con el tema

del secuestro, por ejemplo? Y con establecer regímenes de licencias comerciales y registros de libros especiales que se establecieron y, sin embargo, hoy está el CUIT, ya es innecesario porque tenemos el CUIT. Ésa es otra de las preguntas, porque tenemos el CUIT, tenemos la tecnología. Como dice “secuestro de cartas”, no sé hoy qué proveedor se maneja con cartas cuando tenemos Internet, tenemos el avance de la tecnología. Por eso, me parece fuera de tiempo.

Finalmente, nos preocupa que se elimine la posibilidad de establecer una caución o garantía para litigar, mientras tanto, la multa. Eso nos preocupa, porque diferentes pequeñas y medianas empresas nos lo han hecho saber, y la prescripción se interrumpe por un acto administrativo simple. Es simplemente esto.

Quiero recordarles que estas leyes nos parecen absolutamente secundarias y que tenemos otras herramientas para detener los precios, y sobre todo para los sectores más vulnerables de la sociedad.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). — Hay un pedido del senador Pichetto para hacer una moción de orden.

Sr. Pichetto. — Presidente: antes de hacer los discursos, que son legítimos, y ya que los funcionarios se van a quedar todo el día, hasta la noche, porque han venido dispuestos a exponer, voy a pedir que escuchemos a los representantes de las entidades que han venido, que van a exponer, van a dar su mirada, su visión, y le voy a dar un listado, señor presidente, para que invitemos a Miguel Blanco y a Luis Etchevehere; los invitamos al frente para que acompañen y expongan, y después seguimos con: Jaime Campos, de AEA; Máximo Fonrouge, del Colegio de Abogados; Guillermo Lipera; Carlos Garetto; Pablo Taussig; Juan Vaquer, y Ricardo Marra.

Sr. Presidente (Artaza). — Podríamos también incorporar a la Asociación de Usuarios.

Sr. Pichetto. — Escúcheme, senador Artaza, vamos a incorporar a todos, quédese tranquilo. Lo que digo es que éstas son las entidades de mayor volumen, así que escuchémoslos. Después vamos a seguir con el debate y vamos a escuchar a todo el mundo, y vamos a seguir la semana que viene y esta semana hasta concluir.

Sr. Presidente (Fuentes). — Observaciones no hay y el resto de los senadores que no hemos sido mermados por el hambre estamos de acuerdo, así que invitamos a Etchevehere y al doctor Blanco...

Sr. Etchevehere. — Buenos días. Muchas gracias al Senado por darnos esta oportunidad de expresarnos y no tener que ganar una elección para poder hablar a la ciudadanía y expresar qué es lo que está pasando con la producción argentina, como recomendó hace tres o cuatro semanas el jefe de Gabinete, quien lo reiteró esta mañana.

Entendemos que, como ciudadanos, tenemos el derecho de poder expresarnos con fundamentos, con profundidad y con elementos que hagan que las cuestiones se vayan aclarando. En esta línea, tenemos que

decir que desde el campo no hace falta que esperemos a que se sancione esta ley para saber qué efectos va a tener y si van a ser positivos o negativos, porque las cuestiones que institucionalizarían la forma de intervenir el Estado en la actividad productiva ya vienen siendo aplicadas hace más de diez años en perjuicio de la producción. Ya sabemos, a esta altura, que cuestiones de hecho como intervenir los mercados, evitar la transparencia, como poner precios máximos o precios mínimos, como impedir las importaciones de hecho o las exportaciones de hecho sin mediar ningún tipo de resolución, perjudicaron la actividad productiva en los últimos diez años. Esto no solamente es un juicio de valor, sino que hay números y hay cuestiones concretas. Por ejemplo, a partir de la intervención de hecho del mercado de carne prohibiendo su exportación a partir de marzo de 2006, de ese momento a la fecha cerraron 138 frigoríficos en la Argentina, por la prohibición de exportar carne, que en aquel momento era el 20 por ciento de la producción y actualmente se exporta solamente el 6 por ciento. O sea, ahí tenemos el origen de una mala resolución de hecho y la consecuencia negativa de esa resolución. En ese momento exportábamos 870 mil toneladas de carne. La Argentina era el país que más carne consumía per cápita en el mundo. Entonces, queda claro quiénes son los dos grandes perjudicados: los productores, por un lado, pero también los consumidores, por el otro. A partir de ese cierre, caímos del tercero al decimotercer lugar como exportador mundial de carne.

Vamos a otro ejemplo: la intervención de hecho por llamadas telefónicas, aprietes al mercado del trigo, evitando la competencia entre los exportadores y la molinería. Esto hizo que salieran de competencia los exportadores; la molinería quedara con trigo sobreofertado a nivel interno; bajó el precio interno del productor y tuvimos las dos peores siembras de trigo en los últimos cien años en la Argentina, de cuando los campos se araban con arados tirados por caballos. Dos grandes perdedores, de nuevo: por un lado, el productor, que recibió un precio sensiblemente inferior al mercado por su producto y lo desincentivó a seguir sembrando e invirtiendo; pero, por otro lado, también el consumidor, que a pesar de que el trigo está cada vez más barato termina pagando el pan cada vez más caro.

Así podemos ir también al ejemplo de la leche: hace pocas semanas, hubo llamados telefónicos a las usinas lácteas por parte de funcionarios diciéndoles que si pagaban más de 3 pesos el litro a los productores, se les iba a prohibir la exportación de leche en polvo. O sea, otra vez, esta acción de hecho, que ahora se está queriendo institucionalizar, trae perjuicios concretos a la producción. El nivel de indiferencia para el productor de leche es 3 pesos con 60, cuando al consumidor se le está vendiendo a 9, 10 u 11 pesos el litro en la góndola.

Repetimos: no nos hace falta esperar a que se sancione esta ley para saber si va a causar o no efectos negativos. Ya sabemos que los va a causar. Entendemos de manera sobrada los motivos que tienen los consu-

midores o los que dicen desde el gobierno defender a los consumidores; pero también podrían revisar instituciones como, por ejemplo, el defensor del pueblo, que hace 5 años no se lo nombra en la Argentina, o los tribunales de defensa del consumidor, que hace 11 años que no están los nombramientos. Esos serían los ámbitos donde se debería resolver cualquier tipo de diferencia entre precios de producción, etcétera.

Por otro lado, si en este sistema el secretario de Comercio va a tener incluso la atribución judicial de aplicar normas, de aplicar sanciones, de prohibir el ejercicio del comercio hasta por 5 años, es una atribución que va en contra de la Constitución Nacional, entre otras. Se ataca directamente al derecho de propiedad, se ataca directamente al derecho de ejercer cualquier industria lícita en la Argentina.

Señores: no es un sistema sostenible. Si se puede hacer producir obligadamente a alguien a pérdida, como ya de hecho han intentado hacerlo y lo han hecho, ¿me quieren decir quién va a pagar los impuestos si va a pérdida, quién va a pagar los salarios si perdió en su actividad comercial o productiva, quién va a pagar a los proveedores, quién le va a devolver los créditos a los bancos? Es un sistema que no tiene lógica.

Aparte, comparamos este proyecto de ley con la ley que ya se aplica en Venezuela. Bueno, mal ejemplo. Miren que hay países para poder copiar o sacar las cosas buenas que han hecho, pero seguimos el ejemplo de Venezuela, con los fracasos que viene teniendo desde el punto de vista de las instituciones, al atropello a los ciudadanos de ese país, al desabastecimiento que tienen.

El campo, claramente, el año pasado, antes de pedir, ofreció. Antes de decir "queremos tal cosa", dijimos claramente qué es lo que podíamos dar. El 11 de diciembre, lamentablemente, no pudo asistir el ministro de Agricultura y Ganadería. Asimismo, lamentablemente, si bien acá se habla de diálogo y de participación, hace 5 años que los funcionarios del área, me refiero al ministro de Agricultura y Ganadería o el jefe de Gabinete, no reciben a la Mesa de Enlace, que somos los auténticos representantes de la producción en la Argentina. ¿O sea que creemos que porque se sanciona esta ley va a empezar a haber diálogo en la Argentina, cuando es una práctica que no es cotidiana?

Entonces, no hay respuesta a esas políticas y se siguen ejemplos que son negativos a la producción y al abastecimiento, a pesar de tener otros mejores a nuestro alrededor. Nadie puede negar en el siglo XXI la importancia que tiene el Estado en todo lo que sea la vida diaria de los ciudadanos. Pero vayamos a los ejemplos virtuosos que tenemos alrededor: Chile, Uruguay; o más lejos: Perú, Colombia, México, Brasil mismo, Paraguay, donde se tienen en cuenta los derechos de los consumidores, pero no se ahoga a todas las fuentes productivas.

Por eso, teniendo en cuenta estos argumentos, teniendo en cuenta los firmes antecedentes negativos que tenemos con respecto al trato de la producción y a los

consumidores, solicitamos que no se sancione esta ley. Porque la vemos muy perjudicial para la producción en la Argentina. Muchas gracias por su atención.

Sr. Presidente (Fuentes). – Previo a la contestación del señor jefe de Gabinete o quien designen, quiero recordarles a los invitados que el tiempo estipulado es de 10 minutos. En este caso no ha excedido el margen, por lo cual se lo agradezco personalmente.

Señor jefe de Gabinete o quien indique...

–El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Fuentes). – El señor senador Pichetto solicita una moción de orden.

Sr. Pichetto. – No, es para hacer una reflexión.

En primer lugar, me parece importante que el presidente de la Sociedad Rural haya venido, haya dicho su verdad, haya aportado su visión. Pero me parece que también merece una respuesta, por lo menos desde nuestra mirada.

Esta última década ha sido realmente muy importante para el sector agropecuario, el sector productor. No quiero volver al pasado ni hacer acá el recordatorio de hechos históricos negativos para la Argentina, pero hay que recordar que en 2001, 2002 y 2003, el campo estaba quebrado, Etchevehere. Estaba hipotecado con el Banco Nación como el principal acreedor de todas las extensiones de campo en la Argentina. Esta última década...

–El señor Etchevehere realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Pichetto. – Después, si quiere. Cómo no.

Esta última década ustedes han mejorado, han tenido precios altamente competitivos en el plano internacional. Al compás de la soja, han crecido, han tenido acceso a beneficios crediticios, han desarrollado la agroindustria, se han desarrollado salidas de puertos. La Argentina, indudablemente, en el sector agropecuario, es hoy una potencia, y reconocemos la importancia que tiene en términos de la recaudación impositiva. Ahora, me parece que no son el sector más complejo ni más perjudicado para hacer un alegato tan negativo respecto de la política del gobierno. Creo que la política del gobierno ha sido positiva para el sector productivo, altamente positiva.

En orden, a veces, a la falta de diálogo, también tenemos que recordar que los espacios celebratorios de la Rural siempre para las fuerzas democráticas han sido adversos. Hagamos también un poco de autocrítica, de miradas de lo que pasó en el pasado. Dictadores y otros personajes siempre fueron bien recibidos; e indudablemente las expresiones democráticas... en un momento hasta lo silbaron a Alfonsín. Digámoslo esto.

Creo que hay que reconstruir un camino de diálogo. Yo soy de los que cree en la capacidad de diálogo y en la vocación de diálogo para superar los problemas de

la Argentina. Estoy convencido de eso. Y me parece que este debate también es muy rico. Pero yo creo que ustedes han tenido 10 años de crecimiento positivo y todavía siguen teniendo precios internacionales altamente importantes. Si el gobierno ha tomado algunas medidas de cuidado de los precios internos, eso es porque no se podía trasladar de ninguna manera el precio internacional de algunos productos al mercado interno, porque eso impactaba de lleno en el bolsillo de los asalariados y de los que menos tienen. Éste me parece que es el debate más estructural.

En orden al defensor del pueblo, nosotros estamos en designarlo. Es cierto lo que usted dice. Ahora, se requiere una mayoría especial de dos tercios según la ley y la Constitución; e indudablemente en el escenario actual hay un plano controversial y es muy difícil llegar a una unificación de criterios en esta figura. Tal vez en algún momento lo logremos. Me parece que es una figura institucional interesante. Pero no es que no tengamos voluntad de poder completar el cargo, sino que no se reúnen los requisitos de la ley.

Quería decirle estas cosas porque me pareció importante lo que usted dijo desde su mirada sectorial. Nosotros tenemos una mirada desde el gobierno nacional que me gustaba contraponerla para hacer más chico este debate, con todo el respeto y como debe ser. Me parece que esto no suma desde el punto de vista de las ideas.

Sr. Presidente (Fuentes). – Iba a contestar el senador; pero en este caso contestará el presidente.

Sr. Etchevehere. – Vamos por parte: en primer lugar, si el campo mantuvo alguna producción y aumentó otra, no vemos que haya sido por mérito del gobierno, sino por los precios internacionales a los cuales usted hizo referencia. Es decir que el campo se mantuvo o creció en algunas actividades a pesar del gobierno. Por lo menos, desde nuestro punto de vista.

Porque cuando el gobierno vio que podía recaudar al subir la presión impositiva al sector agropecuario, lo hizo. Y hoy estamos soportando una presión impositiva del 80 por ciento del resultado económico de una empresa agropecuaria.

O sea que es mérito de los precios internacionales, no del gobierno. Además, hubo crecimiento y mantenimiento en los primeros años a pesar del gobierno. Ahora bien, después que produjo eso, hubo un estancamiento y una caída, y hace cinco años que no podemos pasar los 100 millones de toneladas de granos cuando nuestro potencial es de 160 millones de toneladas.

En cuanto a lo que le acabo de decir de la carne, ¿intervino ese mercado? No. El Uruguay tuvo la misma sequía que la Argentina y su stock ganadero creció; pero no le sucedió lo que al nuestro que, en su momento, cayó y llegó a perder doce millones de cabezas.

Acá no compensaba darle de comer a los animales por el precio bajo que había a partir de la prohibición de las exportaciones de carne; en cambio, en el Uruguay, sí. Por eso se liquidaron 12 millones de cabezas. Por eso, cuando se cerraron las exportaciones con el

argumento de la defensa de la mesa de los argentinos, sonó muy bien. Se trataba de una medida populista y demagógica, y estaba perfecto, pero ¿qué pasó? Nos estábamos comiendo a las madres; nos estábamos comiendo los vientres. Por dicho motivo cerraron 138 frigoríficos, de lo contrario, estarían trabajando y dándole empleo a los 15 mil trabajadores de la carne que están en la calle. Asimismo, no hubiésemos perdido el mercado de trigo del Brasil, nuestro cliente natural para ese mercado.

En 2007, cuando asumió la actual presidenta, sembramos 6 millones de hectáreas de trigo y cosechamos 17 millones de toneladas. En el medio, por supuesto, el gobierno, de un día para el otro, subió las retenciones. ¿Qué pasó? Abastecíamos Brasil, pero ahí el gobierno interviene el mercado y le quita rentabilidad al productor. Es más, el año pasado sembramos 3 millones de hectáreas y cosechamos 9 millones de toneladas. ¿Qué consecuencias tuvo esto, senador, para la Argentina y para todos nosotros? ¿Sabe a quién le dio trabajo el gobierno? A los productores norteamericanos. En efecto, fueron los productores norteamericanos quienes en esta campaña le vendieron trigo al Brasil.

Ahora, estamos a días de la siembra del maíz y nos encontramos ante la misma situación, entonces, de ustedes depende, del Ejecutivo actual, que saque las retenciones y los cupos de exportación para que, en vez de darle trabajo a los *farmers* americanos –y que le vendan maíz a nuestros clientes–, nos lo den a nosotros, generando así ingresos para las provincias productoras.

Acabamos de sacar un trabajo la Mesa de Enlace junto a Aacrea, Aapresid y Maizar, donde demostramos que en los 246 distritos de la Argentina donde se siembra maíz debido a la intervención del gobierno y a los cupos de exportación, en el 93 por ciento de esos distritos, el maíz dará pérdida. ¿De quién depende que se revierta esa situación? Justamente del Poder Ejecutivo, el cual hace cinco largos años que no recibe a la producción.

Y le digo esto con todo respeto: si no se quieren juntar con la Mesa de Enlace, no hay ningún problema; pero, por favor, solucionen los problemas que están perjudicando a la producción en la Argentina, porque de eso se trata.

En ese sentido, hay muchísimo para hacer, hay muchísimo para promover y tenemos un gran potencial productivo en nuestro país, ahora bien, dependemos de que las legislaciones no sean contrarias a la generación de inversión y a la generación de empleo genuino. Por eso solicitamos que esta ley no se sancione, ya que a todas luces van en el sentido contrario... ¿de quién? –porque también tenemos que ser prácticos–. ¿De quién? De nuestros competidores, señor senador.

Nuestros competidores tienen otras reglas de juego, son más competitivos que nosotros y agarraron todos los mercados que perdimos de la carne, los mercados que perdimos del trigo y los que ojalá no perdamos del maíz, porque estamos a tiempo. Además, no pedimos privilegios, no pedimos prebendas, porque ¡nos encanta

competir! El campo en la Argentina es primer mundo. Competimos y les ganamos a muchos de los mejores del mundo por la eficiencia que hay, porque somos un sector joven, competitivo, que arriesga, que investiga y que trabaja para ver cómo mejorar permanentemente.

¿Qué decimos entonces? Señores, necesitamos, como mínimo, las reglas del juego que tienen nuestros competidores. Con eso nadie para al campo, nadie para a la Argentina. ¿Qué significa? Ni más ni menos: más industria, más comercio, más construcción, más servicios bancarios y más actividad comercial. En esa Argentina que, como hombre del interior, porque soy de Paraná, es el día y la noche cuando funciona la economía en nuestras provincias. Y como hoy cuando hoy la recesión está llevando a que la población en general esté mal.

Sr. Presidente (Fuentes). – Va a contestar el señor jefe de Gabinete.

–El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Pichetto. – A mí me parece que se trata de una mirada parcial.

La preocupación del sector es únicamente la política impositiva y las retenciones. En efecto, no tienen una mirada integral de la Argentina. Este fue también el punto de fractura en la 125.

Asimismo, entiendo que el excedente de un país que indudablemente requiere de la distribución y de un proceso económico más justo, con mayor equidad, y que tiene que contener estas expresiones importantes cuando hay importantes valores internacionales. O sea que en este sentido ustedes siguen preocupados por las reglas del juego que creo que han sido buenas, porque el gobierno siempre ha tenido en cuenta el consumo interno, al pequeño consumidor, a la gente pobre.

Ahora bien, si usted compara el modelo uruguayo de la carne, el sistema de lo que se exporta y de lo que se consume, no tiene nada que ver con la cultura argentina y con lo que come el argentino en términos anuales por cápita de la carne.

–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Pichetto. – Tienen otra cultura. Se exporta el cuarto delantero, y el cuarto trasero forma parte del consumo.

Y la verdad es que este debate da para mucho. De hecho, me gustaría, en algún momento y en algún lugar, poder hacerlo, como lo estamos haciendo. Yo no quiero monopolizar el uso de la palabra. Le voy a dar la palabra al jefe de Gabinete.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tenemos treinta y dos expositores.

Por favor, continúe señor jefe de gabinete.

–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Etchevehere. – No se trata simplemente de recaudar; y el campo ha prestado sus servicios. En diez años, solamente en concepto de retenciones a los granos, se han retenido 76 mil millones de dólares, sin embargo, el 90 por ciento de los caminos de la Argentina siguen siendo de tierra.

Ni siquiera podemos entrar al campo para producir, para sacar un enfermo o para llevar un chico a la escuela. Tenemos serios problemas de infraestructura y, evidentemente, faltó algo más que solamente recaudar y solamente tener mayoría en las cámaras legislativas: faltó trabajar y prever. Es decir, prever qué pasa ahora en un momento que hay exceso de agua para otro momento de sequía.

Con respecto al debate, senador, estamos para debatir, estamos abiertos, y vamos a seguir para cualquier tipo de debate. Pero, cuanto antes se resuelvan las cuestiones –y podemos decir todo lo que quieran–, antes se van a ver los resultados.

Hay tiempos biológicos en el campo, en la ganadería y en otras actividades a largo plazo y alta inversión, que necesitan urgente resolución. Por eso –y en su momento también le mandamos una carta al jefe de Gabinete–, hemos solicitado el establecimiento de políticas públicas a largo plazo, para que la Argentina sea un país previsible, para que se pueda invertir a largo plazo, para que se pueda generar empleo y para incorporar a esa gente que usted mencionó. En efecto, coincidimos en el hecho de que es inhumano e inhumano que hoy haya pobres en la Argentina con la riqueza que ha ingresado a nuestro país en los últimos años.

Sr. Presidente (Fuentes). – Perdón, atento a que la mecánica pactada era funcionario, expositor y funcionario, y el senador Miguel Pichetto, al pedir autorización para hacer uso de la palabra, la cual se le ha concedido, hay senadores que piden idéntico privilegio. Por consiguiente, le voy a otorgar la palabra, porque otros senadores desean formularle preguntas al presidente de la Sociedad Rural sobre algunos temas.

–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Luna. – Disculpe, yo no quiero formular preguntas para el presidente de la Sociedad Rural, porque no vinimos a escucharlo a él exclusivamente; vinimos por otro tema. Y quienes queremos escuchar la explicación de un proyecto de ley que, por lo menos para mí, tiene una connotación completamente diferente a lo que el presidente de la sociedad rural está planteando, porque forma parte de una concepción que no es Venezuela pero es profundamente nacional y popular y pone su visión, su mirada en el eslabón más débil de la cadena de consumo, como así trabajamos también en ese mismo sentido cuando sancionamos la ley de peón rural que no se cumple, esos temas debemos plantear. No estamos acá para escuchar a una parte de la sociedad que tiene una mirada que todos conocemos. Le pido, presidente, que respetemos la mecánica.

Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias, senadora.

Tiene la palabra la señora senadora De la Rosa.

Sra. De la Rosa. – Quiero hacer una pregunta. En este ámbito estamos discutiendo tres proyectos de ley que envió el Poder Ejecutivo nacional, tengo entendido que uno de los proyectos de ley se ha copiado de Venezuela o del chavismo. Quiero que me diga cuál de esos proyectos.

Abastecimiento, como usted sabe perfectamente porque seguramente lo ha leído, es una ley de 1974 de un gobierno peronista y que hoy está en vigencia. ¿Cuántos años tenía Chávez en el 74? ¿20 años? ¿De qué está hablando?

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete.

Sr. Capitanich. – Moción de orden, presidente. Cuando invitamos a alguien, los invitados exponen y en virtud de eso continúa el debate. De lo contrario, se genera un debate alternativo.

Como acá no se debate la iniciativa legislativa, sino que se ha planteado un debate respecto de la política agropecuaria. Me parece que el debate de política agropecuaria amerita generar una disidencia respetuosa. Primero y principal, la República Argentina ha tenido, en los últimos 11 años, un incremento sistemático a nivel de superficie sembrada. Estamos atravesando entre 32 y 34 millones de hectáreas. Las progresiones para el programa 2020 implica llegar a entre 41 y 43 millones de hectáreas. Se ha tenido un incremento sustantivo del nivel de producción de 60 millones a la proyección de este año que son de entre 105 y 106 millones de toneladas. Tuvimos incremento de superficie sembrada y del volumen producido.

En segundo lugar, es cierto que ha habido política de incentivo por parte del Estado. Por ejemplo, la reducción del IVA en materia de agroquímicos y fertilizantes. Eso ha tenido un impacto que es necesario plantear del 21 al 10,5 por ciento; la asignación de recursos para el sector agropecuario que es equivalente a prácticamente 54 mil millones de pesos en la sumatoria global; es importante observar, por ejemplo para la política cárnica, otras cuestiones que no se mencionan aquí. Cuando uno toma una estadística larga de tiempo en 1835, 12 millones de cabezas, se proyecta a 1976, 61 millones de cabezas; ¿por qué de 61 millones de cabezas bajó a 47 millones de cabezas desde el año 1976 al año 1988, siendo que gobernaba la dictadura militar con el principio de libre mercado y no injerencia en la economía y después, el gobierno radical, impulsado por el doctor Ricardo Alfonsín? La primera pregunta que deberían responder es: ¿por qué disminuyó el stock de ganado bobino con diferentes políticas? Lo que es cierto y no hay dudas de ello, es que ha habido un incremento en el nivel de demanda de carne. El nivel de demanda de carne aumenta cuando hay más inclusión social, más trabajo y mejores salarios porque eso aumenta el poder de compra y, en virtud de ello, aumenta el volumen

total de consumo de proteínas de las familias. Esto es objetivo.

La República Argentina tiene en promedio el equivalente a 113 kilos de proteínas por año. Si toma el promedio de aumento del consumo por habitante de carne porcina de 4 a 11 kilos, aumentamos el nivel de producción de carne de pollo de 19 a 41 kilos; incrementamos en 40 millones de dólares las exportaciones de carne aviar a 637 millones de dólares. En el caso concreto de la producción ganadera tuvimos un incremento hasta 58 millones de cabezas desde el año 2003, esto es objetivo, después hubo una reducción del número de cabezas del ganado.

Me parece que es muy importante remarcar que también existen problemas que tienen que ver con la combinación adecuada de políticas de corto, mediano y largo plazo. Objetivamente, es cierto lo que dice que la proporción relativa de exportación en la Argentina era del 20 por ciento y ahora se redujo al 7 u 8 por ciento de exportación y 92 o 93 por ciento de consumo interno. Eso es objetivamente cierto. También es objetivo que independientemente de las restricciones es necesario incentivar sustancialmente la capacitada de forraje e integrar generalmente el proceso de producción de maíz que es muy importante por la producción de bioetanol, burlanda y, a su vez, incremento de forraje para incrementar sustancialmente la capacidad de tiro. Pero creo que eso es parte de una matriz productiva y me parece que es parte de un debate que es necesario hacer. La verdad es que nosotros consideramos que es muy importante reconocer el volumen total de inversión pública de la República Argentina en los últimos 11 años. Fueron, aproximadamente, 400 mil millones de pesos. Traducido en kilómetros ha habido 4.000 kilómetros de rutas nuevas, cerca de 2.000 kilómetros de autopistas, ha habido 5.500 kilómetros de tendido de electroductos en toda la República Argentina y un incremento sustancial de subsidios a la producción energética para que la matriz de producción industrial implique agregación de valor y, a su vez, los derechos de exportación tienen dos funciones claves en la economía: primero, el sistema de abaratamiento de precios internos para inducir a procesos de industrialización y de valor agregado y segundo, la capacidad de percepción de ingresos con el objetivo redistributivo de inclusión social y mejor distribución del ingreso.

En definitiva, lo que quiero transmitir es que no ha sido una década en la que el Estado no ha acompañado un diseño de políticas para generar industrialización, expansión productiva y volumen total de exportaciones. Lo mismo ocurre con el trigo; si uno toma la estadística de 1960 a la fecha hemos tenido 7, 6 millones de hectáreas sembradas hasta 3,3 millones de hectáreas. Hoy tenemos 4,3 a 4, 5 millones de hectáreas y depende de la tasa de rentabilidad, productividad y rendimiento el abastecimiento a 6 millones de toneladas del mercado interno, 9,2 millones de toneladas del abastecimiento del stock y se van a liberar las 500 mil toneladas desde el punto de vista del incremento del volumen total de

exportaciones y, obviamente, con estos incentivo se generan las condiciones para la producción y el abastecimiento del mercado interno y etcétera.

Entonces, no es objetivamente comparable la situación Chile, Perú, Colombia o Paraguay. Me parece que es muy importante porque no es equivalente en materia de proporción relativa a la participación del sector agropecuario en la participación de la economía, no es exactamente lo mismo en términos de especialización de producción, son economías de escaso nivel de diversificación y alto nivel de dependencia al complejo minero. Y ese alto complejo minero con determinado productos o producciones, por ejemplo, cobre, oro, plata y otros minerales de la cadena de valor minera, espárragos y otro tipo de bienes, ejemplo Perú.

Quiero transmitir que la composición, el número de población, matriz productiva, complejidad del sistema económico es diferente. Lo mismo ocurre en materia de leche. Nosotros tuvimos un aumento de 8 mil millones de litros a 11,5 mil millones de litros estimados este año. Obviamente que tenemos que llegar a 16,9 millones de litros y eso tiene que ser parte de una política. Obviamente, tenemos que plantear el tema precios, el de financiamiento y abaratamiento correspondiente para lograr el impulso para financiamiento de capital de trabajo. Lo mismo que tiene que ver con los niveles de industrialización en virtud del mercado externo.

Por eso, ustedes tienen siempre una visión absolutamente dura, crítica y todas las exposiciones de la Sociedad Rural tienen una característica particular: unen el arco opositor, siempre para criticar y fustigar al gobierno. Lo hacen también desde la mesa de enlace y me parece legítima su estrategia y su aspiración política y me parece legítimo que, en virtud del escenario próximo electoral, puedan participar en elecciones a los efectos de ver la ratificación del electorado desde el punto de vista de la manifestación de voluntad popular a sus políticas. Por eso creo que es bueno plantear que el debate sea sobre números francos, objetivos y racionales; no sobre una mirada sesgada y es necesario seguir este debate en algún momento en otra oportunidad. Porque sugiero que el Senado convoque a un debate sobre política agropecuaria con muchísimo gusto voy a estar dispuesto a venir a discutir con la mesa de enlace, con números. Y vamos a discutir respecto a cuestiones que nosotros también objetivamente creemos que es necesario mejorar y perfeccionar porque las políticas públicas en el diseño de las mismas requiere un nivel de diálogo, de racionalidad, de inteligencia y sobre todo de conocimiento. Y creo que es muy importante observar también que en los últimos once años ha habido inversiones en ciencia y tecnología, repatriación de más de mil científicos y técnicos, una revalorización del INTA, del SENASA, un desarrollo importante para el mejoramiento de las tecnologías que es muy bueno y que se hizo a partir de recursos presupuestarios del Estado, y el Banco de la Nación Argentina ha sido una herramienta importante. Y esto es bueno reconocerlo

porque si no, pareciera ser que no se ha hecho nada en todo este tiempo.

En el año 2002 el sistema financiero acreditaba que el sector agropecuario tenía 56 por ciento de morosidad. ¿Saben cuánto es la morosidad del sector agropecuario ahora? 1 por ciento. ¿Saben cuánto es la morosidad global del sistema? 1,8 por ciento. Eso quiere decir que ha habido capacidad de ejercicio de ingreso.

Y a su vez también es importante destacar la contradicción permanente de la República Argentina. Se fustiga la regulación hipotética de mercado de exportación; ahora, cuando existe libertad de exportación no se liquida atentando a la estabilidad macroeconómica. Ejemplo, soja, mercado libre. ¿Qué se plantea? Retención, porque en definitiva se está en contra de la política económica. En cambio, cuando hipotéticamente existe una restricción para el abastecimiento del mercado interno se plantea también ataques sistemáticos al gobierno.

Por eso creo que es bueno pensar desde la racionalidad, desde una inteligencia global, y pensar también con los números en la mano que no siempre lo que se pregona ideológicamente ha dado resultados desde el punto de vista de la historia hacia ustedes. Es bueno pensar también que nosotros creemos objetivamente que en muchos casos cuando ha habido ataques respecto a los derechos de exportación vinculado a cantidad producida o cantidad exportada efectivamente no ha habido una correlación directa, y hoy el debate central en la República Argentina tiene que ver con un concepto, que es tasa marginal de sustitución de unidad de superficie. Ejemplo, en el sector ganadero usted bien sabe que de cerca de 66 a 54 millones de hectáreas aproximadamente hubo una reducción de 11 millones de hectáreas de superficie asignada a la producción ganadera. Y paralelamente con eso lo que ha habido es una sustitución clara. Ha habido un incremento en la superficie sembrada de soja y en muchos casos hay unidades sustitutivas de unidad de superficie para producción de tambos, de ganadería o de trigo o de otros cultivos.

Entonces, me parece que forma parte de un debate claro respecto del incremento total de superficie, rentabilidad de cada uno de los cultivos e incremento desde el punto de vista de la productividad marginal en superficie, y creo que eso es lo que nos va a permitir acrecentar los niveles de desarrollo.

Ahora bien, me parece que es bueno remarcar lo siguiente. Primero, que hoy la morosidad del sistema agropecuario no existe, es de 1 por ciento. Segundo, que ha habido un sistemático esfuerzo para la producción en el tema de caminos. Al respecto, quiero decirles que hay 40.000 kilómetros de red vial pavimentada asistida por el Estado. Cerca de 12.000 por el sistema del contrato CREMA, casi 9.000 por el sistema de concesiones y el resto con un sistema de mantenimiento y de intervención del Estado. Por ejemplo, en la provincia del Chaco nosotros tenemos 28.000 kilómetros cubiertos con el

sistema de consorcios rurales que funciona a partir de la afectación específica de recursos, y eso es muy bueno.

Sr. Presidente (Fuentes). – Con todo respeto, ¿puede ir redondeando, señor ministro?

Sr. Capitanich. – Lo que quiero transmitir es que no en todas las provincias el funcionamiento de la red vial terciaria es la misma, no en todos los niveles de inversión provincial es equivalente. En muchos lugares los niveles de asignación de recursos han permitido mejorar sustancialmente el transporte. Es necesario seguir invirtiendo en logística integrada y por eso es importante también invertir desde represas hidroeléctricas hasta sistema de transporte ferroviario, con sistema de cooperación y financiamiento con otros países del mundo.

Lo que quiero transmitir es que independientemente de las críticas y las objeciones políticas con un prisma ideológico determinado, es necesario reconocer lo mucho que se hizo. Por ejemplo, el incremento en los niveles del crecimiento del producto interno bruto, de producto interno bruto industrial, los 6,3 millones de empleo, el sistema de inclusión social ha garantizado mayor equidad distributiva. Que siempre falta, no le quepa la duda a nadie; que siempre es necesario hacer más, también. Ese es el gran desafío que tenemos, pero es bueno también sentarnos a una mesa planteando los hechos sumamente positivos que han ocurrido, las asignaturas pendientes y la combinación óptima de decisiones que nos permitan seguir pensando en el futuro.

Sr. Presidente (Fuentes). – Señor De Angeli: quiero hacerle un pedido de disculpa personal en lo siguiente. El mecanismo que habíamos acordado fue interrumpir el derecho que teníamos los senadores de discutir con los funcionarios en beneficio de la exposición que iban a hacer las entidades. Por eso, limitamos nuestro propio derecho.

Yo cometo el error ante el pedido del senador Pichetto porque quien debió haber contestado era el funcionario, pero como creo que era una moción de orden que me hacía le di la palabra. Eso automáticamente disparó como contrapartida que otros senadores alegaran derecho para hablar. Entonces, suspendo la palabra a los senadores. Suspendemos. Después hablamos todos. Si no, habla usted, habla él. No.

A continuación, el señor Blanco.

Sr. Etchevehere. – Senador, termino.

Sr. Presidente (Fuentes). – No, ya está terminado.

Sr. Etchevehere. – Un segundo, senador.

Sr. Presidente (Fuentes). – No puede ser.

Por favor, señor Blanco.

Sr. Blanco. – Buenas tardes a todos. Soy Miguel Blanco, presidente de IDEA, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, que reúne más de 400 empresas, más de la mitad de las cuales son pymes de todos los sectores de la economía; es decir, del sector industrial, del sector de servicios, del sector productivo. Además, soy el coordinador del Foro de

Convergencia Empresarial que empezó a reunirse a principios de este año y que ha sacado un documento que se llama *Bases para la formulación de políticas de Estado*, que apunta a generar las condiciones para la inversión y la generación de empleo.

Celebro la invitación que ha hecho recién el jefe de Gabinete a debatir estas propuestas, pero le quiero recordar que nosotros le entregamos el documento dos días después de emitirlo, el día 22 de abril, y le pedimos una entrevista para esto. Todavía no hemos tenido respuesta. Ahora, con la invitación a debatir la política agropecuaria y el resto, creo que estaríamos incluidos para poder discutir esto.

Nosotros consideramos que la mejor forma de defender los derechos del consumidor es promover el incremento de la oferta de bienes y servicios, dar mayores alternativas, promover la competitividad, promover la productividad de las empresas para bajar los costos. Creemos también que es necesaria la inversión para salir de la situación actual así como también la generación de empleo genuino, porque de esa manera creamos más consumidores.

Vamos a la realidad, que es lo que se planteó aquí. Hoy estamos en recesión, hay pérdida de empleos, hay baja de la actividad productiva y para salir de eso necesitamos inversión y promoción del empleo. ¿Hay oportunidades en la economía argentina? Si, las hay. Están las condiciones macroeconómicas de las que se ha hablado que siguen estando vigentes, los precios internacionales, la financiación barata —para otros países, no para nosotros lamentablemente—, las oportunidades en el agro, en la minería, en la energía, en los servicios. ¿Hay condiciones para la inversión? ¿Hay condiciones para que se genere la inversión necesaria para explotar esas oportunidades y promover el empleo que necesitamos para sacar a gran parte de la población que hoy está excluida o en la pobreza? Vamos a analizar la realidad.

Hoy tenemos una alta tasa de inflación, muy superior a la de los países de la región y una de las mayores del mundo. Ese es uno de los elementos que toma quien decide una inversión. Tenemos una alta presión tributaria, récord en la Argentina y muy superior al resto de nuestros competidores en la región. Tenemos restricción, tenemos un cepo cambiario que genera restricciones a la importación, hay cupos a la exportación, hay imposibilidad de remesa de dividendos o prohibición de remesa de dividendos y tenemos cortes de electricidad y gas a las industrias. Esa es la situación que tenemos hoy, ya de por sí negativa para la inversión.

Ahora, si a esto le agregamos lo que propone esta ley, donde las decisiones empresarias van a estar sujetas a la discrecionalidad de los funcionarios en lo que es fijación de precios, fijación de márgenes de ganancias, fijación de volúmenes de producción, fijación del *stock* necesario para trabajar y esto va a ser sujeto a multas, a clausuras, a decomiso de mercaderías sin poder recurrir a la Justicia, nosotros consideramos que esto no juega a favor de la inversión. Acá evidentemente hay una dife-

rencia de criterio. Acá se planteó que todas estas leyes van a alentar la producción y generación de empleo. Nuestra opinión es todo lo contrario. Lamentablemente, los hechos son los que van a dar la razón a una u otra parte, pero el tema es que si vamos adelante con esta ley y los hechos son los que nosotros planteamos esto se va a pagar con desocupación, con menores consumidores y menor empleo.

Por último, un aspecto práctico. Tenemos innumerables unidades productivas. Tenemos innumerables pasos en la cadena de producción. Hoy las empresas van a tener que generar la información para que la Secretaría de Comercio pueda decidir si hay precios excesivos, si hay márgenes de ganancia excesiva, etcétera. Todo eso ya implica un costo administrativo significativo en las empresas y, además, vamos a tener que esperar la decisión con la dinámica de las operaciones que hoy tienen las empresas se mide en término de la velocidad de las redes informáticas. Eso ya lo estamos sufriendo en este momento con los trámites de declaraciones juradas de importación, en donde tenemos que esperar la decisión del funcionario para saber si podemos importar o no. Todo eso va a reducir la competitividad de nuestras unidades productivas, va a aumentar los costos y, en definitiva, va a jugar en contra de los consumidores.

Ese es el punto de vista de IDEA y del Foro de Convergencia Empresarial y estamos dispuestos a discutirlo en cualquier foro en el que nos convoquen.

Sr. Presidente (Fuentes). — Tiene la palabra el señor Álvarez.

Sr. Álvarez. — Vamos veinte minutos de las exposiciones de los oradores que se van sentando y la verdad es que están convocados para hablar sobre los proyectos de ley. En los veinte minutos de los distintos oradores, poco escuchamos hablar o nada —diría yo— sobre los proyectos en sí mismos.

El primer orador planteó la cuestión de la política agropecuaria. Nosotros no le esquivamos el bulto y el senador Pichetto y el jefe de Gabinete le contestaron, pero no hizo ningún planteo con relación a la letra de ninguno de los proyectos de ley. Dijo que estábamos copiando un proyecto de Venezuela. Como dijo la senadora, este proyecto es de 1974, salvo que Perón haya conocido a Chávez cuando tenía diez o quince años. Habrá que preguntar a quién en ese momento redactó ese proyecto de ley.

Yo les puedo asegurar que no hay un solo artículo, lo digo categóricamente, de los tres proyectos que mandamos que tenga inspiración ni se asemeje a ninguno de los proyectos de ley de Venezuela.

Y lo digo, también, porque un diputado de la oposición planteó que estábamos hablando del sistema endógeno de Venezuela. Después averigüé y sistema endógeno de Venezuela es una innumerable cantidad de leyes. La verdad es que ni un solo artículo tiene que ver con Venezuela. Esto con relación a la primera exposición.

Y, ahora, el señor representante de IDEA habla de que no vamos a poder recurrir a la Justicia. ¿En dónde dice esto en los proyectos de ley? Van a fijar los precios de la economía ¿Cómo? ¿En dónde están? ¿De qué artículos estamos hablando? Yo le quisiera dar nuevamente diez minutos para que nos diga qué artículo tenemos que debatir y, en su caso, discutir el Ejecutivo con los senadores de todo el arco político y modificar.

Sr. Presidente (Fuentes). – Señor Blanco: yo no le voy a dar diez minutos, pero sí el derecho a contestar.

Sr. Blanco. – Yo creo que he sido claro con respecto a que nos oponemos a la sanción de esta ley. Creemos que no es necesaria. Ya hay una Ley de Defensa del Consumidor y ya hay un mecanismo para actuar a través de la justicia para cualquier infracción de esta ley. Creemos que no es necesario que la Secretaría de Comercio reemplace a la justicia en esto.

Si la justicia es morosa, si sus tiempos no son los adecuados, creo que el secretario de Justicia puede generar una ley que corrija esta situación. No es con el replazo de la justicia por la Secretaría de Comercio que vamos a solucionar el problema.

Sr. Presidente (Fuentes). – Muchas gracias.

Sr. Capitanich. – Lo que quería transmitir, señor presidente, porque es para clarificar la posición de cada uno de los expositores respecto a la evaluación de los proyectos.

El señor Blanco lo que dice es, básicamente, que ellos están de acuerdo con el sostenimiento de la redacción del texto anterior; o sea, no acepta ninguna modificación. Este texto está vigente, con lo cual lo que nosotros propiciamos en esta iniciativa es generar un mecanismo que permita excluir las sanciones de arresto, una serie de cuestiones, de manera de hacer mucho más flexible la posición.

¿Ustedes están de acuerdo con la visión anterior, la ley de 1974?

Sr. Blanco. – Yo me refería a la Ley de Defensa del Consumidor, no me refería a la vieja Ley de Abastecimiento.

Y como yo no soy abogado sino que soy contador público, le dejo esta discusión a los representantes de los abogados y a Máximo Fonrouge que es el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, él va a contestar. Yo no incursiono en ámbitos en los que no tengo todo el conocimiento.

Sr. Presidente (Fuentes). – Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Jaime Campos de la Asociación Empresaria Argentina.

Sr. Campos. – Muchas gracias. Quiero agradecer a las autoridades la invitación. Realmente, considero que es un gran honor tener la oportunidad de hablar en el Senado. Es la primera vez que tengo ese honor. Siempre he dicho que estamos en el templo de la República, aquí es donde la democracia vibra. Realmente, agradecemos mucho la oportunidad de tener estas breves palabras con ustedes.

Nosotros compartimos los objetivos generales del gobierno y de toda la clase política. Queremos como entidad empresaria que agrupa a empresas de una variedad muy grande de sectores. Nosotros no defendemos intereses sectoriales. Al contrario, es una asociación que defiende básicamente criterios institucionales; es decir, nosotros creemos que la debilidad fundamental de la Argentina de los últimos años y no solamente de este gobierno, viene de atrás, es la debilidad institucional, es la falta de previsibilidad, los cambios de reglas de juego. Y me parece que es en esto en lo que debemos trabajar fuertemente y ese es el objetivo central que nos mueve en los trabajos de nuestra asociación.

Consideramos que ello es fundamental para permitir el desarrollo económico. Por supuesto que como representantes de los empresarios queremos que a la gente le vaya mejor, que tenga mayor ingreso per cápita; mejora la vida de todos, mejora la vida de las empresas, se puede vender más, se generan más oportunidades de inversión, hasta las empresas valen más en un ambiente en el que todos prosperamos. Si se quiere son objetivos que compartimos claramente.

Creemos que en estos momentos de la Argentina el objetivo central es volver a recuperar la dinámica de empleo, que está siendo afectada en estos últimos tiempos. Y en este sentido nos parece que para ello es fundamental promover la inversión. Me parece que lo está realmente debilitando la fortaleza del empleo es la falta de inversión.

Y, por otra parte, como todos sabemos si no hay inversión no hay aumento en el salario real; es decir, para haber aumento en el salario real, es una ecuación muy básica la economía, tiene que haber un aumento en la intensidad de capital y esto es inversión. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es si esta norma contribuye a que haya más inversiones en la Argentina. La respuesta que adelanto, la voy a fundamentar un poco después, es que francamente creemos que no.

Creemos que cuando se mencionan las razones, se habla de que se necesitan reglas en materia de aumento de la competencia. Yo creo que en la Argentina existen normas de defensa a la competencia. Si hay que hacer algo más en ese sentido, nos parece bien, porque creemos que es uno de los pilares centrales de la economía tener normas que faciliten y promuevan la competencia.

Por otro lado, sin duda compartimos cien por ciento que es fundamental y vital que haya muy buena defensa del consumidor en nuestro país. Todo lo que ayude a mejorar la defensa al consumidor somos los primeros que la defendemos.

Y en esto quiero ser muy taxativo. Las empresas que yo represento prefieren, absolutamente, la defensa máxima del consumidor. Sufren la competencia desleal producto de la falta de equilibrio y de reglas que defiendan equitativamente a los consumidores. No nos oponemos en absoluto a la defensa del consumidor. Al contrario, creemos que todo lo que sea fortalecer la defensa del consumidor es fundamental y fortalece a las

empresas más productivas, más eficientes que honran su palabra, que honran sus compromisos, que defienden sus productos con marca.

Algo que a veces uno se olvida de decir. Cuando una empresa pone la marca atrás de un producto, está poniendo su prestigio y es la primera que se preocupa de que esa marca, realmente, se refleje en la calidad y en el precio del producto.

Creemos que una de las cuestiones fundamentales, y esto lo hemos dicho muchas veces, es que para defender al consumidor una cosa fundamental es que el consumidor tenga información, algo que han dicho también ustedes, los funcionarios. Y la verdad es que, lamentablemente, el mayor obstáculo para tener información es la inflación. Con tasa de inflación del 40 por ciento el consumidor no tiene en claro cuáles son los precios. Cuando hemos tenido niveles de inflación muy bajos, ahí la competencia es mucho más fácil, porque uno recorre comercios y sabe que puede volver al mes, los dos o seis meses y son los mismos precios. La inflación es el gran enemigo de los consumidores. Y todo el énfasis entonces está en ver qué podemos hacer para atacar a este enemigo.

Creemos que este es un proyecto intervencionista. Aquí ha habido una referencia muy interesante sobre el rol del Estado. Pensamos que el Estado tiene que fijar reglas claras, hacerlas cumplir con toda la fuerza de la ley y todos somos servidores de la ley, esclavos de la ley, empresas, ciudadanos, todos. En eso es absolutamente claro. Pero es muy distinto eso de la intervención casuística sobre las empresas, la intervención caso por caso. Eso es lo que debilita profundamente la actividad económica, dado que el empresario se siente realmente débil frente a la posibilidad simplemente de una intervención puntual, que no está regida por los marcos institucionales.

Diría que en esto —este es un tema de fondo que ha estado sobrevolando— tenemos una visión institucional, según la cual la sociedad civil en la que las empresas tienen un rol central es autónoma. Sé que esto es una cuestión filosófica fundamental. Creemos que la sociedad civil tiene autonomía. Esto significa que el Estado fija reglas —los ciudadanos, a través de la democracia y la República, somos el Estado— y, en el marco de esas reglas, los ciudadanos como individuos, empresarios o trabajadores tenemos la libertad total de operar. Si nos salimos de las reglas, tenemos la sanción que corresponde. Pero reivindicamos muy fuertemente la autonomía de la sociedad civil y eso está en el centro del corazón de nuestra Constitución.

Por último —voy a ser muy cuidadoso con los tiempos—, deseo señalar que la inversión es fundamentalmente un tema de expectativas, además de la perspectiva de rentabilidad, de aumento de las ventas, etcétera, es un tema de expectativas. Lamentablemente, esta norma viene a afectar esas expectativas. Francamente, cualquiera que hiciera una encuesta somera sobre el empresariado —grandes, pequeñas y medianas empresas— y

preguntara: “¿A usted cómo le cae la idea de que haya una Ley de Abastecimiento?” Habría inmediatamente una reacción negativa. Se los puedo asegurar.

Entonces, en este momento, que tenemos que generar expectativas positivas, entusiasmar, generar más inversiones y más empleo, este proyecto realmente tiene un efecto muy negativo.

Por último, leeré la frase con que nuestros colegas del Grupo de los Seis, integrado por la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y otras entidades, cerraron el comunicado de ayer, que me parece que sintetiza muy bien nuestro pensamiento. Dice: “La experiencia internacional demuestra fehacientemente que las economías funcionan y se desarrollan satisfactoriamente en los países en los que el Estado no interviene en forma arbitraria y, por el contrario, en aquellos pocos donde prevaleció el intervencionismo discrecional se profundizó el desabastecimiento, el racionamiento de bienes y servicios, y el desdoblamiento del mercado de cambios, creciendo exponencialmente el mercado informal. Esto terminó fomentando la competencia desleal, la caída de la inversión, el deterioro del mercado del trabajo y el aumento de precios y costos”. Muchas gracias.

Vuelvo a agradecer la oportunidad de tener este diálogo con ustedes.

Sr. Álvarez. —Una contestación. Usted recién habló y dijo lo siguiente: esto influye en las expectativas de las empresas. Y concretamente enfatizó que a cualquier empresario, si se le pregunta lo siguiente, le disminuyen las expectativas. La pregunta era: “¿A usted cómo le cae que haya una Ley de Abastecimiento?” Ésa es la pregunta que usted enuncia.

El problema de esta pregunta es que es una “falacia de pregunta compleja”, así se llama. ¿Por qué es una falacia? Porque usted está partiendo de afirmar una premisa que no existe. Es como decir: “¿es cierto que usted iba a alta velocidad cuando pasó el semáforo en rojo?” Y, bueno, si yo le digo que sí o que no, lo cierto es que había un semáforo en rojo y usted lo pasó. Usted pregunta: “¿a usted cómo le cae que haya una Ley de Abastecimiento?”, como si no existiera una Ley de Abastecimiento. La Ley de Abastecimiento existe en la República Argentina. Entonces, lo que usted está afirmando es falso. Usted está diciendo que en la Argentina se está por sancionar una Ley de Abastecimiento, cuando en la Argentina hay Ley de Abastecimiento desde 1974 y no pasó nada. Pero no lo hace solamente usted, lo hicieron su predecesor y su predecesor en el uso de la palabra.

Lo que quieren no es modificar estos proyectos de ley o introducir cambios. Ustedes quieren aprovechar esta oportunidad para derogar las normas existentes. Ésa es la verdad. Si no, ¿por qué no hacen un sólo planteo? Ni uno. Hablemos de algún artículo de los proyectos de ley, de alguno. Se los pido por favor. Enuncien un artículo de alguno de los proyectos de

ley, hagan una crítica y discutamos eso, que es lo que vinimos a debatir.

No discutamos sobre cuestiones falsas. El planteo que usted está haciendo es falso porque, repito, la Argentina ya tiene una Ley de Abastecimiento desde 1974. Así que cuando se dirija a un empresario, dígame que hay una Ley de Abastecimiento en la Argentina y no le mienta, simplemente eso.

Sr. Campos. – Muchas gracias por la oportunidad de volver a insistir en el punto. Después van a venir algunos abogados que darán precisiones.

A todos los efectos prácticos, en los últimos tiempos trabajamos con la idea de que existía una Ley de Abastecimiento, que estaba –yo no soy abogado, soy sociólogo– dormida, no efectivizada, etcétera.

Lo concreto es lo siguiente: creemos que cuando se somete a discusión un proyecto de ley respecto del cual conceptualmente nosotros estamos en desacuerdo, obviamente no vamos a entrar en una definición del articulado, porque sería un error central. Consideramos que esto le hace mal al país. Creemos que lo que hay que fortalecer es la defensa del consumidor. Si ustedes creen que hay cosas que deberían hacerse en defensa del consumidor, hay normativas específicas –ustedes lo dijeron muy bien– en todos los países del mundo. El corpus que tiene que ver con la protección del consumidor es muy fuerte y en buena hora que sea así. Insisto, represento a empresas que lo que desearían es realmente tener más de esta información, porque muchas veces sufren la competencia desleal de aquellos que no cumplen con las normas que se requieren para los consumidores. Muy por el contrario, pensamos que tiene que haber refuerzo y fortalecimiento. De hecho, hemos tenido diálogo con los usuarios y consumidores, y lo vamos a seguir teniendo porque nos parece fundamental.

Nos parece que este proyecto lo único que hace es generar... Y la prueba es que hay un dato –si me permite, ahí me ayuda la sociología–, que es el siguiente: yo no he visto en los últimos años de la Argentina este consenso en el empresariado argentino. Es la primera vez que veo al empresariado argentino, prácticamente, en su totalidad, en una misma posición. Y ésta fue una reacción natural de todos nosotros. ¿Por qué no ocurrió con otras normas? Con otras normas no hemos tenido este acuerdo, hemos tenido diferencias.

Creo que es bueno y me enorgullece, como ciudadana, ver que el Senado nos ha llamado para escucharnos. Estoy seguro de que los senadores, que son gente muy perspicaz y con mucha experiencia, han percibido este fenómeno. El empresariado en su totalidad –no el sector agropecuario sólo, ni el sector industrial sólo, ni el comercio sólo, ni los bancos– opina que ésta es una mala ley. Es curioso que todos –grandes, pequeños y medianos– pensemos que esta es una mala ley.

Entonces, me parece que ese es el punto que creo que nos obliga a decir que acá hay un tema: si tanta gente y tantas entidades creen que no, evidentemente me parece que hay que escuchar. No estoy diciendo

que pueda haber algunos casos, pero la verdad es que yo percibo que la gran mayoría de las entidades están con una posición contraria a esta norma.

Sr. Capitanich. – Quisiera hacer una observación. Respecto a los oradores, de aquí al futuro, pueden manifestar obviamente su posición desde el punto de vista político, como corresponde hacerlo y lo pueden hacer; pero también sería muy bueno, sea vía a oral o sea por escrito, que nosotros tengamos observaciones específicas respecto a los proyectos en términos de si están de acuerdo o no están de acuerdo; si están de acuerdo, en qué pueden manifestar desacuerdo; y si están en desacuerdo en qué manifiestan el desacuerdo. Eso sería muy bueno para nosotros porque es necesario analizar desde el punto de vista las tres iniciativas legislativas que hemos enviado.

Respecto al tema de la denominada ley que promueve la regulación de las relaciones de producción y de consumo que sustituye la vieja denominación de Ley de Abastecimiento, ley 20.680, como la misma está vigente, entonces, la observación debería ser la siguiente: estamos de acuerdo con el texto actual, estamos de acuerdo con el texto que propone el Poder Ejecutivo o estamos en desacuerdo con ambos textos y, por lo tanto, propiciamos la derogación. Ése es un tema que nos permite simplificar el análisis desde el punto de vista metodológico a los efectos de tener, claramente, la posición de cada parte. Me parece que eso es lo que ayuda al debate.

En estas cuestiones nos parece esencial no dejarnos llevar solamente por una percepción, porque uno puede adquirir una percepción equivocada por una estrategia comunicacional que promueva, efectivamente, esa percepción. Ejemplo, si yo pongo a una persona y digo por todos lados que es violador de menores, seguramente, produciría un asco de carácter colectivo y, a lo mejor, es una persona absolutamente inocente.

Entonces, lo que me parece que es necesario tener es, primero, información, posición, porque me parece que esto tiene que ver con una posición política, una posición ideológica y, a su vez, el análisis correspondiente; porque sí debe funcionar una institución de la democracia como es el Senado de la Nación y el Congreso de la Nación.

De manera que nos parece que eso tendería a clarificar la posición de cada parte a los efectos de que podamos tomar debida nota de las observaciones.

Sra. Costa. – Quiero seguir complementando la propuesta del jefe de Gabinete. Estamos muy atentos escuchando la posición y para poder sacar en limpio cuestiones, propongo que cada candidato que participe hable en nombre de la entidad y no se atribuya ni unanimidad ni capacitación por afuera de la entidad que representa. Eso confunde un poco y a mí me llega distinto el mensaje. Quiero escuchar la posición de la entidad que representa, porque usted mencionó que no quiere discutir artículo por artículo una ley con la que está completamente en desacuerdo, ya no de la reforma,

sino de la ley, y menciona al Grupo de los Seis como un consenso total. Estuve antes de ayer con uno de los integrantes del Grupo de los Seis, la Cámara Argentina de Comercio, y discutimos artículo por artículo y nos hicieron propuestas, algunas muy razonables desde mi punto de vista y les propuse que traigan una redacción alternativa.

Entonces, me parece que se atribuyó algo que no es así en la realidad y que me gustaría que cada uno hable desde su lugar, porque es desde donde cada uno tiene que hablar.

Por otro lado, tomando lo que dijo el jefe de Gabinete sobre la vigencia o no de la ley 20.680, no es una cuestión de lo que uno piensa o de lo que uno quiere. Está el digesto jurídico aprobado hace dos meses por este Congreso, no hay ninguna declaración de inconstitucionalidad; entonces, está vigente. Si ustedes piensan que es anticonstitucional y un juez determina la constitucionalidad, a uno porque no le gusta no puede decir que no está vigente.

Por lo tanto, partamos y dejemos de confundir a la gente con que se viene con una nueva ley, cuando en realidad ya está vigente una ley, porque no se demostró que no está vigente.

Si creen que la reforma está inspirada —no la ley— en algunas legislaciones internacionales, por favor presenten qué artículo está tomado y de qué ley para que nos quede en claro. Porque uno cuando escucha una canción de un músico dice esto me suena a algo y hay muchas veces, inconscientemente, inspiración. Si ustedes creen o tratan de forzar una relación entre la legislación internacional y la nuestra, tráiganlo.

Como dijo Julián, esto hace 40 años tiene el mismo texto. Comparen y tómense el trabajo de leer artículo por artículo la reforma propuesta y la ley de 1974 y díganme por dónde se metió en la legislación internacional. El texto que estamos tomando para hacer la reforma es el original. Entonces, cómo se mete la legislación internacional en ese pasaje.

Si van a hacer esa acusación, porque es una acusación en el fondo, que uno puede discutir cuál es el sentido de la misma, por favor que lo muestren, concretamente, porque si no es abstracto y se presta a una mala interpretación.

Sr. Presidente (Fuentes). — El señor Osvaldo Cornide de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa...

Sr. De Jáuregui. — El señor Cornide se tuvo que retirar y me pidió que por favor transmita la postura que tiene la Confederación Argentina de la Mediana Empresa con respecto al proyecto de ley.

Sr. Presidente (Fuentes). — Cada vez que venga un expositor que manifieste su nombre.

Sr. De Jáuregui. — Mi nombre Ignacio De Jáuregui y soy secretario de Asuntos Legales, Laborales y Sociales de la CAME. En primer lugar, como se hizo alguna referencia anterior sobre que alguna entidad

estaba integrada, de ese 50 por ciento, por pequeñas y medianas empresas; quiero decir que la CAME es una entidad que agrupa a 1.600 cámaras, íntegramente, integradas por las pymes. La CAME representa única y exclusivamente a las pymes del comercio, la industria y las economías regionales.

Dicho esto, voy a leer, brevemente, algunas de las consideraciones que el señor Osvaldo Cornide elaboró para poder plantearles a los señores senadores.

En primer lugar, este proyecto de ley o estos proyectos de ley modifican 7 leyes, básicamente. Con lo cual, entendemos la complejidad que se está planteando, en la que se modifica la Ley de Abastecimiento, la Ley del Defensa del Consumidor, la Ley de Defensa a la Competencia, la Ley de Lealtad Comercial, la Ley de Organización de la Justicia, la Ley de Ministerios, el Código Procesal Civil y Comercial, básicamente, y algunas normas complementarias. Es complejo y creo que merecería, quizá, algún tratamiento separado porque no resulta exactamente lo mismo la Ley de Abastecimiento que la Ley de Defensa del Consumidor. Tratan supuestos distintos y creemos que, de alguna manera, debería preverse esto.

Sin perjuicio de ello, quisiera hacer algunas consideraciones respecto a las leyes que se están tratando en el día de hoy. En este sentido, respecto a la modificación de la propuesta de la Ley de Abastecimiento, CAME considera necesario señalar lo siguiente: primero, ninguna entidad como CAME se opuso a la clausura arbitraria de la Ley de Abastecimiento, 20.680, dictada en 1974.

Segundo, la realidad indica la existencia de mercados altamente concentrados, capaces de generar distorsiones en los precios relativos de la intermediación y en el abastecimiento. Ello permite el ejercicio abusivo de su posición dominante de las empresas monopolísticas y oligopólicas nacionales y transnacionales, fijando precios y condiciones a las pequeñas y medianas empresas en la industria del comercio y de las economías regionales.

Que las pequeñas y medianas empresas, por su baja incidencia en la organización de los mercados, resulta imposible pensar que puedan realizar actos como los que el artículo 4° de la ley penaliza, como ser elevar artificialmente los precios, revaluar existencias, acaparar materias primas, crear artificialmente etapas en la distribución, desviar o discontinuar el abastecimiento normal y habitual de una zona sin causa justificada.

En razón de las circunstancias expresadas consideramos que las pymes deben ser excluidas de cualquier legislación que implique controles y sanciones por parte del Estado, ya que constituye un mercado transparente.

Por otra parte, en la Argentina hay empresas y grupos monopolísticos y oligopólicos, tanto en los sectores públicos como privados, que requieren controles y sanciones para evitar abusos que atenten contra los derechos de los consumidores y usuarios. Conducta esta, también, que afecta a las pymes condicionando

su competitividad. No cabe duda que ello requiere una legislación adecuada.

La CAME reitera su convicción de que la base del desarrollo es la actitud privada junto a un Estado fuerte y eficiente. En definitiva, CAME solicita la exclusión con respecto a la Ley de Abastecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Sin perjuicio de lo expuesto y en relación a las modificaciones planteadas a la Ley de Abastecimiento, ahora denominada de las relaciones de producción y consumo, debe destacarse que el proyecto planteado no se diferencia sustancialmente de las atribuciones que anteriormente se otorgaban a la Secretaría de Comercio Interior en la materia. Entre ellas, la de poder fijar precios máximos y mínimos, márgenes de utilidad, normas de comercialización, continuidad en la producción, cuotas y volúmenes mínimos y ecuaciones económicas. Poder secuestrar toda y cualquier documentación comercial que considere pertinente y obligar a llevar los registros y libros especiales que estime pertinentes. Se mantiene también la clausura preventiva de establecimientos por hasta treinta días, haciendo reserva respecto de la constitucionalidad que pueda imponer esa facultad que se mantiene respecto de la legislación actualmente vigente. Se mantiene la facultad de intervención, secuestro y posterior venta de mercaderías en casos de que exista desabastecimiento sin necesidad de depósito previo ni juicio de expropiación. Se conserva la delegación a los gobernadores de facultades prácticamente idénticas a las que conserva la Secretaría de Comercio. Y se elimina la pena de prisión y se elevan las multas previstas en la que vieja Ley de Abastecimiento. Y en esto quiero hacer una aclaración: se dijo que se eliminaba la cuestión penal. Desde nuestra concepción —creo, no equivocada— las multas siguen siendo una pena, estamos dentro del derecho penal, y lo que se elimina es un tipo de pena: el de la pena de prisión. El resto es un régimen sancionatorio y debiera comprender los derechos generales del derecho penal aplicables a la materia.

Por todas las razones expuestas, CAME considera que la pequeña y mediana empresa debe quedar excluida de los alcances de la Ley de Abastecimiento, manteniéndose su obligatoriedad respecto de las grandes empresas. Pero, en su defecto, para los casos que esta Honorable Cámara no lo considere adecuado, sugerimos y solicitamos que, a fin de salvaguardar los derechos de las pymes, incluya una norma o un artículo que prevea que, para ejercer las acciones que la ley otorga a la autoridad de aplicación, se tengan en cuenta las siguientes pautas: la dimensión económica de la empresa; negocio de explotación; la posición de la empresa en el mercado; el efecto que pudiera generar en las pequeñas y medianas empresas; medida de carácter general teniendo en consideración la baja incidencia de la pyme en los mercados.

Por otro lado, voy a hacer algunas consideraciones generales respecto del resto de las leyes que se propo-

ne modificar, esto es, defensa del consumidor, lealtad comercial y defensa a la competencia. En las leyes referidas para la aplicación de sanciones, en todos los regímenes que contempla la ley, además de incrementarse sustancialmente los montos de las multas, no existe distinción entre el accionar de las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas. Por lo que, en consideración de los argumentos que antes expusimos, se sugiere la incorporación en los respectivos artículos de pautas que establezcan lo siguiente: que para la aplicación de las sanciones se tome en cuenta la dimensión económica de la empresa; el negocio de explotación, atendiendo en especial al capital de giro; tipo y estructura jurídica de la empresa, en especial la referida a la empresa, negocio o establecimiento atendido por el grupo familiar, y el efecto o importancia económica de la infracción.

Respecto de las sanciones que impongan multas, resulta excesivamente gravosa para las pymes la exigencia del pago previo de la multa para ejercer el recurso de apelación de las sanciones impuestas, por lo que se sugiere y solicitamos la eliminación de este requisito que se exige en los regímenes mencionados. Una aclaración es que no resulta lo mismo para una pequeña y mediana empresa hacer frente a una multa, sobre todo con los montos que se han tenido en cuenta, que para una gran empresa. Esta medida creo que afecta principalmente a las pymes.

En cuanto a los sistemas de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, sin perjuicio de señalar que los consumidores y usuarios cuentan en la actualidad con el sistema nacional de arbitraje de consumo, no habiendo quedado desprotegidos sus derechos en estos años, es posible que algunas cuestiones de las relaciones de consumo requieran un mayor amparo. No obstante, el sistema de resolución de conflictos propuesto en el proyecto de reforma merece observaciones de carácter técnico-jurídico, permitiéndonos resaltar los siguientes como aquellos que mayor perjuicio acarrearían a las pymes transformándolas en el nuevo actor débil de las relaciones de consumo. Al fijarse como opción del consumidor fijar la competencia en el domicilio del lugar de consumo o uso, o por el domicilio del consumidor, resulta imposible para las pymes, vendedoras o prestadoras de servicios, asumir su defensa cuando dichos domicilios queden alejados del domicilio de la empresa, por ejemplo, si un turista de Jujuy hace una compra en Buenos Aires, la pyme puede ser demandada en Jujuy —a título ejemplificativo—. También resultan excesivamente elevadas y gravosas, y consecuentemente desproporcionadas, las multas que se imponen por incumplimiento a los acuerdos homologados por la Secretaría de Comercio. Creemos que resulta inconstitucional la delegación de facultades en la justicia administrativa de las relaciones de consumo para que ésta sea quien fije indemnizaciones o determine daños, como pretende el proyecto de ley.

Consideramos que el proyecto de ley fija una limitada posibilidad de defensa y ofrecimiento de

prueba y establece un procedimiento que no garantiza plenamente el derecho de defensa de las pequeñas y medianas empresas.

Por último, se considera que las nuevas transgresiones nunca pueden constituir actos que interrumpen la prescripción, pues se trata de hechos nuevos y distintos que generarán nuevas acciones administrativas.

Cerrado este concepto, quisiera transmitir tres preguntas que hicimos llegar con anterioridad, pero es la oportunidad ya que están los funcionarios que fueron invitados para explicarnos el proyecto. Se ha hablado durante las exposiciones del jefe de Gabinete y del secretario de que se ha tenido en cuenta la situación de las grandes corporaciones frente a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que nosotros preguntamos es ¿qué medidas concretas consideran en la ley para proteger a las pequeñas y medianas empresas respecto a situaciones de monopolio y oligopolio?

La segunda pregunta tiene que ver con qué medidas concretas pueden aplicar estas leyes al mayor flagelo que tiene el comercio pyme hoy, que es el comercio ilegal. Estamos preocupados por los consumidores pero, lamentablemente, el comercio ilegal es un flagelo que hoy destruye el comercio pyme en toda la Argentina, entonces queremos saber en qué medida este proyecto de ley puede colaborar.

Y, por último, ¿en qué medida se puede considerar que las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente atendidas por sus dueños, sin recursos, pueden hacer frente a algunos de los requisitos que establece la ley en igualdad de condiciones que las grandes corporaciones.

Sr. Presidente (Fuentes). – Esas dos preguntas habían sido ya remitidas: ¿cuáles son los mecanismos concretos que la ley prevé para proteger a las pymes frente a los abusos de las grandes corporaciones? Y segundo, ¿qué medidas concretas se han diseñado para que la pequeña empresa, atendida por su dueño y carente de recursos, pueda hacer frente a los reclamos en condiciones de igualdad?

Sr. Capitanich. – Brevemente, con respecto al tema del texto que nosotros enviamos al Congreso, a esta Cámara, el artículo 7º tiene cinco elementos que contemplan específicamente la situación de pequeñas y medianas empresas desde el punto de vista de las asociaciones pecuniarias. Ese es un tema que hemos podido observar muy claramente.

Segundo, con respecto al tema de comercio ilegal, en definitiva, es una facultad o una atribución de carácter regulatorio de los municipios. Eso es un tema que requiere, por un lado, un involucramiento muy adecuado del tema. Usted se refiere, básicamente, a vendedores ambulantes o que no cumplen los requisitos correspondientes. También las modalidades que tienen que ver con la intervención desde el punto de vista de los organismos de control por parte del Estado.

Sr. Álvarez. – Yo le agradezco haber hecho observaciones sobre los proyectos de ley particularmente,

en primera medida; creo que son todas atendibles. Fueron discutidas en el ámbito del Ejecutivo las observaciones que plantea y tenemos una respuesta para esas observaciones, aunque puede ser que la respuesta no sea estrictamente la única verdad. Creo que vale la pena discutir los puntos que plantea porque, justamente, en la cuestión de la pequeña y mediana empresa no es en la que se intenta poner el énfasis en estos proyectos de ley, sino que se intenta poner el énfasis en las cuestiones sistémicas de las grandes empresas, de los grandes productores, de las grandes unidades de producción.

Con relación a las observaciones relativas a la Ley de Abastecimiento, nosotros consideramos que la Ley de Abastecimiento no puede ser aplicada a una pequeña o mediana empresa directamente. ¿Por qué? Porque el artículo 1º dice: “La presente ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación”, etcétera, “cuando se afecten necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población”. Creo que no es posible un caso donde una pequeña o mediana empresa pueda producir una afectación general a toda la población. En consecuencia, si no existe la posibilidad de una afectación general a la población de una pequeña o mediana empresa, esta ley no tiene posibilidad de aplicación. Pero podremos encontrar una situación excepcional donde sí esto suceda. En ese caso está, como decía el jefe de Gabinete, el artículo 7º, donde se incluyeron las cuestiones que recién el exponente enumeraba: la posición en el mercado del infractor, que difiere de una gran empresa a una mediana empresa; con relación a los montos, el lucro generado con la conducta sancionada, que también difiere de la gran empresa a la mediana o pequeña empresa, y el perjuicio provocado al mercado o a los consumidores, que también difiere. Son barómetros que hacen a la aplicación distinta respecto de si se trata de una pequeña o mediana empresa o si se trata de una gran empresa.

Como regla general, esta Ley de Abastecimiento no se aplica a la pequeña y mediana empresa. Y si se aplicase en una situación excepcional, existen los barómetros incorporados en el artículo 7º, que son los que proponía el doctor. Se podrá incorporar alguno más; es para discutirlo y debatirlo, pero creo que es posible. Incorporamos tres para justamente distinguir a la pequeña y mediana empresa de la gran empresa.

Con relación a cómo aplica el fuero a la pequeña o mediana empresa y si hay distinción, la práctica del fuero del trabajo nos indica que, si bien hay una legislación homogénea para el empleador, en la práctica los jueces distinguen al momento de sentenciar si se trata de una pequeña empresa o de una gran empresa. No son iguales las sanciones que otorgan los magistrados en la justicia del trabajo si el demandado es un pequeño o un gran empleador. No son las mismas. Creo que en este sentido se aplica la misma circunstancia.

Lo que me parece una crítica para tener en consideración es la que usted realizaba con relación a la competencia del fuero. Entonces, cómo un pequeño

empresario de Jujuy puede traer a sus abogados a litigar a la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el caso de que el gobierno de Jujuy no adhiera –estoy seguro de que sí va a adherir–, porque estamos suponiendo que no hay un sistema judicial propio, o en el caso de que el actor decida ir a la Ciudad de Buenos Aires. Creo que tenemos que pensar una redacción para este supuesto excepcional que impida la posibilidad, en los casos de que el demandado tenga pocos recursos, que sea una pequeña empresa, de tener que generar una estructura jurídica para resolver sus problemas en otra provincia alejada. Le estamos pidiendo al demandado pequeño que tenga abogados en la Ciudad de Buenos Aires sí o sí en este caso. Creo que es una crítica correcta y que es una crítica que tiene...

–El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Álvarez. – ...el problema del otro lado de tener amplitud para el usuario. Porque queremos darle la posibilidad, como dice el senador Morales, de que el usuario pueda reclamar donde pueda, también.

Entonces, acá estamos ante una cuestión de difícil equilibrio. Puede ser incorporada una norma de procedimiento que impida reclamar en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires a alguien del interior, para el caso de que el demandado sea una pequeña unidad productiva. Se puede incorporar.

Sr. Presidente (Artaza). – Yo había hecho preguntas puntuales antes del proyecto. Independientemente de los conceptos políticos que tuvimos, hice esas preguntas puntuales.

Lo que ha propuesto CAME de las pequeñas y medianas empresas creo que lo está respondiendo. Por eso le quería agregar una preguntita más sobre el acta de constatación, porque me la han hecho llegar diversas pequeñas empresas. El acta de constatación vale sólo con la firma del inspector; no requiere testigos, foto ni la firma del contribuyente. Y las posibilidades de defensa son casi nulas.

Esa es mi pregunta. Las otras casi las ha respondido en las preguntas que les han hecho las pequeñas y medianas empresas.

Sr. Álvarez. – Discúlpeme, ¿qué artículo de la ley?

Sr. Presidente (Artaza). – Acá, en la parte de sanciones, por favor.

Después, con relación al permiso para proceder al secuestro de todos los elementos, de los 30 días, también me han hecho llegar preguntas otras pequeñas y medianas empresas del interior. ¿Cómo sería el procedimiento, el secuestro de elementos contables por 30 días? Es decir, ¿permite allanar sin permiso judicial esos 30 días?

Sr. Álvarez. – Si estamos hablando de la Ley de Abastecimiento –yo anoté las preguntas que usted había realizado antes y, si quiere, les contesto algunas–, yo acabo de decir que, en mi consideración, creo que

no se aplica a las pequeñas y medianas empresas, directamente. Ahora, si estamos hablando de cosas que existían antes, como la posibilidad de que pueda ir un inspector, que también existía en la legislación anterior, podemos... ¿Cuál es el planteo concreto? ¿Que no puede haber testigos? Sí, lo pueden incorporar las empresas a los testigos.

Después, usted había hecho una pregunta con relación a las acciones colectivas en el planteo anterior. Lo que sí está autorizado en el fuero es la posibilidad de sumar acciones con el tope que hoy sería de 220.000 pesos, 55 salarios. Se pueden sumar infinita cantidad de reclamos individuales. Eso sí se puede hacer. Digo con relación a la pregunta que había hecho con anterioridad.

Pero quería seguir contestando...

Sr. Presidente (Artaza). – Gracias.

Sr. Álvarez. – Perfecto, senador.

Cuando habla de multas, nosotros estamos generando multas con escalas. Podemos generar otra redacción que esté enunciada en otro sentido. En la Unión Europea –nosotros lo discutimos– se plantea en base al porcentaje de lo facturado por la empresa la posibilidad de sanción, la posibilidad del establecimiento de multas. Como en la Argentina es costumbre poner un monto, el monto en un millón de pesos, nosotros lo aumentamos a 10 millones de pesos y pusimos estos barómetros para evaluarlo. Pero podemos pensar en otra redacción para establecer las escalas de las multas.

Con relación a la cuestión penal, claro que es una pena la imposición de una multa. Estamos hablando, como usted decía recién, de la eliminación del arresto, la eliminación del sistema penal, del sistema judicial penal, del sistema punitivo del Estado en términos de derecho penal.

Creo que con esto están contestados todos los planteos.

Sr. Presidente (Fuentes). – Seamos breves, porque nos quedan 30.

Sr. De Jáuregui. – Le agradezco la respuesta. Simplemente, insisto en la expresa eliminación de la pyme. Porque si bien coincidimos en que esta ley no puede ser aplicada a las pymes, lamentablemente, no durante estas gestiones pero sí en gestiones anteriores, de otros gobiernos, pequeñas empresas y pequeños comercios han sufrido clausuras y la aplicación de la Ley de Abastecimiento. Entonces, para evitar confusión, para evitar alguna utilización incorrecta de la ley, pedimos la expresa eliminación de la pyme en los términos que establece la ley.

Sr. Presidente (Fuentes). – Muchas gracias.

A continuación convocamos a Máximo Fonrouge del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Fonrouge. – Buenas tardes a todos.

Gracias por la paciencia y gracias por la invitación a este Honorable Senado que nos brinda la oportunidad de hacer algunas reflexiones en relación a estos proyectos.

Si bien se ha dicho que no nos hemos referido a la ley, es lógico porque muchos de los que expusieron no son abogados y ciertamente no tenían la posibilidad de hacerlo, sin embargo, yo lo haré.

Sin perjuicio de ello, voy a hacer un pequeño comentario que tiene en cuenta las introducciones que se hicieron previamente.

Por otro lado, por las dudas, deseo aclarar que soy presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El Colegio integra el Foro de Convergencia Empresarial, y desde ese punto de partida es que estoy aquí.

Estoy aquí como abogado, principalmente, teniendo en cuenta que estudié para ser abogado y que creo en las leyes. Digo esto porque, como suele pasar, el día de mañana va a salir en algún diario que uno representa a tal o cual empresa, o que es abogado de tal, o que tiene un pariente de tal o cual. Por dicho motivo aclaro que en esta casa tuve un tío que fue senador, fundador del FREJULI; una tía dirigente política y un tío intendente de Florencio Varela, que al cargo entró con auto y salió sin auto y, finalmente, mi padre no se dedicó a la política porque se murió muy joven. Así que creo completamente en los mecanismos institucionales, y creo en la ley y en la justicia.

Por lo tanto, me referiré desde ese punto de vista; no estoy defendiendo el interés de una persona o de un cliente que he defendido en algún momento o que defienda el día de mañana. Realizo dicha aclaración porque el argumento *ad hominem* se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos.

Enseguida paso al tema jurídico, pero hay algo que no entiendo; se habló acá de sentido común, se habló acá de que quizá quienes están oponiéndose a estas normas no las entienden. Ahora bien, no es que no las entendemos, sino que pensamos distinto. Todos tenemos derecho a pensar distinto y a opinar que algunos caminos son mejores para conseguir un objetivo. Entonces, desde ese punto de vista, respeto las opiniones contrarias, pero uno tiene derecho a pensar distinto.

Y cuando hablamos de grupos concentrados, también creo que es malo concentrar en una sub/persona, la que, en este caso, es el secretario de Comercio, a quien no conozco personalmente —no tengo el gusto, porque lo acabo de ver— y, si bien puede ser una excelente persona y no pongo en duda su honorabilidad, puede estar equivocado como yo también puedo estarlo.

Entonces, también es malo poner en manos de un solo funcionario la responsabilidad de aplicar sanciones. Sobre todo cuando, además, los efectos de estas multas, como se ha dicho acá, se deben cumplir a fin de que luego puedan ser apeladas, o sea que se deben abonar las ingentes multas o, más grave aun, disponer intervención de mercaderías, decomiso, etcétera; reitero, una serie de sanciones que recién después serán pasibles de ser apeladas ante la Justicia. Por lo tanto, quiero que esto no lo perdamos de vista.

En último término, en esta introducción de carácter general hay otro tema sobre el que quisiera hacer mención. Se habló aquí de sentido común. Yo no soy economista, pero me llama la atención que hoy seamos uno de los dos países con mayor inflación en el mundo, y tenemos al lado vecinos como Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil a los que no les va tan mal. Y tampoco observo que tengan esa animosidad contra las empresas. Y voy a decir algo sobre los empresarios que son argentinos, que son iguales a los políticos, a los abogados, a los arquitectos y a los ingenieros argentinos, pero que en nuestro país quizá sean —parece— los empresarios más villanos que puedan encontrarse en la película más terrible que uno pueda imaginar. Porque, ¿por qué motivo en los demás países pueden funcionar sin estas normas? Y si bien acá se habló de la Unión Europea, que sí aplica multas gigantescas, quiero aclarar que lo hace después de que se ha realizado todo un proceso donde ha habido plena garantía del derecho de defensa. No se trata de la aplicación de un funcionario que luego uno tiene que pagar a fin de poder recurrir.

Me refiero entonces a la ley. Me referiré específicamente al proyecto de ley de modificación de la Ley de Abastecimiento. Aquí se dijo que estamos discutiendo sobre una ley que está vigente. Me permito disentir con respeto, porque respeto las opiniones jurídicas diversas, pero creo que no es así. Porque si uno va a la página de Infoleg, que es el sistema donde se encuentran publicadas todas las normas jurídicas, y va a ver la ley 20.680, que es la Ley de Abastecimiento, hay un artículo, que luego fue el artículo 4º, del decreto 2.284/91, que fue ratificado por una ley del Congreso, que dice así: “Suspéndase el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680, el que solamente podrá ser restablecido para utilizar todas o cada una de las medidas en ella articuladas, previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Honorable Congreso de la Nación, ya sea a nivel general, sectorial o regional”. Se exceptúa lo prescrito por el párrafo anterior, las facultades otorgadas por el artículo 2º, inciso c). Este último es el que dice que autoriza o que da la posibilidad al Poder Ejecutivo de dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción. En esto está vigente.

Si bien sé que hay dictámenes de la Procuración que tienen opiniones contrarias, pero no pasan de ser un dictamen de la Procuración. No está convalidado esto, porque, si hubiera sido así, tendrían que haber aclarado en Infoleg que dicha norma no se encuentra más vigente. Por lo cual, me permito entonces disentir en este aspecto.

Y pese a que se haya aprobado recientemente el digesto, porque el digesto Jurídico recién va a entrar en vigencia después de que transcurra el periodo de los 180 días para formular observaciones.

En último término, quiero recordar aquí que si uno va a ver la nota de elevación de la vieja ley 20.680, allí se hablaba taxativamente y se reiteraba que esta ley

era para una situación coyuntural de excepción que en ese momento se entendía que existía en la República Argentina.

Entonces, si entendemos que estamos frente a esa situación coyuntural, muy bien, decretemos la ley, pasemos por el Congreso, y digámoslo con todas las letras, que estamos en una situación en emergencia de abastecimiento. Digámoslo.

Sé que hay un dictamen de la Procuración del Tesoro, pero esto pasa por ser una interpretación jurídica con la cual algunos pueden disentir. Particularmente, desde mi perspectiva, disiento.

Después el doctor Lipera seguramente va a abundar más en detalle en algunos artículos.

Por otro lado, quiero manifestar que el defecto principal que tiene esta ley es la discrecionalidad. Concentrar discrecionalidad excesiva en funcionarios es peligroso. Porque, reitero, yo no pongo en duda la honorabilidad del señor Costa, pero puede equivocarse como yo también puedo hacerlo. Entonces, se está concentrando en una persona –más allá de que tenga asesores y demás– o en un grupo mínimo de gente, la posibilidad de tomar decisiones que pueden resultar en la vida o en la muerte de una empresa.

Una empresa en la que no es malo el empresario, se trata de todos los empleados que están abajo, en toda la cadena de valor de los proveedores, de los servicios que se prestan. Esto es lo que yo puedo poner en riesgo.

En segundo término, en relación con la vigencia, si esta Ley de Abastecimiento estuviese tan en vigencia, sería fantástico. Ahora bien, según el proyecto o según lo que manifiestan los que apoyan el proyecto, justamente lo que se está haciendo ahora es suavizarla. En efecto, hasta el momento no venían aplicándola, porque, reitero, era considerada una norma muy dura, pero ahora la vamos a suavizar a fin de empezar a aplicarla, entonces, eso es lo que me llama la atención; porque si ya se disponía de otra, para qué vamos a discutir acá. Si se quiere, se puede aplicar, y si se quiere hacer bien, no se aplicarán las penas de prisión. Y si la ley estuviese vigente, para eso, no se necesitaría modificarla. Por tal motivo considero que desde el punto de vista jurídico la ley no se encuentra vigente.

Luego, en cuanto a la discrecionalidad también opino que se trata de un tema grave y que hay muchísimas normas –a medida que uno va repasando los artículos– en las que se puede observar que son de juicio totalmente subjetivo. Se da cuando tengo que analizar la situación económica del sujeto obligado o cuando tengo que resolver qué es elevar artificialmente o injustificadamente los precios, que es, además, una disposición contradictoria, porque dice: elevación artificial e injustificadamente de los precios en forma que no respondan proporcionalmente a los aumentos en los costos. En el artículo 4º inciso a), cuando habla de esto y después dice “que no respondan proporcionalmente a los aumentos de costos”, hoy hay muchas empresas que están pidiendo aumentos de precios porque les han

incrementado los costos y no se los admiten. O sea que esta misma disposición puede ser utilizada –aviso– en contra.

Cuando se dice que es una de las conductas que son pasibles de sanción, “intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la comercialización”, suena lindo el concepto, pero quién lo interpreta eso. ¿Quién lo va a interpretar? Cuando decimos “destruyeren mercaderías o bienes o impidieren la prestación de servicios o realizaren cualquier otro acto sea la naturaleza monopólica o no que tienda a hacer escasear la producción, venta o transporte”. Son cosas subjetivas. Si alguno tiene capacidad productiva remanente, ¿si acopió productos porque no los puede vender?, ¿entonces hay que sancionarlo? Me dirán “eso es una burrada porque no lo vamos a sancionar por eso”, pero la facultad está. Y estas facultades van a ser ejercidas por funcionarios que después de que uno pague la multa o sufra el decomiso o la sanción de que se trate recién ahí va a obtener la posibilidad en la Justicia de que esto se revea. Más aún, se permite, en el caso del decomiso de la mercadería, que lo puede decidir el secretario; la intervención y venta de esa mercadería y después se establece o se descubre, cuando termina el sumario, que no tenía responsabilidad el empresario, en ese supuesto, lo van a compensar. Lo van a compensar teniendo en cuenta los mecanismos de la ley de expropiación que, además, excluye el lucro cesante. Con lo cual a ese hombre tal vez lo jorobaron, le produjeron una situación de un perjuicio gigante “y después vamos a ver cómo lo compensamos”.

Reitero que me puede decir que no van a sancionar a quien no merezca ser sancionado, pero eso es subjetivo. ¿Quién decide quién merece ser sancionado y quién no? Para eso, la ley trata de fijar criterios objetivos. El principio de esto que hay que pagar, como dijo el expositor que me antecedió –de paso ya que CAME pide la exclusión de las pequeñas y medianas empresas yo voy a pedir la exclusión de los abogados porque estamos dentro de los prestadores de servicios–, es el derecho penal sancionador que, mediante las multas, tradicionalmente en la Argentina siempre se entendió que se aplicaba en un efecto suspensivo. Así que no había que abonar la multa para recurrir a la Justicia. Y no mezclamos con el tema de defensa al consumidor, porque uno dirá que esto se va a cumplir recién a los postres, no. Estamos hablando de esta Ley de Abastecimiento cuyos ingresos por multas van al Estado, no van a la gente. Las multas van a ingresar al erario público. Entonces, ¿qué problema tiene el erario público, si se puede haber equivocado, en aplicar una multa en que esto se decida cuando la sanción devenga firme?

En el caso de las multas y dentro de estas cosas subjetivas, ya que hablábamos de esto, se dice cuando se habla de pesos 500 a pesos 10 millones, dice este último límite podrá aumentarse hasta alcanzar el triple de la ganancia obtenida en infracción. ¿Quién determina la ganancia obtenida en infracción? Si se determinó mal la ganancia, o me confundí, la determiné mal, lei

mal los papeles y resulta que ese hombre para poder recurrir va a tener que ir a esa empresa, pagar la multa y recién recurrir. Esto es mucho más que los 10 millones.

Si queremos defender a los consumidores, también deberíamos defender a los consumidores frente a los servicios que presta el Estado y esto no está muy regulado. De hecho, no hemos podido contar con una ley de información pública que a nosotros nos permita conocer qué pasa en el ámbito de las contrataciones estatales, por ejemplo. Esto sería bueno.

Sr. Presidente (Fernández). – El decreto de información pública funciona perfectamente porque funcionó bajo mi órbita. Es el decreto 1.172/2003.

Sr. Presidente (Fuentes). – No interrumpamos a los oradores, por favor.

Sr. Fonrouge. – Le agradezco la información. Yo me refería a que no tenemos ley de información pública.

Sr. Presidente (Fernández). – Pero hay un decreto en el que el Ejecutivo se autolimitó desde el 25 de mayo de 2003.

Sr. Fonrouge. – Estoy de acuerdo, lo que no quita que no exista la ley de información pública, son dos datos de la realidad.

Sr. Presidente (Fernández). – En el Ejecutivo hoy lo puede pedir porque hay un decreto que lo permite.

Sr. Fonrouge. – Muchas gracias por la aclaración, senador.

En definitiva, le diría que desde nuestra perspectiva la ley está de alguna manera afectando el derecho a ejercer industria lícita que protege la Constitución Nacional. Podría decir más cosas de este proyecto de Ley de Abastecimiento, pero estas son algunas de las razones, después abundará el doctor Lipera, pero no quiero abusar del tiempo. En esto me detengo. Respecto del proyecto de defensa del consumidor, más allá de que hoy están resguardados los derechos porque tenemos una Ley de Defensa del Consumidor y, como se ha dicho acá, en materia de defensa de la competencia, nunca nos hemos tomado el trabajo de conformar el Tribunal de Defensa de la Competencia. Es un tema eminentemente práctico, porque si no, a veces declamamos cosas y, en la práctica, no funcionan. Para la Ley de Defensa del Consumidor que crea estos nuevos tribunales, presupone que van a tener que ser elegidos y conformarse esas cámaras en 180 días y sabemos que esto no va a ser posible. ¿Por qué no esperar con este tema y dejar al gobierno que, venga cualquiera fuese para resolver esta cuestión? Es más, se prevé un recurso contra las sanciones que va a funcionar ante las cámaras de consumo que no van a existir. Y contra la, decisión que tuviesen que tomar esas cámaras que no existen, habría que recurrir a una cámara de casación, que crearon el año pasado, que tampoco existe. Es un tema práctico. Más allá de que uno pueda o no hacer críticas en el tema de defensa del consumidor. Estamos de acuerdo en que hay que defender al consumidor pero también articulemos un sistema que sea cumplible.

Hoy, como está, vamos a tener las obligaciones, vamos a generar la posibilidad de aplicar las sanciones pero no va a ser posible recurrirlas porque no va a existir el tribunal que tiene que ser llamado a entender respecto de ellas. Muchísimas gracias por su paciencia.

Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias por su exposición.

Tiene la palabra el señor secretario de Justicia.

Sr. Álvarez. – Hubo tres planteos: vigencia, discrecionalidad y practicidad del fuero.

Con relación a la vigencia, tengo algunas normas y algunos dictámenes para decir por qué está vigente. El doctor dijo que no estaba vigente porque lo había leído en Infoleg. No sé qué normas dice que no están vigentes. Ahora les voy a leer algunas normas.

De paso les anuncio que Infoleg, que depende del Ministerio de Economía, dentro de pocos días va a fusionarse con Infojus, que depende del Ministerio de Justicia, conformando un solo sistema de información jurídica. Con lo cual el Estado va a proveer un solo sistema de información jurídica.

No es casual que el sistema de información jurídica esté en el Ministerio de Economía, es un hecho de los 90 ese.

Con relación a la vigencia de la ley, le quiero decir lo siguiente. El decreto 722/99 dice que después de que la Ley de Abastecimiento se encontrara suspendida dice: “Artículo 1.- restablézcase el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680 y sus modificatorias”.

El dictamen 288 de la Procuración del Tesoro de la Nación dice: “Buenos Aires 18 de octubre de 2007”. Dice: Análisis: el artículo 4 del decreto 2.284/91 suspendió el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680 estableciendo que sólo podría ser restablecido previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Congreso Nacional ya fuera a nivel general, sectorial...

–Varios señores senadores hablan fuera del micrófono.

Sr. Álvarez. – Bueno, listo... lo leo despacio pero son bastantes párrafos; por eso lo leo rápido.

“...por el Congreso Nacional, ya sea a nivel general, sectorial o regional. Se exceptuaron de dicha suspensión las facultades contenidas en el artículo 2°, inciso c)”.

2. Posteriormente fue dictado el decreto 722/99 en uso de las atribuciones legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 3), de la Constitución Nacional. En el artículo 1° de dicho texto se declaró lo que acabo de leer en el decreto. 3. En mi criterio el texto es claro en cuanto a que restableció el ejercicio de las facultades que la ley 20.680 le otorgaba al presidente de la Nación cumpliendo para ello con las exigencias que planteaba el decreto 2.284/91. Ahora bien, en ningún momento se desprende de este último decreto que una vez declarada la emergencia de abastecimiento el restablecimiento de la facultad de la

ley 20.680 será meramente temporal o transitorio mientras se mantuvieran las condiciones que determinaron su restablecimiento y que luego volverían a quedar suspendidas. A mi juicio, otorgarle al decreto 2.284/91 semejante alcance resultaría desmesurado, máximo cuando ninguna de sus normas vinculadas a la cuestión permite sustentar una interpretación de esa índole.

Contrariamente a la ley 20.680, como toda norma legal, debe reconocérsele vocación de permanencia salvo que ella expresamente disponga lo contrario. Es por ello que fue el decreto 2.284 del 91 el que precisamente implicó una situación excepcional de suspensión parcial de la vigencia de la Ley de Abastecimiento que una vez restablecida no cabe desconocer sin fundamento legal que lo respalde.

A mayor abundamiento, siempre dentro de esta línea argumental, cabe tener presente que la ley 24.344 actualizó las penas establecidas en la ley 20.680, circunstancia que demuestra que a juicio del Poder Legislativo ésta se encontraba vigente, puesto que de lo contrario hubiera carecido de sentido disponer la actualización de penalidades contenidas en una norma cuya vigencia se hallaba suspendida. Desde esta perspectiva pues el decreto 722/99 restableció el ejercicio de las facultades que habían quedado suspendidas y dicho ejercicio ha mantenido plena vigencia puesto que no ha sido dictada ninguna norma posterior que la haya derogado o modificado.

Conclusión. En virtud de las consideraciones desarrolladas, en mi opinión la ley está vigente.

Sr. Presidente (Fernández). – Quiero hacer una acotación en término de la vigencia. El 15 de abril hubo un fallo de la Corte Suprema de la Nación en Cámara Patagónica Sociedad Anónima, donde ratifica que la ley está vigente en función de haberse sancionado la ley 25.148. Pero si fuera poco eso, en esta Cámara se dio sanción definitiva a la ley 26.839 del digesto, que estuvo un año y trece días con dictamen favorable—seis meses para el tratamiento en la Cámara de Diputados y otros seis meses para la Cámara de Senadores—, que ratifica que la ley está vigente. *Nemo censetur ignorare legem*. No podemos discutir algo que ya está más que gráficamente expuesto respecto de esa ejecución.

Sr. Presidente (Fuentes). – Le pide una interrupción el senador Cima-devilla, y cerramos el debate entre senadores, por favor.

Sr. Álvarez. – Cómo no.

Sr. Cima-devilla. – Primero, podríamos estar diciendo que constituye un verdadero desatino desde el punto de vista de la técnica legislativa querer modificar una ley cuando aquí estamos poniendo en duda su vigencia. Ya esto es un desatino. Pero, además, la ley no está vigente. El dictamen del procurador podrá decir lo que quiera, pero en realidad la ley no está vigente porque acá se hizo mención...

—El señor Aníbal Fernández realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Cima-devilla. – Habría que ver a qué se refiere el fallo.

—El señor Aníbal Fernández realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Cima-devilla. – Pero tampoco la puso en vigencia esta ley el digesto jurídico, porque convengamos que el digesto jurídico... Yo traje la versión taquigráfica de lo que yo dije en aquel momento que estábamos sancionando una ley...

Sr. Presidente (Fernández). – Vamos concretando, por favor.

Sr. Cima-devilla. – En nuestro derecho se presumen conocidas las leyes y era bueno tener un texto que lo actualizara, pero estábamos cometiendo errores. No estábamos incorporando decretos, los DNU no estaban todos incorporados. Y el mismo texto de la ley dice en el artículo 20 que hay que tomarse un plazo de 180 días para ver realmente cuáles son las leyes que estaban vigentes o no, que también lo dije en el debate. No vamos a saber a partir de cuándo van a estar vigentes las leyes. Está dicho en el debate.

Y hoy la Ley de Abastecimiento del año 74 está derogada, mal que les pese. Están los decretos...

—El señor Aníbal Fernández realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Cima-devilla. – Pero hay que ver a qué hechos está haciendo referencia el fallo de la Corte, de qué épocas y en qué condiciones.

Sr. Presidente (Fuentes). – Vamos cerrando, por favor.

Sr. Cima-devilla. – Convengamos y aceptemos que es un desatino desde el punto de vista de la técnica legislativa entrar a modificar una ley hecha para una coyuntura y que hoy no sabemos si está vigente o no.

Sr. Presidente (Fernández). – Está vigente.

Sr. Cima-devilla. – No está vigente.

Sr. Presidente (Fernández). – Gracias, senador.

Termine, por favor, secretario.

Sr. Álvarez. – Más de diez años los juristas argentinos, la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia estuvieron estudiando qué leyes se encontraban vigentes en la República Argentina, y este Congreso—como bien expresaba el senador Fernández— después de un año y medio sancionó el digesto jurídico que dijo que la Ley de Abastecimiento estaba vigente. Y aparte, tenemos un fallo de la Corte de marzo de este año, y aparte hace tres meses se aplicó la Ley de Abastecimiento contra los laboratorios sin ningún inconveniente, y aparte hay un dictamen de la Procuración del Tesoro, y aparte hay un decreto del año 99. Entonces, la ley está vigente y estamos acá para modificar la Ley de Abastecimiento.

Entonces, con relación a la vigencia, la ley está vigente. Ahora, con relación a la discrecionalidad, que era el segundo de los temas planteados, hay varias

cuestiones. Primero, la que viene atada con la vigencia. De todos los artículos que enumeró el doctor, el colega, ninguno se está modificando en la actualidad. El artículo 4º, inciso a), que refiere a elevar injustificadamente los plazos en forma que no responda proporcionalmente, estuvo vigente desde el 74 hasta 2014, con el interregno del 91 al 99. Ahora bien, si el artículo estuvo vigente durante un tiempo y ahora alguno tiene alguna interpretación exótica que dice que no está vigente la ley, ¿por qué no se planteó nunca este problema? Porque estuvo vigente. Por lo menos, estuvo vigente durante mucho tiempo. Hoy lo vienen a plantear. No estamos modificando este artículo así como tampoco estamos modificando el inciso d) o el inciso e). No nombré ningún artículo que estemos modificando. Ninguno de los artículos que nombré es una modificación planteada en este proyecto legislativo.

Con relación a la discrecionalidad, las leyes tienen una autoridad de aplicación. Hay una discusión que tenemos planteada, que es si corresponde que la autoridad de aplicación sea todo el Poder Ejecutivo, porque el digesto también establece que de ahora en adelante se tomará como autoridad de aplicación al Poder Ejecutivo —es un planteo válido— y no poner específicamente la Secretaría de Comercio. Está bien, será así. Será el Poder Ejecutivo. ¿Y la discrecionalidad? Sí, el Poder Ejecutivo tendrá la discrecionalidad de aplicar estos límites que impone el Congreso. Por eso, cada cuatro años hay elecciones y se elige presidente.

Acá hablaban de la vida o muerte de una empresa por la discrecionalidad. La vida o muerte de una empresa. Qué categórico, ¿no? Este gobierno, que después de once años creó más de 200.000 empresas; y hablan de la vida o muerte de una empresa. Bueno.

Las multas van al Estado. ¿Cuál es el problema? ¿No queremos un Estado que recaude? ¿No tiene que recaudar el Estado? El colega planteó ¿Quién determina la ganancia? La ley, la autoridad de aplicación. La revisa un juez.

Usted me dice: “Pagando primero”. ¿A los consumidores de la República Argentina, a los 40 millones de consumidores los empresarios les piden que primero paguen y después reclamen? Qué injusto que es eso, ¿no? Que se le pida a todos los consumidores de la República Argentina que primero paguen y que después reclamen y que a los empresarios no. Qué injusto. Es justicia.

Sr. Presidente (Fuentes). — Secretario: vamos redondeando, por favor.

Sr. Álvarez. — Y con relación a la practicidad del fuero, claro, la posibilidad de ponerlo en tres meses en funcionamiento es una declaración de intención. Es el Consejo de la Magistratura —y acá estamos tres integrantes de ese órgano— quien tiene la obligación de ponerlo en funcionamiento.

La verdad es que vamos muy bien en el Consejo de la Magistratura y probablemente lo podamos poner en funcionamiento porque se viene trabajando mucho y muy bien, pero le quiero aclarar que mientras estos jueces no estén en funcionamiento estas normas que vamos

a sancionar como ley, estas normas de procedimiento simples y sencillas, sí van a estar en vigencia y las van a poder aplicar los jueces que hoy tienen competencia. No veo de qué otra forma se puede generar un fuero de otra forma más práctica que la que estamos generando. Estamos creando un fuero, estamos diciendo que sea lo más rápido posible, creemos que va a ser lo más rápido posible, porque el Consejo de la Magistratura está funcionando muy bien. Y, a parte, mientras no estén los jueces designados, van a intervenir los que ya existen. Creo que más práctico imposible.

Si hay alguna sugerencia de practicidad, bienvenida sea. Ahora, si la sugerencia es eliminar un fuero, creo que no es una sugerencia, es la no sugerencia.

Así que no creo que haya razones para argumentar la falta de vigencia, para argumentar la falta de discrecionalidad y la falta de practicidad del fuero. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). — Tiene la palabra el señor secretario de Comercio.

Sr. Costa. — Respecto de la arbitrariedad, que mencionaba el secretario de Justicia que creo fue la base del cuestionamiento recibido, creo que ese mismo argumento se puede aplicar a casi cualquier ley.

Creo que muchas leyes pueden sufrir este mismo cuestionamiento y en la medida en que nosotros estamos preocupados también por delimitar la arbitrariedad, en las reformas que estamos proponiendo, que no están discutiendo sino que están discutiendo la ley vigente desde 1974, estamos limitando la arbitrariedad.

En cada artículo, que ustedes pueden ver, en donde se introdujeron cambios, acotan el ámbito de acción ya en el artículo 1º. La redacción del texto vigente dice que esta ley se aplica a necesidades comunes o corrientes de la población. Cualquier cosa puede entrar acá. Lo estamos reemplazando por necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población. Si eso no es reducir la arbitrariedad, reducir la discrecionalidad y esto en cada artículo desde los tipos penales, desde cómo se está pensando en la intervención, está apuntando a ese fin.

Y de hecho, la propuesta complementaria, que es la creación del observatorio de precios, está pensada como un instrumento que le permita a la autoridad de aplicación tener elementos para tomar sus decisiones, emitir sus dictámenes de cuestiones que no pueden escribirse previamente en una ley. Qué es elevar artificialmente un precio o injustificadamente un precio no está escrito en ningún lado, porque todo es subjetivo cuando tiene que ver con precios, cuando tiene que ver con actividades económicas. Pero hay situaciones que son manifestas distorsiones en los mercados, que preocupados por la muerte de las empresas, no contar con este instrumento puede generar que una empresa monopólica saque del mercado a una pequeña pyme, porque la discriminó, porque le subió los precios y a

la competencia la benefició. Entonces, preocupémonos por la muerte de estas empresas, también.

Y ahí está este instrumento y va a haber un órgano técnico al cual se va a poder apelar para que eventualmente determine que hubo una discriminación y que se está elevando artificial o injustificadamente los precios en una empresa, en un grupo de empresas y no en otras, y eso es una distorsión y eso mata a la empresa. Y si vamos a los tiempos de las plenas garantías, que se mencionaron por acá, que son quince años, ¿cuántas empresas que sufrieron ese perjuicio van a estar vivas en quince años?

Entonces, necesitamos instrumentos que permitan con la mayor rapidez y claridad posible, por eso también está el observatorio de precios que no es menor, poder resolver cuestiones que tienen que ver con las desigualdades en las cadenas de valor.

También, cuando se menciona que otros países viven sin este tipo de legislación. Cada país tiene su estructura productiva. Por eso, también, las comparaciones con Venezuela, un país que prácticamente importa el 90 por ciento de los bienes que consume, y que se trata de hacer este vínculo medio perverso entre la legislación que se está proponiendo y la situación de un país que no tiene nada que ver con la Argentina, también está bueno referirse a otros países que cuentan con legislación. Por ejemplo, España, donde precisamente la inflación es cero en España, pero hace siete años tienen 25, 28 por ciento de desempleo. Ahora están festejando que bajó de 27 a 26 el desempleo después de siete años, pero tienen cero por ciento de inflación. Se ve que a algunos les preocupa una cosa y a otros nos preocupa otra.

En la legislación española está escrito que está prevista la posibilidad de efectuar fijación de precios y que lo puede hacer ministerios; o sea, lo puede hacer desde decreto hasta ministerios particulares. De hecho, existía hasta hace poco una comisaría de abastecimiento en España. No estamos hablando de un país donde alguien puede llegar a decir que se violan las garantías o no hay seguridad jurídica. Es un país que tenía este tipo de legislación, la tiene.

Y si tomamos el ejemplo de Brasil, sus leyes de defensa a los consumidores y de regulación de las organizaciones de consumo-producción establecen multas, aprehensión de productos, inutilización del producto, cancelación del registro producto ante el órgano competente, prohibición de la fabricación del producto, suspensión de suministro. ¿Y quién decide todo esto? La oficina de defensa al consumidor.

No es problema que esté escrito en la ley potestades que son necesarias si uno lo que pretende es intervenir en situaciones desiguales y favoreciendo la competencia y la transparencia de las cadenas de valor. Y las delegaciones al Poder Ejecutivo en todos los países existen y lo que nosotros estamos proponiendo es también reformas que permitan acotar algunas cuestiones de la ley vigente que nos parecen que no tienen sentido.

Entonces, si vamos a tener una discusión, discutamos cómo se puede, si eventualmente este Parlamento lo considera, acotar todavía más la discrecionalidad, pero discutamos eso. No discutamos está mal tener una Ley de Abastecimiento o sí, discutámoslo, pero ustedes propongan derogarla, no propongan o no cuestionen artículos o discrecionalidad cuando siempre eso va a poder ser parte de la argumentación. Muchas gracias.

Sr. Fonrouge. — Solamente dos aclaraciones, una tiene que ver con que yo precisamente puse de manifiesto que no se me escapaba la existencia del dictamen de la Procuración ni el decreto 722. Simplemente que para mí es una cuestión interpretativa y como se me llamó a opinar, opiné desde mi punto de vista jurídico lo que a mi criterio resulta.

Igual la discusión acerca de esto parece un poco baladí, porque lo cierto de lo que se va a discutir acá es de un proyecto que si está vigente o no está vigente. Si no estaba vigente lo vamos a hacer vigente; o sea, que no importa que las disposiciones sean iguales o parecidas a las anteriores. Si estaba vigente, estamos en desacuerdo con esas disposiciones y si va a estar vigente ahora, también estamos en desacuerdo.

Y, el último tema, solamente a título de ejemplo quiero decir, cambian algunas cosas, no todas son en beneficio. Por ejemplo, en el caso de las multas la ley 20.680 permitía la posibilidad de prestar caución. Esta no, esta hace que la multa deba pagarse. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). — Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Carlos Garetto de Coninagro.

Son 32 expositores. Como no estamos moderando un debate jurídico, la intención es que los expositores precisen la objeción, los funcionarios contesten la objeción y no que los funcionarios convenzan a los expositores o los expositores convenzan a los funcionarios. Si respetamos esa regla, vamos a nadar bien.

A partir de ahora no hay más repregunta, porque si no estamos imposibilitados de llegar al final. Gracias.

Sr. Garetto. — Gracias, presidente. Primero, agradecer la oportunidad que me brindan en este espacio. Creo que el Congreso es el ámbito natural de debate de las políticas públicas. Bienvenido sea que podamos discutir aquí las diferencias y las coincidencias.

Yo recojo el guante del jefe de Gabinete para que podamos poner en práctica esas coincidencias, las podamos potenciar y que en un marco de diálogo podamos discutir y superar las diferencias, que en definitiva es lo que la sociedad argentina está esperando de la dirigencia y de los políticos en búsqueda del bienestar.

Y, en tercer lugar, es venir a exponer un punto de vista referente a esta Ley de Abastecimiento y con mucha preocupación. Con mucha preocupación, porque hemos padecido las consecuencias de este tipo de acciones o de intervenciones en la formación de los precios y sabemos bien cómo terminamos en algunas producciones que han sido tradicionales de nuestro país

y que han sido también codiciadas por el mundo entero en cuanto a la calidad y cantidad de nuestros alimentos. Por eso, es importante lo que decía el secretario de Comercio sobre ponernos a discutir la discrecionalidad. Creo que este es el eje sobre el cual es necesario dejar el camino despejado para que no haya suspicacias de ningún tipo, ni políticas ni económicas, frente a lo que está planteando la reformulación de esta ley.

En definitiva, esa discrecionalidad es la que está afectando la formación de los precios en el mercado. Bien sabemos que el precio es el mayor incentivo a la producción. Si nos quedamos sin el precio de referencia, sin el precio que representa el verdadero valor del esfuerzo del que produce, le estamos quitando el incentivo a la producción. Entonces, si le quitamos el incentivo a la producción, le estamos poniendo un cepo a la producción. Ponerle un cepo a la producción no es lo mismo que ponerle el cepo a los ahorristas o al tipo de cambio. Es afectar a los consumidores, porque estamos afectando o poniendo en riesgo la mesa de los argentinos.

Hoy, cuando estamos en condiciones de producir muchos más alimentos, no sólo para la mesa de los argentinos, los 400 millones de habitantes en el mundo, sino que tenemos la capacidad de llegar a 600 millones de habitantes en el mundo. Esta mayor generación de alimentos es también mayor generación de recursos. Estos recursos también le sirven al Estado para atender la demanda de la sociedad, los problemas de la educación, los problemas de la seguridad, los problemas de la salud, para contribuir con las obras de infraestructura y para acompañar el crecimiento. Eso también es mejorar la calidad de vida de los argentinos y defender al consumidor.

Entonces, tengamos cuidado con lo que vamos implementar, porque puede llegar a ser un buen instrumento para un determinado punto o momento, pero en el largo plazo nos va a traer consecuencias, que ya hemos vivido, lamentablemente, en el sector agropecuario y, especialmente, con producciones que son tan caras a los sentimientos de los argentinos, como lo son la carne, la leche y el pan, y ni hablar de las producciones regionales.

Ministro: usted vino de una provincia que tiene realmente un fuerte componente en esto y sabemos que allí hay un valor importante en lo social, porque incorpora mano de obra, agrega valor, da contención y genera arraigo. En definitiva, esto es a lo que tenemos que propender para que haya más producción y crecimiento, pero que ese crecimiento también signifique más desarrollo y bienestar para los argentinos.

Por eso, vine hoy aquí a plantear esto con una gran preocupación, no mirando el próximo año, ni las próximas elecciones. Seguramente, allí los referentes de los distintos partidos políticos sabrán cómo plantear sus mejores propuestas. Vine aquí preocupado para que tengamos, en definitiva, hacia futuro —pensando en esas generaciones que nos siguen— un marco que nos

dé previsibilidad, seguridad, tranquilidad y soporte, especialmente a quienes venimos del interior a esa estructura agraria familiar, que ha sido el sustento del crecimiento del país y que surge de aquellas corrientes migratorias que vinieron a hacer del laboreo de la tierra una cultura del trabajo. Este es el fenómeno que tenemos que recuperar.

Entonces, en lugar de ponernos a discutir cómo controlar el precio de un determinado producto —está bien que lo hagamos—, pongámonos a discutir cómo generamos más condiciones de producción y trabajo para que eso se transforme en más bienestar y mejor calidad de vida para los argentinos.

Sr. Presidente (Fuentes). — Hará uso de la palabra el señor Juan Vaquer de la Cámara Americano-Argentina.

Sr. Vaquer. — Soy Juan Vaquer de AMCHAM, institución integrante también del Foro de Convergencia Empresarial.

Ante todo, quiero agradecerles por la invitación para poder expresar nuestra posición. Realmente valoramos muchísimo todo lo que sea diálogo, búsqueda de consensos y debates constructivos. En esa línea, me gustaría empezar por destacar coincidencias. Creo que siempre es más fructífero empezar por poner el foco en las coincidencias más que en las disidencias.

Donde veo coincidencias muy importantes, diría unánimes, es: primero, en la necesidad de brindar protección a los consumidores y, segundo, en la necesidad de generar actividad económica, crecimiento, creación de valor y creación de riqueza. Creo que todos los que están presentes aquí coincidimos en eso. Es lógico que así sea porque la mayor actividad económica genera, sin duda, posibilidad de más empleo, de empleo genuino, posibilidad de beneficiar a los consumidores con más variedad de productos, mayor competencia que genere además precios más competitivos. En eso estamos todos absolutamente de acuerdo. Ese es un paso inicial sumamente importante.

Ahora bien, la pregunta que tenemos que intentar dilucidar es si estas herramientas que se están proponiendo como ley, son herramientas que van a facilitar y ayudarán a alcanzar esos objetivos comunes.

En homenaje a la paciencia de todos ustedes e intentando ser breve, voy a compartir algunas reflexiones de sentido común, como también refirió el ministro temprano esta mañana, que espero les sirvan a los legisladores que van a tener que estudiar estos proyectos en el análisis y la decisión definitiva que tengan que tomar.

Me voy a referir al proyecto de modificación de Ley de Abastecimiento, proyecto que también se ha denominado “de regulación de las relaciones de la producción y el consumo”, porque es allí donde tenemos las mayores inquietudes y preocupaciones.

Como dije, voy a utilizar argumentos de sentido común. Pido perdón si para algunos resultan demasiado simples, pero lo que me preocupan son estas cosas simples y el impacto que esas cosas simples, que a veces

ignoramos por su simpleza, puede tener en la sociedad en su conjunto. Hablamos de que necesitamos mayor actividad y crecimiento. Eso indica que necesitamos inversiones. Sin inversiones no vamos a tener esa mayor actividad que todos estamos buscando.

¿Cómo se toman las decisiones de inversión? Las decisiones de inversión que, a veces, uno desde afuera puede creer que son mecanismos muy sofisticados, en realidad son mecanismos muy simples; y esos mismos mecanismos los aplica el pequeño inversor, el mediano inversor y el gran inversor. El mismo razonamiento lo aplica el inversor en Argentina o en cualquier otro país del mundo. Algunos pueden usar herramientas algo más sofisticadas, tener información más completa, pero en definitiva el proceso mental de cualquier persona que esté deseando generar o realizar una inversión es el mismo, básicamente. ¿En qué consiste ese proceso? Ese proceso consiste en determinar, primero, qué es lo que quiero producir, si lo que voy a producir es un bien, si lo que voy a producir es un servicio. Con qué elementos cuento para producir ese bien, cuánto me va a costar producir ese servicio. Cuánto estimo que el mercado va a demandar de ese servicio. Cuánto voy a estar en condiciones, como inversor, de ofrecer eso al mercado y qué precio estimo que voy a poder cobrar por ese bien o por ese servicio.

Ese razonamiento que parece una verdad, es el razonamiento que sigue cualquier inversor grande, pequeño o mediano en cualquier país del mundo para tomar sus decisiones.

La preocupación que tenemos con relación a este proyecto parte de la base de que las facultades concedidas –y, después, me voy a referir a la vigencia–, pero este texto que tengo en mis manos parte de la base... La preocupación que tenemos es que este texto otorga facultades a la autoridad de aplicación de una amplitud, de una magnitud que realmente pone en duda la posibilidad de cualquier posible inversor de hacer ese análisis que yo recién relataba con algún grado de previsión. Genera una cantidad de incertidumbres el hecho de que la autoridad de aplicación pueda fijarme, el día de mañana, cuál va a ser el precio, si tengo obligación de producir un producto o no, qué cantidades voy a tener que producir o dejar de producir, si voy a poder tener determinada cantidad de stock o no. Una cantidad de facultades que realmente ponen en riesgo cualquier posibilidad seria y empresarial de analizar y generar una inversión.

Un paréntesis para hablar de un tema que se ha conversado bastante hoy, que es el tema de si esto está modificando una ley ya vigente o no vigente. Empiezo por confesar que no soy un especialista en el tema y haría mal en decir si está o no vigente. Lo que sí me queda claro, después de haber asistido con la misma paciencia que ustedes a todo este debate, es que como mínimo hay opiniones divergentes, y opiniones divergentes entre especialistas. De hecho, tuvo que llegar a expedirse el procurador del Tesoro de la Nación sobre

si estaba o no vigente esta ley. Apparently, la Corte Suprema también ha tenido que dictar algunos fallos donde tiene que determinar esto, incluso integrantes de este Honorable Senado. Entre ustedes veo que tampoco están de acuerdo en cuanto a si está o no está vigente. Ahora, si estuviera vigente o si está vigente esa ley, también me preocupa. Lo mismo que manifesté en este proyecto, me preocupa sobre esa ley si está vigente.

En definitiva, la pregunta que decía que teníamos que hacernos es si esta herramienta específica que se está proponiendo va a contribuir a alcanzar esos objetivos comunes, de mayor desarrollo, de mayor actividad. Creemos que no. Creemos que facultades tan amplias... Hoy el secretario dijo en algún momento: “No tenemos intención de aplicarlas indiscriminadamente”. Puede ser cierto, pero la ley otorga esas facultades y las autoridades de aplicación pueden cambiar. Las personas que ocupan las posiciones en las autoridades de aplicación pueden cambiar. Cuando el inversor hace ese análisis no lo hace preguntando quién es la persona que está sentada en el cargo hoy, sino que lo hace preguntando qué facultades otorga la ley, sea quien sea la persona que ocupe el cargo de autoridad de aplicación.

Creemos entonces que una ley con estas facultades va a poner, realmente, en riesgo la atracción y la generación de inversiones que necesitamos tan imperiosamente; y, en consecuencia, la generación y la creación de empleo legítimo y de buena calidad.

El último punto al que me quiero referir también, y que está relacionado con el anterior, es que nos guste o no nos guste no estamos solos en el planeta para atraer inversiones. Para atraer inversiones competimos con otras jurisdicciones, competimos con otros mercados, algunos más lejanos y otros cercanos que tienen muy claro eso de que no están solos para recibir inversiones y que hacen todo lo posible por seducir y por atraer a las buenas inversiones.

Yo creo también que esta herramienta nos pondría en desventaja con relación a determinados países, a determinadas jurisdicciones que pelean y compiten con nosotros por las mismas inversiones.

Mi pedido a los integrantes de este Honorable Senado es que tengan en cuenta estos comentarios, que tengan en cuenta que el dictado, la aprobación de esta ley puede poner en riesgo, seriamente, la generación de inversiones que tanto necesitamos.

Sr. Presidente (Fuentes). –Tiene la palabra el señor Carlos Molteni, de la Cámara Argentina de Comercio.

Sr. Molteni. –Vengo en representación de la Cámara Argentina de Comercio. El presidente se encuentra en Salta en un evento organizado con la cámara local. Básicamente, ayer por la mañana estuvimos reunidos con el secretario Costa y queremos reiterar lo que le mencionamos al secretario en la reunión; y destacar, en primer lugar, que la Cámara Argentina de Comercio, como se mencionó por parte de otras entidades, está de acuerdo con promover la defensa del consumidor, porque no son más que clientes de las empresas los consumidores. Está

a favor de promover la transparencia del mercado y mayor información. El acceso a la información es clave por parte de todos los agentes económicos; y, también, a favor de la regulación cuando se justifica, porque ese es un rol que el Estado debe cumplir.

Insisto con la defensa del consumidor. Quizá, me llama la atención que recién ahora se plantee y no se haya planteado en años anteriores la importancia que tiene la defensa del consumidor. El secretario de Justicia mencionó un caso como ejemplo y esto no viene de ahora. Entonces, la Cámara Argentina de Comercio apoya en este aspecto.

Por otro lado, y es importante destacarlo, la Cámara Argentina de Comercio firmó el comunicado al que se hizo referencia del Grupo de los Seis y se lo mencionamos al secretario Costa. Está en desacuerdo o no comparte el espíritu de la actual Ley de Abastecimiento, más allá de la controversia sobre su vigencia o no. Por lo tanto, tampoco coincide con el espíritu del proyecto de reforma, porque mantiene el espíritu original de esa ley en cuanto a que ratifica los mecanismos de control e intervención y el poder administrativo discrecional para la autoridad de aplicación.

Habiendo dicho eso, la Cámara Argentina de Comercio considera que de avanzar este proyecto es necesario destacar algunas cuestiones que pensamos requieren reformas, sobre todo en el articulado. Algunas ya han sido mencionadas por algunos expositores anteriores. Por ejemplo, en primer lugar, no queda claro cómo se determinarán los agregados que se hicieron a la nueva redacción del artículo 7° de la vieja ley o de la ley 20.680 para no entrar en discusiones, en particular, por ejemplo, sobre el lucro generado por la conducta eventualmente sancionada. Quién va a determinar o, en este caso, cómo se va a determinar ese lucro generado, o cómo se determinarán, conforme a la nueva redacción del artículo 27 de la ley, los siguientes términos: “desabastecimiento”, “escasez de bienes y servicios”, quién define cuándo hay desabastecimiento, cuándo hay escasez de bienes y servicios. Recuerden que la Ley de Abastecimiento menciona el caso de urgente necesidad pública. En cambio, el proyecto menciona solamente el desabastecimiento o la escasez de bienes y servicios; así como mencionamos la discrecionalidad en cuanto a qué se entiende por ganancia abusiva o por apropiación indebida del excedente, digamos, todas cuestiones que no están claras, que dan lugar a la discrecionalidad antes mencionada.

En particular –voy saltando–, con respecto al observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios, planteamos por qué no incluir, además de los funcionarios y de las autoridades nacionales y representantes de los consumidores, a la parte empresaria también al observatorio, ya que es interés de todos, como decía antes, lograr mayor transparencia en el mercado.

Otro punto que destacamos como importante es que, teniendo en cuenta el contexto actual –venimos de una

devaluación a principio de año– cómo se prohíbe, por ejemplo, la revaluación de existencias en el inciso b) de la nueva redacción del artículo 4°. Si una empresa tiene insumos importados, la no posibilidad de revaluar esos insumos implicaría un deterioro de la situación financiera importante.

Otra cosa que le destacamos al secretario Costa fue que hay una postura en contra del instituto de reincidencia, por ejemplo, en materia de delitos penales, y sin embargo acá se mantiene el tema de la reincidencia con respecto a las sanciones a las empresas que se duplican o aumentan aún en mayor proporción las sanciones en casos de reincidencia. Otra duda o incertidumbre que nos genera es por qué el nuevo fuero, el que se crea por el artículo 56 de la nota del Poder Ejecutivo 1.250, debe notificar todas sus sentencias a la Secretaría de Comercio. ¿No se vulnera al hacerlo, de alguna manera, la división de poderes? Y, entre otras, porque son varias, ¿por qué se ha retirado la posibilidad de presentar una caución o una garantía sobre el fondo de comercio al pago de la multa en el artículo 17?

Para terminar, se está planteando la reforma de una ley que, vigente o no, lleva cuarenta años y, probablemente, sea una ley para los próximos cuarenta años. Creo que merece que tomen en consideración todo esto y todos los comentarios que están surgiendo porque, como decíamos, más allá de que confiemos en la persona del secretario Costa, uno no sabe quiénes van a ser los futuros secretarios de Comercio que vengan, y hay que reducir la discrecionalidad en las cosas que no definen claramente las responsabilidades, porque está abierto a sanciones, etcétera, y todo en poder de la autoridad de aplicación.

Por último, una preocupación que va más allá de la defensa del consumidor como tal. La defensa del consumidor implica no solamente regular la oferta de producción, la actual, la que tenemos, sino también cómo lograr aumentar esa oferta de producción, cómo aumentar la competencia, cómo aumentar las posibilidades que los consumidores tienen de elegir, y eso implica cómo aumentar la inversión, cómo aumentar la producción, cómo generar estabilidad para que los consumidores puedan informarse y decidir. Está el tema de que en esa cadena de valor nos estamos olvidando que el Estado cumple un rol a través de la carga tributaria, y eso afecta el precio final que el consumidor paga. Entonces, hay un actor más, además del empresario, que afecta ese precio, porque se han hecho declaraciones con respecto a la diferencia entre el precio del productor y el precio del consumidor.

Y, finalmente, hay que tener en cuenta también otros mecanismos que sirvan para disciplinar, si es que hay algún mercado que no es de competencia perfecta. Hay otros mecanismos que sirven para disciplinar al mercado, como aumentar la competencia a través de la importación o la apertura de la economía a la economía global.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). – Muchas gracias.
¿Algún comentario por parte de los invitados?

–No se realizan manifestaciones.

Sr. Presidente (Fuentes). – Vamos a llamar a Pablo Taussig, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, así la senadora se queda más tranquila.

Sr. Taussig. – Buenas tardes a todos.

En primer lugar, agradezco la invitación que nos han hecho. Es la primera vez, desde que yo recuerdo, que alguien de nuestra asociación ha tenido la oportunidad de estar en este recinto.

Represento a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, una asociación civil con más de ochocientos socios reunidos para defender y promover valores tales como la verdad, la solidaridad, la justicia y la libertad en nuestro trabajo como empresarios y como profesionales.

La visión que yo les voy a transmitir acá no es una visión jurídica, no es una discusión sobre los elementos jurídicos, sino una transmisión de la percepción que los empresarios tenemos de esta ley, que esperamos que les sea útil tanto a los funcionarios de gobierno como a los legisladores. Nuestra visión del rol del Estado, que es algo que se discutió hoy, está regida por el principio de subsidiariedad. Creemos en una visión complementaria y no confrontativa entre el Estado y el sector privado. Nuestra visión de la realidad no coincide con la descripción de “Estado bueno, corporaciones malas” que hemos escuchado hoy. Creemos que la virtud de la gente no está de acuerdo a la función que cumple.

El proyecto de ley de modificación de la Ley de Abastecimiento, en nuestra opinión, es criticable. Avanza con atribuciones excesivas para el Poder Ejecutivo con capacidad para juzgar y penalizar. Con los antecedentes que hemos vivido en los últimos años –yo puedo hablar, a título personal, de la lechería y de la carne–, no nos parece que este tipo de intervención haya sido productiva. Mayor arbitrariedad, en nuestra opinión, genera incertidumbre y temor y, como hombres de empresa, nosotros confiamos en los procesos, no en las personas. Hemos aprendido que cada vez que confiamos en las personas tenemos fraudes.

Nuestra preocupación ha sido, en los últimos diez años, la exclusión y la pobreza. Creemos en el rol y en el compromiso de los empresarios en invertir y generar empleo. El trabajo digno debe ser la propuesta para que aquellas personas que quieran salir de una situación de pobreza o exclusión, puedan hacerlo. Por supuesto que nuestro compromiso empresario debe estar controlado y regido por leyes y por una justicia eficiente que evite situaciones abusivas. Condenamos las iniciativas privadas que eviten el eficaz funcionamiento del mercado así como también las situaciones de rentabilidad excesiva mediante negocios con el Estado en situación de falta de transparencia. Creemos que la ley, en el texto propuesto y con las atribuciones definidas, va a agravar la falta de inversión y de creación de empleo. Repito, nuestra

visión representa tanto a empresarios chicos como grandes y a nacionales como a extranjeros.

Yo he escuchado hoy el argumento de la ley anterior y que la ley anterior estaba en vigencia. Y –de nuevo–, sin hacer un argumento jurídico, en la visión de los empresarios, esta era una vieja ley y, por alguna razón, siempre se discutió su vigencia, y esta nueva ley es como para decir que si tenemos alguna duda de que esta ley está vigente, que no queden dudas de que está vigente, y esta es la nueva ley.

Valoramos la correcta labor y el rol legítimo y subsidiario que tiene el Estado ante la labor de los empresarios y la colaboración constructiva que tiene que haber entre ambos. Abogamos por la defensa del consumidor tanto en los bienes y servicios privados como en los bienes y servicios públicos.

Como padre de tres hijos que se dedican al marketing, quiero hacerle un comentario. Hoy, el secretario de Comercio hizo un comentario sobre por qué se tenía que pagar más por la leche o algún producto lácteo con extra calcio, si el contenido era más o menos el mismo. Yo lo he vivido del otro lado y he visto a consumidores que estaban dispuestos a pagar más por un producto porque el envase era reciclable o no reciclable. Me parece que no le corresponde a nadie, ni a un juez ni a un funcionario público, juzgar la libertad de las personas para decidir.

–El señor Costa realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Fuentes). – Ahora le replica, por favor, señor secretario.

Vaya terminando, por favor.

Sr. Taussig. – Por último, quiero hacer una alegoría de un comentario. Este es un momento donde en la situación económica que estamos viviendo necesitamos inversiones. A veces, desde nuestro lado nos parece que medidas estas son como invitarnos a una fiesta donde nos van a cobrar entrada; donde no sabemos si vamos a poder salir o a qué hora vamos a poder hacerlo; no sabemos qué nos van a dar de comer; por ahí, si no les gusta cómo bailamos, nos van a pegar; y, además, si nos quejamos, nos van a expropiar.

Por último, les voy a hacer una pregunta. Piensen entre ustedes cuál es la compañía argentina que está entre las tres mayores compañías de capitalización bursátil, o sea, de mayor valuación. Posiblemente no lo saben: Mercado Libre. Yo me pregunto cómo va a hacer la Secretaría de Comercio para discutir con Mercado Libre los costos, los márgenes y los precios de una compañía de ese tipo de actividad.

Sr. Presidente (Fuentes). – ¿Contesta alguien? ¿No?

–No se realizan manifestaciones.

Sr. Presidente (Fuentes). – Vamos a convocar a Ider Peretti, de la Confederación General Económica.

Como estamos cerrando la primera etapa, que es representantes de cámaras empresariales y grupos económicos, voy a anticipar quiénes están pendientes, por las dudas de que se haya retirado alguno. Tenemos pendientes a Ricardo Marra, de la Bolsa de Cereales; a Manusovich, de Fedecámaras, y a Marcelo Fernández, de la CGERA.

Les pido disculpas a aquellas asociaciones de consumidores, porque se ha demorado. Va a estar todo el día martes dedicado a ellos. Ahora fijaremos la agenda en función de los cronogramas de viaje de los senadores. Lo ideal sería poder arrancar el martes a la mañana para tener todo el día y escuchar fundamentalmente a usuarios y consumidores.

Sr. Peretti. – En primer lugar, agradezco esta invitación para poder expresarme como presidente de la Confederación General Económica en este tan importante recinto y en la discusión de esta ley tan importante.

Siguiendo un poco el debate y los distintos discursos, veo que hay una gran preocupación antes de tiempo por la ley. Yo estoy convencido de que los empresarios argentinos, en su mayoría, respetan la ley. Lo que se acuerda en la cuestión de comercio se lleva adelante, respetando lo pactado con la Secretaría de Comercio o con el área que corresponde. Aquí, en primer lugar, parecería que todo el mundo está preocupado antes de tiempo, como que ya están las multas, ya llegan las penalizaciones. En realidad, si los empresarios hacemos las cosas como corresponde y, sobre todo, respetamos –especialmente las grandes empresas– al consumidor y a las pequeñas y medianas empresas, no le veo ningún sentido a estar tan alarmado, como algunos pretenden mostrarse y vender esta ley. Les preguntaría a esos empresarios tan preocupados o a esos dirigentes, en este período, en estos 10 años, a cuántas empresas les fue mal o a cuántas empresas realmente no se las ayudó a comenzar a caminar nuevamente, a crecer y a generar puestos de trabajo. Yo estaría preocupado en la década anterior, en los noventa. Ahí sí los empresarios argentinos estuvieron al borde del exterminio, generando la mayor desocupación y generando una economía que realmente nos puso de rodillas a los argentinos.

Entonces, nosotros consideramos positiva la administración del comercio tal como se vino aplicando en estos tiempos, en un mundo que, como ustedes saben, en estos últimos 3 o 4 años no para de caer; en un mundo donde lamentablemente la economía es muy dinámica; donde vemos permanentemente, incluso en los principales países del mundo, tremendas complicaciones con relación a sus economías. En la República Argentina, a través de la administración del comercio, por primera vez no les ocurrió a los empresarios y a los trabajadores lo que estábamos acostumbrados a ver: a nuestras empresas quebrando, a nuestros trabajadores desocupados, porque los productos importados o porque la administración del comercio no se practicaba y directamente desaparecían los empresarios.

Por lo tanto, nosotros consideramos que la administración de esta ley que se propone para el bien de las pequeñas y medianas empresas y de los consumidores, administrada por un funcionario como el señor Costa... El pueblo argentino tiene que estar muy tranquilo, porque Costa no es un funcionario que responde ni fue elegido por un gobierno neoliberal ni por un gobierno al que no le interesa la industria nacional, o que no le interesa el empleo argentino. Nosotros sabemos que hoy en el mundo, sobre todo los países organizados, tienen leyes de este tipo: leyes que protegen al consumidor, que protegen a las pequeñas y medianas empresas. No sólo en el mundo; basta recordar que en la Argentina lo hizo don Hipólito Yrigoyen, lo hizo Perón y lo hizo Arturo Illia, que le costó lo que le costó, con la ley de medicamentos. Así la fueron haciendo distintos gobiernos argentinos para poder proteger a los pequeños y medianos empresarios y a los consumidores.

Quiero decirles también que muchas pero muchas entidades gremiales empresarias, muchas que hoy nos acompañan, apoyan y acompañan la idea y la iniciativa de una ley para proteger justamente a nuestros consumidores y a nuestras pequeñas y medianas empresas. Creo que defender al consumidor, defender el poder adquisitivo del asalariado, es fundamental para el crecimiento de un país. Porque sabemos que la República Argentina, que en estos años defendió al asalariado, nos aseguró a los empresarios un consumo interno que nos permitió un crecimiento que nunca habíamos alcanzado en los 200 años, e incluso en estas épocas tan duras donde el mundo te quiere vender en vez de comprarte. Porque el mundo te quiere comprar algunos productos que se despachan, más que vender; pero cuando vos tenés que vender productos elaborados, productos con valor agregado, el mundo te quiere vender antes que comprar. Nuestro pueblo, gracias a cuidar el poder adquisitivo del salario, sigue consumiendo y sigue generando el movimiento que crece y que produce la República Argentina para nuestros empresarios.

También quiero referirme a otra cuestión. Hoy temprano escuchaba el discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina y hace un rato escuché también el discurso del presidente de una de las entidades cooperativas. Quiero referirme a esto porque ustedes saben que vengo del campo, que pertenezco a la producción agropecuaria. Justamente, son dos entidades que representan las dos puntas. O sea, el cooperativismo, que abrazaron mi bisabuelo y mi padre, fue creado justamente para defenderse de los intereses de los más grandes, que defiende la Sociedad Rural Argentina que me parece que es así y lo respeto. Pero hoy cuando escuchaba al presidente de la Sociedad Rural Argentina decir que al campo le ha ido mal, que estas políticas no habían sido importantes para el sector agropecuario, debo decirle que por primera vez en la República Argentina, por primera vez en estos diez años –y esto lo digo con emoción y con mucho orgullo–, ningún productor, ningún productor, fue a vender su campo para poder pagar las cuentas.

Algunos campos se vendieron porque hay productores que cesan en su actividad o algunos productores vendieron sus campos porque los habían comprado en mil dólares y ahora los venden en diez mil. Entonces, quiero decirles que quienes hemos luchado en la República Argentina para que nuestros hombres de campo tengan una mejor calidad de vida... Debo decirles también que por primera vez en nuestro país hasta los pequeños y medianos productores pudieron dejar sus vehículos, con diez o veinte modelos para atrás, y poder estar actualizados.

Asimismo, debo decirles que nuestros productores han generado el récord en compra de tractores y de cosechadoras; no en elementos para salir y pasear, sino para producir y trabajar. Además, debo decirles que, por primera vez en la Argentina, no hay campos desocupados. Los campos se arriendan, se compran y son solicitados porque en todos estos años han producido rentabilidad.

Seguramente que hay muchas cosas por discutir, seguramente; pero debo decirles, con mucho orgullo que, como productores agropecuarios, se nos ha permitido crecer y actualizarnos en genética y tecnología.

Luego escuché al presidente de Coninagro, un hombre que justamente representa al cooperativismo, y no quiero dejar de recordarle al señor Garetto, que en los años de Martínez de Hoz y de Cavallo el cooperativismo estuvo puesto de rodillas. Época en la que directamente los pequeños y medianos productores, en sus provincias, terminaban cayéndose a pedazos.

Vivo en Morfeo, provincia de Córdoba, en una zona muy cooperativista. Allí cada pueblo tenía su cooperativa agrícola, ganadera y de consumo, sin embargo, quedó solamente la de mi pueblo. Y la de Suardi, la de San Guillermo, la de Brinkmann, la de Porteña y la de San Francisco, todas quebraron en esa década. Y hoy, en estos diez años, con el trabajo que hicimos distintos hombres y mujeres, con el apoyo de estas políticas, las cooperativas nuevamente comenzaron a funcionar y a ser cada vez más grandes.

Asimismo, deseo recordarle al señor Garetto que ACA, una cooperativa que pertenece a Coninagro, en estos años se transformó en la empresa exportadora de trigo número uno de la Argentina.

Observe también que SanCor, otra de las grandes empresas cooperativas de nuestro país... Y esto va a colación de que algunos quieren hablar de "chavismo" en esta ley. Ahora bien, seguramente, cuando nuestros hijos o nietos lean la historia sabrán que Chávez, con sus errores y aciertos, cada segundo que vivió su gobierno lo hizo por su pueblo, por sus trabajadores, por sus productores. Distinto a lo realizado por algunos hombres de la República Argentina, como Cavallo, especialmente, o por muchos de esos hombres, de los que cuando nuestros hijos y nietos lean esa historia seguramente les resultará algo muy triste.

Y hablo de SanCor, ¿por qué? Porque en esta década fue rescatada por este gobierno y por el presidente

Chávez. De lo contrario, si no hubiese sido por esos dos presidentes, yo que soy tambero y mis abuelos, que fueron los fundadores de la cooperativa lechera más grande de Sudamérica, hoy no tendríamos más cooperativa para defender nuestro precio.

Eso quería decirles con respecto a los dos discursos que escuché.

Luego, deseo manifestarle que desde la Confederación General Económica, y con muchas, muchas confederaciones y entidades gremiales empresariales, apoyamos este proyecto y apoyamos, una vez más, la administración del comercio y la defensa de los consumidores y de las pequeñas y medianas empresas argentinas. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias a usted.

A continuación, tiene la palabra Ricardo Marra, de la Bolsa de Cereales.

Les informo que antes de que comience el debate de los señores senadores, quedan pendientes tres expositores, porque omití mencionar al representante de la Asociación de Bancos Argentinos, Claudio Cesario, que estaba anotado.

Sr. Marra. – Buenas tardes a todos.

Mi nombre es Ricardo Marra y soy presidente de la Bolsa de Cereales.

En forma breve, les comento que la Bolsa de Cereales es la institución civil y comercial más antigua de la Argentina. Fue creada en 1854 y el 15 de mayo cumplimos 160 años. Es una entidad que promueve el mercado y las entidades gremiales del agro. Su política es puramente técnica y su objeto social es el apoyo, el crecimiento y el desarrollo del país.

Muy pocas veces, desde 1854 hasta ahora, la Bolsa participa de algunos temas, porque dentro de nuestra institución figuran inscritas desde las cuatro entidades de productores hasta las entidades de los exportadores, pasando por las avícolas, los molineros, la industria aceitera, ahora la Cámara de Biocombustible, la Cámara de Feedlot, los corredores, etcétera. Es decir que llegar a un consenso entre todas estas entidades por un punto específico es muy difícil.

En este sentido, esta mañana estuvieron reunidos los técnicos de las entidades gremiales que están en la Bolsa y expresaron su preocupación por los alcances que pueda llegar a tener esta ley. Porque la Bolsa cree principalmente en el mercado, es decir que el precio surja de la oferta y la demanda. Lo decidieron así los hombres que crearon esta Bolsa en la Plaza de las Carretas, cuando compraban el cereal. De hecho, ellos crearon el reglamento para saber quiénes eran los que vendían, quiénes compraban y encontrar las formas para generar el precio. Por lo tanto, lo que nos preocupa es que esta ley tenga interferencia en los precios.

Por otra parte, les quiero comentar que fui presidente del Mercado a Término, en 2002, y para mí es una situación rara estar entre el senador y el jefe de Gabinete, porque en ese momento, en marzo, había

mucha preocupación del gobierno; ellos tenían una preocupación: cómo había que hacer para que el productor sembrara trigo y faltaba el precio.

Reitero, yo era presidente del Mercado a Término –un mercado centenario; es el tercero a nivel mundial–, y, en esa época y desde el 92, el mercado cotizaba en dólares, pero las operaciones en dólares estaban prohibidas. (*Dirigiéndose a Aníbal Fernández.*) La verdad es que hoy le puedo agradecer porque, en aquella oportunidad, usted me llevó ante el jefe de Gabinete y, como consecuencia de ello, fue aprobado un decreto de necesidad y urgencia, y en mayo de ese mismo año el mercado comenzó a operar en dólares. Recuerdo que el primer precio del trigo en dólares fue de 108 dólares.

El productor en ese momento –por supuesto que hubo otras medidas– ya tenía un precio de referencia para sembrar.

–El señor senador Fernández realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Marra. –Ése era un buen precio en ese momento, pero los costos eran otros.

Ahora bien, uno de los puntos de esta ley es el de los precios máximos. Ahora bien, cada vez que se ha intentado poner precios máximos, con muy buenos sentimientos o con muy buenos objetivos, para defender al consumidor, se terminó perjudicándolo.

A mí me ha tocado justamente con lo del trigo. Es decir, con el buen objetivo de cuidar que no aumentara el precio del pan hemos perjudicado la producción del trigo. Este debate lo traigo como un símbolo de lo que ocurrió en algún momento. Y esta ley, al poner un precio máximo y que puede determinar que es acaparamiento de materia prima y acá hablo de la discrecionalidad. Si no está bien escrito qué se puede entender como acaparar “materia prima”. A veces se dice que el productor acapara para perjudicar la política económica. Aparte soy corredor de cereales y el cliente productor no vende porque cuida sus reservas. Cuando hay una brecha cambiaría tan grande el productor no vende. El productor nunca vende o deja de vender pensando en perjudicar a alguien. Me preocupa que al productor como puede ser el de Necochea en este momento, donde hay un millón de toneladas que no se pueden vender porque está cerrada la exportación de trigo, se le diga que está acaparando; pero lo que hace es esperando para vender cuando venga alguien a comprar en Necochea y no entregarlo en Buenos Aires porque tiene un alto costo de flete.

El otro tema que estamos sufriendo como operadores es el pago de la multa o que lo bajen del registro de operadores o le saquen le CUIT que es la muerte de la empresa. En el comercio de granos se les ha sacado el CUIT a empresas multinacionales, pero también a las empresas chicas. La empresa multinacional tiene un estudio grande que puede presentar una medida cautelar y protegerlo, la empresa chica la tiene que rebuscar de otra manera porque es más difícil. Dentro de esta ley

creemos que debe existir un derecho de defensa antes de aplicar la multa o sanción que el comerciante, el productor o el intermediario puedan presentar un descargo y no tengan que pagar primero porque una multa, a veces, lo saca totalmente del mercado. Es un punto que hay que rever.

El tema técnico lo estuvimos viendo entre todas las entidades y algunos puntos quedaron para seguir discutiendo. Traje lo que más preocupaba. La Bolsa de Cereales participó hace muchos años y una de las cosas que felicitó a este gobierno fue cuando volvió a poner el Ministerio de Agricultura cuando antes era secretaria. Y la Bolsa ya lo había hecho anteriormente, creo que en los años 30, no lo recuerdo bien, pero pidió que Agricultura en vez de ser secretaria sea ministerio. Creo que en lo que respecta a precios y acaparamiento, precios máximos o la multa, tiene que tener una participación el Ministerio de Agricultura junto con la Secretaría de Comercio adentro. Sobre todo por el entendimiento porque, como ya dije, en un ejemplo práctico de alguien que va hoy, por ejemplo un productor y tenga quizás 3 mil o 4 mil toneladas de trigo y supongamos que el trigo subiera, dirían que estaba haciendo agio para hacer que el precio suba.

Ésos son los puntos que me preocupan. Creo que los senadores tendrán que discutir, ofrecemos los técnicos de todas las entidades que participan para ver que esto no sea una traba para el comercio de granos. Nosotros creemos en la Bolsa que el comercio es lo que estimula la producción y, cuando se toca el precio y sobre todo cuando al productor le ponen un tope al precio máximo, hace que sea indefectible que suba el precio. Pasó en la Argentina en otro momento y pasó en el mundo, por ejemplo, en Rusia cuando intervenía el Estado y se le decía cuánto tenía que sembrar, qué sembrar y Rusia era importador de alimentos. Cuando los rusos se dieron cuenta y empezaron a dejar que la libertad del comercio dejara para el productor porque producir cereal no es lo mismo que producir cualquier otra cosa. Es mucho riesgo. Hay una relación de riesgo-beneficio muy grande.

Con lo cual, hoy en día hasta China desarrolló un mercado de granos que es el segundo del mundo y ha entendido que el objetivo para aumentar la producción del grano es ir liberando este mercado. Creemos que algunos puntos de esta ley van a trabar el mercado de granos y es lo que preocupa a todas las entidades y a las 24 entidades que conforman la Bolsa. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias. Tiene la palabra el jefe de Gabinete.

Sr. Capitanich. – Quiero responder un poco. Primero y principal no hay ninguna mención expresa que genere incertidumbre o alteración en los sistemas de fijación de precios en la comercialización de cereales, granos y etcétera. Esto lo desmentimos enfáticamente. Por otro lado, el sistema de precios, en la economía, puede funcionar desde un grupo pequeño en un supermercado pequeño de 7 mil precios a una gran cadena

de 70 mil precios. La historia de los últimos 11 años demuestra claramente que la cuestión que tiene que ver con los mecanismos de intervención por parte del Estado para estimular la protección de la canasta familiar no ha abarcado nunca una discusión con más precios que un esquema de 500 precios. El índice de precios al consumidor mide seis canastas en todo el país con aproximadamente 230 mil mediciones, antes eran 100 mil para el área metropolitana y gran Buenos Aires, ahora son 160 encuestadores y antes eran 100 y tenemos 520 variedades de productos y en general el sistema de precios cuidados tiene 320 productos para las grandes cadenas. En definitiva, la historia claramente demuestra en la gestión de gobierno que el incentivo tiene que ver con el funcionamiento por parte de la empresa en el marco de precios de mercado. Obviamente, la participación tiene que ver con la capacidad de intervenir en aspectos que tienen que ver con formación monopólica. Por eso, nosotros queremos dejar en claro que no va a haber ningún tipo de alteración en la cotización de precios en la economía y esta es la verdad objetivamente.

A su vez, quería hacer un cierre al final, pero también quiero observar que nosotros vemos que si el Estado no tiene ciertas herramientas para orientar ciertos procesos de formación de precios o intervenir cuando existe el ejercicio monopólico de una empresa o un grupo de empresas vía la constitución de un oligopolio que a su vez alteren las condiciones de abastecimiento, provisión o fijación indiscriminada de precios o altere el comportamiento porque la cadena más débil muchas veces y esto ocurre, cuántas pequeñas y medianas empresas ubicadas en distintos lugares de nuestra extensa geografía territorial muchas veces tienen que sufrir las consecuencias de una política comercial por parte de una empresa grande. No solamente que les fija un precio desde el punto de vista discrecional, en muchos casos las grandes cadenas de supermercados... Pregunten la relación que tienen con las pequeñas y medianas empresas respecto de la administración de la góndola, con respecto a la forma de pago y respecto a las bonificaciones compulsivas que les establecen o los sistemas de descuento o la fijación de un sistema de precios indirectos vía costo de transporte. O sea, nosotros entendemos claramente la necesidad de que el sistema económico funcione sobre la base de un proceso de formación de precios que sea acordado por las partes: productor y consumidor. Pero advertimos que el comportamiento y el funcionamiento del sistema de formación de precios en la cadena de valor no es equivalente en todos los lados. A mí me parece que ésa es la cuestión que está en discusión aquí, objetivamente, lo que entendemos es que no hay una injerencia por parte del Estado que no sea otra que generar los incentivos para que el sistema económico funcione bien y justamente para propender a la inversión, justamente para propender al empleo, justamente para propender a los incentivos correctos a los efectos de que el sistema

funcione. Nada más que ése es el espíritu que anima esta iniciativa.

Sr. Presidente (Fuentes). – Muchas gracias.

Secretario de Comercio: adelante.

Sr. Costa. – Me voy a referir a un par de preocupaciones que se plantearon. Con respecto a la posibilidad de descargo frente a la aplicación de multas, está contemplado en la ley que el derecho se extiende de 5 a 10 días para que se hagan todos los descargos. La idea es –y en esto insisto porque tiene que ver con lo que dijo el señor jefe de Gabinete– que esta ley sea para situaciones excepcionales donde hay claras distorsiones en las formaciones de precios y la idea es no aplicar la multa. No importa el funcionario que esté en la Secretaría de Comercio porque éste es un instrumento para situaciones de claras distorsiones y así se debe interpretar, y está escrito con ese espíritu.

Respecto de la posibilidad de que intervengan otros organismos para determinar conductas sancionadas por esta ley, vuelvo a insistir en la importancia de la creación del observatorio de precios porque ahí está contemplado que sea un órgano que asista al secretario de Comercio, con participación de todos los ministerios, asociación de consumidores. Se puede discutir también la conformación de ese observatorio de precios para tener la mayor cantidad de elementos al momento de sustentar algún tipo de medida aplicada a partir de las disposiciones de la ley. Con lo cual, esa preocupación debería no ser tan importante si se toma en cuenta el otro proyecto que también se está presentando acá por el debate.

Sr. Presidente (Fuentes). – A continuación, tiene la palabra el señor Manusovich, de Fedecámaras.

Sr. Manusovich. – A la Ley de Abastecimiento nosotros desde las pymes la recordamos cuando el exministro Cavallo eliminó la ley el 2 de abril de 1991, dejando dos artículos. Esos dos artículos le dieron la posibilidad al doctor Silvani de la AFIP de clausurar pequeños comercios aplicando la Ley de Abastecimiento hasta que a principios de 1997 el expresidente Menem sacó la ley de clausuras automáticas de comercio. En ese entonces, los pequeños comercios teníamos que recurrir a los recursos de amparos para evitar las clausuras automáticas. En ese proceso de los años noventa, ese instrumento, que sería muy útil para enfrentar la concentración económica, se aplicó por decisión política a los pequeños y medianos empresarios.

Estamos muy preocupados porque en la jornada de hoy los sectores empresarios con el pensamiento de los años noventa más allá de la Ley de Abastecimiento lo que están reivindicando es una política. Eso nos preocupa mucho porque va mucho más allá de la Ley de Abastecimiento. Desde Fedecámaras recordamos junto con la CGE que durante los años 73 y 74 se aplicaban legislaciones para defender el mercado interno. Pleno empleo, años 73, 74 y 75. Por eso vino el golpe del 76.

Entonces, cuando vemos que se está debatiendo hoy la Ley de Abastecimiento, en el trasfondo de todo

esto, lo que se está discutiendo es la distribución del ingreso. Pero no estamos discutiendo la distribución del ingreso equitativo en la República Argentina, donde todavía falta mucho para que sectores postergados en la distribución del ingreso puedan recuperarse, y se vislumbra un escenario internacional donde la distribución del ingreso por los especuladores financieros hoy nos quieren retrotraer a los años 2002 y 2001.

En ese escenario el mensaje de la República Argentina cuando está debatiendo una norma de estas características debe ser claro para la opinión pública internacional, porque la distribución del ingreso todavía está pendiente. Acá se heredaron mecanismos económicos que tienen que ver con la posición dominante de muchísimas empresas nacionales pero fundamentalmente extranjeras. El proceso de las privatizaciones, la apertura de los mercados y la libertad de los mercados trajó como consecuencia que de 750.000 comercios existentes bajemos a 450.000. Ése fue el balance de los años noventa hasta que culminó el año 2001. Quedaron 80.000 pequeñas industrias, pero ahora somos 1.200.000 comercios minoristas en todo el país. Somos 250.000 industrias, pequeñas y medianas, que han crecido el 70 a 80 por ciento de la mano de obra. Los 6 millones de empleos, que son consumidores, se generaron por la apertura de esta fuente de trabajo. Cuando algún dirigente político recién mencionaba la caída en la actividad económica, tenía deseo de consultarle si se refería a la caída de la actividad económica de los últimos seis meses o si estos porcentajes estaban referidos al año 2001, porque me parece que si los comparamos con 2001 ha crecido la actividad económica.

Como nosotros somos pequeños y medianos empresarios, tenemos ligados a nuestros intereses a los trabajadores. Los 6 millones de empleos que se han generado para nosotros son consumidores. El proceso económico que significó de apertura de fuentes de trabajo y de sustitución de importaciones fue un proceso económico a partir de una crisis tan profunda donde el vaso no estaba medio lleno, estaba casi vacío. Dije casi vacío. Cuando se dice que al país le va mal no es que a todos les va mal, porque hubo un 2 o 3 por ciento de la sociedad, financiera y especulativa, que en 2001 hizo mucha plata y ganó mucha plata con el proceso de la crisis de 2001. Se generaron situaciones críticas como las que hoy vive Europa, con cierre de fuentes de trabajo, especulación financiera, frenando los remates con gente que quedaba en la calle. Es decir, es un proceso que hemos vivido y hemos conocido todos los argentinos.

El escenario internacional está reclamando a la sociedad argentina, incluso a los sectores muy importantes de la economía local, que tomen consciencia porque esto va más allá de la Ley de Abastecimiento. Esto tiene que ver con fortalecer un pensamiento de un país que hoy está discutiendo a nivel internacional una crisis tan profunda de la restructuración de la deuda. Por lo tanto, los intereses poderosos vienen por la Argentina. Y por primera vez tenemos que apelar y decirles a estos

sectores económicos, que conocemos por su ideología y que son los que dicen estar en contra de la Ley de Abastecimiento, que de lo que se está hablando con esta Ley de Abastecimiento es del ordenamiento, de la cadena de valor y de cómo se distribuye el ingreso. Ése es el trasfondo del tema. Si hay sectores altamente concentrados de la sociedad y todos admitimos que un porcentaje elevado de la economía nacional está concentrada, ¿cómo no va a haber una intervención del Estado que busque el equilibrio ante los distintos sectores sociales de la sociedad?

La Ley de Abastecimiento es para proteger al consumidor, es para proteger a todos los sectores económicos y sociales, sobre todo a los más desprotegidos. Este pensamiento viene del pacto social CGE-CGT del 73, 74, 75. Por eso viene el golpe de Estado del 76.

Me parece que los argentinos tenemos que tomar conciencia. Todos los sectores económicos. Incluso aquellos que hoy están criticando a sectores económicos a la Ley de Abastecimiento. El trasfondo de todo esto es porque quieren volver a un proyecto, a un modelo económico agroexportador, eliminar las retenciones. Realmente esto sería un gran retroceso.

Sr. Presidente (Fuentes). – Vamos cerrando, por favor.

Sr. Manușovich. – Nosotros decimos que la Ley de Abastecimiento, lamentablemente, se aplicó alguna vez, porque el pensamiento político de esa administración coincidía con los sectores económicos altamente concentrados, las privatizaciones, etcétera.

Apoyamos esta Ley de Abastecimiento. Quizá hay que prestar atención para que los pequeños y medianos empresarios no sufran la consecuencia de la aplicación de esta ley como ocurrió en los años 90. Nada más.

Sr. Presidente (Fuentes). – Muchas gracias. Habíamos omitido a Juan Rey Kelly, Confederaciones Rurales Argentinas. Y queda un solo expositor para el jolgorio. Él y otro. Adelante, por favor. Disculpe que no salude a nadie, pero no está Fernández para saludar.

Sr. Rey Kelly. – Buenas tardes a todos. Prometo ser muy breve.

En primer lugar, quería agradecerles el espacio. La verdad es que para Confederaciones Rurales Argentinas yo soy analista económico. Es una entidad que nuclea a más de ochenta mil productores agropecuarios. En su gran mayoría son medianos productores, están adheridos a 300 sociedades rurales, prácticamente, todas las sociedades rurales del interior y a su vez están nucleados en catorce federaciones y/o confederaciones.

En relación con los tres proyectos planteados, me voy a referir, básicamente, al proyecto de nueva regulación de las relaciones de producción y consumo. Tanto el jefe de Gabinete como el secretario Costa pedían que hagamos observaciones sobre este proyecto.

Nosotros, en particular, vemos que dada la experiencia empírica, acá tenemos a dos economistas y seguramente les guste mucho la experiencia empírica,

para el sector agropecuario la aplicación del artículo 2º, inciso c) de la Ley de Abastecimiento se aplicó en los últimos años, aproximadamente, en tres oportunidades, sabemos que en el sector petrolero también se ha aplicado.

Tenemos tres resoluciones. La resolución 1/2006, la resolución 38/2008, las dos para carne vacuna y, la tercera para el trigo, la resolución 67/2013. Los resultados ya son bien conocidos, en términos de lo que está persiguiendo el proyecto de ley, la realidad es que han tenido el efecto totalmente contrario. Le han impreso una alta volatilidad, más volatilidad de lo que tiene un mercado de *commodities*. Sabemos lo que ha sucedido tanto con el precio de la carne en aquellos momentos, como en el mercado de trigo el año pasado. Y sabemos que esto ha tenido un impacto directo en los consumidores al punto de llegar el precio del pan a niveles de los valores de Uruguay. Si ustedes se toman el trabajo de compararlo con lo que vale en un lugar muy exclusivo como es Punta del Este, sabemos que el precio del pan en la Argentina llegó a los treinta pesos, el trigo llegó a los 4.000 pesos por tonelada. Hoy está a menos de la mitad. Sin embargo, el precio del pan sigue en valores muy elevados.

Hay que ser sinceros, hay que sacarse un poco la careta y decir por qué sucedió esto. Básicamente, obedece a una resolución, la resolución 543 que la aplica Comercio Interior, lo que hace es romper la competencia.

Supuestamente, el secretario Costa dijo que él perseguía la competencia en los mercados a través de este proyecto de ley, que buscaba la transparencia, que buscaba poder compensar dentro de la cadena de valor los distintos eslabones y, sin embargo, lo que se ha hecho desde el año 2008, en realidad, esto comenzó en los años 2006, 2007 cuando el secretario de Comercio Interior dijo que no se podía pagar más de 370 pesos el trigo cuando los exportadores podían pagar más de 420 pesos y eso actualmente sigue vigente.

Obviamente, no está diciendo que paguen 370 pesos, pero sí el sistema de cuota de exportación está totalmente vigente a través de la resolución 543 y a través de Comercio Interior se reparte tanto las cuotas de trigo, como las cuotas de maíz. Eso está muy lejos de brindar transparencia.

Hoy sabemos que tenemos el precio del maíz pinchado. Ya se dijo anteriormente que el maíz está enfrentando graves dificultades, tanto por la presión impositiva como por el riesgo comercial que implica esta resolución que lo que hace es quitarle competencia al mercado del maíz, quitarle competencia al mercado de trigo. Todo esto en detrimento de los productores de trigo y maíz. Sepámoslo también, a ellos les gustan las estadísticas. Estas son estadísticas lamentablemente, no sistemáticas, porque sabemos que se han destruido prácticamente todas las estadísticas del sector agropecuario.

En el año 2006, 2005 la ex ONCA estimaba que había cerca de 49.000 empresarios haciendo trigo, produciendo trigo, invirtiendo en trigo. Hoy según

los últimos datos que ha dado el gobierno a través de distintas conferencias de prensa, porque lamentablemente no hemos podido acceder a esa información, hay alrededor de menos de treinta mil productores haciendo trigo. No es que hayan desaparecido veinte mil, probablemente, se hayan ido a otra actividad, pero eso te está indicando la cantidad menor de productores de trigo que están haciendo trigo en la Argentina.

En segundo lugar, se sostuvo nuevamente que se buscaba la competencia, transparencia. En el año 2007, previo a toda esta intervención, había más de cuarenta exportadores de trigo; o sea, entre pequeños, medianos y grandes exportadores de trigo, que es lo que le daba competencia y puja por la mercadería y no transferencia de ingreso de los productores medianos y chicos y también de los grandes hacia los exportadores.

Hoy podríamos preguntar a Comercio Interior sobre cuántos exportadores otorgan más del 80 por ciento de la cuota de exportación de trigo y vamos a ver que son menos de diez y son las principales empresas exportadoras que no solo están en la Argentina sino en todas partes del mundo.

Quería hacer referencia en cuanto a la evidencia.

Y, para terminar, creemos que la aplicación del artículo 2º, inciso c), de la Ley de Abastecimiento se va a replicar con este nuevo proyecto. Creemos que en el tema del artículo 2º, establecer precios máximos, los 370 pesos por tonelada de trigo fue un precio máximo, fue avalado por el Estado. Hay acuerdos entre el gobierno nacional y el Centro de Exportadores, fomentado por el gobierno nacional.

El artículo 3º, los precios también van a poder ser fijados por los gobernadores. Después, hay una serie de cuestiones, por ejemplo, como el artículo 4º con relación a discrecionalidad, a qué acciones pueden ser consideradas de infracción.

La realidad es que vemos que no es para nada preciso y por eso no estamos a favor de este proyecto; al contrario, creemos que es muy nocivo por las todas las cuestiones que dijimos anteriormente. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). – Muchas gracias. Queda únicamente Fernández. Si puede concurrir.

Hay tres preguntas que han sido remitidas a la mesa de las cuales dos ya han sido. Una era del señor Kelly, que ya han tenido anteriormente respuesta. Una pregunta que vamos a hacer al cierre por parte de consumidores, que –repito– el día martes a partir de las once de la mañana vamos a escuchar a todas las asociaciones de defensa de consumidores y sectores afines.

Tiene la palabra el señor Fernández.

Sr. Presidente (Fernández). – Muchas gracias, presidente.

Buenas tardes a todos. Yo soy Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de República Argentina. Como soy uno de los últimos que habló o creo que soy el último en la parte empresa, represento a los que dejaron los demás. Porque vi que

todo el mundo tenía representación empresaria, así que me quedé con poca.

En definitiva, nosotros también somos representantes de las pequeñas y medianas empresas, de sectores industriales, sectores comerciales, algunos de la producción.

Básicamente, soy empresario textil. Hoy estuve aquí desde las 11 de la mañana y tuve mi empresa produciendo. Esperemos que los resultados sean buenos.

Más que nada, deseo agradecer al Senado por la posibilidad de estar aquí para debatir estos proyectos de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo. Asimismo, quiero agradecer a todos los senadores que hoy estoicamente están también con nosotros, están más acostumbrados a estar en sesiones, pero estuvieron con nosotros debatiendo este tema, que es muy importante.

Señalo que es importante porque se abre una gran perspectiva de discusión. Hoy pasaron muchos oradores y la verdad es que dejaron mucha tela para cortar. Me tendría que referir a todo lo que dijeron, pero voy a tratar de abocarme al tema. Cuando estaba allá y veía que se iban del tema no me gustaba. Entonces, no me quiero contradecir. Pero, reitero, dejaron mucha tela para cortar.

Puedo hacer un comentario respecto de la tela que dejaron para cortar. Soy fabricante de cierres a cremallera, por eso soy el que cierra del sector empresario. Fijense, si nosotros no pudiéramos contar con una ley que ampare a las pequeñas y medianas empresas en esta discusión, lo que pasó en el mes de enero. En el mes de enero todos sabemos que teníamos un dólar a 6,50 y por una decisión del gobierno nacional hubo una devaluación del peso respecto del dólar y se fue a 8 pesos. Muy bien. Nuestros proveedores que nos habían entregado la mercadería en diciembre con un dólar a 6,60, dolarizada la factura, cuando volvimos de vacaciones—algunos nos las tomamos en enero—nos encontramos con el dólar a 8 pesos. ¿Qué hicieron los señores? Nos colocaron las notas de débito para decirnos: “No me deben a 6,60, lo que les dije en diciembre, sino que me lo deben a 8, al dólar de hoy”. Hete aquí que mantenían el precio en dólares de aquellas entregas de diciembre.

Creo que muchos de ustedes deben saber, y no hace falta que uno les enseñe nada, que la mano de obra y los costos bajaron en dólares. Porque si hubo una devaluación del dólar—perdón por meterme en el rubro, no soy economista, sino que soy empresario—, es simple matemática, los costos tienen que haber bajado. Si devaluaron el peso con respecto al dólar, los gastos no bajaron en dólares, mantuvieron el precio en dólares. El mismo precio de diciembre.

Entonces, ¿uno adónde se iba a quejar? ¿A quién le iba a hacer este planteo? ¿Al proveedor? Nos dejaba de entregar materia prima. ¿Por qué? Porque es monopólica.

Aprovecho que está el jefe de Gabinete, el secretario de Justicia y el secretario de Comercio para decirles que somos más ambiciosos con la ley. Es claro que tenemos

ideas, proyectos y modificaciones. Nos gustaría poder tener una defensoría de pymes. Tenemos Defensoría del Pueblo y defensa del consumidor. ¿Y las pymes? Podríamos ser ambiciosos en el proyecto y que a nadie le dé miedo tener defensoría de pymes, de las pequeñas y medianas empresas.

Esta queja es particular. Uno no viene a dar nombres, pero las empresas que son monopólicas del sector textil, que nos tenían dolarizados y tienen medidas de protección, de antidumping, manejan el mercado. Si no les compramos a ellas, al tener medidas de antidumping... Muchos de aquí quieren tener apertura económica—tal vez, habría que discutirla también—, al no poder importar esa mercadería y ellos tener el mercado monopólico—muchos estaban sentados por ahí y hoy se estaban quejando—, nos tienen agarrados con los precios que ellos fijan. Entonces, ¿cómo no vamos a ser ambiciosos respecto de poder discutir en el Senado este proyecto de ley, con el Poder Ejecutivo? Pero más que nada, me hubiera gustado discutirlo con el sector privado.

Tengo una vieja ambición. Me hubiera gustado que muchos de los señores que ahora no están aquí sentados me hubiesen escuchado como yo lo he hecho, pero evidentemente se hizo tarde. Nosotros muchas veces somos rehenes de muchos de los señores que conducen las entidades que hoy estuvieron aquí. Fijense qué hicieron el Grupo de los Seis, diciendo: “Estamos todos”. Les puedo asegurar—puede dar fe el gobierno nacional, la UCR y varios partidos—que convocamos a empresarios. Trabajamos mucho también con la Confederación General Económica. Tratamos de aunar criterios. Hemos tenido mesas con CAME. O sea que el espectro pyme es muy grande.

Hoy escuchaba cuando decía: “Nosotros somos todos”. Me parece que no es así, no somos todos. Todos somos todos. Y tenemos una gran posibilidad de mostrarnos todos aquí. Pero como sector privado sería bueno que “seis”, que conforman un grupo empresario importante... No cabe ninguna duda de que en producto bruto son muchos más que nosotros, en facturación también; ahora bien, en empresas, creo que les ganamos por largo. Somos muchas más empresas. Damos el 75 por ciento del empleo.

Quien les habla ha sido diputado nacional. Fui diputado por el Frente para la Victoria. Realmente con la comisión pyme me enteré de que éramos 700.000 pequeñas y medianas empresas y 4.500 empresas grandes, cosa que yo ignoraba. De todo el espectro económico somos 700.000 pymes y 4.500 empresas grandes de la construcción, del comercio y los servicios, y de la industria. Eso no es “todos”. Creo que somos nosotros los que tenemos más derecho a decir “todos”. Esto es lo que debemos discutir y aportar.

Fijense que el artículo 1° de la ley del consumidor, les aclaro que esta ley es del 74, que hoy se está tratando de modificarla, mejorarla o adaptarla a los tiempos modernos, la hizo—muchos nombraron al general Perón—,

en realidad, el ministro Gelbard. El ministro Gelbard conformó un movimiento empresario muy grande, creo que el más grande, porque llegó a ser ministro de Economía nada menos que del general Perón, anteriormente lo había sido del doctor Cámpora. Él proponía más leyes en defensa del trabajo argentino y de la producción nacional. Por ejemplo, la ley de protección del trabajo nacional y de las pymes nacionales. Pretendía también que todo lo que fuera producción nacional tuviera más importancia que la importación. Pretendía que viviéramos del mercado interno. Esto es lo que nosotros queremos discutir porque el consumidor, para nosotros, es vital. Las pequeñas y medianas empresas tenemos un contacto permanente con el consumidor. No es que no lo conocemos. Sabemos quién es el consumidor. Muchas veces, se quejan hacia nosotros o hacia los comercios a los que les vendemos por los precios.

¿Ustedes piensan que Marcelo Fernández hoy es formador de precios con el cierre a cremallera para la indumentaria? Seguramente está cara, y todos se quejan de esto. No somos formadores de precios. No lo son los botones, los hilos, la suela de los zapatos ni los cordones. No somos formadores de precios. Muchas veces, somos sometidos a quienes forman los precios y quienes realmente nos obligan a comprar a lo que ellos dicen.

Es el momento en que podemos discutir y estamos discutiendo con el gobierno nacional. Siempre se decía que era una escribanía o que venía a libro cerrado. Hoy he visto que se han escuchado todas las opiniones, las que estaban a favor y las que estaban en contra.

Coincidimos en que hay que dar este debate y así lo estamos haciendo. Por eso, hemos acercado propuestas a la Secretaría de Comercio. Estamos acercando las propuestas que nos parecen realmente importantes.

Aprovechando que está el Estado y estamos en el Senado, que se encuentran presentes el oficialismo y la oposición, demos este gran debate en la Argentina, si queremos tener producción nacional, si queremos un campo fuerte, como se dijo hoy a la mañana; pero sepamos que también necesitamos que la industria esté fuerte. La industria va a estar fuerte si nosotros podemos ser competitivos. No sea cosa que cuando nos hablen de la apertura económica o de mejorar el bolsillo del consumidor... Quería cerrar con esto: no nos olvidemos de que comprar barato a la Argentina le salió caro. Repito, no nos olvidemos de que comprar barato a la Argentina le salió caro, y de que en las góndolas de todos los negocios teníamos "made in" y, ahora, por suerte —desde hace años se reemplazó—, tenemos "hecho en". Eso es a lo que aspiro como empresario nacional y es lo que quiero dejarles como reflexión. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). — Muchas gracias.

En la lista de oradores están inscritos: el senador Naidenoff, el senador Morales, la senadora Morandini, la senadora Michetti, el senador Cimadevilla, el senador Rodríguez Saá y el senador Aníbal Fernández. ¿Algún senador más se va a anotar?

Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — Gracias, presidente.

Trataré de ser breve. Antes de efectivizar algunas preguntas, que me parecen importantes para los funcionarios nacionales, me gustaría reflexionar sobre algunos aspectos del proyecto de ley, fundamentalmente el que tiene que ver con las nuevas relaciones en las regulaciones de consumo, para dejar aclarado que, más allá de que en este proyecto encuentro que muchos artículos, prácticamente, están en pugna con nuestra Constitución Nacional, la primera lectura que quiero hacer o la reflexión de todos los representantes de las cámaras y de las asociaciones que han expuesto es que a mí me parece que acá existe una marcada preocupación desde el punto de vista de la irracionalidad que puede significar una medida a una ley de estas características; que viene a contramano de la inversión y de la necesidad de asumir riesgos, fundamentalmente, en los comerciantes y pequeños y medianos empresarios para invertir su propio capital.

¿Por qué digo esto? A diferencia de lo que han sostenido algunos funcionarios, yo creo que todos, en definitiva, se han expresado en cuanto a la ley que modifica a la Ley de Abastecimiento con sus matices, con sus visiones. Si bien no formularon observaciones en particular, con respecto a determinados artículos, la cosa pasaba por los globales. Es decir, por el contexto económico del país y, fundamentalmente, por la historia reciente que han pasado muchos de los sectores con decisiones que ha tomado este propio gobierno.

Creo que ésta es una ley que intenta, desde el punto de vista macroeconómico, implementar medidas que se llevaron a cabo desde lo micro y que, evidentemente, cada vez que el Estado, a través de la Secretaría de Comercio, en otros tiempos, ha intervenido con mucha fuerza y terminó de la peor manera. De allí el temor.

Creo que fue el representante de las entidades agropecuarias que decía que cuando el gobierno embistió contra el sector ganadero eso terminó con el cierre de 138 frigoríficos y 15 mil trabajadores en la calle; que cuando se intervino el mercado del trigo, creo que estuvimos ante las dos peores cosechas de los últimos 100 años. Me parece que el temor de los sectores de la producción, de los sectores del trabajo, pasa, justamente, por esta idea. Es decir, no está en discusión. Me parece, o por lo menos lo quiero dejar en claro desde mi mirada, que no estamos discutiendo si el Estado debe intervenir o regular o no la economía. Yo creo que es una discusión que no tiene sentido. Yo soy de los que creen que el Estado debe regular la economía. El tema es el cómo; cómo lo hacemos y cuál es el propósito. Una cosa es intervenir con previsibilidad, con un mercado proactivo, diversificando las ofertas, porque cuanto mayor es la oferta, los precios se vienen para abajo. Otra cosa es tratar de corregir determinadas distorsiones por errores y defectos de la política y no del mercado, con medidas que pueden tener mucho de apriete y de extorsión.

Algunos datos que me parecen importantes. Acá se habló mucho o el gobierno le echa culpa al alza de los precios, o a uno de los responsables del alza de los precios a la cadena de intermediación, a los sectores concentrados y, fundamentalmente, a los supermercados. Quiero reflexionar con los funcionarios que con esta misma estructura de la oferta este país, en el 2003 y en el 2007, contó con una inflación del 3,3 y terminó en el 2007 con el 8,8 por ciento de inflación. Del 4 al 8 por ciento de inflación con la misma estructura de la oferta, con la misma intermediación, con los mismos grupos económicos, supuestamente, concentrados, y con estos mismos empresarios supermercadistas.

También, en esos años, este país contó con equilibrio presupuestario, no había cepo cambiario y tampoco se emitían 200 mil millones de pesos para financiar al fisco.

¿Por qué digo esto? Digo esto porque me parece que se acude a esta receta para implementar determinadas medidas que, a diferencia de lo que dice Julián Álvarez, ésta no es una ley que apunta, pura y exclusivamente, a los grandes grupos. Esto apunta a todos, al pequeño y mediano productor, al pequeño y mediano comerciante. Ésta es una ley se puede aplicar a todos. Tal es así que se puede aplicar a todo, que el mismo artículo 7° de la ley expresa, claramente, que —me parece que tiene que ver con las sanciones— para la fijación de sanciones de toda índole pecuniarias o personales se tomará en cuenta en cada caso la dimensión económica de la empresa... Rige para todos, y si no regiría para todos, fíjense que hasta los propios gobernadores pueden delegar la fijación de precios.

Lo que no quiero es entrar en la discusión si el Estado debe o no intervenir, porque estamos todos de acuerdo. Lo que creo es que ésta es una mala ley para las circunstancias y la coyuntura actual de la Argentina.

Ahora sí voy a las preguntas y voy a tratar de ser breve para que se tome nota y se pueda responder. La primera pregunta es en función de la Argentina en la que vivimos con estos mismo parámetros del 2003 y el 2007, con una inflación contenida y con esta ley que nos viene un poco de apuro. Yo quisiera saber si están previendo una situación de desabastecimiento en la economía.

La segunda pregunta es que en los fundamentos del proyecto se establece que, justamente, es esencial un sistema de control de precios para tratar de evitar las distorsiones, frenar en el mercado la posición dominante por parte de los grupos económicos concentrados. Si es esencial tratar de poner freno a los grupos económicos dominantes, por qué en estos 11 años nunca han puesto en práctica la ley de defensa de la competencia y la ley de lealtad comercial. ¿Por qué se dejaron estar cuando contábamos con herramientas concretas para poner freno a los grupos económicos concentrados? Incluso me quedo con un dato, que creo que algunos funcionarios lo habían dicho, sobre las multas que se habían implementado en la Comunidad Económica

Europea desde el Estado por el incumplir determinados parámetros. Es decir, cuando hay herramientas, uno puede tomar esas herramientas e implementarlas.

Otra pregunta que está en el artículo 2°. El artículo 2° es un artículo muy amplio, porque prevé un marco regulatorio absoluto de parte del Estado. Yo quisiera saber si me puede explicar, quizá el jefe de Gabinete, qué significa disponer la continuidad de la producción. Porque con esta ley, cuando se fijan determinados precios, también se puede obligar, justamente, a disponer la continuidad de la producción. Y creo que nadie puede producir a pérdidas, salvo determinadas contingencias. Las productores agropecuarios conocen las contingencias climáticas, pero nadie puede ser ligado a trabajar a pérdidas. Si se trabaja a pérdida o se trabaja mal, como ocurrió con el trigo, uno va a la práctica y se reemplaza el trigo por otra producción. Al gobierno nacional se le facilitó la cosa para recaudar a través de las retenciones con la soja, pero terminamos como terminamos. Entonces quisiera saber qué significa disponer la continuidad de la producción.

En el marco de las sanciones, se sanciona no solamente a quienes alteren artificialmente los precios en relación a los costos, sino también a los que tuvieran ganancias abusivas. Quisiera que alguien me explique qué es una ganancia abusiva para un productor, pequeño y mediano comerciante, quiosquero o almacenero que cumple con la ley, que está inscrito, que paga sus impuestos. Que alguien me dé un concepto, en nuestro sistema, de ganancia abusiva.

Otra pregunta en relación a esta ley, a la modificación de la 20.680, que se incluye como medida preventiva la clausura preventiva. La clausura preventiva que la pueden tomar los funcionarios, y la clausura tiene una naturaleza penal. Entonces, cómo creen que pueden avanzar con una clausura preventiva de 3 días a 10 o a 30 días de máximo como sanción cuando se vulnera el principio, justamente, de defensa y los criterios que están amparados en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Fundamentalmente, a partir del fallo “Lapiduz” de la Corte Suprema de Justicia que se trató de un fallo que impuso, justamente, clausuras, decisiones administrativas sin pasar por la instancia judicial, y la Corte decretó que ese fallo de la cámara era inconstitucional. Éstas son preguntas que tienen relación directa con la primera ley, con esta ley de regulación de las relaciones de consumo.

Quisiera también hacer otras preguntas que tienen relación con... Soy muy respetuoso de los tiempos. Voy a leer un poquito la ley: “este sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo”. La verdad es que es interesante, y desde la perspectiva de los usuarios y consumidores me parece muy importante contar con algún tipo de aporte que implique una instancia administrativa para resolver los conflictos en las relaciones de consumo. Pero este proyecto de ley, que establece una instancia de conciliación previa en el ámbito de las relaciones de consumo en la Secretaría de Comercio

y en las delegaciones, nos remite en un capítulo a la creación de la auditoría en las relaciones de consumo. Sinceramente, a simple vista, en este contexto de la creación de una auditoría en la relación de consumo no tiene mucha razón ser. No tiene razón ser porque esta auditoría opera como tribunal de alzada de las cuestiones que en las instancias administrativas y en la conciliación obligatoria no han logrado acuerdos. Entonces, opera como tribunal de alzada ante el fracaso de la conciliación de las partes u opera como tribunal de alzada, en este caso, cuando —creo yo que decía la ley— uno quiere impugnar o cuestionar fundamentalmente las sanciones que se impongan por la falta de comparecencias en las propias audiencias. En verdad creo que es un órgano absolutamente burocrático. Yo quisiera saber con qué necesidad se crea el capítulo del auditor en la relación de consumo cuando también se especifica la creación de ocho juzgados nacionales y federales en la Capital Federal. A mí me parece que la instancia de alzada básica y elemental de una instancia conciliatoria previa administrativa donde se establecen los parámetros de la gratuidad es la justicia en lo nacional y en lo federal para las relaciones de consumo. Creo que si uno hace una lectura fina, todo este capítulo es hasta, si se quiere, innecesario y puede ser suplido, desde mi perspectiva.

En segundo lugar, la senadora Negre de Alonso —que no está presente— hacía hincapié con respecto al tema de las provincias en cuanto a la jurisdicción local. El tema de las provincias es central porque funcionan en las instancias judiciales con la creación de ocho juzgados nacionales y federales en la Capital Federal para la relaciones de consumo. Y en las provincias la competencia la van a detentar los juzgados federales. Si yo estoy en Formosa y hay una relación en un contrato de consumo —que no es su caso— de un viaje al exterior de cualquier formoseño que compra un electrodoméstico, una de las ventajas de esta ley es que en el marco de la legitimación para accionar de esta instancia administrativa yo puedo decidir dónde interpongo la acción. Entonces, si yo estoy en Formosa, termino una instancia administrativa ante el delegado, porque hay un delegado, ya que el conciliador está acá, en la capital, de un registro de conciliadores en la Secretaría de Comercio; si fracasa la conciliación está el delegado. Si yo tengo que ir a una instancia judicial, no voy venir a la Capital Federal para demandar.

La ley nos remite a los juzgados federales de las respectivas provincias para interponer la acción judicial cuando fracasa la conciliación, la instancia administrativa. Entonces, me parece que no se contempla, en el marco de los juzgados federales, la realidad de los juzgados federales. Creo que tiene mucha más lógica la competencia de la justicia ordinaria para entender en las relaciones de consumo que en los juzgados federales. Y voy a un ejemplo práctico: nosotros tenemos dos juzgados federales en Formosa —acá están la senadora de la Rosa y el senador Mayans— y de los dos juzgados federales están vacantes. Es decir que

tenemos una jueza de Sáenz Peña, de la provincia del Chaco, que está afrontando estos dos juzgados, y hay una mora absoluta, y no solamente una mora, sino que no se pueden afrontar las pequeñas causas. Si nosotros vamos a terminar delegando en la justicia federal, no solamente en Formosa, sino que hay problemas en la justicia federal de Salta, y en algunas otras provincias que se han recorrido, con algunos delitos federales, y acá le vamos a tirar a la justicia federal la resolución de conflictos de las relaciones de consumo. Me parece que tiene mucha más lógica, desde el punto de vista práctico y expeditivo, que la justicia ordinaria de cada provincia se haga cargo de estos conflictos.

Otra cosa que me parece que no tiene sentido en el ámbito de la justicia nacional y federal de relaciones de consumo es el tope de cincuenta y cinco salarios mínimos, vitales y móviles para interponer una acción, porque si se agota la instancia administrativa... Primero, en las relaciones de consumo puede excederse tranquilamente los cincuenta y cinco salarios mínimos, vitales y móviles.

Has tenido un inconveniente con un viaje: no me quedó claro si te pagaron cuatro mil y gastaste veinticinco mil o si veinticinco mil fue el costo, pero si gastaste veinticinco mil, creo que el abogado que te tocó no te va a olvidar en su vida. Independientemente de eso, en las relaciones de consumo, en la adquisición de un auto o de cualquier otra cosa, se puede exceder los cincuenta y cinco salarios mínimos, vitales y móviles. Creo que no tiene que haber techo en cuanto a los salarios mínimos, vitales y móviles para acceder a un reclamo ante la justicia en este marco. Quiero dejar sentadas estas cuestiones, más allá de que hay modificaciones del capítulo de disposiciones complementarias de algunas leyes, a lo que seguramente otros senadores harán referencia.

Sr. Capitanich. — Esto se lo pregunto al senador Naidenoff, al presidente de la comisión y también al presidente de la Comisión de Presupuesto. ¿La idea es establecer las observaciones por bloque respecto a los tres proyectos o generar opiniones individuales para la corrección? Digo, porque desde el punto de vista del proyecto de ley para la regulación de las relaciones de producción y de consumo, existen tres decisiones. La primera es, obviamente, reconocer su plena vigencia, que está perfectamente estipulada. Entonces, hay dos opciones: discutir el tema de la derogación, porque no están de acuerdo, o discutir los alcances de la reforma en sí. Eso sería un procedimiento de debate respecto a la reforma.

La segunda cuestión es con respecto a las modificaciones. En cuanto a la ley del observatorio de precios, observo que, salvo algunas recomendaciones y opiniones, existiría cierto nivel de consenso, salvo que existan objeciones determinadas como, por ejemplo, mayor participación de provincias dentro de la conformación del consejo, etcétera, etcétera.

Y en tercer lugar, pareciera que existe cierto consenso, pero ahí es donde estamos discutiendo los procedimientos respecto a los siguientes aspectos: primero, estamos de acuerdo—creo que la gran mayoría—respecto a la plena defensa del ejercicio de los derechos del consumidor de un modo mucho más rápido, eficaz, más rápido que el tema sumarisimo, digamos. Entonces, esto implica: primero, reconocer que existe un sistema de conciliación obligatoria. Tenemos que estar de acuerdo en si aceptamos el criterio metodológico de conciliación obligatoria. Segundo, respecto a la organización del juez administrativo y los límites a partir de los cuales debe decidir. Tercero, la instancia de apelación de carácter judicial y la organización del sistema judicial de operación y los mecanismos de fijación de multas, tanto su monto máximo como los esquemas de graduación. Ése sería el corpus de la discusión de estas tres iniciativas. Entonces, acá vamos a ir respondiendo estas cuestiones, pero lo que sería interesante es saber si lo hacemos por senadores individuales, por miembros de las comisiones o por la interpretación general del bloque.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — Yo he solicitado la palabra en este caso porque tengo algunas observaciones. Uno puede estar de acuerdo con el espíritu, desde el marco de la Comisión de Derechos y Garantías, desde una instancia de conciliación obligatoria. Ahora, cuando hay una estructura, que para mí es absolutamente burocrática, como la auditoría en las relaciones de consumo, cuando se crean mecanismos de alzada que pueden suplir los juzgados nacionales y federales que supuestamente se pueden crear, cuando en definitiva tira la pelota a los juzgados federales de cada provincia y están absolutamente colapsados y lo más lógico sería que los reclamos de consumo se canalicen por la justicia ordinaria sin topes, yo quiero saber qué se piensa. Porque lo que estamos analizando acá me parece a mí que no es la posición de cada uno de los senadores que no somos parte en este caso del gobierno, sino que estamos analizando los proyectos que ha enviado el Ejecutivo. Yo lo que estoy haciendo, justamente, son preguntas, porque acá lo que se ha requerido es tratar de especificar preguntas y no consideraciones políticas. He hecho una breve reflexión política de por qué creo que es un error la implementación de la Ley de Abastecimiento, desde lo macro en lo que fracasó hasta la implementación de lo micro, y me detengo en este y en otros artículos porque considero que son importantes no solamente para mí, sino fundamentalmente para todos, y saber qué piensa el Ejecutivo sobre estos puntos.

Sr. Presidente (Fuentes). — Hay 6 senadores que han solicitado el uso de la palabra y se ha cerrado la lista de oradores. Va a ser más fácil contestarles las preguntas a los senadores que si se ponen a discutir la metodología de unificación de bloque. Así que vamos a seguir con el sistema que teníamos hasta ahora.

Sr. Álvarez. — Contestamos, entonces, los planteos formulados.

Sr. Presidente (Fernández). — Me parece que es piola el hecho de que puedan contestar los funcionarios, porque los tenemos y siempre es saludable, siendo que son los productores de la génesis del proyecto, que lo puedan comentar acá.

Respecto de las propuestas formales de correcciones, tenemos mañana, jueves; el viernes y el lunes para trabajarlo, con lo cual podemos intercambiar todas las propuestas que se tengan y el martes ya venir con un tema más o menos ordenado de propuestas formales de correcciones.

Yo tengo dos correcciones: una, sacar “la Secretaría de Comercio” para poner “el Poder Ejecutivo”, que es un tema que habíamos puesto específicamente en la ley de digesto; y el otro, cuando dice que el fuero va a tener que comunicar a la Secretaría de Comercio, me parece que eso va a traer un dolor de cabeza innecesario, y podríamos poner que el fuero lo tiene que publicar en su portal, como lo hace la Corte, y resolverlo por esa vía.

Son dos comentarios, nada más. Podemos repasar todos esos comentarios de acá al lunes, y el martes ya estar trabajando sobre ese tema.

Sr. Álvarez. — Le contesto lo último planteado, primero.

¿Por qué 55 salarios? ¿Por qué el tope de esta justicia que hoy sería un equivalente a 220.000 pesos? La situación es la siguiente. La Ley de Defensa del Consumidor establece que se aplicará en cualquier relación de consumo. El problema es qué es una relación de consumo, porque es un concepto muy amplio, demasiado amplio. La jurisprudencia y la doctrina no está precisamente de acuerdo con qué es una relación de consumo y hasta dónde puede abarcar. El único límite que le podíamos poner al concepto de relación de consumo era en términos de montos, porque podía, si no, abarcar cualquier tipo de problema. Por ejemplo, te subís arriba de un colectivo, sacaste el boleto del colectivo, estás en relación de consumo; tuviste un accidente de tránsito y te ocasionó la muerte. Eso iría a este fuero si no tendría un límite de monto. Éste es un ejemplo; el hecho concreto es que la única forma de limitar el concepto de relación de consumo es en términos de monto. Tal es así que un gran sector de la doctrina dice que la Ley de Defensa del Consumidor puede suplir a todo el Código Civil en términos de responsabilidad. Una de las discusiones que hoy existe es: no apliquemos, por ejemplo, para la responsabilidad extracontractual, el plazo de prescripción de 2 años; tenemos que aplicar el de 3 años, que es el que establece la Ley de Defensa del Consumidor, que es mejor para la víctima. Entonces, hay una discusión de fondo en el derecho que es esta: que la Ley de Defensa del Consumidor, aplicada a gran escala, puede hasta suplir capítulos enteros del Código Civil.

Entonces, nosotros consideramos que la única forma de ponerle un límite era en términos del monto; y consideramos que 55 salarios era oportuno. Pensamos poder reclamar un auto en términos de Pro.Cre.Auto,

que es hasta 190.000 pesos. Consideramos que ése era un límite correcto, pero puede establecerse otro límite.

Por otro lado, hay un consenso de toda la justicia civil, de toda la justicia comercial, de generar tribunales de menor cuantía. Estos tribunales, en definitiva, también son tribunales de menor cuantía, que es una necesidad que plantean los sistemas de justicia, el presidente de la cámara civil, el presidente de la cámara comercial de la Nación. Por eso el límite de la materia en términos del monto.

Ahora, en cuanto la existencia —que era la otra crítica— de esta auditoría del consumidor, ésta es, en definitiva, un juez administrativo. La existencia de un juez administrativo es promovida por el nuevo Código Civil y Comercial. O sea, esta legislación es acorde al nuevo Código Civil y Comercial, cuya próxima sanción esperamos, que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores.

Ahora, ¿es generar una nueva instancia burocrática? No, no es generar una nueva instancia burocrática. El consumidor va a la mediación. Esperamos que el 80 por ciento de los conflictos se acuerde en la mediación, como pasa en el fuero del trabajo, en la mediación del SECCO. Ahora, si no hay acuerdo, ahí el consumidor tiene que tomar una decisión: o reclama sólo el daño directo, esto es, me vendieron mal el celular y quiero sólo el celular; o pide una reparación integral, es decir, quiero el celular, el lucro cesante —porque con el celular trabajo—, el daño moral, el daño emergente. Si elige reclamar sólo daño directo —el celular—, tiene la posibilidad de ir al juez administrativo. Por eso, este juez administrativo no puede intervenir hasta 220.000 pesos; por eso le dimos un límite: que puede reparar sólo daño directo y hasta 55.000 pesos.

Convengamos que en temas de consumidor, en la gran mayoría de los casos, si no en todos los casos, la prueba que se requiere es muy poca. Por eso podemos tener una Justicia más rápida. No es como el fuero del trabajo, que necesitás probar fecha de ingreso, el monto de la remuneración, por qué te despidieron, la relación laboral, etcétera. No; es un celular, ésta es mi factura, lo compré y no anda. Si la sentencia del juez administrativo es apelada, no va al juzgado de primera instancia; va a la cámara directamente. Entonces, no hay una triple instancia, no se agrega una triple instancia; se respeta el principio de defensa y la doble instancia.

Por lo tanto, puede generar confusión y está bien el planteo, pero creo que la respuesta también es clara. El juez administrativo sólo responde para daño directo, hasta un monto menor, de 55.000 pesos, y su apelación va a la cámara del consumidor. Y es una decisión del consumidor. Es, incluso, más rápido aún para el consumidor si sólo quiere el daño directo. Ahora, si el consumidor quiere la reparación integral, va al juez de turno y listo.

Con relación al planteo de jurisdicción, no van todos los casos a la justicia federal. De hecho, va a ir la minoría de los casos a la justicia federal del interior del

país. Por eso nosotros estamos tan ansiosos para que las provincias adhieran, porque las provincias tienen que adherir y decirnos qué fuero es el que corresponde. Pueden decir: nosotros no vamos a crear un fuero del consumidor; vamos a aplicar las normas procedimentales, pero las va a aplicar nuestra justicia civil y comercial, por ejemplo, y vamos a utilizar los mediadores, que ya los tienen todas las provincias: existe una red federal de mediación. Hoy hay 3.000 mediadores en la Ciudad de Buenos Aires; listo, en la Ciudad de Buenos Aires está solucionado el tema: un consumidor hace un reclamo, le va al sorteo, pero el mediador más cercano al domicilio. Ahora, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires también tiene toda una red de mediadores que funciona en los colegios de abogados: funcionará en los colegios de abogados la mediación. Ahora, esa mediación después también va a tener la posibilidad el auditor de relación de consumo, que lo puede tener la Secretaría de Comercio de la Nación o cada municipio o el gobierno provincial, según se acuerde, según se convenga, según lo que diga la ley provincial. Recordemos que las normas procesales corresponden a ellos. Pueden decir: esto lo acepto o esto no, y van a tener un fuero de consumidores, un fuero específico, o van a determinar: “éste es el fuero específico”, y ese fuero va a ser el que va a resolver las cuestiones. Tiene una particularidad que no se da en todas las leyes —creo que casi en ninguna o en ninguna—, que es la responsabilidad concurrente a nivel local, provincial y nacional.

Creo que con esto están contestados esos tres planteos.

Sr. Presidente (Fuentes). — Tiene la palabra el señor secretario de Comercio, Augusto Costa.

Sr. Costa. — Gracias senador por los comentarios y las preguntas. Voy a ser breve porque sé que hay muchas inquietudes y consultas puntuales.

La interpretación más política sobre cómo funcionó la economía durante estos años quedará para otro momento. Pero lo que sí me parece importante destacar, para que quede claro, es desde dónde estamos planteando nosotros los proyectos que estamos trayendo al Congreso. No es desde una situación de apuro. No se trata de una situación de apuro, como se planteó, o por una desaparición macroeconómica para contar con esos instrumentos, sino que, tanto el jefe de Gabinete, como el ministro de Justicia, como yo en las presentaciones, hemos sido claros respecto a que la ley 20.680 para nosotros está vigente, es un instrumento legítimo y muy importante para generar competencia en la cadena de valor. Por eso no hay ningún tipo de emergencia coyuntural que nos haga presentar esto.

De hecho, estamos planteando la cuestión de la visión integral para dar herramientas a los consumidores y al Estado. Así que quiero que lo tengan en claro, partiendo de la base que indica que la ley está vigente.

Entonces, no hay ninguna previsión de desabastecimiento.

—Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Costa. — Senador, le estoy respondiendo a las preguntas. En todo caso, ¿espero? ¿Termino? Porque usted estaba muy preocupado por si se llegara una situación de desabastecimiento.

—El señor senador Petcoff Naidenoff realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Costa. — Claro, pero eso parte de pensar que ésta es una propuesta de apuro en función de que usted cree que no funciona bien la economía.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — Las decisiones que aplicaron para la microeconomía las quieren llevar a aplicar para la macro, y han fracasado, terminó de la peor manera. Por ello di el ejemplo del trigo y de la industria frigorífica.

Sr. Costa. — Ésa es una explicación de usted.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — Claro, con los números.

Sr. Costa. — Perdón, estoy explicando.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — Sí, “métele” tranquilo.

Sr. Costa. — El Poder Ejecutivo, la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Economía tomaron millones de decisiones en los últimos once años, con lo cual, identificar una sola decisión con un resultado no es algo que se pueda hacer muy fácilmente, y yo no entiendo de qué fracasos está hablando, pero no importa.

Quiero aclarar que no hay ninguna situación de desabastecimiento en puerta, no hay ninguna necesidad de contar con esta ley que para nosotros ya existe y ya está vigente para una situación que estamos viendo en puerta. Por lo tanto, reitero, no es una preocupación que nosotros tenemos. También usted preguntó por qué no se puso en práctica la Ley de Defensa de la Competencia.

La Ley de Defensa de la Competencia está vigente y de hecho interviene ante denuncias por prácticas anticompetitivas y ante situaciones de fusiones que pueden generar posiciones dominantes en mercados. Es decir que quien determina si efectivamente puede haber algún peligro para la competencia, por alguna fusión o por alguna práctica anticompetitiva, es precisamente la Comisión de Defensa de la Competencia, que emite los dictámenes y que, por lo tanto, en la medida que determina alguna situación reñida con la competencia no se autoriza la fusión o se sanciona o penaliza la práctica.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — De los últimos años ¿tiene alguna estadística de alguna sanción concreta?

Sr. Costa. — Por supuesto, aunque acá no la tengo pero se la puedo facilitar muy rápidamente. Lo que queda claro, porque lo voy a relacionar con la ley 20.680, es que la Ley de Defensa de la Competencia es muy

importante para cuestiones estructurales de los mercados para generar condiciones de mayor competencia en el mediano y largo plazo. Pero, por los tiempos de resolución y por como está planteada... Ahora bien, en este punto deseo realizar una breve reflexión: hay mucha preocupación respecto de la redacción del texto de la ley 20.680, porque parece arbitraria, muy amplia, le da mucha discreción a un funcionario, pero, por ejemplo, una de las prácticas o una de sus regulaciones es la posición dominante, donde al momento de una fusión...

—El señor senador Fernández realiza manifestaciones fuera del alcance de micrófono.

Sr. Costa. — ...o el daño.

Entonces, acá está escrito que a los fines de establecer la existencia de posición dominante en un mercado deberán considerarse las siguientes circunstancias: el grado en que el bien o el servicio de que se trate es sustituible por otros, ya sea de origen nacional como extranjero, las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma.

La comisión tiene que determinar esto. ¿No les parece amplio? Como se determina el grado de sustitución alguien lo define, por supuesto. A partir de un análisis, de un dictamen técnico se llega a responder esto. Y cuando leen ustedes... ¿qué quiere decir “elevar los precios de una manera injustificada” en la otra ley? Yo les puedo responder esto.

—Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Costa. — Sí, ¿quién lo determina?

Entonces, cuando se intenta aplicar esta ley, en primer lugar, tomamos como ejemplo, una práctica anticompetitiva típica: en un supermercado pequeñas empresas no acceden porque las grandes cadenas y las grandes empresas proveedoras de bienes de consumo masivo se reparten las góndolas y las pymes no pueden entrar. ¿Qué tiene que hacer una pyme? Va a Defensa del Consumidor y presenta la denuncia, porque eso es abuso de posición dominante en los mercados correspondientes de venta minorista y de provisión.

Ahora bien, cuando una pyme presenta una denuncia, después es víctima de represalia por las empresas que son denunciadas. Por lo tanto, tampoco es tan fácil hacer la denuncia con esta ley para una empresa que ve algún tipo de abuso en materia de grado monopolístico por algún actor.

Asimismo, deseo aclarar que esta norma es importante para cuestiones de mediano y largo plazo y se complementa con la ley 20.680 que da herramientas en la misma línea, con acciones más concretas, pero para intervenir en toda la cadena de valor y para solucionar situaciones donde, como se decía antes, la vida de las empresas depende de que se resuelvan rápidamente los conflictos. Por supuesto, con todos los procesos y con

todas las posibilidades de defensa que están estipuladas en la ley.

Entonces, eso también me parece que hay que tenerlo en cuenta porque lo que nosotros estamos tratando de hacer es de institucionalizar herramientas que están vigentes y que necesitan de mejoras para poder eliminar las cuestiones que hoy, como venimos diciendo, no son relevantes a los fines de los objetivos de la legislación.

Del mismo modo, como la Ley de Abastecimiento es para situaciones puntuales y lo dispone la continuidad de producción, su aplicación se tiene que dar en situaciones muy excepcionales, y que esté escrito no quiere decir que vamos a ir a cada empresa a decirle: producir da pérdida. ¡Pero nadie lo puede hacer! Porque es ridículo y porque se contemplan situaciones que se tienen que justificar y que si se considera que se vulneró algún derecho de la empresa, se cuenta con la instancia de la Justicia. Entonces, no nos podemos agarrar de un texto que, como les dije, con la Ley de Defensa de la Competencia, ustedes pueden criticar este texto también, porque es amplio.

Pero bueno, allí explica en qué condiciones se tiene que disponer la continuidad de producción: cuando una situación excepcional lo amerite. ¿Qué es una situación excepcional? Y así podemos estar toda la vida, entonces, tiene que haber la menor arbitrariedad posible a partir de...

—El señor senador Petcoff Naidenoff solicita una interrupción.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — Deseo realizar un aporte.

Como lo ha dicho el funcionario, la ley es tan amplia que la discrecionalidad está a la orden del día. Entonces, estas cosas están sujetas a la interpretación de un funcionario. No están expresamente establecidas. Por eso yo pregunté el caso de qué consideran ustedes por “ganancia abusiva”; porque lo dicen ahí.

Sr. Costa. — Senador, ahora le respondo en cuanto a la “ganancia abusiva”. Porque también se relaciona con aquello que se puede escribir y con lo que no se puede escribir.

En una economía que funciona competitivamente, se supone que la propia competencia del mercado genera que la rentabilidad que se puede obtener de los diferentes sectores de la producción, de la comercialización, es razonable; porque si uno obtiene ganancias más allá de lo que es razonable, o ganancias abusivas, la propia competencia hace que baje el precio, porque entran competidores y, para quedarse con la porción del mercado, le reducen el precio y, por lo tanto, le reducen la ganancia. Entonces, una situación de ganancia extraordinaria o abusiva, una situación de competencia, desde el punto de vista teórico, conceptual, es imposible sostener siempre que funcione la competencia.

Ahora bien, su pregunta fue puntual: ¿cómo va a ser determinada la ganancia abusiva para un productor pyme?

Es conceptualmente imposible que un productor pyme tenga ganancias abusivas. Porque si es pyme no es formador de precios y si no es formador de precios no puede tener ganancias abusivas. Entonces, yo tengo que demostrar ganancia abusiva en una pyme que no es formador de precios y eso es imposible de demostrar, porque el concepto de ganancia abusiva está relacionado directamente a la capacidad de formar precio.

Si no tengo capacidad de formar precio, no puedo tener ganancia abusiva porque viene la competencia y me come. Entonces, cuando hice la exposición a la mañana ¿por qué dije: partamos de la realidad? No partamos de un mercado que funciona competitivamente en todos los sectores, que cuando yo saco un poco los pies del plato y quiero tener más ganancias de lo que corresponde viene alguien y me las baja. No se puede porque tenemos estructura de mercado que en muchos sectores está concentrada, donde la capacidad de tener ganancias abusivas por poder de fijación de precios es real.

Y los procesos que demanda la Ley de Defensa de la Competencia pueden generar situaciones de mejora en el largo plazo, pero en el corto plazo es perjuicio económico para todos los consumidores y para todos los empresarios que se ven sujetos al abuso de ese actor. Y para eso está esta ley: para ser usada racionalmente. Porque usted comenzó diciendo: escuché preocupación por la irracionalidad que va a contra mano de la inversión. Acá no hay irracionalidad.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — No es que escuché. Ustedes a cada uno de los integrantes de la Cámara o de las asociaciones que pasaron acá para expresar su posición les decían con mucha arrogancia: “¿por qué no preguntan algo sobre la ley?” “Hablen de un artículo”. “Vienen acá a decir lo que piensan, ¿por qué no cuestionan la ley?”. Y no es así. Lo que he dicho es que hay muchos sectores que tienen una preocupación real porque cuando la Secretaría de Comercio intervino en determinados sectores de la vida económica del país, a esos sectores les fue muy mal y perdieron los propios ciudadanos. Intervinieron el mercado de la carne, los precios se fueron por el techo y 12 millones de cabezas, ¡pum! Tomaron las peores decisiones. Y lo mismo pasó con el trigo.

Entonces, en función de la experiencia real, no de hace 50 años, ni en el 74 cuando se sancionó la ley, sino en los últimos años hay una preocupación marcada. Arranqué mi exposición diciendo que para mí esta ley es irracional por el contexto político actual que vive la Argentina donde se necesita previsibilidad, inversión, seguridad y me parece que esto genera mucho ruido que no va a ser beneficioso. Ésas son las reflexiones que expresé...

Sr. Costa. — Pero si es una reflexión, perfecto, senador. Me queda sólo una pregunta por responderle.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — No puede ser únicamente que lo puede expresar como senador de la

oposición cuando no hay un solo sector que manifiesta la misma preocupación, sino que hay varios.

Sr. Costa. – Por supuesto que está en todo su derecho de interpretar o pensar o creer...

Sr. Presidente (Fuentes). – Secretario, perdón. Como método, si entramos en la discusión con cada uno de los senadores, no terminamos más.

Sr. Costa. – Quiero contestar esta pregunta porque me parece importante. La alternativa a lo que es la propuesta de reforma que está presentando el Ejecutivo. Para nosotros esta ley está vigente, es aplicable, se aplicó en situaciones contadas, alguien puede decir que se aplicó bien o mal, pero no es que se aplicó todos los días en cada situación. Entonces, todas las modificaciones que estamos haciendo son para mejorarla. El tema de la clausura preventiva es algo que ya figura en la ley 20.680 y que nosotros estamos manteniendo, pero ya está en la ley vigente. Propongan una redacción alternativa y, de todas formas, está siempre la posibilidad de apelar ante la Justicia, ante una clausura para tener reparaciones, pero ya estaba en la ley vigente. En todo caso tienen problemas con la ley vigente, no con la reforma.

Por último: acá parece que esto es institucionalizar prácticas que se hacen de hecho y no es así. Esto es tener herramientas para actuar en las condiciones en las cuales el Estado necesita poder intervenir ante situaciones de clara desigualdad o perjuicio para los consumidores.

¿Cuál es la alternativa? Algunos de los empresarios con los que me junté para discutir todo esto me dijeron que esta ley hay que derogarla. Pregunté: ¿cómo hago si hay un abuso de posición dominante que generó perjuicio? “Vos tenés que agarrar, citar a los tipos, hacerlos desfilar y gritarles.” Me lo dijo un empresario que pide seguridad jurídica y previsibilidad.

Estamos acá tratando de hacer las cosas seriamente, planteando un debate serio, con lo cual hay que tomarlo así, no institucionalizar nada de hecho, sino que tratamos de no ser arbitrarios y generar mecanismos claros y transparentes, previsibilidad, y no puede ser que no se interprete de esa manera. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fernández). – Una acotación, para ver si le ponemos claridad al tema.

La definición en términos de la defensa de la competencia tiene casos más que gráficos. Una en términos de fusiones y la otra en términos de dúpning y daños. Siempre se ha actuado de esa manera. Y tienen mucho trabajo de esa manera. Dos ejemplos en fusiones en las cuales me tocó ser la alzada del Tribunal de Defensa de la Competencia por ser ministro de Producción en algún momento: una la venta de Cervecería Quilmes a AMBEB, donde se la obligó, entre otras cosas, a vender la planta de Brahma de Luján, la marca Palermo y varias cosas, y la otra la venta de la petrolera Pérez Companc a Petrobras que se obligó a vender Transener, con lo cual hay dos gráficos muy grandes en términos de volumen y de dinero que muestran que por ahí pasan cosas que se deciden y son muy importantes. Y, en términos del

dúpning y el daño hay un caso del que me tocó también participar –pido perdón por la autorreferencia– ya siendo ministro del Interior porque llega a la alzada del Tribunal de Defensa de la Competencia, que era el ministro de Economía, porque ya no existía el Ministerio de Producción, una denuncia por dúpning y daño al glifosato chino por parte de Monsanto. Como Monsanto tenía como consultora a Ecolatina, de la que había sido presidente el ministro Lavagna, no podía decidir en ese caso y, por eso, había tenido que excusarse, y como había sido el ministro anterior del área, el presidente Kirchner me pidió que lo llevara adelante. Así lo hice y lo concluí en la solución acerca de si había o no dúpning y daño, y lo había. Con lo cual la herramienta es de súper utilidad y se utiliza cotidianamente. Es muy importante la utilización de esos términos.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Gracias, presidente. Me parece que hay varios temas centrales y uno es el que ha planteado el jefe de Gabinete que tiene que ver con la concepción filosófica de lo que plantean las tres leyes. Yo diría que hay tres leyes que podrían separarse en cuatro porque hay cuatro temas en tres leyes. En el proyecto 298 hay normativa de defensa de los usuarios y consumidores que, salvo algunas observaciones que ha planteado el senador Naidenoff y lo que planteaba el senador Sanz, que dice que no es que si se tiene un fuero hay garantías y lo comparaba con el fuero comparaba con el fuero de los jubilados, que tienen que estar litigando 20 años, aunque sin perjuicio de eso creo que está bien la creación del fuero.

Nosotros creemos que respecto del tema de un procedimiento, de un servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo y la auditoría de relaciones de consumo y el tema de la justicia federal y nacional en relaciones de consumo son avances en materia de fortalecer los derechos de los usuarios y consumidores que ha sido el argumento principal de los dos secretarios. Y nosotros no estamos discutiendo eso; le reprochamos al gobierno que ahora hay normativa, sin perjuicio de esos avances. La normativa de la CNC, por ejemplo, les decía a los periodistas que si uno tiene problemas con el teléfono hoy, el Estado, mediante la Comisión Nacional de Comunicaciones, tiene facultades para sancionar a las telefónicas y son facultades importantes. Hay facultades hasta de suspensión y bajo toda la normativa de la CNC que nosotros suscribimos. Por ejemplo, la CNC puede controlar y fiscalizar la prestación de los servicios, controlar las condiciones que establezcan los prestadores y asegurar la calidad y compatibilidad técnica, elaboración y actualización. En definitiva, me puse a ver todas las normativas. De hecho la CNRT también las tiene y, de hecho, acá hay un tema que tiene que ver con los organismos colegiados y unipersonales, que también están en debate en la reforma que plantea el Poder Ejecutivo.

Hay normativas que protegen a los usuarios y consumidores, y algunas no se han cumplido y otras se cumplen parcialmente. De hecho la Dirección de Defensa de la Competencia depende del secretario de Comercio. Es decir, hay un instituto administrativo que es la dirección que tiene como objeto la tutela del usuario y consumidor y que tiene la tutela de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero nosotros no queremos ir a ese campo. Está bien que debatamos temas puntuales pero lo que pasa es que el proyecto del 298 trae otros temas. Es un combo de leyes. Trae un tema que tiene que ver también con la modificación de la Secretaría de Comercio con motivo de todas las normativas que se modifican. La Ley de Lealtad Comercial y de Defensa de la Competencia y las modificaciones jurisdiccionales que se plantean en el Poder Judicial con relación a la creación de otro fuero. Pero digo, en el 298 hay dos temas: modificación de la Ley de Defensa de la Competencia como más importante y acá hay un tema que luego va en línea con el 299 que es la creación del observatorio y, luego, el proyecto 300 que es la Ley de Abastecimiento. Esos tres temas forman parte de un combo de proyectos que tienen una lógica política que es la que ha planteado el jefe de Gabinete. El jefe de Gabinete dijo que acá se discuten tres temas. Uno es el rol del Estado, cadena de valor y distribución de los excedentes y el artículo 42. En algún momento, el jefe de Gabinete dijo que estas leyes van a generar estímulo en la inversión—eso es lo que yo escuché y me lo rectifica si no es así, pero lo anoté—. También que no es intervencionismo exacerbado, que estas leyes van a producir un incentivo para la producción y el empleo. Y acá está el debate que estamos planteando y nuestra gran diferencia con la concepción que tiene el gobierno y no es la primera vez; porque la verdad si estuviera Guillermo Moreno, yo no lo conozco al secretario, no sé si es bueno o malo, no le hago el seguimiento que sí le hacía a Guillermo Moreno. Si estuviera Guillermo Moreno estaría a sus anchas, porque es el sueño dorado de Guillermo Moreno, si se aprueban estas leyes, lo que él pretendía. Es lo que él ha ejecutado.

Y, entonces, lo primero que quiero hacer es preguntarle desde el punto de vista político al jefe de Gabinete si estas normas, estas reformas que se están planteando, están en línea con evitar el aumento de precios y si el gobierno está considerando que son una herramienta para combatir la inflación. Porque ésta es la lógica que ha venido planteando el gobierno. Controlemos los precios que así controlamos la inflación.

Me parece que la gran diferencia conceptual y que hasta acá fracasó, desde que manipularon el INDEC en enero de 2007 y hasta que produjeron sistemas de control de precios, es que los precios hay que controlarlos, está bien. No decimos que no hay que controlarlos, pero nosotros decimos que el gobierno ha agotado su políticas antiinflacionaria en el tema de control de precios y que hasta acá fracasó. Lo que están haciendo con estos tres temas, estas tres leyes, es institucionalizar un sistema de mayor vigor, con mayor arbitrariedad del

gobierno para controlar los precios y cómo con políticas santinflacionarias. Y acá nosotros no estamos de acuerdo. Desde el punto de vista filosófico-económico esto es lo que plantean, que es lo que ha planteado Capitanich.

Por eso le pregunto si es que esto es para evitar aumento de precios, si es que esto se entiende como un instrumento para combatir la inflación, a Capitanich.

Y luego vamos a algunas preguntas que tienen que ver con los proyectos, porque nosotros decimos que lo que se hace es darle mayor poder arbitrario al gobierno y se terminan eliminando institutos como, por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Competencia. No es que no hay normas para defender la competencia.

Esto que decía recién Aníbal Fernández, su participación seguramente habrá tenido que ver en el marco de la 25.156 que está vigente, que dice de los acuerdos y prácticas prohibidas, el artículo 1°—esto está vigente hoy—y serán sancionados en conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas de cualquier forma manifestado relacionado con la producción, intercambio de bienes o servicios que tengan por objeto limitar, restringir, falsear, distorsionar la competencia o el acceso a mercado que constituyan abuso de posición dominante en un mercado de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

Luego, hay un capítulo 2 que dice de la posición dominante y hay otro capítulo que dice las concentraciones y fusiones. Está normado y tiene facultades el Poder Ejecutivo para resolver e intervenir en las cuestiones de abuso de posición dominante y también en los temas de concentraciones y funciones. No hay vacío normativo en esto. Lo que se pretende es de la no regulación, que nosotros no compartimos. No compartimos la lógica neoliberal de que el mercado se arregla solo, porque cuando lo dejás al mercado que se arregle solo, se jode, se perjudica a la gente y se perjudica las pequeñas y medianas empresas, se perjudica el chico, paga el plato roto el chico.

Entonces, nosotros estamos de acuerdo en la participación del Estado con una actitud de regulación de la economía y de monitorear y controlar, pero acá hay un exceso. Estamos entre un péndulo que se va de un lado a otro, de la no regulación al exceso de regulación, que le genera arbitrariedad al Poder Ejecutivo y en este punto no estamos de acuerdo y esto se ve en varios proyectos.

En la modificación del tema del Tribunal de Defensa de la Competencia se le termina dando todas las facultades que tiene el Tribunal de Defensa de la Competencia al secretario de Comercio. Y esto pone en debate por qué existen cuerpos colegiados para la toma de decisiones que son esenciales.

Un Tribunal de Defensa de la Competencia como planteaba la legislación, integrado por siete miembros, personalidades y todo esto que no ha sido integrado, tiene que ver con que tienen que ser decisiones colectivas. ¿Por qué lo va a tener una persona, un funcionario? Acá se ha dicho, Dios quiera, que después que no venga otro distinto del secretario, porque el secretario bueno. ¡No

es la persona! ¡Es la institucionalidad! Es la Secretaría de Comercio que no puede tener las atribuciones de un Tribunal para decisiones tan importantes, como resolver si es que ha habido posición dominante, si es que hay fusiones y concentraciones que generan distorsiones en el mercado y que terminan deteriorando o destruyendo al chico. El grande que se come al chico.

Ese tema de la reforma del 298 en la Ley de Defensa de la Competencia atribuyéndole todas las facultades al secretario de Comercio, nosotros no estamos de acuerdo. Le preguntamos por qué. Le pregunto al secretario de Comercio o al jefe de Gabinete por qué eliminan las funciones y el Tribunal de Defensa a la Competencia y por qué lo ponen en una sola persona, en un solo funcionario.

Otro tema que va en línea con esta lógica, por eso decimos que es un combo, que apunta la mayor arbitrariedad es el tema de la creación del observatorio; que no es observatorio de precios nada más, sino observatorio de precios y disponibilidad de insumo. Quiero que me expliquen qué es disponibilidad de insumo. Por qué en un esquema que al observatorio lo designa el secretario de Comercio. Va a poner a los funcionarios del Ejecutivo que quiera y también a las asociaciones de usuarios y consumidores que todas van a ser kirchneristas. No han hecho otra cosa hasta acá en once años, más que poner a los amigos y a los que piensan igual. No tiene el gobierno la lógica plural de decir vamos a poner organizaciones de usuarios y consumidores que eventualmente piensen distinto y realmente controlen.

Entonces, toda la lógica de conformación del observatorio está en manos del secretario de Comercio, que cuando elija asociaciones de usuarios y consumidores, obviamente, van a elegir a las amigas y no hay garantía.

Por eso el observatorio y las facultades que se les da al observatorio para el cumplimiento de lo cometido podrán requerir información relativa al giro comercial de la empresa, informe a organismos públicos y privados; es decir, en una constitución de un observatorio que, como digo, va a ser discrecional y acá la manija del poder en todo la va a tener el secretario de Comercio.

Reitero, no tengo nada personal, pero estamos hablando de una cuestión institucional. Estamos tocando leyes sensibles.

Los entes reguladores, el Enargas, el ENRE y todos esos, que los tienen intervenidos, tienen un sistema de designación, porque el gobierno tiene una lógica que no es buena, no es la correcta. El gobierno cree que los entes reguladores son para controlar a las empresas. No es para controlar a las empresas nada más, es para controlar a las empresas y al Estado, porque los entes reguladores tutelan los derechos del usuario y consumidor y tendrían que concursarlos.

Entonces, lejos de ser cuerpos colegiados con integrantes concursados, porque son entes importantes que tienen que tener principio de independencia, de autonomía para poderlo controlar también al Estado

además de las empresas y garantizar los derechos de los usuarios, no están funcionando como corresponde.

Todo tiene que ver con esta lógica en materia de servicios y también en materia de defensa de la competencia.

Y luego está el proyecto de Ley de Abastecimiento que tenemos un debate que vamos a integrar la comisión de la Ley del digesto Jurídico. No se puede en el digesto poner en vigencia una ley que no estaba vigente. Las vigentes son las vigentes; las no vigentes, las no vigentes. Vamos a analizar el tema de los fallos constitucionales y todo esto, pero hay un debate.

El gobierno dice que está vigente la ley del 74, nosotros decimos que no. Sin perjuicio de esto, a la vigente, a la que quieren poner en vigor, la que quieren aprobar no estamos de acuerdo por los motivos. Lo que hacen en esta reforma es eliminar los vicios de inconstitucionalidad que tenía; es decir, han armado una reforma que es inteligente para procurarse mayor arbitrariedad y mayor poder. Es inteligente. Reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, facultad de eliminar al Tribunal de Defensa a la Competencia, observatorio, lo armamos así como nosotros queremos, que es el soporte del observatorio y de disponibilidad de los bienes y facultades. Eliminan el tema del arresto y del allanamiento, porque es inconstitucional. Ahora, para allanar hay que pedir una orden al juez como corresponde; pero se terminan dejando todas las facultades para fijar precios, máximos y mínimos; para meterse en el tema de la rentabilidad. Aquí lo han preguntado Naidenoff y varios otros: ¿quién define cuando la ganancia es abusiva? ¿Quién define cuando hay desabastecimiento? ¿Quién define cuando hay apropiación del excedente? Lo va a definir el secretario de Comercio. Si por ahí el secretario de Comercio, que parece que es bueno, un día se levanta mal y entonces dice: "A éste lo tengo cruzado." Y resulta que estás con apropiación de excedentes y tenés una ganancia abusiva, voy y te intervengo.

El tema es que con estos tres proyectos, este combo, lo que se está afectando son las garantías. Otra de las garantías se afecta con el artículo 14, cuando plantean la modificación al artículo 17 y establecen la obligación de que hay que depositar la multa para poder acceder a la Justicia. Esa se les pasó. Es como el tema del escorpión. (*Risas.*) Repito, ésa se les pasó. Como quieren arbitrariedad y mayores poderes para la Secretaría de Comercio se les escapó ese tema, que va a ser inconstitucional, porque no se puede limitar el acceso a la Justicia y no se le puede decir que deposite para poder tener derecho a acceder a la Justicia. Esa es una observación, desde el punto de vista constitucional, que le hacemos al artículo 14.

Respecto del artículo 7º, lo ha comentado el secretario de Justicia, es al revés de lo que él dice. Lo que usted dice es al revés. Porque antes tenía dos incisos, creo que eran el a) y el b), y agregaron tres incisos. No es que han agregado tres incisos para que tenga mayor rigor en la aplicación, no es que se tienen que

dar simultáneamente los cinco, sino que agregaron tres incisos para tener más abierta la posibilidad de fijar sanciones. Entonces es al revés. Esa modificación que están haciendo no es en beneficio... no es que van a entrar menos, sino que van a entrar más posibilidades de aplicación de una multa.

Quería hacerle esta observación porque no es la primera vez que ha planteado como un gran aporte restrictivo de las grandes facultades que daba la ley del 74. Inclusive, planteaban: "Agreguemos más". Y sí, si pudieran agregaríamos diez incisos más para tener un margen mucho mayor de razones o causales para la aplicación de una multa.

Dejo planteada estas observaciones. Quizás, como decía el secretario de Comercio, resulte contradictorio. Nosotros nos oponemos conceptualmente a la delegación de facultades. Pero si dejamos estas observaciones.

Sería bueno separar los tres proyectos de ley en cuatro proyectos, porque no estamos en desacuerdo con los avances, por ejemplo, lo del sistema de conciliación, el tema del fuero y de la auditoría, que lo podemos discutir; pero sí nos parece un avance. Así que no nos pongan en la vereda de enfrente, de que estamos en contra de normativas que mejoren y fortalezcan los derechos de usuarios y consumidores. No. Nosotros tomamos ese debate y estaría bueno separarlo, porque la verdad es que la otra parte de la ley, la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia tiene que ver con otra cosa, con la lógica que ustedes... Nosotros estamos en desacuerdo. Tienen esa lógica, creen que éste es el camino que hay que seguir, que los precios aumentan porque hay especulación y un montón de cuestiones. Muchas veces, eso ocurre, pero no es la única razón.

Decimos que la lógica de control de precios no es política antiinflacionaria, el gobierno ha seguido esta lógica y ha fracasado. Tenemos una inflación del 40 por ciento. Bolivia tiene del dos y medio. Está bien, es un índice de inflación razonable, pero el 40 por ciento es como mucho. En este sentido, existe un problema con la economía, que no tenía la primera gestión de gobierno, es decir, la gestión de Néstor Kirchner. Aquí está Aníbal Fernández y varios que han sido funcionarios en ese momento. Había cuatro pilares del modelo de crecimiento, que fueron sólidos en los primeros cuatro años de gestión: superávit fiscal, superávit de la balanza comercial, había tipo de cambio competitivo, que hoy no lo es, y no había índice alto de inflación. Esto es lo que decimos. Acá está la diferencia conceptual.

Por eso, decimos que bajo ningún punto de vista vamos a darles la posibilidad, en lo que podamos, porque tienen mayoría, de mayores atribuciones y facultades para seguir insistiendo en este error que se viene cometiendo en cuanto a que el control de precios es política antiinflacionaria.

Le pido que me precise el jefe de Gabinete estos dos temas. Luego, estas dos cuestiones en cuanto a por qué eliminan el Tribunal de la Competencia y estos dos artículos que he mencionado de la Ley de Abastecimiento.

Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias, senador.

Lo suyo, más que observación parece un halago hoy, señal de que lo extraña a Moreno.

Sr. Capitanich. – Voy a responder globalmente por varias cuestiones. Primero, si las observaciones respecto de la constitución del Observatorio tienen que ver con la participación, por ejemplo, la senadora de Salta nos había planteado de provincias o, eventualmente, de otras instituciones a los efectos de establecer los mecanismos para su funcionamiento con un sentido federal y participativo, nosotros vamos a recibir las opiniones precisamente porque entendemos que puede ser una herramienta válida y eficaz de participación para observar claramente el comportamiento de los mismos. Aclaro esto porque si existen observaciones en este sentido, formúlenlas y, en virtud de eso, estamos dispuestos a analizar este proyecto.

Respecto del tema del Tribunal de Defensa de la Competencia, deseo señalar que hace 15 años que no funciona. La Comisión de Defensa de la Competencia funciona eficazmente y constituye una herramienta definitiva para observar los procesos de fusiones, adquisiciones, etcétera. Por eso, hemos encuadrado la normativa como propuesta para que funcione.

Tercero, tenemos una diferencia de orden estructural respecto de la Ley de Abastecimiento. Esto cambia de denominación en la ley que promueve la regulación de relaciones de producción y de consumo. Obviamente, ustedes no están de acuerdo ni en su vigencia ni en su contenido. Por lo tanto, ésa es una diferencia de carácter modular en la decisión.

Consideramos que no es una herramienta que implique adoptar esto como una herramienta de política antiinflacionaria. Entendemos el problema central de la economía argentina, creo que aquí lo ha planteado oportunamente el senador Naidenoff. Me parece que es importante ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. Primero, no es cierto que se ha reducido en 12 millones de cabezas el stock de ganado bovino. El stock de ganado bovino tuvo un incremento sustancial desde el año 2002-2003 hacia el año 2006-2007 con 58 millones de cabezas y hoy está, de acuerdo a la última información estadística, en 53,7. Por lo tanto, no es una diferencia equivalente a 12 millones de cabezas. Lo he explicado anteriormente y, por lo tanto, no lo voy a repetir.

Segundo, la tasa de inflación en la Argentina no es del 40 por ciento. Ése es el índice que ustedes publican en el Congreso sobre la base de una metodología que es falsa, con una cuestión que es una herramienta absolutamente inconsistente, que no tiene nada que ver con el índice de precios al consumidor, que es una metodología de carácter federal y urbana.

Por lo tanto, dejen de mentir. Dejen de elaborar un informe que es absolutamente falso, que no tiene ningún tipo de transparencia metodológica y que, en definitiva, sirve para generar expectativas a los efectos de garantizar que los grupos económicos pretendan remarcar

precios. Ésta es la verdad de la historia. Ésta es la lógica, porque ésta es una lógica de carácter conceptual.

En tercer lugar, se habló del tema de los frigoríficos, respecto de 138 frigoríficos y 15.000 empleos, que están siendo asistidos por el programa Reforma Productiva. Esto ha ocurrido por un efecto de desplazamiento en el número de unidades de superficie ganadera por hectárea. Ha habido una reducción de 11 millones de hectáreas de superficie ganadera. Principalmente, tiene que ver con la Pampa Húmeda, lugar de localización, precisa de la estructura frigorífica y, en consecuencia, eso implicó que parte del ganado tenga que traerse con costos de transporte de otros lugares y afecta la ecuación económica financiera. Mañana, precisamente, tenemos una reunión con respecto a una evaluación desde el punto de vista del funcionamiento de frigoríficos que en algunos casos se ha podido resolver, como el caso de Hughes, recientemente.

En cuarto lugar, me parece que acá el tema conceptual es –y esto lo ha experimentado y lo ha dicho el senador Sanz y me parece que es un debate de carácter conceptual– la evolución de las estructuras de precios en la economía argentina que tiene por lo menos tres factores que inciden en forma directa. Primero, la asimetría entre oferta y demanda. Efectivamente, en los últimos 11 años nosotros pudimos observar un incremento en la demanda agregada, promovida e impulsada por el Estado. El Estado promovió una estrategia de inclusión social, un mecanismo de mejor distribución equitativa del ingreso y una estrategia de desarrollo productivo de una matriz amplia y diversa como es la matriz productiva en la República Argentina. Lo que ocurrió es, objetivamente, lo siguiente; cuando uno garantiza mayor inclusión social, aumenta el poder de compra colectivo en lo social. Eso implica revitalización del consumo. Cuando uno genera mecanismos expansivos, desde el punto de vista del gasto, lo hace también desde una lógica, porque usted hacía referencia al tema de los superávit gemelos. Efectivamente, en una primera fase expansiva de modelo económico tuvimos superávit fiscal primario y superávit fiscal financiero. Ese superávit fiscal primario y financiero en el marco del diferimiento del pago de servicio de deudas, que fue equivalente a 81 mil millones de dólares, se empieza a instrumentar a partir del año 2005.

Segundo, ese mecanismo de superávit fiscal primario y el financiero tuvo correlato con el superávit comercial y en cuenta corriente. Eso tuvo que ver con capacidad instalada ociosa. Cuando observa 2003 y 2007, obviamente, la capacidad de oferta, desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios, era sustancialmente mayor que la capacidad de producción. En ese contexto, cualquier incentivo a los niveles de producción de bienes y servicios no implicaba restricción para el incremento del nivel de precios.

A su vez, lo que ocurrió en el modelo económico en la República Argentina fue, precisamente, lo siguiente: lo que se hizo es utilizar la política fiscal con incentivos

a la expansión de la demanda agregada y esa demanda agregada se expandió vía gasto público, por un lado; en términos de incremento en la seguridad social por inclusión; y, a su vez también, por inversión pública a los efectos de lograr una logística integrada para propiciar una estructura más competitiva en la estructura de costos; y, a su vez también, incentivar los niveles de obras de infraestructuras para satisfacer demandas vinculadas a la educación, a la salud, a la seguridad, a la justicia, a caminos, a rutas, etcétera.

Entonces, lo que ocurrió es que, efectivamente, la política contracíclica aplicada por el gobierno fue la acumulación de reservas, y la acumulación de reservas de 8.800 millones de dólares pasó a una estrategia de casi 52 mil millones de dólares.

Ahora bien, ¿qué ocurrió en ese momento? También ocurrió un fenómeno muy particular en la República Argentina que es necesario analizar. Primero, este gobierno, por el principio de continuidad jurídica del Estado, se tuvo que hacer cargo de la deuda y pagarla. Pagar la deuda significó utilizar por la inaccesibilidad a los mercados financieros internacionales del volumen total de reservas y eso impactó desde el punto de vista de la oferta de divisas. Eso, obviamente, generó también las condiciones desde el punto de vista del crecimiento de la economía en un contexto mundial distinto.

Cuando uno observa el 2002, 2003 y 2008, la tasa de crecimiento en la economía mundial tenía un promedio de 5 o 5,5 por ciento. Después se produce la caída y la crisis financiera internacional, caída estrepitosa. Empezó en el 2008 con 3,8 por ciento y después la caída negativa de la tasa de crecimiento en la economía mundial. Después, se produce una evolución, tiene un crecimiento fuerte en el 2010 y 2011 y, después, una disminución total de la economía mundial. China, del 10,4 por ciento promedio en los primeros 5 años, 2003-2008, después empieza a crecer a 7,5 por ciento como es la proyección actual. La eurozona tuvo tasa de crecimiento negativo. Estados Unidos con una crisis muy fuerte desde el punto de vista del empleo sin precedentes. Entonces, las condiciones internacionales afectaron, objetivamente, el volumen total de demanda externa y, en consecuencia, también el flujo de exportaciones y también los saldos de balanza comercial.

Lo que me parece importante remarcar, porque éste es un debate verdaderamente estructural en la Argentina, que nosotros observamos que el modelo macroeconómico, impulsado por el presidente Kirchner y por Cristina Fernández de Kirchner, generó una política fiscal expansiva y una política de acumulación de reservas que era contracíclica, que se aplicó, efectivamente, para amortizar deudas. Y a su vez, lo que nosotros observamos en este período es que la cuestión que tiene que ver con la asimetría entre oferta y demanda de bienes y servicios, generaron las siguientes consecuencias: primero, la demanda creció a un ritmo mucho mayor que la oferta. Primera restricción. Si no hay inversión para incrementar y expandir la capacidad

instalada, automáticamente, eso afecta los niveles de precios.

En segundo lugar, hemos observado un problema básico que es la concentración económica que no es solamente un problema de este gobierno, es un problema que viene de antes y es un problema que tendrán los futuros gobiernos si no somos capaces de intervenir de un modo efectivo desde el punto de vista de la regulación.

En este sentido, quiero que entre todos reflexionemos con respecto al funcionamiento de las cadenas de valor. Cuando nosotros nos reunimos con las cadenas de valor le preguntamos el comportamiento a cada cadena de valor, le preguntamos el problema que tiene el productor y le preguntamos el problema que tiene el consumidor.

La síntesis es el siguiente: el consumidor se queja porque paga un precio caro y el productor se queja, porque recibe, por lo que vende, un bien barato. Entonces, si hay un problema en que un productor pequeño y mediano se queja porque recibe por lo que produce un precio que no lo satisface y el consumidor también expresa que paga por un bien o un servicio un precio más caro del que está dispuesto a pagar. Entonces, eso significa que la cadena de valor presenta por lo menos un inconveniente y que es necesario tener herramientas para estudiar, analizar, establecer los incentivos correctos, ver el comportamiento de la matriz de insumo producto y en virtud de eso perfeccionar y mejorar.

Ésta no es una decisión política de una política coyuntural. Esto tiene que ver con una visión de carácter estructural para el funcionamiento del sistema económico que permita evaluar, claramente, la apropiación del excedente e intervenir con incentivos correctos para que, efectivamente, protejamos al productor y al consumidor. De eso se trata este paquete de iniciativas.

Por último, nosotros observamos, claramente, que estamos insertos en una economía mundial en donde la disminución de la demanda externa incide en el flujo total de exportaciones y del ingreso de divisas. Las restricciones desde el punto de vista de acceso al mercado de capitales, promovidas por grupos minúsculos, financieros especuladores y por diferentes situaciones también afectan el nivel de disponibilidad de financiamiento razonable para la ejecución de múltiples políticas públicas. A su vez, porque definitivamente los países centrales, como lo han hecho siempre en virtud del señoreaje que tienen de la moneda fuerte, lo que hacen es expandir y transferir inflación al resto del mundo y, a su vez también, generan las condiciones desde el punto de vista de la generación de expectativas.

Entonces, el combo o la combinación de expectativas de inflación importada, de restricciones desde el punto de vista de la oferta por la inexistencia de inversiones capaces de satisfacer la demanda incremental permanente y la concentración económica tendiente a apropiarse del excedente, ha generado, definitivamente,

un desafío. Éste es el desafío que nosotros observamos que es necesario hacer.

¿Qué propone la presidenta de la Nación para afrontar este desafío? Para afrontar este desafío sostiene que es necesaria la ejecución de tres decisiones estratégicas: primero, lo que significa el autoabastecimiento energético, porque nosotros tuvimos un tema clave, la demanda de energía creció y las empresas que tenían las concesiones correspondientes tuvieron declino e YPF que estaba privatizada tuvo declino. Se expropió, genera un cambio de tendencia y en virtud de ello nosotros observamos que en el período 2014, 2018, 2019, el autoabastecimiento energético generará las condiciones para resolver tres problemas en simultáneo: primero, el resultado fiscal primario y financiero por una razón muy sencilla, si uno excluye subsidios de energía la situación fiscal es sustancialmente consolidada; segundo, el resultado de carácter fiscal también tiene resultado en el balance de divisas, porque importar menos por sustitución, automáticamente, genera excedentes de divisas; y, en tercer lugar, lo que es objetivamente posible es que estas inversiones implicarán más empleo y mejoramiento en las condiciones de la tasa de ingreso promedio de la economía. Entonces, ése es el primer desafío que se está ejecutando, para lo cual se necesita tiempo.

En segundo lugar, el tema de la matriz productiva argentina presenta un problema central que tiene que ver con una fuerte participación de insumos y bienes intermedios para la producción de bienes finales. Esa matriz productiva con alta incidencia de insumos de bienes intermedios para la producción de bienes finales importados genera, obviamente, un problema de sustitución de corto plazo, de industrialización acelerada y de incentivos para aumentar y diversificar las exportaciones en un contexto mundial cuya demanda no presenta, efectivamente, la variación que experimentaba en la primera fase expansiva del modelo.

Y, por último, el problema de logística integrada. Nosotros hemos observado fuertes inversiones en muchos campos –creo que es muy importante remarcarlo–. Yo lo expliqué muy profundamente el 3 de agosto, pero ustedes no me escucharon. Entonces, lo que quiero transmitir es que, efectivamente, la logística integrada con Belgrano Cargas, con las represas hidroeléctricas, con los niveles de inversión en vías, autopistas, en red eléctrica, obviamente que lo que va a generar es disminución de los costos sistémicos y mayor competitividad estructural de la economía.

Lo que quiero transmitir –esto es una síntesis de respuesta– es que nosotros entendemos que no existen problemas de abastecimiento desde el punto de vista de bienes que son indispensables para el funcionamiento del sistema económico. Nosotros observamos claramente que la situación fiscal tendería a resolverse de un modo estructural a partir del autoabastecimiento energético y de menor requerimiento de divisas para la importación de energía, y entendemos claramente que

es absolutamente indispensable tener una política fiscal expansiva para garantizar tasa de actividad económica o, sustancialmente, para lograr que la inclusión social y la sustentabilidad en el comportamiento de demanda permanezca. Por eso el Estado interviene activamente para sostener la fuente de empleo para verificar el comportamiento. Nosotros observamos claramente los problemas que tenemos, observamos el escenario internacional, actuamos en consecuencia desde el punto de vista de la producción de autopartes, la industria automotriz, aquellos sectores que se observan con dificultades, porque entendemos que es el rol y la responsabilidad del Estado generar las condiciones adecuadas y razonables.

Por último, lo que quiero transmitir es que estas iniciativas no tienen ningún otro objetivo más que generar las condiciones para proteger al consumidor y al usuario, para propiciar garantías efectivas en defensa de sus derechos y para propiciar un análisis meticuloso de la cadena de valor con el objeto de evitar posición dominante, conductas abusivas, porque eso existe, eso lo sabemos todos. Todos somos senadores que representamos a las provincias y todos sabemos cómo los grandes grupos económicos, cómo las grandes empresas coaccionan y condicionan a nuestras pequeñas y medianas empresas.

Usted pregúntele a un empresario de la construcción respecto a cómo le proveen insumos, en qué condiciones; usted pregunte en un supermercado cómo tratan a un proveedor de determinado tipo de bienes finales o intermedios. La verdad es que ellos disponen el precio, ellos disponen las condiciones de pago, pagan cuando quieren, y es cierto que el Estado no puede estar en todas las transacciones de carácter comercial y/o económicas, pero es cierto también que el Estado tiene derecho a generar un proceso tan transparente en materia de una observación de precios, insumos y bienes que en definitiva genere la participación efectiva en el ejercicio de los derechos de los pequeños y medianos empresarios. Esto no significa no creer en los incentivos y en el funcionamiento de la economía a partir del sector privado, pero también esto significa no resignar un rol indispensable del Estado para propiciar los incentivos correctos para el desenvolvimiento de la actividad económica. Y esta no es una ley solamente para el presente, sino que es una ley profundamente pensada para el futuro.

Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias.

Sr. Álvarez. – Contesto las preguntas de los dos artículos y del tribunal. Creo que son tres preguntas interesantes para discutir, porque el artículo 7º dice que para la fijación de las sanciones de toda índole, pecuniarias o personales, se tomará en cuenta en cada caso: a) la dimensión económica de la empresa, b) la posición en el mercado de infractor, c) el efecto socioeconómico de la infracción, d) y e). Nosotros consideramos que se deben tomar en cuenta los cinco incisos, y usted recién planteaba que puede tomarse en cuenta un solo inciso

para aplicar la infracción. Y creo que lo central acá es, principalmente, poder delimitar y poder poner una variable que no afecte a la pequeña o mediana empresa, que era el objetivo por el cual nosotros agregamos más incisos, para que la capacidad de imponer una sanción por parte del Poder Ejecutivo sea mucho más restrictiva. Creo que si no está claro, lo podemos modificar. Pienso que podemos poner que se deben tener en cuenta “todos” o “los siguientes” requisitos, o se puede poner que se debe tener en cuenta la dimensión económica de la empresa para todos los casos y también los otros requisitos. Me parece que si tiene que quedar en claro, no para cómo lo aplique –como decía recién– el secretario de Comercio, sino para futuros secretarios de Comercio, que no se pretende bajo ningún aspecto sosegar o sancionar a una pequeña o mediana empresa ya que no es el objetivo de esta ley, no es el objetivo de la Ley de Abastecimiento. Pero dejémoslo bien en claro en el debate, como lo estamos haciendo ahora, y legislativamente, si creen que hay una mejor opción, se incorporará.

Con relación al “pague y después reclame” y su constitucionalidad, nosotros creemos que la constitucionalidad está salvada porque en el artículo 17, el último párrafo, dice que en todos los casos, para interponer recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de la multa impuesta a la orden de la autoridad que lo dispuso y presentar el comprobante del depósito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo –creo que esto es lo que garantiza la constitucionalidad– que el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente. Si el cumplimiento del mismo ocasiona un perjuicio irreparable, es una excepción al pago.

Y por último, con relación a la eliminación legislativa, la Ley de Defensa a la competencia del año 99 había creado un tribunal de defensa a la competencia, que debería haberse designado hace quince años y no se puso nunca en funcionamiento. Es para reflexionar cuál es la razón por la cual no se puso nunca en funcionamiento, porque hace quince años estaban gobernando ustedes, y no lo pusieron tampoco en funcionamiento. Nosotros creemos que no es necesario poner a este tribunal en funcionamiento, porque la defensa de la competencia la debe regular el Poder Ejecutivo con control jurisdiccional. Sí está funcionando, y muy bien, una comisión, que es la Comisión de Defensa a la Competencia. Lo que estamos haciendo en este caso es institucionalizarla. Es una definición política nuestra, que creo que la comparten, y creo que es la razón por la cual hace quince años que este tribunal nunca se puso en funcionamiento. Bueno, si funciona una comisión de defensa a la competencia, y nosotros estamos institucionalizando esa comisión, ésa es la respuesta.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Lo único que falta es que tengamos la culpa nosotros de todo el proceso de concentración y extranjerización de los últimos once años. Muchachos, hace once años que gobiernan, y lo que están haciendo es institucionalizar la no creación del Tribunal de Defensa a la Competencia. Al ponerlo en una sola persona, están legitimando esta situación.

Esto es lo que nosotros decimos: se dan más atribuciones para tener más arbitrariedad para perseguir. Si realmente no va a afectar esta ley a las pymes, ¿por qué no las excluyen, como pidió la CAME? ¿Por qué no excluyen a las pymes directamente? Nosotros vamos a votar en contra porque no les vamos a dar más facultades, más arbitrariedades de las que ya tienen. ¿Pero por qué no las excluyen?

Después, al jefe de Gabinete: no nos diga que nosotros mentimos. Dígame cuál es la inflación, pues. ¿Cuál es? No sabe; le da vergüenza decir la mentira que vienen publicando desde el INDEC. ¿Cuál es la inflación? ¿Cuál es la inflación anual?

Sr. Capitanich. – Mire, con todo respeto....

Sr. Morales. – No, porque usted con todo respeto dice que dejemos de mentir.

Sr. Capitanich. – Por eso...

Sr. Morales. – Acá hay gremios que han arreglado el 39 por ciento de aumento.

Sr. Capitanich. – Mire...

Sr. Morales. – ¡39 por ciento de aumento de salario!

Sr. Capitanich. – Déjeme responder. Usted dice...

Sr. Morales. – ¡Y nos dice que dejemos de mentir! Ustedes son los que han tocado el INDEC, ustedes son los que mintieron con la inflación, y me dice que dejemos de mentir.

Sr. Capitanich. – El índice de precios al consumidor se publica en forma regular, a partir de la nueva metodología...

Sr. Morales. – ¿Cuánto es la inflación del año?

Sr. Capitanich. – 16,7 por ciento.

Sr. Morales. – ¡16,7 por ciento!

Sr. Capitanich. – Hasta el mes de julio.

Sr. Morales. – Pero eso es una gran mentira. ¿Cuánto es la anual?

Sr. Capitanich. – 16,7 por ciento, de enero a julio.

Sr. Morales. – ¿Y la anual cuánto es?

Sr. Capitanich. – Bueno, cuando llegue al año...

Sr. Morales. – ¿Cuánto es la proyección anual?

Sr. Capitanich. – ¿Sabe cuántos meses tiene el año? 12. ¿Sabe cuántos han transcurrido? 7. Entonces, como el año tiene 12 meses y nosotros tenemos transcurridos 7 meses, tenemos 16,7 por ciento.

Sr. Morales. – Supongamos que es 33 por ciento. ¿Le parece mucho o poco?

Sr. Capitanich. – Mire, lo que digo es que éste es un índice de precios al consumidor perfectamente medido.

Sr. Morales. – ¿33 por ciento es mucho o poco?

Sr. Capitanich. – ¿De dónde saca esa cifra usted?

Sr. Morales. – Pero si usted dice 16 y medio en lo que va del año, la proyección es del 33 por ciento.

Sr. Capitanich. – Mire, la verdad es que usted habrá sido un mal alumno en matemática, porque proyecta mal.

Sr. Presidente (Fuentes). – Senador...

Sr. Morales. – Déjeme que le diga algo.

Sr. Presidente (Fuentes). – Dígalo, pero vayamos dejando... Hay otros senadores que quieren hablar.

Sr. Morales. – Terminemos con la hipocresía. Mire, acá está su librito. ¿Se acuerda usted, que empezó a hablar del tema de la regulación? Digo para que terminemos con las contradicciones y estas cuestiones de mentiras y todo ese tema. Acá usted decía, en el año 99: “La economía de mercado requiere libertad de contratación para los inversores, mínimas regulaciones, un sistema tributario y una legislación laboral moderna que se adapte a los tiempos y exigencias de la economía globalizada, pero que tenga como horizonte la estabilidad. El Consenso de Washington establecía ciertos lineamientos políticos, económicos y sociales que debían cumplir los países emergentes a los efectos de ejecutar las reformas estructurales que garanticen su crecimiento. Las iniciativas de reforma del Estado, privatización de empresas, reforma laboral y previsional, equilibrio fiscal, entre otros, fueron ejecutadas prácticamente en forma integral por los países en vías de desarrollo, como la Argentina”. Y ahí detalla todos los puntos del Consenso de Washington.

Esto es lo que usted pensaba, y arrancó diciendo que tiene que haber más regulación. ¿Quién miente?

Sr. Capitanich. – ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Primero, eso es una descripción de lo que fue el Consenso de Washington.

Sr. Morales. – Esto es de cuando usted era neoliberal. Ahora es nacional y popular.

Sr. Capitanich. – Primero, no extraiga conclusiones falsas a partir...

Sr. Morales. – Pero no me diga que nosotros mentimos.

Sr. Capitanich. – Sí, le digo que ustedes mienten.

Sr. Morales. – Porque al romper el INDEC, han roto un parámetro.

Sr. Capitanich. – Lo que le quiero transmitir es lo siguiente, senador Morales. En primer lugar, no tome datos parciales para sacar conclusiones generales. Primer tema.

Segundo tema: las veces que quiera discutir, discútamlos. Lo que pasa es que cuando yo vengo acá como jefe de Gabinete a informar a este Senado, ustedes no están.

Sr. Morales. – No, no estuvimos la otra vez porque estaba Boudou.

Sr. Capitanich. – Entonces, la próxima vez lo espero y vamos a discutir lo que usted quiera.

Sr. Morales. – Bueno, no lo traigan a Boudou.

Sr. Capitanich. – Lo que usted quiera vamos a discutir. Esa es una excusa. Lo que usted no quiere es debatir.

Sr. Morales. – ¿Cómo que no? Veinte veces lo debatimos, Coqui.

Sr. Capitanich. – Entonces, vamos a debatir. Pero vayan a la sesión.

Sr. Morales. – No digan que mentimos con el tema de la inflación, porque no hay parámetros. Han roto, han destrozado al INDEC.

Sr. Presidente (Fuentes). – Senadora Morandini: tiene usted la palabra, así tira un manto de...

Sra. Morandini. – Yo voy a hacer consideraciones conceptuales, porque toda esta reunión ya es una respuesta. El hecho de que el Estado se ponga por encima de todos nosotros en el tiempo, en la forma como se argumenta, en las descalificaciones a los que vinieron a exponer revela una concepción. Por eso quiero hablar de esa concepción.

Quiero preguntar, porque cuando se hace una defensa ideológica de las leyes, después no se escucha. Porque cuando se escucha... Acá se nos ha dicho quiénes hablaban, cómo preguntábamos, a quién se escuchaba, a quién no se escuchaba. Entonces, es inevitable tener una concepción de lo que usted nos desafía a debatir: cuál es el rol del Estado. Entonces, en cuanto a mi pregunta con relación a cuál es el rol del Estado, quisiera que me respondan quién crea riqueza en un país.

La otra cuestión que se argumenta mucho en relación con las corporaciones, y en eso por supuesto que tienen razón, que es el gran fenómeno de la globalización, que tenemos corporaciones que son mucho más poderosas que los mismos Estados. Pero sin hacer una cuestión ideológica, la pregunta que uno se hace es cómo un Estado puede regular corporaciones como pueden ser las petroleras, como pueden ser las mineras, como pueden ser las telefónicas, con Estados que son clientelares, con Estados corruptos, con Estados que no convocan a quienes van a defender los intereses de todos, con concursos. Es una pregunta casi obvia: ¿vamos a regular estas corporaciones, pero el Estado...? Yo quisiera que me respondan de qué manera un Estado clientelar, un Estado que no convoca a los mejores puede regular a estas corporaciones que tienen mucho más poder que los mismos Estados.

De modo que no es menor la respuesta de quién genera riqueza en un país; cómo se hace con la asimetría de la tecnología, de los poderes de las corporaciones, con un Estado que está muy lejos de ser un Estado eficiente y un Estado que tiene autoridad. Lo que vemos que se camina siempre a un Estado que tiene poder, que es muy diferente a tener autoridad. Entonces, no es un cuestionamiento personal a nadie. Lo que sí me pregunto es cómo, cuando se le da tanto poder a un funcionario...

Además, a lo largo de todo este debate, se ha demostrado el desprecio que se tiene a lo que tienen los otros sectores que se han planteado acá en esta reunión. Porque ahí es inevitable también hacer una reflexión de tipo institucional. ¿Cuál es el sentido de estas reuniones? El Poder Ejecutivo presenta un proyecto, viene a persuadirnos de las ventajas del proyecto para que nosotros, que somos los que tenemos que votar, podamos aprobar lo que el Poder Ejecutivo viene a proponernos en estas tres leyes. Pero hoy hemos visto algo que no tiene nada que ver con el comportamiento de que nosotros vengamos a escuchar a todos los sectores también, que es el insumo que tenemos a la hora de tomar una decisión y a la hora de aprobar una ley. He visto a lo largo de toda esta reunión un enorme desprecio a la escucha. Tengo que reconocer la fantástica verborragia y la capacidad de argumentación que tiene el jefe de Gabinete.

Me he quedado al final, por supuesto, cuando decía el secretario de Comercio cómo no acordar con el derecho del consumidor. Y cuando uno ve que es fácil reconocer que 11 años atrás no había muchos celulares y que ahora sí hay muchos celulares, es fácil reconocer que hemos sido, primero, consumidores, y después, ciudadanos. Porque llegamos tarde a la democracia. En ese sentido, ¿cómo no estar de acuerdo con lo que dice el secretario de Comercio, en el sentido del empoderamiento? Pero me parece que cuando no se coincide en el concepto, es muy difícil que después podamos acordar también en las políticas. El empoderamiento es una atribución que tiene el ciudadano; no es un poder que tiene el Estado, que es el que concede derechos porque, entonces, lo que está delatando es una concepción de poder a través de la cual: "Como yo tengo poder, distribuyo los derechos". No, empoderar es otra cosa; es que el ciudadano sepa que tiene derechos y es él el que se apropia de la virtud del derecho que tiene y ejerce ese empoderamiento.

De modo que me parece que también en este tipo de debates no hablamos de las mismas cuestiones. Porque si en realidad se quiere empoderar al ciudadano, yo me pregunto por qué no tenemos una ley de acceso a la información. El secretario de Comercio también habló de la importancia que tiene la información en el empoderamiento de la ciudadanía. No tenemos ley de acceso a la información, y a los legisladores nos cuesta mucho también ejercer esa atribución legislativa que son los pedidos de informe.

Por otro lado, quisiera referirme al tema de la anécdota del secretario Álvarez en relación con su padecer como consumidor, cuando tuvo que reclamar por sus derechos de usuario aeronáutico. La ley 24.240, en el artículo 63, declaraba la protección de los derechos aeronáuticos con el Código Aeronáutico. Pero cuando esa ley la modificamos con la 26.361, pusimos el artículo 32, con el que precisamente se pretendía ampliar los derechos del consumidor para el usuario aerocomercial. ¿Cuál fue el único artículo que vetó la presidenta? El único artículo de esa norma que vetó la presidenta fue ése, y justamente era el que le ampliaba los derechos al usuario aerocomercial. Quizás por eso ha tenido tanto

padecer a la hora de reclamar por sus derechos como usuario aerocomercial.

De modo que puedo parecer que a veces divago en lo conceptual, pero me pregunto cómo, si usted tiene una concesión de poder y no de autoridad... la autoridad es cuando se tiene la fuerza de la razón y no hay que extorsionar ni perseguir.

Asimismo, me llama también mucho la atención la forma en la que hablamos, ya que nunca aparece la palabra "responsabilidad". Y me parece que ya es la hora, que es lo único que debemos demandar mientras ejercemos nuestra libertad y en el ámbito que sea.

Por eso insisto con algunas cuestiones de tipo conceptual para saber si estamos hablando de lo mismo: ¿Quién genera riqueza en un país? ¿Cómo vamos a resolver la asimetría de las corporaciones con un Estado que no es eficiente y que es clientelar? Y, sobre todo, esto último, relativo a la idea del empoderamiento no como derecho del ciudadano y sí como una concepción de poder, que es la que distribuye derechos.

Sr. Capitanich. – Seré breve: la creación de riqueza tiene que ver con los trabajadores, los empresarios y el Estado, cuando interviene en la producción de determinados bienes y servicios. Eso es un esquema de responsabilidad compartida.

En segundo lugar, es también importante reconocer que el Estado tiene una capacidad institucional que no necesariamente establece un vínculo clientelar con las personas. El Estado administra aproximadamente a más de 3 millones de jubilados que perciben sus haberes jubilatorios correspondientes, a partir de un sistema de liquidación de la ANSES; también 3,5 millones reciben la asignación universal por hijo.

Con esto quiero decir que hay un Estado que tiene tecnología, capacidad de intervención, que garantiza transparencia, que promueve una ejecución de las políticas públicas.

Cuando uno analiza, en general, un Estado con capacidad para tomar financiamiento –ejecutar inversión pública, garantizar la ejecución de obras de infraestructura y promover y propiciar empleo por vía de gente inscripta– también tiene capacidad institucional.

Obviamente, siempre es necesario observar el grado de perfeccionamiento que esto tiene que tener, pero nosotros en la Jefatura de Gabinete de Ministros tenemos objetivos, metas: sistemas que funcionan, un esquema de avance de la firma digital, de gobierno electrónico en proceso de implementación, de extensión de todas las tecnologías para un mejor funcionamiento.

Asimismo, en este sentido, creo que el sistema de recaudación de la República Argentina tiene alta tecnología y un sistema de base de cruzamiento de datos que permite perfectamente optimizar los niveles de recaudación. Por eso creo que también es necesario observar que han habido procesos de transformación de carácter estructural-cultural que también han mejorado sustancialmente la eficiencia. Y esto no es una relación

de poder; es un ejercicio de autoridad emanado precisamente de la voluntad popular, que elige un gobierno para transformar la realidad de sus ciudadanos.

Sr. Álvarez. – Deseo ser breve.

En cuanto a mi reclamo personal, porque lo mencionó la senadora, le quiero contar que como se trataba de un paquete turístico, lo hice por la Ley de Defensa del Consumidor, porque el paquete turístico no está exceptuado del Régimen de Defensa del Consumidor. Sí cuando se trata de una cuestión estrictamente aeronáutica. Esto era un paquete turístico.

Por otro lado, antes me habían preguntado, a lo cual respondo: yo cobré 4 mil pesos, y gasté más de 20 mil pesos en un juicio que duró más de diez años. El cálculo de ir una vez por semana a tribunales, la tasa de Justicia, el mediador, los peritos, etcétera. Esa es la ecuación. Se suma a ello el particular que era abogado en causa propia, por eso, reitero, gasté más de 20 mil pesos. Ahora bien, también el Estado gastó, porque hubo un tribunal funcionando nueve años para un expediente que iba a generar una indemnización de 4 mil pesos.

En cuanto a quién genera riqueza, para mí, son los trabajadores. Esa es mi respuesta. No sé si tiene que ver con el tema. Sin embargo, también cuando usted habla de autoritarismo, la ideología atrás, etcétera, por un lado y por otro lado no, me sorprende porque hace más de ocho horas que estamos sentados acá escuchando a todos. Por eso me sorprende; porque hoy todo se fue encauzando, y creo que tenemos un montón de conclusiones y de focos sobre distintos temas para poder debatir. Conclusiones que permitirán un montón de modificaciones posibles.

Ahora bien, venir a expresarse y utilizar esos diez minutos para hablar de la política agropecuaria... yo le pedí diez minutos más para que nos hable de los proyectos de ley. Simplemente de eso. Quería que habláramos de las iniciativas porque para eso fuimos convocados.

Luego, una cuestión conceptual con relación al poder o a la autoridad: hay cierta concepción que piensa que el poder no puede ir nunca de la mano del saber. En la historia argentina, se ha hablado mucho sobre eso. No me voy a poder a debatir en forma extensa, pero, desde el propio peronismo, cuando se dice "libros o alpargatas", o desde el propio Sarmiento, cuando dice "civilización y barbarie", saber o poder. Entiendo que ésta es una distinción perjudicial para el país.

Creo que la distinción entre lo técnico y lo político, entre saber y poder, no es una distinción real. Y este siglo XXI tiene que lograr conjugar en el poder el saber y en el saber el poder. El saber no puede ser un saber minoritario, el de los excluidos de la sociedad; tiene que ser también poder. Sé que no tiene que ver con lo que estamos conservando, pero es un planteo que había hecho usted senadora y, si quiere, después de acá nos ponemos a debatirlo.

Sra. Morandini. – No es un planteo de diferenciar saber y poder. Se trata de la concepción ideológica. En efecto, se nos presentan proyectos de leyes con una

concepción ideológica, entonces, lo que veo, no sólo en lo que se dice sino en lo que se hace, es que hay una concepción de poder donde el Estado está por encima, y el Estado es el que concede derechos. Y no es así. Me parece que el abastecimiento que tendríamos que...

Sr. Presidente (Fuentes). – Senadora, senadora...

No es la primera vez que usted, en aras de un discurso de contemplación y de reflexión espiritual, a quienes hoy estamos presentes acá –que formamos parte del Estado, porque somos parte de un poder del Estado– les comienza pidiendo amplitud, tolerancia y democracia y termina calificándolos, diciendo: éste es un Estado corrupto y clientelista.

Esto implica que nos cabe a nosotros, que somos parte de ese Estado, la calificación que usted hace. Entonces, usted, luego pide debate y tolerancia en las palabras, sin embargo, es la primera que, más allá del tono que utilice –que debo reconocer que es muy sereno–, descalifica globalmente no sólo a los funcionarios presentes, sino también a los senadores, a sus pares que estamos acá, que formamos también parte del Estado.

No quería dejarlo pasar, senadora, porque no es la primera vez que lo hace.

Sra. Morandini. – Le agradezco muchísimo porque en la respuesta que me termina de dar me da toda la razón a lo que le estoy diciendo, porque también y voy a poner no mi tonito cordobés, sino la indignación que provoca cuando se distribuye la palabra de una manera tan irrespetuosa. Éste es un cuerpo colectivo. Ésta es nuestra casa, los funcionarios vienen a persuadirnos de las ventajas y virtudes, de por qué tenemos que votar estas leyes. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué momento escuchan? Porque la gran capacidad de argumentación hace dudar de en qué momento escuchan. Lo mejor que nos puede pasar tanto a los funcionarios como a los legisladores es escuchar, porque de lo que no vamos a correr el riesgo a la hora de tomar decisiones que afectan la vida de tantísimos de nuestros compatriotas, entonces, le agradezco porque me da la razón con lo que me acaba de decir, que maneja de una manera discrecional. Yo tengo derecho a decir lo que pienso y pienso...

Sr. Presidente (Fuentes). – Y yo tengo derecho a contestarle cuando soy agraviado con lo que usted manifiesta. A usted no la he agraviado. Acá, desde las 11 de la mañana se ha escuchado a todos los senadores cuando piden el uso de la palabra...

Sra. Morandini. – Nos han dicho mentirosos...

Sr. Presidente (Fuentes). – ...entonces, esas subjetividades si siempre pide respeto en el debate, comience por tenerlo. Gracias, senadora.

Sra. Morandini. – He hecho una pregunta nada más. ¿Cómo se hace con un Estado clientelar y con un Estado sospechado de corrupción? Tenemos nada menos que al vicepresidente de la Nación procesado por corrupción, ¿no tengo derecho a manifestar lo que está en la calle?

Sr. Presidente (Fuentes). – Impúteselo en concreto a quien quiera, no a la totalidad de los miembros de este cuerpo.

Sr. Pichetto. – Voy a ser breve. Siempre hemos mantenido, en el Senado, una cuestión de estilo casi cultural que nos diferencia y nos permite la convivencia y nunca hemos personalizado. Así que me parece que hay que mantener este camino. Sé que a veces hay que hacer esfuerzos, pero me parece que vale la pena intentarlo.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra la señora senadora Michetti.

Sra. Michetti. – Gracias, señor presidente.

Como hay algunas de las preguntas que tengo sobre los proyectos que ya se han formulado y más allá de que me hayan satisfecho las respuestas o no, seguiremos discutiendo. Pero me gustaría, para dilucidar una duda que creo central, que es si estos tres proyectos, en función de lo que dicen venir a resolver, tienen sentido o no, quería trazar una pequeña reseña de dónde arranca esta normativa y qué tipo de normativa es; sobre todo la de la Ley de Abastecimiento.

Me voy a referir a la Ley de Abastecimiento y las otras lo voy a hacer de modo accesorio, ya que es la que más me preocupa e inquieta en términos de lo que puede generar para los argentinos, nada más y nada menos para los consumidores y usuarios, que es a quienes se dice defender.

En el año 73 y 74, se produce un proceso de alta inflación, 60 por ciento en el año 1973 con tarifas, precios y salarios congelados, un dólar congelado que terminó teniendo un dólar paralelo con un 60 por ciento de brecha con el oficial; la inflación en ese momento comía competitividad y rentabilidad, y el Estado en ese momento se pone a discutir y a debatir un proyecto de ley que luego se llama Ley de Abastecimiento, 20.680. Ese contexto nos habla de una particularidad importante en términos de cómo nace esta herramienta que hoy volvemos a tomar. Es un contexto determinado que me gustaría saber si lo tenemos o no –como preguntaron algunos senadores hoy–, pareciera, según la respuesta de los funcionarios, que no. Pero el contexto que le da lugar a la ley que hoy retomamos es un contexto como acabo de determinar.

En los propios fundamentos y antecedentes de esa ley, que además debo decir que fue una ley con un debate en el cual se modificaron muchísimas cosas del proyecto original y no sólo eso, sino que se produjo un consenso de prácticamente el 90 por ciento de las fuerzas políticas de entonces, y los miembros informantes del proyecto terminaron siendo un diputado radical y un diputado del PJ, con lo cual era realmente una situación en la que todos consideraban que era necesaria esta ley y la trabajaron juntos.

En esos antecedentes y en esos fundamentos, en varias oportunidades se menciona claramente que el proyecto viene a atender de inmediato y enérgicamente los problemas de la coyuntura. Lo dice en la oración que mencioné, luego en otra frase que dice: “En síntesis,

venimos a dotar al Ejecutivo y a los organismos de aplicación de un instrumento más idóneo para actuar en la coyuntura". Luego, hacia el final de los fundamentos dice: "sobre esto se resumen las principales modificaciones que el Poder Ejecutivo propone... a la Ley de Abastecimiento más orgánica, más ágil y más apta para afrontar los problemas de la coyuntura". O sea, que quede bien claro que la herramienta, el instrumento de la Ley de Abastecimiento del 74 surge en un contexto determinado, se produce con un consenso determinado y, en sus propios fundamentos, dice que es una herramienta para atender una coyuntura específica. Luego, como hemos dicho en varias oportunidades en los discursos, el decreto 2.284/91 suspende las facultades que esta ley le otorga al Poder Ejecutivo para imponer las cosas que la ley le otorga en función de las situaciones de desabastecimiento posibles.

Y en el artículo 4º dice claramente, como también lo hemos dicho que para poder volver a poner en vigencia —no en vigencia porque está en vigencia todo el tiempo—, para ponerla operativa y levantar la suspensión, tiene que pasar por el Honorable Congreso de la Nación, por eso es que el decreto 722/99 está acusado de inconstitucional porque es un decreto que levanta las facultades, también para un caso específico y para una coyuntura específica de la economía y para aquellos abogados que estudian la vigencia o no de la ley, terminó la situación del año 99 y la situación por la que tenía sentido que las facultades de la ley estuvieran operativas nuevamente.

Así que no sólo eso, sino que los funcionarios vuelven a decir en una y otra oportunidad que para ustedes está vigente. Pero resulta que cuando uno toma documentación del propio Ministerio de Economía de la Nación, como por ejemplo resoluciones de la Secretaría de Coordinación Técnica del ministerio en el año 2006 y en el año 2008, en los considerandos de esas resoluciones, que son las resoluciones por las que se intervino el mercado de la carne, en sus considerandos se dice que por el segundo párrafo del artículo 4º del decreto 2.284, de fecha 31 de noviembre del 91, ratificado por ley 24.307, se exceptuó de la suspensión del ejercicio de las facultades otorgadas en la ley 20.680 y las otorgadas por el artículo 2º... etcétera. O sea, el propio Poder Ejecutivo de la Nación en los años 2006 y 2008 vuelve a reiterar que está suspendida la operatividad y las facultades que la ley le daba al Poder Ejecutivo salvo en esos dos incisos para poder intervenir otra vez en esta situación particular, que era el mercado de la carne. Y no sólo esto: en el digesto está la ley, pero también está el decreto 2.284. Con lo cual, si nos vamos a tomar por el digesto para decir que tiene vigencia la ley, vamos a tomarnos por el digesto para decir que también tiene vigencia el 2.284. Con lo cual la ley está vigente, pero está suspendida en sus facultades para poder el Poder Ejecutivo utilizarla. Es por esto que aparece este proyecto de ley de esta manera. Si no, no se entiende por qué, como se dijo en varias oportunidades no se toma la ley y, si se la quiere

usar de modo más benevolente para las empresas que se supone que están generando distorsiones y problemas de abastecimiento, se la utiliza y se acabó.

Evidentemente, hay un problema que no se quiere reconocer y de indefinición, de problemáticas y controversias sobre la vigencia de la Ley de Abastecimiento. Esto lo quiero decir, porque el propio Poder Ejecutivo lo tiene en sus documentos. Y, además, en el digesto existen las dos cosas. Existen la ley y existe el decreto.

En segundo lugar, temas de defensa al consumidor. No vamos a descubrir la pólvora ni vamos a inventar un sistema de defensa al consumidor en la Argentina y de los consumidores y usuarios, porque ahora retomamos la ley del 74 y la hacemos más benévola en algunos puntos. Porque la verdad es que si nos vamos a toda la legislación y yo revisé algunas cosas muy rápidamente hoy entre los comentarios, si lo vamos a ver rápidamente, cuánta normativa hay y cuánta legislación hay en las leyes argentinas en relación con la protección de los consumidores y usuarios, tenemos, obviamente, lo que se encuentra contenido en el Código Civil. Las reglas de justicia contractual, el régimen de responsabilidad objetiva de daños derivados de productos elaborados, la prohibición del engaño a través de la identificación de mercaderías, etcétera. Dos, el régimen de control de precios y comercialización de bienes y servicios de la Ley de Abastecimiento, 20.680, la represión de la de conductas anticompetitivas de la ley de defensa a la competencia, 22.662, los entes reguladores de servicios públicos, el control de los sistemas y contratos de ahorro previo para fines determinados, la ley 24.240 de 1999, de defensa del consumidor.

La verdad es que tenemos una cantidad enorme de normativa que puede perfectamente ser analizada y perfeccionada para que sea mucho más aplicable para proteger, efectivamente, a los consumidores y usuarios que hoy no están protegidos. Y ahí yo sí concuerdo con los funcionarios. Hoy no están protegidos, pero es mentira que los vamos a proteger con esta ley que está absolutamente direccionada a otra cosa. No a la protección de los consumidores y usuarios, está destinada a situaciones específicas de la economía y se ha utilizado en esas situaciones y fue concebida en una situación de ese estilo y está escrita en sus fundamentos así, para situaciones que, según los funcionarios, hoy no están.

Entonces, la verdad es que yo a esta altura me pregunto con total sinceridad si queremos hacer un proyecto, si queremos trabajar en serio por la protección de los derechos de consumidores y usuarios, que creo que definitivamente tiene que ser así y hace once años que ustedes gobiernan y no entiendo por qué hoy tenemos empresas absolutamente concentradas, tenemos sectores que hacen lo que se les canta, tenemos empresas que además en las contrataciones públicas, como se dijo acá, están siempre ganando o en la mayoría de los casos y ahí nadie pone el ojo, nadie pone ninguna transparencia de ningún tipo. Y, además, son

empresas que se han súper enriquecido y concentrado en estos últimos años.

Entonces, me parece que tenemos que ser sinceros. Ésta es una herramienta que tiene un nacimiento y un funcionamiento específico para situaciones que ponen el foco en empresas que distorsionan, que desabastecen, no en la protección de consumidores y usuarios. El foco está puesto otro lado.

Esto lo tenemos que dejar claro, a los consumidores y usuarios este proyecto no les va a cambiar el absoluto la vida. Ese problema que usted tuvo con el caso particular que manifestó hoy no tiene nada que ver con esta Ley de Abastecimiento, absolutamente nada que ver, porque eso con las leyes de defensa al consumidor, los tribunales que nunca se aplicaron, y también se dijo acá, y normativa absolutamente moderna y no de hace cuarenta años, que la estamos copiando textual y nos jactamos. Decimos qué maravilla, es una ley argentina de hace cuarenta años, y estamos en el siglo XXI y tenemos un mercado absolutamente distinto, complejo, pero muchísimo más complejo que el del año 74 y en situaciones diferentes.

Creo que estamos distorsionando el sentido, absolutamente distorsionando el sentido de lo que queremos decir. Acá no se vino con proyectos del Poder Ejecutivo a defender a consumidores y usuarios. Eso se puede hacer con otro tipo de legislación y en el Senado y en Diputados existen numerosa cantidad de proyectos que no se han querido poner en tratamiento y que los podríamos poner en tratamiento. Calculo que el presidente de la Comisión de Industria y el presidente de Derechos y Garantías, que se ha ido, también deben manejar perfectamente esa información.

Por un lado eso y, por otro lado, o definitivamente estamos ante un proyecto que lo que quiere es una herramienta, y ésta es la pregunta, una herramienta que otra vez concentre el ojo y el foco para los temas de la inflación, que es el verdadero problema que tenemos en la Argentina, la distorsión de la economía hoy para los usuarios y consumidores, cada argentino en la mesa de su familia todos los días. La pregunta es si nosotros queremos con este proyecto en realidad tener una herramienta más para ejercer control de precios o si queremos, y ésta me parece que es una cosa bastante más compleja, pero la verdad, a esta altura de los acontecimientos, faltándole lo que le falta a este gobierno para terminar su mandato, y sucediéndose las cosas como se están sucediendo en el marco de la economía con contracción, con problemas que tenemos hoy, me pregunto si no hay detrás de esto lo que permanentemente venimos viendo en los últimos años de herramientas que el Poder Ejecutivo pone o al Congreso, para que trate y saque, que por supuesto sale como por un tubo, porque la mayoría está y entonces, salen como por un tubo con discusión mediante o sin discusión mediante o directamente las toma el Ejecutivo, porque las puede tomar, en el fondo lo que hacen otra vez es dividir a la sociedad entre quienes se supone que defienden a

los ciudadanos más débiles, más desprotegidos, que tienen más preocupaciones, más necesidades y condiciones de mayor vulnerabilidad, que esos son única y exclusivamente los funcionarios del gobierno nacional y los militantes del Frente para la Victoria y, del otro lado, quienes no formamos parte de eso, tenemos otras ideas y somos los que protegemos las corporaciones, las empresas concentradas, los que hacen distorsiones de todo tipo para maltratar a las pymes.

Definitivamente, están otra vez, desde mi punto de vista, intentando distorsionar una vez más una herramienta que, como comprobé recién en la pequeña reseña histórica que hice, tiene que ver con otra cosa, no con la defensa de los consumidores. En ningún momento se usó para la defensa de los consumidores. Siempre se usó para los problemas de abastecimiento. Y, además, me parece que está mucho más cerca de pretender dividir lo que en realidad no está dividido, porque acá no hay gente que quiera defender a poderosos maltratadores de pymes y de consumidores y usuarios. Acá hay ideas que son diferentes y personas que pensamos que para que la economía produzca más, se dinamice, no siga contrayéndose lo que hay que generar son reglas que le permitan a las pymes, a las grandes, a todas las empresas, bajo el control de las leyes de defensa al consumidor, de las leyes antimonopolio, de las leyes de abastecimiento si son necesarias, porque ustedes han dicho que no hay problemas de abastecimiento.

Entonces, eso es lo que yo creo que está pasando. Estamos distorsionando las herramientas. Estamos diciendo que venimos a proteger algo cuando en realidad estamos usando una herramienta que no tiene que ver con eso. Las que tienen que ver con eso las dejamos como están, pudiendo tocarlas y mejorarlas de una manera mucho más innovadora, más creativa, moderna como el resto de los países lo están haciendo. Y solamente venimos a definir quiénes son los defensores de los ciudadanos con más necesidades y los que en definitiva, por tener ideas diferentes en relación con cómo dinamizar la economía y cómo hacer que estas cosas no sigan sucediendo y la inflación no siga creciendo, estamos del otro lado.

Creo que tenemos que sincerar. Acá yo no entiendo cómo se puede traer una ley que se aplicó y nació para el desabastecimiento diciendo que no hay desabastecimiento y diciendo que en realidad va a ir a proteger a los consumidores y usuarios.

Creo que definitivamente es grave, es grave la distorsión que se está haciendo. Me parece que en todos los países están yendo para otro lado. Todos los países que nos rodean están yendo para otro lado, para las próximas discusiones estamos haciendo análisis comparados, no hay un solo caso por ahora que podamos alegar que vaya por este lado, en la protección de los derechos de consumidores y usuarios, exactamente. Me parece que tenemos sincerar la situación.

La pregunta final, la única que me importa ahora, es: ¿ustedes estarían de acuerdo en poner, ya que la

herramienta es exactamente la misma salvo con tres o cuatro modificaciones que reconozco que la moderan y en otro no, estarían de acuerdo en poner un artículo que introdujera lo que dice el artículo 4° del decreto 2.284, que es para declarar situaciones de desabastecimiento, situaciones en las que haga falta aplicar este nivel de concentración del poder y de discrecionalidad de un organismo público, como se ha declarado acá y se ha dicho acá, tiene que venir la declaración al Congreso? Porque esto es lo que el decreto, que se ocupó de la ley, dijo en el momento que había que decirlo. Entonces, si ustedes están de acuerdo con esto, yo voy a creer que esto tiene que ver con un fin realmente... que se “direcciona” con lo que están diciendo. Si no, lo único que voy a pensar es aquello de lo que estoy convencida que pasa: una herramienta más para concentrar poder, discrecional, arbitrario y no proteger a los consumidores, no proteger a los usuarios, no proteger a los argentinos, no hacer que la economía se dinamice, sino todo lo contrario.

Sr. Álvarez. – Cortito.

La verdad es que hay una serie de planteos y parecería ser que no hubiera escuchado casi nada de lo que hablamos, cuando habla del contexto internacional y otros casos en el mundo. El secretario de Comercio nombró el caso de Brasil, España, está el caso de Estados Unidos con ley antimonopolio, la ley Clayton, la ley de la Comisión Federal de Comercio, la Unión Europea...

–La señora senadora Michetti realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Álvarez. – Sí, todas para defensa de los consumidores.

Le voy a decir dos cosas: primero, si usted cree que los proyectos de ley no son en defensa de los consumidores, la verdad es que la veo solitaria, porque acabamos de coincidir con la oposición, acaba de expresar el senador Morales que había que dividir los proyectos en cinco temas y que todo lo que era defensa de los consumidores lo consideraba un avance y que estaba de acuerdo...

–La señora senadora Michetti realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Álvarez. – Senadora, usted dijo: “No están defendiendo... Estos proyectos de ley no defienden a los consumidores”. Está sola en ese planteo porque estos proyectos de ley defienden a los consumidores. Me dijo también: “Su caso no tiene nada que ver con...”. Sí, mi caso tiene que ver con el fuero, con la mediación específicamente. Es un ejemplo exacto de lo que pasa y de lo que venimos a solucionar.

Sra. Michetti. – En la Ciudad de Buenos Aires a los quince días usted podría haber tenido la resolución. En la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Álvarez. – No.

Sra. Michetti. – Sí, señor, con un acuerdo con el gobierno nacional. Se ha hecho en la Dirección de Defensa al Consumidor...

Sr. Álvarez. – Hay mediaciones...

Sra. Michetti. – Exactamente, hay mediaciones.

Sr. Álvarez. – Lo que hice...

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). – Perdón, un minuto, para ordenarnos. Estamos en el final. Sería conveniente que se exprese... Cortito y cerrando.

Sr. Álvarez. – Es muy corto el tema. Nos basamos en legislación internacional, no precisamente la venezolana, sí la de la Unión Europea y la de Estados Unidos.

Usted dice que la Ley de Abastecimiento... Ahora, está diciendo que todos los proyectos no hablan a favor de los consumidores, está diciendo que la Ley de Abastecimiento no habla a favor de los consumidores. Si usted lee la Ley de Abastecimiento del 64, no del 74, lo que acabo de leer, Illia expresamente dice que está mandando la Ley de Abastecimiento para proteger... ¿A quién? ¿A quién? Adivinemos a quién. Para proteger a los consumidores. Le hago una pregunta...

–La señora senadora Michetti realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Álvarez. – Senadora: por favor, no me grite. Se lo pido por favor, no me grite.

–La señora senadora Michetti realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Álvarez. – Senadora: la ley...

–La señora senadora Michetti realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Álvarez. – Estamos hablando de una ley que está vigente, tan vigente que hace tres meses acaba de aplicarla el secretario de Comercio para los laboratorios. Estamos actualizando esa ley, que es un mecanismo más para la protección de los consumidores, porque cuando no hay abastecimiento, los perjudicados son los consumidores, senadora. Si no hay abastecimiento...

–La señora senadora Michetti realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Álvarez. – Bueno, los perjudicados son los consumidores.

La verdad es que es bastante esquizofrénica la discusión, porque yo quiero contestarle, pero usted me está interrumpiendo constantemente.

–La señora senadora Michetti realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Michetti. – ...si hubiera desabastecimiento, obviamente que esto protege a los consumidores y usuarios. ¡El problema es que acaban de decir que no hay desabastecimiento! ¡Esto es lo loco! ¡Explíqueme eso! ¡Esto es lo esquizofrénico! Usted usa una ley de desabastecimiento para...

Sr. Álvarez. – Le quiero decir una sola cosa. Cuando hay un reclamo considerable en suma de dinero, pueden ser 2.000, 3.000, 4.000 o 10.000 pesos, el consumidor debe tener una herramienta que sea barata para que le pueda solucionar el problema. Para eso generamos todos los proyectos y las herramientas para los consumidores.

Ahora bien, cuando es sistemático, es decir, por ejemplo, cuando en las tarjetas de débito a uno le cobran un peso más y se lo hacen a millones de personas, no hay un procedimiento judicial existente en el mundo capaz de resolver un problema de un peso porque cualquier cosa es más cara que ese peso, pero estamos hablando de un reclamo a gran escala. En esos casos, hay que facultar al Poder Ejecutivo, que se elige cada cuatro años, en este caso a la Secretaría de Comercio, para que pueda aplicar multas. ¿A usted le molesta eso? ¿Le molesta que la Secretaría de Comercio pueda aplicar una multa cuando los empresarios, a gran escala, abusan de los consumidores? A nosotros no nos molesta. Por el contrario, nos parece importante que podamos intervenir –en este hermoso sentido de la palabra “intervenir”– en esos casos de abuso para con los consumidores.

Claramente, usted, senadora, está del otro lado de la discusión. Es claro. Tiene razón con lo que acaba de decir. Tiene exacta razón. Usted está del otro lado de la discusión.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). – Tiene la palabra la señora senadora Michetti.

Sra. Michetti. – Dos cosas: la pregunta final no me la contestó, que era la única que me importaba, y es: si están dispuestos a poner la declaración del Congreso cuando hay problemas de desabastecimiento, para que podamos decir cuándo hay desabastecimiento. La segunda es: usted sabe perfectamente que hace doce años que gobiernan. Entonces, explíqueme cómo defendieron ustedes a los consumidores y usuarios si no tenían herramientas para ese peso sistemático, que usted dice que no había cómo defenderlo.

Sr. Álvarez. – Generando, senadora. Generando millones de usuarios. Lo que hicimos para defender a los usuarios fue, primero, generar usuarios. No había consumidores. ¿Sabe qué? No había servicio de Internet, no se compraban la cantidad de vehículos que se compraron en estos últimos once años, no había servicio de cable, etcétera. Generamos millones de consumidores. Ahora, generamos un sistema de precios cuidados que hizo que los consumidores tengan conciencia. Los consumidores se empoderaron y ahora estamos reglamentando el artículo 42 de la Constitución. Simplemente eso.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). – Listo. Suficiente.

Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.

Sr. Cimadevilla. – Muy breve. Es para hacer una pregunta –en realidad, la posición de nuestro bloque fue fijada por nuestro presidente– y ver en dónde podríamos

encontrar coincidencias y en dónde no, y de qué forma podríamos avanzar desdoblado algún proyecto de ley para concretar esas coincidencias.

Aquí se ha hablado mucho sobre la defensa de los consumidores. Les quisiera hacer una pregunta a los representantes del Poder Ejecutivo, porque hay un tema que aflige mucho a los consumidores de la telefonía móvil. En este Congreso, en este Senado, hay varios proyectos de ley tendientes a declarar como servicio público la telefonía móvil. La declaración de servicio público de la telefonía móvil sería una herramienta fenomenal que tendría el Estado, por vía de reglamentación, para acotar los abusos en que estas empresas caen respecto de la prestación de los servicios. ¿Estaría el Poder Ejecutivo dispuesto a acompañar estas iniciativas? Creo que el senador Giustiniani tiene una, yo tengo otra, en realidad, hay varias. Es un tema que ha colapsado y que genera muchísimas dificultades. Me gustaría saber si el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a avanzar en algún tipo de ley que le dé la categoría de servicio público, que permita a su vez su reglamentación y no dejar a los usuarios al libre albedrío de quienes prestan el servicio.

Sr. Álvarez. – Denos el proyecto, lo llevamos, lo conversamos con el secretario de Comunicaciones de la Nación y le damos una respuesta.

Sr. Cimadevilla. – Giustiniani tiene uno. Lo podemos arrimar.

Se hizo una mención a la ley de Illia. No quiero hacer revisionismo histórico, pero convengamos que las condiciones económicas cuando se sancionaron las leyes en el período eran totalmente distintas que ahora, crecía la economía más del 10 por ciento. Habían aumentado las reservas, no había inflación, había aumentado el empleo, no estaba el país en *default*. Eran otras condiciones. También, si leen la ley y leen los fundamentos, hablaba del abastecimiento, pero apuntaba a otras cosas: a eliminar intermediarios, a promover la educación de los consumidores, a la creación de una red de mercados centrales que no tiene absolutamente nada que ver con esta ley que estamos discutiendo ahora.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. – Esperé con paciencia y escuché y voy a poder ejercer el derecho a dar algunas opiniones. Como yo soy peronista pienso que todo debe ser dentro de la ley, y la ley hay que cumplirla. No hay que opinar si la ley está bien o está mal. Los funcionarios juramos cumplir la ley y la Constitución. Entonces, discrepo con su concepción.

Con respecto al digesto jurídico, lástima que no esté Morales, cuando hablan de la vigencia o no de la ley, anticipó Morales que ya están por formar parte de la Comisión del digesto. Les voy a recordar que el bloque de la Unión Cívica Radical planteó el artículo del reglamento por el cual se requerían los dos tercios para que la comisión se constituyera y no tuvieron los dos tercios. Espero que sean coherentes.

Hemos vivido una tarde con una apariencia de diálogo muy pluralista, pero la demostración al final de la tarde es que han sido monólogos. Yo no voy a defender al presidente de la Sociedad Rural, pero expresó las razones por las cuales está en contra de la ley. Dice que a los productores agropecuarios, el anterior secretario de Comercio, les aplicó todos los sistemas de precios máximos de control de mercado, de control de las exportaciones y de las importaciones, etcétera, y que el resultado fue negativo. Ésa es su opinión. Podemos discrepar con esa opinión como lo ha hecho el jefe de Gabinete, pero no, decir que no dijo las razones por las cuales está en contra de la ley. Explicó las razones, usted no las comparte y tiene derecho a no compartirlas, pero no a descalificar.

Tenemos que ver el contexto en el que estamos. Voy a repetir lo que dije ayer. Ayer detuvieron a una banda de la policía bonaerense con comisarios y subcomisarios, jefes de la divisional de La Matanza que era la pandilla que cometía los delitos de secuestro, robos de automotores, etcétera, en La Matanza, Tres de Febrero y zonas de influencia. En este contexto, ayer mataron a un narcotraficante que creo que le dicen “Diente de Lata”, o algo por el estilo, y se puso en evidencia que en Rosario no sé si van 190 muertes de ajustes de cuentas entre narcotraficantes. Sobre la deuda externa, ayer la presidenta ha dado un discurso muy importante, aunque uno puede discrepar, es muy importante, porque nos pone que hay una crisis en el país que es muy grande.

Éste es el contexto en el que estamos discutiendo esto temas. Y se discute sobre los términos de la inflación calificando y descalificándose, pero están diciendo lo mismo. Uno dice que es más o menos 40 y el otro dice que es 17 en 7 meses, quiere decir que son 32 o 33 en el año. Entre 30 y 40 somos el segundo país en el mundo en inflación. Vamos con Venezuela. Y con respecto a Venezuela tiene razón, no es una copia de la ley, más vale Venezuela ha copiado algunas cosas de nuestra ley. A lo que se le tiene miedo es a que nosotros entremos en la misma política que Venezuela después que tengamos sancionada la ley con respecto a este tema. En otros temas marchan juntos, pero sobre todo a este tema.

En la exposición que hicieron describieron un país donde hay empresas dominantes, donde los monopolios hacen lo que quieren y dieron una enumeración: el aluminio, el acero, las galletitas y dos empresas más, no sé si los lácteos también. En fin, ¿qué han hecho en 11 años? Ahí tienen la ley. Ustedes dicen que está vigente. La senadora dice que no, la Unión Cívica Radical dice que no, pero ustedes dicen que está vigente. Lo que están haciendo, según dicen ustedes, es hacerla más leve. ¿Por qué tenemos el mercado en estas condiciones? Entonces, hay que tener un poco más de humildad. Ustedes tienen una tremenda responsabilidad en que esa situación esté. Ni qué hablar de los sobreprecios que paga el Estado que distorsiona todo el mercado. Los sobreprecios que paga el Estado. Ni qué hablar de las empresas monopólicas que genera el propio Estado.

Entonces, me parece que esto lo tenemos que tratar desde otra perspectiva.

El presidente Perón cuando envió el mensaje por esta ley decía que se propone alcanzar el acta de compromiso nacional. Implica que antes de mandar la ley se hizo un acta de compromiso nacional, suscrito por el Poder Ejecutivo, la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica y expuesta ante la Honorable Asamblea Legislativa a la que, por otra parte, han adherido, prácticamente, la totalidad de las más importantes organizaciones empresarias del país con espíritu de responsabilidad y de colaboración.

Éste es un contexto diferente. Estaban todos de acuerdo en el objetivo.

Sr. Pichetto. – Me parece que comenzaba la etapa donde, casualmente, empezaban a escasear algunos elementos en la economía argentina. La memoria histórica habla del pan, el pan negro; una serie de situaciones que indicaban una clara actitud de sectores dominantes en un proceso de desabastecer y de afectar a la comunidad. Este fue el motivo y el fundamento de esta ley. Todos los sectores no estaban de acuerdo. Algunos sectores estaban atentando contra el gobierno del general Perón ya en ese momento.

Sr. Rodríguez Saá. – Sí, correcto. Era contra esos actores y todas las organizaciones estábamos de acuerdo en combatir a esos sectores. Pero en cambio ahora han logrado, por lo menos así lo dijeron acá, el privilegio de juntarlos a todos en contra de la ley.

Por otro lado, había otro contexto que también tiene que ver con lo actual. Dice en la parte final del primer párrafo, y está claro que sobre todo en el año anterior y en los primeros meses del actual, ese desenfadado proceso inflacionario ha respondido en gran parte al alza incontrolada y especulativa de los precios ante la absoluta carencia de una política de abastecimiento y de contralor de los mismos. La inflación en aquella época orillaba el 80 por ciento.

Entonces, es importante –rescato lo que dijo Morales– saber cuál es la inflación, porque también tiene una desfiguración en los precios, los que se aprovechan de la inflación. Perón también nos enseñó que mientras que los sueldos van por la escalera, los precios van por el ascensor. No se vaya a creer que cambió. Sigue siendo igual. Por eso, una cosa es lo que dice la inflación y otra cosa es el efecto en los supermercados.

Como reflexión, recuerdo que cuando la hiperinflación en el final del gobierno del doctor Alfonsín alcanzaba el 20 por ciento diario, 20 por ciento diario –ustedes no lo vivieron porque eran muy jóvenes– el pueblo salió a la calle y empezó a tomar los supermercados. Y en San Luis tomamos una medida de protagonismo del Estado: tomamos del fondo anticrisis y compramos carne, azúcar, yerba, harina, papas, arroz, y vendimos un bolsón de alimentos que costaba un peso y que eran como diez kilos de comida, y que lo distribuían y vendían todas las organizaciones de la comunidad, desde ALPI hasta Cáritas, desde Rotary Club hasta

el Ejército Argentino: todas las organizaciones de la sociedad trabajaban en la distribución y venta de estos alimentos para paliar una situación extrema. O sea que yo estoy de acuerdo con que el Estado tiene que tener una visión activa. Pero esto me hace a acordar –y acá finalizo– a cuando Garibaldi tomó Sicilia. Cuando Garibaldi entró a Sicilia, la aristocracia se dio cuenta de que se venía el final. No vamos a comparar a la Sicilia y a Garibaldi con la situación de fin de ciclo de esta Argentina, en donde seguramente va a haber un cambio de presidente, por lo menos; no sé qué otro cambio va a haber, pero cambio de presidente va a haber en 2015. Entonces, ahí se imprimió la palabra “gatopardismo”. Desde entonces –voy a leer– en ciencias políticas se suele llamar “gatopardista” al político que inicia una transformación política revolucionaria, pero que en la práctica sólo altera la parte superficial de las estructuras de poder conservando intencionalmente el elemento esencial de las estructuras.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Gracias, presidente.

Quiero hacer una pregunta concreta sobre el proyecto 298, de resolución de conflictos. La pregunta que queríamos hacer es: ¿cuál es la razón de la limitación de montos, que es hasta la suma equivalente de cincuenta y cinco salarios mínimos, en el artículo 2º, de la auditoría hasta la suma de quince salarios mínimos, del artículo 27, y de la Justicia federal hasta cincuenta y cinco salarios mínimos, artículo 42? Máxime que de esta forma se estaría dejando fuera a numerosos reclamos en materia de salud, por ejemplo, la cobertura de operaciones, o no, de tratamiento de enfermedades que son de alto costo y que, precisamente, requieren una solución inmediata del conflicto, y que con esta limitación esos conflictos se seguirán resolviendo con el procedimiento actual.

Y quería hacer, además de esta pregunta, algunas consideraciones políticas que se han hecho a lo largo de toda la tarde y sobre todo de carácter económico. Yo creo que se plantea un paquete de tres proyectos que están claramente diferenciados. A nosotros, con respecto al primer proyecto que habla de la creación del fuero para los consumidores, nos parece que con algunas modificaciones que estamos planteando, puede ser una herramienta importante para defender el derecho de los consumidores que se encuentran, en la mayoría de los casos, desprotegidos. Como decía el senador Cima-devilla, soy autor... Ahora se han presentado muchos proyectos y les damos la bienvenida; el primero yo lo presenté hace seis años, para que la telefonía celular sea servicio público. Es una lástima que no esté el jefe de Gabinete, mi amigo Capitanich, porque –me llamó la atención– me preguntó, cuando vino a informar al Senado, cuál era la diferencia entre ser servicio público o no serlo. Me parece que no hace falta abundar en que la definición de servicio público tiene una connotación

fundamental en cuanto a audiencias públicas; se habló del rol del Estado. Porque si nosotros miramos –acá entro en el terreno que quería entrar– quiénes han ganado dinero en la Argentina en los últimos diez años, vemos que han sido los mismos: han sido los bancos, han sido las petroleras, han sido las telefónicas y han sido las mineras.

Cuando uno habla de una economía que en el período 2004-2010 creció a un ritmo del 6,3 por ciento anual, uno habla de mucho dinero producido en el proceso económico y uno ve que los ganadores del modelo han sido fundamentalmente estos sectores. Entonces, me parece que sobre esto es fundamental hacer una reflexión. Es verdad que en esta recomposición de la economía, pymes y economías regionales que habían quedado después de la crisis absolutamente quebradas, pudieron recomponer su actividad económica. Este período virtuoso de la economía, 2004-2010, se dio con un superávit en cuenta corriente del balance cambiario de 111.400 millones de dólares –las reservas del Banco Central aumentaron cinco veces–, y el gobierno pudo destinar ese superávit externo para aumentar las reservas en 41.700 millones y a cancelar la deuda pública externa por 12.900 millones en términos netos. Es decir que este período virtuoso de la economía, con el doble superávit fiscal y comercial, con un dólar competitivo, evidentemente ha entrado en un proceso, en los últimos tres años, de un deterioro de la económica del país.

Y si nosotros vemos, con los mismos datos que nos da el Estado, en estos últimos tres años tenemos un déficit fiscal a nivel del gobierno nacional, también provinciales y también municipales, tenemos un deterioro de la balanza comercial, tenemos estancamiento de la producción y del empleo, una inflación sostenida y un deterioro en la distribución del ingreso. Con los datos dados, por ejemplo, por la fuente Cuenta-Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Secretaría de Hacienda, el resultado consolidado del sector público nacional medido en millones de pesos muestra un déficit del resultado financiero en 2011, en rojo, de 30.663 millones de pesos; en rojo, en 2012 creció a 55.563 millones de pesos. Sigue creciendo en 2013 a 64.477 millones de pesos –datos oficiales–. Si tomamos el saldo de la cuenta corriente del sector externo en millones de dólares, en el 2011 fue negativo: 3.821 millones; en el 2012, 934 y en el 2013, 4.635 millones de dólares, en rojo, el saldo de la cuenta corriente del sector externo. Y si tomamos las reservas del Banco Central, que habíamos dicho que en 2004-2010 habían crecido cinco veces, vemos que han caído diciembre de 2011 de 45.373 millones hasta agosto de 2014 a 28.962 millones.

O sea, vemos un deterioro claro de la economía en los últimos 3 años, un claro deterioro creciente. El estimador mensual industrial que calcula el INDEC para los primeros 6 meses del año 2014 con respecto al semestre anterior presenta una caída del 3,2 por ciento. En cuanto al nivel de empleo, en los últimos datos se ve que aumentó el desempleo al 7,5 por ciento; en mi ciudad o en el aglomerado Gran Rosario, ese porcentaje

es del 9,4 por ciento. Esto se da también por primera vez con una caída del salario real de los trabajadores en actividad registrados, cuyo poder adquisitivo ha caído, fundamentalmente, porque va atrás de la inflación y por la captura que le produce el impuesto a las ganancias.

Entonces, este deterioro de la actividad económica es evidente. Yo veo una confusión en el gobierno en estos momentos, por las herramientas de política económica que se están planteando. Ésta, la Ley de Abastecimiento, sea cual fuere el nombre que tiene, es una herramienta de política económica, y por eso la separo de la primera en cuanto evidentemente todo tiene un efecto sobre el ciudadano, el consumidor. Es una herramienta de política económica que no aporta en absoluto como remedio a la enfermedad, al cuerpo enfermo que estamos viendo, que es el proceso económico actual en la República Argentina.

Es absolutamente insuficiente el Programa de Precios Cuidados para abordar la inflación. Vemos que la inflación se mantiene. Más allá de los debates, no se puede proyectar hasta fin de año, pero evidentemente hay que hablar de índices oficiales de un 17 por ciento en este primer semestre, con lo que estamos hablando seguramente del 30 por ciento anual. Evidentemente, eso conspira fundamentalmente contra los que menos tienen, contra los trabajadores que están en negro, contra los jubilados y los pensionados.

Este proceso de confusión que yo sinceramente veo se agranda con lo que expresé al inicio de esta reunión —aquí doy paso a la política pura—: anoche la presidenta hizo una convocatoria al país a la unidad nacional, con la gravedad que lo hizo, con la urgencia con la que lo planteó, para que abordemos el tema de los *holdouts*, de los fondos buitres, en una situación muy complicada que dejó al país el fallo de Griesa, un fallo incumplible, absurdo: el planteo del *pari passu*, que deja en una situación complicada no hasta enero, sino hacia adelante también. No es por la cláusula RUFO exclusivamente hasta enero; es un problema que dispara después una cantidad de potenciales reclamos del otro 6 por ciento, que presentarían a la Argentina compromisos a pagar incumplibles de acuerdo al nivel de reservas que hoy tenemos.

Entonces, políticamente sigo viendo esta confusión, que se refleja también en el grave error de plantear la aplicación de la ley antiterrorista ante una quiebra, ley que votamos en contra porque efectivamente su motivación era otra; y en las motivaciones, la del GAFI, que nos impone una ley que, resignando soberanía, la votamos. No se votó en Brasil una ley antiterrorista, y la votamos en la Argentina. Me parece que estamos en un momento donde debiéramos parar la pelota, es decir, hacer una convocatoria a todos los sectores para analizar un momento muy complejo del país. Creo que el camino adoptado en una ley, la de abastecimiento, que divide de la manera que lo hemos visto en el día de hoy, en donde toda la oposición no la va a acompañar, me parece que políticamente es un camino equivocado.

Por eso esta reflexión la hago en punto de ver si entre oficialismo y oposición podemos recrear un diálogo que permita discutir de fondo estas cuestiones que hoy no andan bien en la República Argentina. No es un buen momento de la economía en la República Argentina, no es una buena situación social en la República Argentina. Paraná Metal acaba de suspender a sus 180 trabajadores; Acindar acaba de suspender a sus 400 trabajadores, que se suman a las suspensiones de las empresas automotrices. Están muy bien los Repro y está muy bien que se planteen por un año, pero sabemos que eso es ir sobre las consecuencias y no sobre las causas. Yo veo que no existe un abordaje de las causas que han deteriorado un proceso económico que se manifestó virtuoso de 2004 a 2010, pero ya llevamos 3 años de caída. No veo las respuestas de la dimensión que se necesita ante esa caída económica.

Así que la pregunta que hice al inicio y esta reflexión que quería hacer en cuanto a la posibilidad de establecer un diálogo que permita abordar esta problemática de fondo en la República Argentina.

Sr. Presidente (Fuentes). — Gracias, senador.

Sr. Capitanich. — Una muy breve observación desde el punto de vista cuantitativo, senador.

El flujo total de servicios de capital, intereses de deuda, en los últimos 11 años registra cancelaciones por el monto de 190.000 millones de dólares; y el fondo de desendeudamiento aplicó 43.000 millones de dólares. El fondo de desendeudamiento implicó la acumulación de reservas para la cancelación de obligaciones. En estas cuestiones es muy importante registrar que cuando uno toma un activo para cancelar un pasivo, tiene impacto patrimonial neutro, pero efectivamente es parte de la reducción sustancial de la proporción relativa de deuda externa en manos privadas respecto del producto bruto interno. Hoy, si uno excluye actores institucionales del sector público, es equivalente al 8 por ciento del producto bruto interno.

También es bueno advertir que el flujo total de saldo de balanza comercial positivo está proyectando cerca de 7.000 y 8.000 millones de dólares en el transcurso de este año.

En definitiva y muy sintéticamente diría que el problema de la demanda externa es un problema que tiene que ver con el nivel de afectación del flujo total de exportaciones, y eso afecta la tasa de rentabilidad de empresas y el volumen de inversión. A su vez, el tema del sistema financiero argentino está muy sólido: 1,8 por ciento de incobrabilidad; tiene solvencia, liquidez; tiene capacidad inductiva por parte del Estado para promover financiamiento por casi 100.000 millones de pesos en el transcurso de este año. Pero la relación proporcional de capacidad proyectable de 8 a 16 puntos del Producto Bruto Interno es insuficiente para el crecimiento más sostenido de la tasa de inversión. La tasa de inversión pública es sostenida desde el punto de vista de acción por parte del Estado, pero indudablemente nosotros observamos como problema una economía internacional

que se ha deteriorado. Una reducción en los niveles de demanda externa afecta el nivel de exportaciones, y eso, obviamente, afecta el nivel de inversión.

Obviamente, esto da para seguir discutiendo.

Sr. Pichetto. – Presidente: para concluir...

Sr. Álvarez. – Perdón, quería decir que la pregunta que me hizo el senador Naidenoff, que se la contestamos, tiene que ver con la inversión.

Sr. Pichetto. – Ya han transcurrido casi 9 horas. Vamos a pedir un cuarto intermedio hasta el día martes a las 11 de la mañana para continuar con distintos sectores y actores que quieren exponer.

Finalmente, deseamos agradecerles por su presencia a los representantes del gobierno. Creo que este ha sido un debate importante y esperamos también aportes para la semana que viene que puedan ayudar a construir la mejor norma.

Sr. Presidente (Fuentes). – Un cuarto intermedio hasta el día martes a las once de la mañana. Gracias por su presencia, sobre todo, a los funcionarios.

–Son las 20 y 31.

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Azul¹ del Honorable Senado de la Nación, a las 13 y 33 del martes 26 de agosto de 2014:

Sr. Presidente (Fuentes). – Luego del cuarto intermedio, retomamos el plenario de comisiones convocado oportunamente.

Previo al inicio de la lista de expositores que han sido invitados, voy a pasar a leer las notas que fueron remitidas por distintas entidades a la Comisión de Asuntos Constitucionales y cuyas copias obran en la secretaría de la misma a los efectos de que los señores senadores tomen conocimiento.

Hemos recibido notas de: Confederación Argentina de la Mediana Empresa; Cámara Argentina de Fabricantes de Almidones, Glucosas, Derivados y Afines; Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero; Cámara Argentina de Distribuidores de Hierros y Afines; CADIBSA –Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol–; Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Producción de San Carlos de Bariloche; Federación de Comercio e Industria de San Nicolás; Sociedad de Comerciantes Industriales Propietarios y Afines de Pilar, provincia de Buenos Aires; Cámara de Comercio e Industria de Lomas de Zamora; Cámara del Comercio y la Industria de Merlo; Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina; Cámara de Industriales de Productos Alimenticios; Cámara de la Industria Cervecera Argentina. Y recién ha tenido ingreso una nota de la Asociación de Supermercados Unidos.

Va a dar lectura el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de las notas que le remitieron a su comisión.

Sr. Petcoff Naidenoff. – En el mismo sentido, para que los señores senadores tomen conocimiento de que se encuentran agregadas, por secretaría de la Comisión de Derechos y Garantías, las notas remitidas por: Cámara de Industriales de Productos Alimenticios; Cámara de la Industria Cervecera Argentina; Centro de Exportadores de Cereales; Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol y Cámara Argentina de Fabricantes de Almidones, Glucosas, Derivados y Afines, donde expresan su rechazo a las modificaciones a la Ley de Abastecimiento.

Están a disposición de todos.

Sr. Presidente (Fuentes). – Hoy tenemos un listado de 28 expositores, a quienes vamos a solicitar consistencia y respeto por el tiempo máximo establecido.

Vamos a comenzar la exposición con Raúl Daniel Aguirre Saravia en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Por sugerencia de la secretaría vamos a leer el listado de invitados a los efectos de que, según el orden, se vayan acercando para poder hablar.

Además de Raúl Daniel Aguirre Saravia estarán los siguientes invitados: doctor Ricardo Gil Lavedra; doctor Daniel Funes de Rioja; doctor Sabsay; doctor Daniel Moreira; doctor Fernando Blanco Muíño; Claudio Boada; Héctor Polino; Pedro Busetti; Asociación Será Justicia; Osvaldo Bassano; doctor Osvaldo Riopedre; Roberto Ratti Merchantti o Emilio Katz, de Apyme; doctora Claudia Collado; Miguel Fortuna; doctor Durand Cornejo; Isabel Novosad; Beatriz Buitrago; Alberto Morelli; licenciada Inés Bienatti; Carlos Palloti; Lucas Marisi; Lazot, Ricardo; Ricardo Nasio; Horacio Berstein; Laura Pérez Bustamante; Mauricio Pladellourens y Carolina Suárez.

¿El doctor Daniel Aguirre Saravia está? ¿El doctor Gil Lavedra? ¿Daniel Moreira, de Asociación Pyme?

Doctor Polino, de Consumidores Libres.

Sr. Polino. – Muchas gracias por la invitación a nuestra entidad.

Voy a comenzar por el proyecto que consideramos más importante, que es aquel que crea el fuero judicial en las relaciones de consumo. Consideramos que es una iniciativa muy importante e implica un avance muy significativo sobre lo que tenemos en este momento. Muchas veces los consumidores, cuando vamos a la Justicia, vemos que se tardan años para discutir cuál es el juez competente, si es el juez en lo civil, el juez en lo comercial, el juez en lo contencioso administrativo federal, etcétera.

Aquí se crea el fuero específico en las relaciones de consumo. Esa etapa previa de discusión desaparece. Es un procedimiento oral, abreviado, gratuito, para el consumidor. Tiene, a mi juicio, la misma significación que tuvo, hace décadas atrás, cuando se creó el fuero

1 Se deja constancia de que este salón no cuenta con la acústica adecuada para el buen registro taquigráfico.

laboral, en las relaciones laborales, con jueces competidos de la nueva legislación existente en el país y que, en caso de duda, se está a favor de la parte más débil en la relación laboral, que son los trabajadores. El fuero que se crea ahora en las relaciones de consumo, a mi juicio va a tener esa misma significación, porque se va a estar siempre, en caso de duda, a favor de la parte más débil en las relaciones de consumo, que son los consumidores y usuarios en los servicios públicos.

Se crea, además, un ámbito de conciliación obligatoria, previa, donde el empresario está obligado a asistir, y en caso de incomparecencia injustificada se le aplicará una multa, un tercio de la cual va para el consumidor si ese monto no supera el monto del reclamo efectuado. Hoy existen en la Ciudad de Buenos Aires los Tribunales Arbitrales de Consumo, que funcionan en la calle Julio A. Roca 651 de la Capital Federal. Pero la mayoría de los habitantes, por falta de una información adecuada, desconocen la existencia de esos Tribunales Arbitrales de Consumo, y somos las entidades de defensa de los consumidores las que tratamos de orientar a los consumidores cuando nos plantean problemas, para que traten de dirimir previamente en ese ámbito. Pero tiene una dificultad: que no es obligatoria la asistencia de la parte empresaria, salvo aquellos empresarios que voluntariamente se hayan adherido. En ese caso, el laudo arbitral sí es de cumplimiento obligatorio para el empresario.

Yo tengo el listado de las empresas adheridas: sólo trescientos treinta, y no son las más importantes. De modo que el establecimiento de la obligación de la asistencia empresaria en el proceso de conciliación me parece que es un hecho importante, que apoyamos.

Se habla de conciliadores, no de mediadores. Y tenemos la experiencia de la diferencia que hay entre un mediador y un conciliador. El mediador es el que trata de cumplir su formalidad. El conciliador es el que pone empeño para arribar a una solución, a un entendimiento.

Si no hubiera acuerdo, se crea la instancia de la auditoría. Sinceramente, no sé qué valor y qué importancia puede tener la auditoría.

Si no hay acuerdo, el consumidor puede elegir la vía judicial, y entonces ahí se encuentra con un fuero específico en las relaciones de consumo. Pero una observación queremos formular, y esperemos que sea recogida. Se establece un monto máximo para poder dirimir las diferencias en los tribunales en las relaciones de consumo. Se establecen 55 salarios mínimos, vitales y móviles, que multiplicados por los 3.600 pesos que hoy es ese salario, es para aquellos diferendos que no superen los 198.000 pesos. Y yo me pregunto: ¿cuál es la razón para establecer una especie de juzgados de menor cuantía? ¿Por qué no establecer la posibilidad de que, cualquiera sea el monto que se está discutiendo, se pueda participar de este fuero? ¿Por qué obligar a aquel consumidor que tiene un problema superior a esa cifra tenga que padecer el calvario de tener que ir a discutir en la justicia ordinaria y ver cuál es el fuero que le corresponde, y luego la primera instancia, la

segunda instancia, eventualmente la Corte Suprema y tener que esperar años y años para resolver su situación? Un problema de una enfermedad, que puede estar involucrada en las relaciones de consumo; que puede significar un monto superior al establecido, ¿por qué tener que someterlo a un fuero distinto?

Consumidores Libres propone que al crearse este fuero –que apoyamos– no se establezcan límites, es decir, que sea para todas las relaciones de consumo.

Aquí ha dicho un funcionario, en la reunión anterior, que entonces cabría todo el Código Civil en esta materia. No es así. Sería para aquellos casos particulares cuyo monto que se discute supere esa cifra. Me parece que tendría que contemplarse esta posibilidad.

Y ya que avanzamos, no establezcamos una absurda restricción en función del monto. Si es una relación de consumo, hay que darle la posibilidad de que se resuelva a través del procedimiento que se ha elegido.

Otra observación que queremos hacer. Se establece la derogación de un conjunto de artículos: el 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley de Defensa de la Competencia.

Sr. Presidente (Fuentes). – ¿Vamos redondeando, por favor, doctor?

Sr. Polino. – Muy poco tiempo se nos da para...

Sr. Presidente (Fuentes). – Diez minutos para todos los oradores, porque son veintiocho. Si no, es imposible.

Sr. Polino. – Nosotros proponemos que no se derogue esos artículos sino que, de una buena vez, se constituya el tribunal arbitral que crea la ley que aprobó este Congreso, que hemos votado los que éramos diputados y senadores en esa oportunidad. Han pasado 15 años y nunca se aprobó la creación de ese tribunal arbitral de defensa de la competencia, que debería ser constituido por un conjunto de personas elegidas por concurso de oposición y antecedentes. En definitiva, no estamos de acuerdo que esas facultades sean otorgadas a la Secretaría de Comercio.

Brevemente, porque no hay tiempo, me voy a referir al otro proyecto que modifica la Ley de Abastecimiento. Sobre el particular, quiero aclarar algunas confusiones que se han estado emitiendo en los últimos días. Se ha dicho que ésta es una ley chavista y me tomé el trabajo de averiguar cuántos años tenía Hugo Chávez en 1974. ¿Tenía 10 años de edad! Ésta es una ley que lleva la firma del general Perón y su ministro de Economía, José Ber Gelbard.

También aquí se ha dicho, por parte de los que defienden las modificaciones a esta ley, que es una norma más benigna con relación a la que hoy tenemos en vigencia. Efectivamente lo es, porque la actual ley permite allanar negocios mientras que en el proyecto se elimina esa facultad; solamente se podrá inspeccionar. La actual ley tiene penas de prisión y en el proyecto se las elimina. En la actual ley, para aplicar una multa, hay que cumplir dos requisitos, como señaló el jefe de Gabinete de Ministros, mientras que con el proyecto hay que cumplir cinco requisitos. En el ámbito sustancial,

en que la actual ley las multas pueden ser recurridas judicialmente, mientras que en el proyecto, en cambio, primero hay que pagar y luego recurrir a la Justicia.

Al respecto, la ley en vigencia es de 1974 y es mucho más drástica y severa que el proyecto que se piensa discutir y aprobar, salvo el vinculado a las multas, que primero hay que pagar y después discutir. Es decir, lo mismo que les sucede a los consumidores cuando van a reclamar ante una empresa. Lo que nos dicen es: primero hay que pagar y luego discuta, veremos después cómo resolvemos el problema.

Yo hago una reflexión y quisiera que con honestidad intelectual nos la hagamos todos. Si esta ley que se pretende modificar tiene 40 años de vigencia y no evitó la enorme concentración y extranjerización de la economía, no evitó los abusos de todo tipo que cometieron durante estos 40 años los grandes grupos del poder económico concentrado, ¿alguien piensa seriamente que porque establezcamos un aumento de las multas actualizándolas en función de la devaluación y obligando al empresario a pagarla primero y discutir después vamos a resolver los problemas de fondo que hoy tiene la economía argentina, que es la inflación, la concentración económica y el estado de desigualdad en que se encuentran las pequeñas, medianas y grandes empresas?

Sinceramente, con la sanción de este proyecto de ley no se van a modificar las cuestiones de fondo que originan los problemas que actualmente tiene la economía argentina.

Sr. Presidente (Fuentes). – Doctor, hemos excedido el tiempo sobradamente.

Sr. Polino. – Una breve reflexión y termino.

Hemos aprobado a lo largo de estos últimos años muchas leyes en este Congreso como, por ejemplo, la ley que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga. Sin embargo, con el aval del Ministerio de Salud de la Nación, se permite que las empresas de medicina produzcan aumentos, incluso con efecto retroactivo, violando el decreto reglamentario de la ley que firma el ministro de Salud y la propia presidenta de la República. Ya lo han hecho en tres oportunidades.

¿Por qué no se aprueba de una buena vez una ley que regule el funcionamiento de las empresas de telefonía celular? La presidenta de la República señaló hace pocos días que baten el récord en cuanto a la cantidad de denuncias y reclamos de todo tipo. ¿Por qué demora el Congreso en sancionar alguno de los proyectos de ley por los que se establece como servicio público y que también participe la Secretaría de Comunicaciones convocando audiencias públicas antes que las empresas pretendan modificar arbitraria y abusivamente los cuadros tarifarios? Así podría señalar un conjunto de normas que están en la legislación vigente y que no se cumplen.

Concluyo con esto, señor presidente, tendría mucho más para decir si me diera el tiempo.

Sr. Presidente (Fuentes). – Doctor, le aclaro que conforme es norma en esta comisión, atento a la mo-

dalidad y el número de expositores, se han acordado diez minutos para cada uno. Lo cual no es óbice a que cada expositor arrime la totalidad de la ponencia a esta presidencia, la cual va a ser impresa y repartida al resto de los senadores. De esa manera coordinamos y equilibramos el derecho de expresión y el orden de los oradores.

Sr. Polino. – Me parece bien, señor presidente. Pido disculpas y concluyo.

En estos proyectos hay cuestiones que están bien como, por ejemplo, la creación del fuero judicial especial. Los otros dos proyectos los discutiría mucho más detenidamente porque, a mi juicio, no vamos a resolver los problemas de fondo que hoy tiene la economía argentina estableciendo una multa a algunos de los grandes grupos concentrados. Hoy, 28 grandes empresas concentran el 80 por ciento de la producción de los bienes de la canasta básica de alimentos y de artículos de limpieza. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). – Se recomienda a los representantes de las asociaciones que a través de la Secretaría vayan confirmando su presencia para poder definir el orden de exposiciones. Invitamos ahora a exponer a Claudio Boada en representación de la Unión de Usuarios y Consumidores.

Sr. Boada. – Buenas tardes, voy a exponer en representación de la Unión de Usuarios y Consumidores y después voy a leer un documento que hemos elaborado un conjunto de 14 asociaciones. Rápidamente, por lo limitado del tiempo, quiero señalar que los consumidores queremos y necesitamos seguridad jurídica, mirándolo solamente desde el perfil de la protección del derecho a la propiedad y al libre comercio, pero no se mira también la cuestión desde la necesidad de la totalidad de la población a un medio ambiente sano, al respeto de usuarios y consumidores y a una serie de derechos, como a la salud y a la vida, todo lo cual es necesario.

Para no insumir demasiado tiempo, voy a leer el documento que hemos elaborado las siguientes asociaciones: DE.U.CO; CESYAC; Proconsumer; Taller del Sur; Inducam; Consumidores en Acción; Consumidores Argentinos; Modecuma; Federación MUDECO; LI.DE.CO; UCU; Sepa Defendense; A.D.D.U.C.; y la Unión de Usuarios y Consumidores.

Entonces, con la idea de que el debate no se centre en generalidades, sino en detalles puntuales, es que elaboramos este documento.

En primer lugar, resaltamos nuestra coincidencia con los tres proyectos presentados. En este marco, queremos hacer algunas sugerencias concretas respecto de dos de ellos que, sin alterar el espíritu de lo propuesto, contribuyan a una mejor protección de los derechos conferidos en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, y en las leyes 24.240, en la ley de tarjetas de crédito, 25.065, y en la ley de medicina prepaga, 26.682.

Sobre el proyecto de creación del observatorio de precios, estimamos conveniente que la designación

de los representantes de las asociaciones de consumidores como integrantes del observatorio sea a través de un procedimiento participativo. Por ejemplo, que los tres miembros sean designados, de una lista de cinco propuestos por las asociaciones. También que la convocatoria que pueda realizar la Secretaría de Comercio, a la que hace referencia el artículo 2º del proyecto –un representante con carácter obligatorio–, sea sin perjuicio de la posibilidad de asistencia del resto de los designados a tomar conocimiento de lo actuado.

Sobre el sistema de resolución de los conflictos, entendemos que el proyecto es un significativo avance en la resolución de los conflictos del consumo.

Desde un punto de vista general, consideramos que la regulación actual de las relaciones de consumo previstas en nuestra Constitución Nacional encuentra su cabida a través no solamente de la ley 24.240, sino también de un modo específico hay otros dos sectores más conflictivos y con mayores reclamos. Nos referimos a la ley de tarjetas de crédito, 25.065, y a la ley 26.682, de medicina prepaga. En el caso de la ley de tarjetas de crédito, la Secretaría de Comercio es la autoridad de aplicación. Y respecto de la ley 26.682, la autoridad es compartida con la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Para evitar futuras malas interpretaciones, proponemos que las diversas menciones normativas referidas a la ley 24.240 se amplíe y se incluya en las leyes 25.065 y 26.682.

Nos preocupa la preservación de la vigencia del orden público de consumo, puesto que el sistema incluye como paso previo un pasaje antes del sistema público, a una instancia conciliatoria llevada a cabo por profesionales formados y ejercitados durante años, que presupone la existencia de partes iguales y no desiguales, como son en las relaciones de consumo. Por eso, entendemos que debe garantizarse muy bien, no sólo en su formación específica en la materia, sino también que se fije un marco estricto de control en el que siempre deberá prevalecer el interés público de consumo.

Voy a realizar algunas apreciaciones particulares.

En primer lugar, sobre la cuestión del monto, el sistema establece en su artículo 2º una limitación del monto de 55 salarios mínimos. En principio, pensamos que lo mejor sería no establecer limitaciones, porque en todas las relaciones de consumo está presente un gran desequilibrio. Sin embargo, si fuera necesario por razones operativas establecer un límite, en nuestra opinión, en los reclamos en los que esté considerado el derecho a la salud e inclusive el derecho a la vida, siempre debería estar habilitada la intervención del COPREC, puesto que se trata de valores que no tienen un precio y que si lamentablemente resultaran necesarias prácticas o intervenciones, terminan teniendo un costo más elevado que el techo puesto en el proyecto.

Sobre la cuestión de la responsabilidad solidaria, cabe señalar que uno de los rasgos esenciales de toda regulación tuitiva de los consumidores, consiste en el establecimiento del concepto de solidaridad. Cabe

aclarar que el presidente Menem y su ministro de Economía asignaron, en su momento, un veto sobre el artículo 40 de la ley 24.240, que preveía la responsabilidad solidaria de todos los integrantes de la cadena de comercialización; la que fue restablecida mediante la ley 24.999. Para dar mayor cabida a la protección, estimamos que en todos los artículos referidos a la elección de la competencia por parte del consumidor, debería agregarse que puede optar también por el domicilio del responsable solidario.

Con respecto a las conciliaciones a través de asociaciones de consumidores y a los acuerdos sobre designación de conciliadores, el artículo 4º y los siguientes determinan cómo debe realizarse la designación de los conciliadores. Ahí, junto a los mediadores privados que se mencionan, también los que el Ministerio de Justicia habilitará propuestos por la Secretaría de Comercio, nada se dice, sin embargo, respecto de las asociaciones de consumidores. Y tampoco se deroga el artículo 58 de la ley 24.240. La citada norma autoriza a las asociaciones registradas no sólo a tomar reclamos, sino también a resolverlos mediante el procedimiento de conciliación, de modo que las normas deberían habilitar la intervención de las asociaciones de consumidores en esta tarea. En primer lugar, porque la ley de fondo lo autoriza. Pero también por motivos prácticos: por la extensión territorial, los lugares y los barrios a los cuales acceden las asociaciones. Esto es para proponer, o sea, que se mencione a las asociaciones de consumidores en el artículo 4º y que se incorpore en el artículo 7º un inciso *d*), previendo la participación de las asociaciones de consumidores. También debería preverse que las notificaciones a realizar por la Secretaría de Comercio no sean sólo las correspondientes a los conciliadores elegidos mediante sorteo, sino que también alcancen a las llevadas a cabo por las asociaciones.

En cuanto a los acuerdos previstos en el artículo 6º, inciso *b*), respecto a la designación de mediadores, debe quedar establecido que sólo serán válidos los acuerdos celebrados a posteriori de la promoción del reclamo, puesto que en caso contrario se corre el riesgo de la designación mediante fórmulas incluidas en los contratos por adhesión de venta o de prestación de servicios que son lógicamente realizados por los prestadores.

Sobre los acuerdos y su homologación, el artículo 12 establece que la homologación se otorgará siempre que se entienda que el acuerdo importa una justa composición del derecho y de los intereses de las partes. En este caso, los proveedores se encuentran siempre asesorados por expertos, mientras que los consumidores y los usuarios están en desventaja. Es la famosa asimetría de la que siempre se habla. Por eso, proponemos un cambio en la disposición estableciendo que el acuerdo deberá preservar al consumidor del desequilibrio de las relaciones de consumo, y que se deberá observar la plena vigencia de los principios contenidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional y el orden público de consumo previsto en el artículo 65 de la ley 24.240.

En cuanto al artículo sobre las copias de los acuerdos, debe preverse que al consumidor siempre se le entregará en forma gratuita copia de los acuerdos.

En cuanto al incumplimiento de un acuerdo, no sólo debe ser sancionado, sino que también debe prever una reparación a favor del consumidor.

Hay un par de puntos de más que quiero señalar.

En cuanto a la habilitación de instancias en las conciliaciones fracasadas en otras jurisdicciones, entendemos que se debería habilitar la posibilidad de que se inicien frente a los auditores de consumo, en cuanto al fuero a crearse, acciones judiciales cuando las conciliaciones sean fracasadas –inclusive en algún ente regulador–, cosa que no está prevista.

Voy a cerrar mencionando –después alcanzaremos el documento firmado por todas las asociaciones– que a nuestro criterio correspondería aclarar un poco la cuestión de la gratuidad de las acciones, ya que la redacción actual de la ley 24.240, que prevé la gratuidad de las acciones, ha sido foco de una gran controversia judicial y no es reconocido por todos los juzgados. Por eso querríamos que en este punto la redacción fuera más específica para que la intención de la norma, que era conceder un beneficio, una gratuidad similar a la del beneficio de litigar sin gastos, sea de aplicación.

Gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). – Muy amable.

Destacamos y agradecemos la presencia de los representantes del Poder Ejecutivo nacional en este plenario de comisiones, tanto al señor jefe de Gabinete de Ministros, como al señor secretario de Justicia y al señor secretario de Comercio. Recordamos que en la jornada anterior, también con la presencia de estos funcionarios, hemos escuchado a distintas cámaras y representaciones durante diez horas.

A continuación, tiene la palabra el doctor Blanco Muíño, presidente de la Unión de Consumidores de Argentina.

Sr. Blanco Muíño. – Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.

Hemos hecho algunos deberes, teniendo en cuenta la experiencia de la semana pasada, de manera que hemos traído nuestra postura por escrito para que tanto los funcionarios como los señores senadores la puedan seguir y tener.

En primer lugar, consideramos que estamos frente a un hecho histórico. Es trascendental para el derecho del consumidor vigente en nuestro país desde el año 1993 que con la sanción de la ley se llegue a este punto del camino. La creación de un fuero del derecho del consumidor le da para los tiempos la autonomía judicial por la que se ha bregado desde distintos sectores durante muchísimos años. No es un éxito de las asociaciones de consumidores, no es un éxito del Poder Ejecutivo o de ustedes señores legisladores cuando sancionen la norma sino que es un éxito de toda la sociedad argentina, que le está dando al derecho del consumidor el lugar que

necesita y merece en el ordenamiento judicial argentino. Hasta ahora las causas vinculadas a reclamos de consumidores navegaban por distintos fueros. Vamos a tener un lugar donde ir a discutir y debatir.

No voy a repetirme con lo que expresó el doctor Polino ni con lo que leyó el doctor Boada. Las dos participaciones tienen muchas propuestas muy concretas que pido que se tengan en cuenta. Surgen de nuestra experiencia de muchos años en muchos ámbitos en donde se ventilan cuestiones del consumidor.

A modo de ejemplo, es muy difícil en una audiencia tomar la audiencia, ofrecer la prueba, producirla y sentenciar. La verdad es que los temas de consumidor muchas veces necesitan de una carga probatoria que lleva inexorablemente a fijar cuartos intermedios. Hay que tenerlo en cuenta para no generar la expectativa en el consumidor de que va a ir a una única audiencia y se va a ir con un acuerdo resuelto. Es muy probable que dure un poco más de tiempo.

Puntualmente, y en consonancia con lo que ustedes han recibido, en relación al sistema de resolución de conflictos, el artículo 1º crea el COPREC. Me permito señalar que en la Secretaría de Comercio ya funcionan los tribunales arbitrales de consumo, que tienen personal idóneo en materia de relaciones de consumo. Sugiero que sean parte del nuevo sistema. No visualizamos la necesidad o conveniencia de que convivan el COPREC con los tribunales arbitrales de consumo. Los tribunales tienen estructura, recursos idóneos de primerísimo nivel, experiencia que me parece que hay que utilizarla y capitalizarla en esta etapa inicial del COPREC.

En el artículo 2º se establecen reclamos individuales. Nos gustaría que esta ley tenga una mirada no sólo del reclamo individual sino del reclamo colectivo. El derecho de consumidor es un derecho individual pero también es un derecho colectivo. No es probable que un consumidor afectado por un cargo bancario de centavos promueva un proceso judicial o un reclamo; pero sí es necesario que una acción colectiva defienda a los millones de usuarios del sistema financiero que todos los meses deben pagar esos centavos, que en definitiva en los balances de los bancos, por ejemplo, terminan siendo ganancias exorbitantes. De manera que lo que pido a los señores legisladores al momento de debatir de la norma es que le den una mirada también de derecho colectivo del consumidor.

En este sentido, también me permito decir que los 55 salarios que se establecen como techo la verdad minusvaloran el fuero. Si como país estamos poniendo la fuerza en crear un fuero nuevo, ¿por qué crearlo con un techo de estas características, cuando hoy por hoy los valores en muchos casos de las relaciones de consumo superan a los 55 salarios? Nuestra posición es que se elimine ese límite.

Por el contrario, si los legisladores pensaran que corresponde dejarlo, me permito señalar una discordancia que por lo menos he visto al momento de leer

el proyecto, y es que el techo, en el COPREC es de 55 salarios mientras que en la auditoría, que sería la instancia administrativa siguiente, es de 15 salarios. De manera que el auditor va a poder entender hasta 15 salarios. Repito, es la interpretación que surge de lo que leí. Si así fuera, es muy probable que las partes reclamadas prefieran arreglar con el auditor y no en el COPREC con el techo de 55 salarios.

En el artículo 51 del proyecto de ley de relaciones de consumo se reconoce la legitimación de las asociaciones de consumidores y nos da pie para instar las acciones de incidencia colectiva, de manera tal que el propio texto en discusión ahora ya reconoce esa capacidad que no está presente en el espíritu de la ley, según nuestra interpretación, y que pedimos que se tenga en cuenta.

Del mismo modo, en el artículo 55 del proyecto se habla de la gratuidad del proceso para el consumidor y no se dice nada respecto de las asociaciones. Nuestra propuesta es que ese artículo 55 prevea la gratuidad del proceso no sólo circunscrita a la tasa de justicia sino de todo el proceso para el reclamo individual y también para el reclamo colectivo.

Celebramos en el artículo 59 que se ratifica lo previsto en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 40 bis, respecto del daño directo, que estuvo en duda legal y jurisprudencialmente durante un tiempo. Creo que esta norma cierra esa discusión y es muy beneficioso para los usuarios y consumidores.

El artículo 60 del proyecto establece alguna modificación del artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor en relación a las actuaciones administrativas. Desde el debate parlamentario de la ley en el año 1993 este artículo estuvo direccionado a las empresas prestadoras de servicios o productoras de bienes. Nos gustaría que en lugar de que este artículo sea utilizado para sancionar a asociaciones de consumidores, hecho que jurisprudencialmente después ha quedado desvirtuado, que el artículo 60 de la ley, modificatorio del 45, exprese claramente que el régimen de actuaciones administrativas lo son para productores de bienes y servicios y no para las asociaciones de consumidores.

En el artículo 62 del proyecto se propone sustituir el artículo 18 de la Ley de Abastecimiento con un régimen sancionatorio. Nuestro planteo es común para cada uno de los artículos de las distintas normas que se modifican en relación a multas. Consideramos que el régimen sancionatorio debe diferenciar entre grandes empresas y pequeñas empresas. Un tope de 10 millones de pesos de multa en una gran empresa que tiene que pagarla para poder apelar es sustentable. Un tope de 10 millones de pesos en una pyme, que da trabajo a argentinos, que tenga que apelar para poder recurrirla significa el cierre de la empresa, el cierre de la fuente de trabajo, significa trabajadores sin empleo, significa menos consumo.

Nuestra propuesta es segmentar en el régimen sancionatorio lo que se considera gran empresa y pequeñas

empresas; en este último caso, si fuera el caso, establecimiento de un porcentaje de la facturación anual como el límite para la aplicación de la sanción.

No estamos diciendo no sancionar, porque no estamos hablando entre carmelitas descalzas; estamos diciendo segmentar entre los dos sectores del movimiento empresario.

El proyecto también cuela las modificaciones a la Ley de Defensa de la Competencia...

Sr. Presidente (Fuentes). – Si podemos ir redondeando, por favor.

Sr. Blanco Muñio. – Cómo no, señor presidente.

Nuestra posición en ese sentido es terminante: no estamos de acuerdo con la eliminación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Al tribunal, para controlar a las empresas en el país, tanto nacionales como extranjeras, no hay que eliminarlo: hay que constituirlo, hay que integrarlo, hay que poner gente idónea a que cumpla con lo que la Ley de Defensa de la Competencia manda.

Y, por último, para no pasarme en el tiempo y respetar a los demás, me permito una consideración con relación al proyecto de ley que crea el observatorio. Las asociaciones de consumidores, de acuerdo a la norma o el proyecto, estarán designadas por el secretario de Comercio. Nosotros creemos –y tenemos ejemplos en otra normativa sancionada recientemente por este Congreso– que se puede buscar un sistema participativo en donde las asociaciones de consumidores nos elijamos, que sean elegidas por sorteo pero no que queden al tino de la designación del funcionario de turno, porque eso le quita transparencia y le da una discrecionalidad innecesaria.

Por último, una cuestión de forma. Soy abogado, así que no lo voy a poder evitar. A fojas 53 del proyecto de relaciones de consumo, cuando se habla de la modificación de la Ley de Ministerios, fíjense que el punto 33 dice “clientes” y me parece que ahí va a palabra “consumidores”, porque está vinculado a usuarios y consumidores y dice “clientes y usuarios”. Es una cuestión de forma.

Con este espíritu colaborativo, agradezco realmente la participación que nos han dado, a los funcionarios que nos escuchan y que se quedan acá, tanto el otro día como hoy que no es lo habitual, ya que en general hacen su discurso y se van. Como asociación, se los agradezco especialmente.

Nos ponemos a disposición esperando que éste sea un paso histórico para la historia del derecho del consumidor en la Argentina.

Sr. Presidente (Fuentes). – Pedro Busetti. Defensa del Usuario y Consumidor.

Sr. Busetti. – En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de expresarnos en esta audiencia, tal como lo han hecho mis compañeros. Coincidimos también con esos compañeros en que hoy o esta semana, cuando

se trate esto en el recinto del Congreso de la Nación, puede ser una jornada histórica, como se ha dicho aquí.

El equiparar los derechos del consumidor con los derechos del trabajador creemos que es un hecho sin duda trascendente e histórico; sobre todo en esta creencia, en esta convicción de la relación de que todo trabajador es un consumidor y, fundamentalmente, que un consumidor es un trabajador.

¿Por qué nos referimos al trabajador relacionado con el paquete de leyes? Los trabajadores tienen una remuneración estable durante 365 días que solamente es modificable a través de la convención colectiva en el caso de que sea trabajador formal y cuando es trabajador informal esto lo decide unilateralmente el empresario. Los trabajadores pasivos, jubilados y pensionados tienen su modificación del haber jubilatorio de acuerdo a la norma vigente, dos veces por año.

Estos ingresos son deteriorados permanentemente por el crecimiento de los precios de bienes y servicios que consumimos. No tenemos la posibilidad, los trabajadores activos, formales, informales, pasivos de corregir nuestro ingreso en relación a como los empresarios corrigen los precios de la economía en forma permanente.

Por eso, la convicción y el apoyo de nuestra entidad, de nuestra organización, a los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo tanto en cuanto a la Ley de Defensa del Consumidor como en cuanto a la llamada Ley de Abastecimiento, porque entendemos que a través de la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor, de la creación del fuero específico de derecho del consumidor, nosotros podremos recuperar los miles de millones de pesos que perdemos anualmente por acciones indebidas –por decirlo de alguna manera– del conjunto de las empresas que trabajan en la economía.

Podríamos citar algunos ejemplos: la letra chica de los contratos bancarios, de las financieras, la falta de servicio de las compañías de telefonía celular, la falta de conectividad, la falta de reparación de los electrodomésticos en tiempo y forma, la falta de entrega de los electrodomésticos en tiempo y forma. ¡Qué podemos decir de los servicios públicos, donde ha habido cortes de energía durante más de una semana a fin de año, se sancionó a las empresas con una compensación económica que revertía a los usuarios y fue apelada por las empresas! El tema está en la Justicia y ningún usuario cobró la compensación económica que le correspondía cobrar de acuerdo al derecho.

Esta nueva normativa, este fuero del consumidor, nos va a permitir discutir todos estos temas no solamente sobre los servicios privados, sino también sobre los servicios públicos, litigar contra las empresas y, realmente, poder acceder a la Justicia con letra mayúscula.

Una referencia a los tribunales arbitrales de consumo, aprovechando que estamos en el Senado, donde todos los legisladores son representantes de las provincias. Lamentablemente, tribunales federales de consumo hay sólo en la ciudad de Buenos Aires, creado

por el Ministerio de Economía de la Nación. Ninguna jurisdicción tuvo la voluntad política de crear tribunales arbitrales de consumo a nivel provincial. En la provincia de Buenos Aires se sancionó una norma allá por el 97 y nunca se aplicó. En la Ciudad de Buenos Aires está creado desde 2004, nunca se aplicó. Desconozco otras provincias. Lo cierto es que no hay tribunales arbitrales de consumo en ninguna provincia.

También, y siguiendo con el tema de trabajador-consumidor, así como aquel Departamento Nacional del Trabajo se transformó en Secretaría de Trabajo y Previsión y luego en Secretaría y hoy hay en todo el país delegaciones nacionales, provinciales que defienden a los trabajadores; esperamos que esta norma, que tiene en principio vigencia para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea adoptada o aprobada por todas las provincias argentinas para que en el corto plazo tengamos tribunales de consumo en todo el país y podamos defender los derechos del consumidor y del usuario en todas las provincias y no sólo esté limitado a un ámbito específico.

Por último, la semana pasada, en la audiencia en que estuvieron representados los sectores empresarios, se habló de la inconstitucionalidad de la norma que se estaría por aprobar.

El artículo 14 bis de la Constitución dice que las empresas deben dar participación a las ganancias. Nosotros queremos recordar a los empresarios que tengan la voluntad de proponerle al Parlamento, o de acompañar los proyectos de ley del Parlamento que proponen la participación de los trabajadores en las ganancias. Está reconocido. Que nosotros sepamos, no ha sido impugnado nunca, judicialmente, como inconstitucional. Por lo tanto, apoyando y confirmando lo que ha dicho el doctor Claudio Boada, alrededor de doce asociaciones hemos propuesto modificaciones concretas en el referido a la Ley de Defensa del Consumidor. Suscribimos esa nota y ha sido elevada a las autoridades.

Queremos referirnos a la Ley de Abastecimiento. Creemos que hay que diferenciar a los diferentes de los grandes. No se puede sancionar de la misma manera a una pyme o a un pequeño comercio como a una empresa concentrada, como a una gran cadena de supermercados, etcétera, que son formadores de precios.

Nosotros, como asociaciones de consumidores, tenemos una relación muy directa con el comerciante minorista, que ha sido el que nos aguantó durante 2001, 2002, el que nos daba crédito sin firmar nada porque no teníamos trabajo y estábamos por debajo de la línea de pobreza. No queremos que se trate a ese comerciante o a esa pyme, que también es víctima de las grandes empresas formadoras de precios de insumos básicos, como iguales. La unidad que tenemos los consumidores con nuestros iguales, los que somos víctimas de la concentración económica, de los monopolios, etcétera, creemos que hay que resaltarla. Y proponemos que, en la ley, se aplique este concepto.

Esperemos que, atendiendo a lo que hemos expresado hasta ahora tres entidades, que es un hecho histórico, sea acompañado con el voto histórico de los legisladores, no pensando en 2015 ni atendiendo a cuestiones partidarias, sino al voto histórico.

Cuando uno repasa el voto de algunos legisladores que desaprobaron el traspaso de los fondos de las AFJP al Estado, estamos seguros de que algún legislador que votó en contra, hoy, analizando su conducta, la habría modificado. Por eso planteamos lo del voto pensando en la historia, sin pensar en el hoy o en el año que viene, 2015, cuando haya que renovar autoridades nacionales.

Muchas gracias por escucharnos y esperamos que se tengan en consideración estas apreciaciones.

Sr. Presidente (Fuentes). – Muchas gracias por el respeto del tiempo pactado.

En representación de la Asociación “Será Justicia”, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, invitamos a Guillermo Lipera.

Sr. Lipera. – Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al senador por poder dar nuestra opinión en este recinto.

Trataré de cumplir con los diez minutos que me fueron concedidos. De modo que haré mínimas consideraciones generales y me voy a detener en las consideraciones que más nos preocupan.

En primer lugar, la semana pasada, se hablaba del rol del Estado y, en este punto, claramente, pensamos que el Estado tiene que ser fuerte, proactivo. En modo alguno queremos que quede retraído. Pero nos parece muy importante destacar que el Estado no está integrado exclusivamente por uno solo de los poderes, sino que son tres poderes. Este punto tiene que ver con el tema del que vamos a hablar, porque es importante tener un Poder Ejecutivo que cumpla con su función, pero también es importante respetar las facultades que la Constitución le da al Congreso, que debe reservar y no delegar, salvo que se cumplan los requisitos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Y también hay que tenerlos presente, y no tener desconfianza de los jueces porque, en realidad, son uno de los tres poderes de la Nación, tienen el mismo nivel y deben trabajar para lograr ese equilibrio que siempre es importante en las cosas para no irnos de un extremo al otro. Lo decía Loewenstein muchas veces, era una preocupación muy grande de él: hay que tratar de evitar la excesiva retención o concentración del poder en alguno de los que fuere que lo detenten. Creo que es el espíritu que no debemos olvidar. Me parece que es el punto que, en este tema, es importante tener como norte.

El segundo aspecto tiene que ver con el tema de la defensa de los derechos del consumidor y las empresas. Todos somos consumidores. No es que hay empresas por un lado, consumidores por el otro, y que las empresas lo único que pretenden es llevarse puestos a todos los consumidores, como tampoco pasa al revés. De modo que yo creo que, en este asunto, es bueno evitar caer en la demonización. Por un minuto, pongá-

mosle rostro humano a las empresas, aunque parezca un poco *naif*.

Hoy, en la Argentina, son varios los millones de personas que están trabajando en las empresas, que además son pasibles de hacerse cargo de las sanciones, porque este proyecto de la Ley de Abastecimiento contempla, entre otras cosas, que también los gerentes —que son personas que han trabajado, a lo mejor, treinta años para llegar a su cargo y son ciudadanos— tienen todo el derecho de acceder a una justicia independiente, conforme el Pacto de San José de Costa Rica, para ser juzgados. Y no que se les prive de ese derecho y sean juzgados previamente por, en este caso, la Secretaría de Comercio. Esta Secretaría, integrada hoy por el secretario Costa o por quien venga, porque no es un tema personal, las leyes se hacen para que duren en el tiempo.

Por otro lado, tengamos en cuenta, también a las empresas y a la gente que trabaja en ellas, que consumen. Y menos mal que consumen porque, si no, no tendríamos empresas. También pagan impuesto a las ganancias con su sueldo, también pagan las ganancias para que el Estado pueda cumplir con sus funciones.

Yo soy argentino, soy ciudadano y vengo de un pueblo —perdón, de una ciudad, porque se pueden ofender los chivilcoyanos—, ejercí toda la vida la profesión, sé lo que es consumir y sé lo que es una empresa, también asesoro a empresas. No hay buenos ni malos. No están todos los buenos de un lado y los malos del otro. De modo que sería bueno evitar caer en una postura maniquea en este punto. Me parece muy importante.

Para concluir este punto, me parece bien que, con la Ley de Defensa del Consumidor, se quiera mejorar el acceso a la justicia y que puedan satisfacer rápidamente los problemas que tienen los consumidores.

Aclaro que tengo nueve hijos y que sé claramente lo que tienen que hacer más de una vez para hacer valer sus derechos.

Ahora, el tema que más me preocupa es el que se refiere a la modificación de la Ley de Abastecimiento.

Quiero aclarar un punto sobre esta ley, que tiene cuatro aspectos. Quiero abocarme, si el tiempo me alcanza... No sé cuánto me queda todavía, senador.

Sr. Presidente (Fuentes). – Estamos en los cinco minutos.

Sr. Lipera. – Rápidamente, paso el título, nada más. Quiero abocarme a dos de los cuatro aspectos que tiene la ley.

La ley tiene, primero, un ámbito de aplicación. Es decir, se refiere a todo el proceso productivo de bienes, prestaciones y servicios que tengan que ver con necesidades básicas y que hacen al bienestar general de la Nación. Da facultades a la Secretaría de Comercio, amplias, para intervenir en la regulación de todo el proceso productivo.

Segundo, están los artículos que hablan de las facultades. Y acá viene una aclaración. Según mi leal saber y entender, las facultades que oportunamente

esta ley, mediante el Congreso, delegó en el Poder Ejecutivo, están suspendidas. Aclaro que la ley está vigente, simplemente están suspendidas las facultades enumeradas en los artículos 2, 3, 26 y 27 de la vieja Ley de Abastecimiento.

Traje un trabajo, porque no me quiero detener tanto en esto, que es digno de mención, de dos abogados jóvenes, que hace cinco años que vienen trabajando en el tema. Voy a dejar carpetas para el que esté interesado. Traje varias. ¿Por qué me parece importante destacar a estos abogados? No sólo por su juventud, sino porque escribieron todo esto no en oportunidad de este debate, si no, podríamos decir que es un artículo interesado, no, lo escribieron en los últimos cinco años y explican claramente las diferencias que hay de doctrina, quiénes están a favor de que estén vigentes o de que no lo estén, si están suspendidas o si no lo están. De todas maneras, ¿por qué digo suspendidas? Porque el decreto del año 91 suspende las facultades y las devuelve al Congreso, salvo un inciso –el inciso c) del artículo 2º– que faculta al Poder Ejecutivo a regular la comercialización, la intermediación. Ahora bien, el Congreso ratificó este decreto por la ley 24.307, del año 93. Y a través del digesto el Congreso volvió a ratificar esta suspensión; está individualizado como K–1.764. Es decir que hasta ahora está vigente esa suspensión. ¿Qué decía la suspensión? Que devolvía las facultades que le habían sido delegadas, salvo que, en algún momento, el Congreso entendiese que estábamos en una situación de emergencia de abastecimiento y, en tal caso, devolvía las facultades al Poder Ejecutivo.

En cuanto a este punto, les puedo asegurar que el 99 por ciento de la doctrina está en la línea que estoy marcando. Ahora, en la justicia nunca se ha resuelto a nivel de la Corte Suprema de Justicia; este tema todavía no está resuelto. Va a venir el doctor Sabsay y se dedicará más al tema, lo que pasa es que no me quiero olvidar de la otra parte de la que quería hablar.

Por eso importa hablar de esta ley: porque no se aplicó nunca todavía; y no se aplicó porque estaba suspendida. Ahora bien, las veces que se ha discutido ha sido siempre porque se trató de meter estas facultades dentro de este inciso c) del artículo 2º, que autorizaba a regular el comercio y la intermediación. ¿Qué es lo que me preocupa de esta delegación? Las facultades que se dan son omnímodas; y son facultades que por la Constitución Nacional están prohibidas, porque están regulando, están reglamentando toda la libertad de comercio –que está amparada por la Constitución–; y también están afectando el derecho de la propiedad. Y lo están haciendo de manera irrazonable, es decir, violando el artículo 28 de la Constitución Nacional, que lo tenemos gracias al señor Alberdi, quien decía que tratemos de no matar los derechos vía leyes reglamentarias. Ahora bien, estas facultades generan un gran estado de incertidumbre a los efectos de quien quiera venir a invertir en la Argentina, como en Vaca Muerta. Necesitamos inversiones, muchas inversiones; no alcanza con lo que hay acá. Aunque sea que se centre en los argentinos,

no hablo de los extranjeros. Hay que tratar de que los propietarios de las empresas traigan la plata, pero de esta manera creo que no la van a traer. ¿Qué facultades se le da a la Secretaría de Comercio? Establecer en cualquier etapa del proceso márgenes de utilidad. Es decir que la empresa va a tener que preguntar si el margen de utilidad está adecuado o no lo está. Además, tiene facultades para establecer niveles máximos y mínimos de precios. Es decir que voy a tener que preguntar a qué precio voy a vender. Pero, además, habla de que puede ordenarle, de que puede disponer la continuidad de la producción, industrialización, comercialización, prestación de servicio y fabricación. ¿Quiere decir esto que, aun a pérdida, tienen que trabajar también? Además, el inciso g) habla de que puede proceder, de ser necesario, al secuestro de todos los elementos aludidos en otros incisos. Resumen: se habla de libros, documentos, correspondencia –también incluye los correos electrónicos–, papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios.

Yo me pregunto: ¿la Argentina necesita inversiones o no? Yo creo que sí. Yo quiero que mis hijos se queden a trabajar acá, no quiero que se vayan. Entonces, ¿quién va a venir a invertir si tiene que preguntarle a la Secretaría de Comercio “¿puedo vender?, ¿cuánto puedo vender?, ¿a qué precio tengo que vender?”. Evidentemente, no.

Termino acá, pero es más larga mi intervención. De todas maneras, voy a dejarle un trabajo al senador Fuentes.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra el señor Osvaldo Bassano, de ADDUC.

Sr. Bassano. – Muchísimas gracias a los señores senadores, primero, por escuchar a los miembros de las asociaciones de consumidores y, después, por dar este debate que, honestamente, no necesitamos, primero y principal porque estamos en un momento paradójico. Voy a explicar muy brevemente por qué, yendo de lo particular a lo general.

Primero, nuestra asociación, ADDUC, apoya las recomendaciones y propuestas que estableció el doctor Boada cuando depuso anteriormente, las que serán presentadas. Creemos que allí están los puntos principales en cuanto a las modificaciones a la ley de resolución de conflictos en las relaciones de consumo.

Segundo, nuestra asociación agrega dos ítems más. El primero estaría en el artículo 10 de la ley de resolución de conflictos, en la cual establece las palabras “registro público de comercio”, o sea, el domicilio de las empresas requeridas. Debería ser IGJ, o sea la Inspección General de Justicia, o la Dirección de Personas Jurídicas que corresponda. Creo que éste es un término por el tema jurídico de los años que han transcurrido en el registro.

Tercero, creemos que podemos hacer una incorporación en el artículo 2º, donde dice que el COPREC intervendrá en los reclamos de derechos individuales de consumidores. Para evitar el término “reclamos”,

creemos que habría que generar las palabras “reclamos y demandas” de derechos individuales de consumidores. Hacemos estas dos propuestas considerándolas un aporte, y queremos que los señores senadores las tengan en cuenta.

Por fin, también vamos a entregarle al presidente de la comisión una breve consideración sobre lo que estamos hablando.

¿Por qué hablo de paradoja? Trataré de ser lo más breve posible, pero estamos frente al cambio jurídico en la historia del derecho de la Argentina; estamos haciendo ingresar en el derecho al derecho de tercera generación, para que tenga un lugar donde reclamar el derecho de tercera generación. Lo que le pasa a un consumidor les pasa a todos. Tratar este tema significa avanzar en la justicia, primero, y en el derecho, en general, en la República Argentina. Significa ponernos a la vanguardia, y significa los cambios fundamentales para el futuro. Por eso hay que verlo, como dijo mi antecesor, Pedro Buseti, sin ningún lugar para que sea político. Estamos hablando de cambios de futuro y de la responsabilidad que nos cabe a todos, porque esto es para el futuro y no nos tiene que incumbir solamente a quienes estamos inmersos en el tema.

Por fin, quiero señalarles claramente que estamos hablando del derecho del consumidor como un derecho humano. Aquí se ha hablado de infinidad de situaciones que tienen más que ver con situaciones individuales que colectivas. Estamos hablando del cambio de paradigma del derecho humano del consumidor; estamos ingresando en un derecho que es transversal. Primero, el derecho del consumidor fue defendido por la administración, transformando al consumidor en administrado. Hoy es un administrado, hoy no tiene una justicia en la cual solucionar su conflicto. Segundo, cuando estamos hablando de los medios alternativos de resolución de conflictos que ingresan por la ley, estamos hablando de normativas muy concretas. No tenemos que hablar del tribunal arbitral o del arbitraje, ya que no tienen nada que ver con el tema, ni de la mediación. Estamos hablando de la conciliación, que es el orden público del derecho del consumidor, que es el orden público que modifica asimismo y le da vigencia a la Constitución Nacional y a las directrices de las Naciones Unidas de 1985, que fueron adoptadas por todos los países del mundo. Hasta la Comunidad Europea está garantizando estas directrices, una por una. Estas directrices fueron absorbidas en el artículo 42, y le garantizan al consumidor no sólo el consumo, ya que no sólo se trata de eso, sino de la existencia vital de la persona.

Por lo tanto, no podemos entrar por la ventana cuando hablamos de estos temas, sino que tenemos que entrar por lo que es el trasfondo doctrinario de lo que significa el derecho del consumidor.

Teniendo en cuenta esto, se puede ver más claramente la necesidad de tener un observatorio de precios, insumos y servicios, y de ver una ley de abastecimiento que, perdóneme, señores senadores; perdóneme, señores

opinadores, y perdóneme, grupo de los 16, de los 6 o de los 4 grandes empresarios: Francia, Comunidad Económica Europea, Brasil, Estados Unidos y cuanto país de primer orden tiene exactamente la mismas regulaciones que tiene la Ley de Abastecimiento. Y cada uno de los artículos de la Ley de Abastecimiento está desparramado en todo el sistema jurídico de cada uno de los países que les he mencionado. Pruebas: al canto me remito; y si no, los invitaría a que vean la página de Internet de la Comunidad Europea, donde caen las directrices una por una, donde el 50 por ciento son para defender a los consumidores hasta de la fecha de vencimiento de un yogur. No podemos hablar si no tenemos mínimamente todo el universo que estamos tocando.

Por eso, les manifiesto claramente que no sólo nuestra asociación ha apoyado la modificación y creación de tribunales, ya que muchos hemos luchado durante años para demostrar claramente lo que es el derecho del consumidor, sino que también creemos necesaria la existencia de un observatorio y de algo que por lo menos regule un mercado que se ha dado el lujo de golpear los cuarteles cuantas veces ha querido. Lamentablemente, viejas historias son nuevas, y muchos conocemos de ellas.

Por lo tanto, les pido por favor que piensen con el sentido común del futuro, no del presente ni de partidos políticos ni de elecciones, sino que piensen literalmente que la Argentina ni América toda pueden vivir con mercados que significan Estados paralelos, que quieren gobernar, hacer faltar las yerbas en las góndolas, o caracterizar 4 empresas de telefonía celular que nos manejan inclusive hasta los Posnet de los comerciantes en distintas ciudades del interior. Señores: hay que tener herramientas fuertes, y solamente las paradojas del destino son para aquellos que miran el futuro.

Antes de continuar, por una razón equis me he puesto a leer varias veces *La casa de los espíritus*, de Isabel Allende. Por una razón muy extraña, en alguna de sus páginas se me cae una lágrima. Y por una razón muy extraña quiero leerles esto, con muchas disculpas de todos, que es luego del golpe, en un capítulo que se llama “El terror”: “Cuando se levantó por algunas horas la prohibición de salir, para dar a la población la oportunidad de comprar víveres –después del golpe que derrocó a Salvador Allende–, Blanca comprobó maravillada que los almacenes estaban abarrotados con los productos que durante tres años habían escaseado y que parecían haber surgido como por obra de magia en las vitrinas. Vio rumas de pollos faenados y pudo comprar todo lo que quiso, a pesar de que costaban el triple, porque se había decretado libertad de precios”. ¡Libertad de comercio, libertad de saquear un país! “Notó que muchas personas observaban los pollos con curiosidad, como si no los hubieran visto nunca –hace tres años que no los veían–, pero que pocas compraban, porque no los podían pagar. Tres días después el olor a carne putrefacta apestaba los almacenes de la ciudad.” Nadie pudo comprar nada porque no tenía cómo.

¿El Estado no puede regular? ¿El Estado tiene que masacrar a una población para tener libertad de mercado? Señores, convenzámonos: no estamos frente a leyes de intervencionismo; estamos frente a leyes que hacen respetar a la persona como principal elemento que la Constitución Nacional nos obliga a tener en cuenta. Nadie puede pensar que una empresa extranjera que viene a invertir va a tener el poder suficiente de saquear góndolas o dejar de hacer fabricar sus productos, como pueden hacerlo las farmacológicas, y por eso la necesidad de la continuidad de la producción. Son elementales los elementos –valga la repetición– que se necesitan para darse cuenta de que el Estado necesita controlar la fabricación. El Estado tiene que saber a quién se le va a vender y a quién no se le va a vender; saber qué población puede comer o no comer; saber perfectamente que sus habitantes, los 40 millones de habitantes...

Sra. Presidente (Fuentes). – Vamos redondeando, por favor.

Sr. Bassano. – Sí, señor presidente.

40 millones de habitantes deben tener literalmente acceso al consumo, porque así lo estableció la ley, porque así lo estableció Naciones Unidas y porque así nos respetamos todos. Consumidores somos todos; el otro también es consumidor.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias por respetar el tiempo acordado.

Tiene la palabra el señor Osvaldo Riopedre, representante de ADECUA.

Sr. Riopedre. – Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.

Quiero empezar por la parte más linda que hoy nos toca en el tema y en los proyectos, que es la creación de los tribunales de defensa del consumidor. Por supuesto que lo vemos positivo desde muchos puntos de vista. Nosotros litigamos habitualmente y vemos cuáles son los sufrimientos que tenemos como defensores y, muchas veces, abogados, y cómo sufre la gente también cuando ve que sus derechos no son reconocidos.

Más allá de esto, creo que lo que acá es necesario es la inmediatez. Me da la impresión de que los otros proyectos, amén de burocratizar el sistema administrativo, también dejan de lado muchas partes que hoy podrían usarse y comenzar directamente a ponerlas en práctica. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de conciliadores, creo que se deberían usar las estructuras de los conciliadores y los mediadores. Tengamos en cuenta que acá hay una diferenciación, que es, en realidad, de concepto entre mediador y conciliador. El conciliador es un conciliador laboral, y el propio proyecto en sus antecedentes habla de los mediadores y de los conciliadores. Nosotros creemos que hay que usar a los ya designados mediadores y conciliadores para poner en práctica inmediatamente esta fase que se está proponiendo.

Respecto de lo que son los auditores, ahí tenemos varias dudas. Creemos que se deben usar también las estructuras que hoy existen en los tribunales arbitrales, por supuesto, adaptándolas a lo que el Poder Ejecutivo está proponiendo. Pero nos caben dudas en este sentido: no dice cuántos auditores se van a designar, no dice cuáles son las estructuras que va a tener cada auditor. Nos parece que designar un auditor por 7 años es mucho más que lo que se designa a un senador y casi el doble de lo que se designa a un diputado, siendo un administrativo. No estamos hablando acá de un juez; estamos hablando de una persona que va a hacer de juez administrativo.

Después, una cosa que nos preocupa es que, pasada toda esta fase administrativa, se puede apelar. Habla de que se puede apelar ante los tribunales a crearse. Creo que es necesario que pongamos que hasta tanto se creen esas cámaras...

–Varios participantes hablan a la vez.

Sr. Riopedre. – Está puesto. Entonces, en esas cámaras, que alguien entienda en esa apelación.

Después, me parece que tenemos que tener en cuenta esto: no tenemos que soslayar o dejar de lado la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Por qué digo esto? Porque la Ley de Defensa del Consumidor, más allá de los montos, que acá se elevan a 10 millones de pesos, prevé sanciones de hasta 5 millones de pesos. Y prevé muchas de las sanciones de las que hoy se están hablando en la Ley de Abastecimiento que desde nuestro punto de vista, es una ley en donde si tomamos la base de 1974, creemos que está vigente parcialmente, que en lo que es específicamente la cárcel, ya no está vigente. La propia jurisprudencia lo ha establecido en 2004 y 2011 en diferentes fallos. Me parece que hay que mirar un poco los artículos de la Ley de Defensa del Consumidor y muchos artículos que hoy se están proponiendo en este proyecto de ley que, desde nuestro punto de vista, va a ser de desabastecimiento, porque tenemos suficientemente probado, desde 1974, cuando el general Perón y José Ber Gelbard, como ministro de Economía dictaron esta Ley de Abastecimiento, vimos cuáles fueron los resultados. También recientemente con “la carne para todos”, con “el trigo o pan para todos”, vimos que realmente fracasó. Por eso, considero que debemos tener en cuenta estas cosas y si el administrador hubiera querido aplicar este tipo de sanciones, lo hubiera hecho simplemente mirando la Ley de Defensa del Consumidor.

Repito, la Ley de Defensa del Consumidor establece clausuras, sanciones hasta 5 millones de pesos. Entonces, me da la impresión de que la cuestión es adaptar lo que ya tenemos y no burocratizar y crear nuevos puestos de trabajo que van a significar mucha plata y tiempo. Y hoy podríamos poner en práctica, perfectamente, con las leyes que tenemos, sin dejar de olvidarnos de la Ley de Lealtad Comercial y tampoco de constituir el tribunal

de defensa de la competencia que, lamentablemente, hace quince años nos debemos.

Entonces, vemos positivo la creación del fuero; esperemos que sea lo más rápido posible para que la gente tenga acceso y creemos que es mucho más fácil adaptar lo que tenemos, en cuanto a las leyes ya sancionadas, que sancionar nuevas leyes que van a traer aparejado nuevos gastos.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra el señor Miguel Fortuna, del Movimiento Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y Medio Ambiente.

Sr. Fortuna. – Buenas tardes. Gracias por darnos la posibilidad de expresarnos.

Para las asociaciones de consumidores y para los consumidores en su totalidad éste es un hecho fundamental y fundacional. En primer lugar, quiero expresar que apoyamos el sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, porque, casualmente, los otros días en la reunión de comisión se comentaba que con el artículo 42 de la Constitución y con la ley 24.240 y la 22.802, de lealtad comercial, era suficiente para que los consumidores estuvieran protegidos.

Lo puedo decir, en mi condición de representante de una asociación de consumidores, pero sobre todo desde el lado de funcionario público, porque desde 2000 a 2006 fui director de Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad. Muchas de las asociaciones que están acá presentes saben las dificultades con las que nos encontramos a la hora de poner en práctica la ley 24.240, de defensa del consumidor. Tuvimos que recurrir a la Legislatura porteña para tener un procedimiento administrativo que nos permitiera agilizar los tiempos; porque nosotros, cuando llegamos a la gestión, nos encontramos con la dilación en las audiencias, en las instancias conciliatorias y por eso tuvimos, por la ley 757/2002, después fue modificada por la ley 2.876/08, muchos de los puntos que hoy están puestos en esta ley los habíamos redactado con el equipo de colaboradores que hoy tenemos en la gestión. Por ejemplo, recibida una denuncia de parte interesada, si resulta procedente en un plazo de diez días hábiles, acelerábamos los plazos, que es lo que todos los consumidores reclamamos porque sabemos que la dilación en la audiencia de conciliación desalienta la queja. Mi idea fundamental –y que esta ley lo contempla–, que es la inmediatez, el tema de la gratuidad, por supuesto, el tema en cuanto a que si el denunciado no asistía estaba multado, está en esa ley de 2002. Ya establecíamos esa multa en caso de incomparecencia injustificada que después se fue actualizando por la Ley Tarifaria. Pero ¿qué pasa? Teníamos un límite, un tope, porque nos faltaba la instancia superior, que sería este fuero específico de consulta. En la sede administrativa, voy a tirar algunos datos para que se tenga en cuenta, en 2005 se recibieron 7.500 denuncias. Denuncia no es consulta, denuncia es un hecho administrativo. Se realizaron 13.130 audiencias de conciliación. Todo en una sede administrativa

que teníamos en la calle Esmeralda 340. Calculen la magnitud en el resto de todo el país.

Se alcanzaron 2.862 acuerdos, es decir, en la audiencia de conciliación, si se ponían de acuerdo las partes, se acordaba. Luego, por facultades que existían, se hacía la homologación de acuerdo, que podía ser recurrida en caso de incumplimiento. Se dictaron 1.037 sanciones, o sea, disposiciones administrativas. Si uno toma la diferencia, no hay resarcimiento para el consumidor, no había instancia para que el consumidor se fuera satisfecho; y las multas, en la mayoría de los casos, eran apeladas en el fuero contencioso administrativo y tributario y hoy, todavía sigo viendo en los diarios que salen multas publicadas con mi firma de 2004/2005. Es decir, lo que el secretario de Justicia comentaba como un hecho particular el otro día, nosotros lo vivíamos en muchísimos casos y no tenía solución.

Entonces, por eso creemos que es necesario que haya un fuero específico porque hemos iniciado acciones colectivas, como sede administrativa. Y ni contar con las medidas cautelares en los casos de medicina prepaga, cuando una empresa no quería cumplir con la atención de un paciente. Nunca sabíamos a quién recurrir. En un momento fui a un juzgado y le dije a un juez: yo lo voy a hacer responsable a usted por el abandono de persona, porque tienen que operar a alguien. Me dijo si yo estaba loco. En realidad estaba haciendo lo que un funcionario público tiene que hacer. ¿Quién se hace cargo de esto? Yo no tengo facultad, ¿cómo hago? Porque no hay un fuero específico. Ahí empezaba la pelota diciendo que la competencia no es mía, es tuya, etcétera. Se pasaba por distintos ámbitos.

Por eso, creo que es necesario y adherimos fervientemente. Esto lo digo desde la práctica cotidiana, por ejemplo, con el tema de los cambios en metodología legal. En ese año se realizaron 14.000 inspecciones, se detectaron 4.206 infracciones. Esto era hecho, generalmente, en grandes superficies, supermercados, hipermercados, *shopping*, galerías comerciales, centros comerciales, barriales y las multas, después, eran apeladas, sistemáticamente y tampoco el consumidor se veía resarcido, nunca tenía compensación. Y muchas veces decía: ¿para qué voy a ir a reclamar si después, encima, la multa que se le pone a una empresa es apelable?

Hay varios temas con publicidades gráficas, descargos. Otra medida nuestra, que también pasa muchas veces, es el tema de las pericias. Habíamos puesto, en esa ley, que la pericia estuviera a cargo del sumariado.

Sr. Presidente (Fuentes). – ¿Puede redondear, por favor?

Sr. Fortuna. – Sí, señor presidente.

Después, fue modificada en el año 2008 y se puso que sean el denunciante y el sumariado. Miren la desigualdad que existe entre el sumariado y el denunciante: tiene que pagar la pericia el denunciante.

Por eso, nosotros apoyamos esta ley. Como lo han dicho algunos que me antecedieron en el uso de la palabra, es un hecho fundamental para nosotros. Algunos lo

mirarán desde la óptica política. Yo digo que ésta es una política de Estado. Algunos dirán que no porque esta ley la giró el Ejecutivo. Sin embargo, más allá de si la giró o no el Ejecutivo, las asociaciones de consumidores tomamos como referencia –y en todo el mundo– el 15 de marzo de 1962, cuando un presidente, que no era Chávez, Maduro ni ninguno de los que se dijeron aquí, sino que era John Fitzgerald Kennedy, dijo ante el Congreso de su país: “Ser consumidor por definición nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas, públicas y privadas, pues es el único grupo importante cuyos puntos de vista, a menudo, no son escuchados”.

Recordaba una frase famosa que decía que los usuarios, en este caso son los ciudadanos, votamos cada dos años y el mercado vota todos los días. Todos los días, cuando toma medidas, el mercado está votando para qué lado va o para qué lado quiere que vaya la cosa.

Un periodista muy joven, en un viejo programa, al momento de definir, decía: “¿De qué lado estás, chabón?”. Nosotros sabemos de qué lado estamos, que es el lado de los más débiles y no viendo de perjudicar... Aquí alguien habló de perjudicar a las empresas. Con todas estas leyes, las empresas que se quisieron ir, se fueron y las que quieren venir, seguirán viniendo.

Muchas gracias por su atención.

Sr. Presidente (Fuentes). – Muy amable.

Tiene la palabra el doctor Funes de Rioja de la Unión Industrial Argentina.

Sr. Funes de Rioja. – Buenas tardes, señores senadores, señor secretario de Comercio y señor jefe de Gabinete.

En nombre de la Unión Industrial Argentina y su presidente, Héctor Méndez, venimos a expresar nuestra posición sobre la nueva redacción que se propone para el texto de la llamada Ley de Abastecimiento, 20.680.

El gobierno nacional incluyó este proyecto en el giro que hizo al Congreso de la Nación para su debate junto con otros dos proyectos de ley. Estos tres quedaron bajo la denominación genérica de “relaciones de consumo”.

Lamentablemente, y pese al diálogo abierto en Río Gallegos de la señora presidenta de la Nación con los sectores de la producción y del trabajo, no hubo consulta previa al envío al Parlamento el día 5 de este mes. Por esta razón, venimos a pronunciarnos sobre los mismos.

El primer proyecto propone la constitución del sistema de resolución de conflictos en las relaciones de producción y consumo, y la creación del servicio de conciliación, etcétera. Consideramos que el mismo puede ser en aras de mejorar la posición del consumidor, cuestión con la que estamos de acuerdo, dado que plantea un marco para preservar los intereses del ciudadano, algo que estaba previsto en la Constitución Nacional de 1994, en la reforma del 94, y entendemos que seguramente existen ciertos aspectos jurídicos, técnicos e instrumentales que deberán ser analizados

y debatidos con profundidad, para los cuales, desde ya, manifestamos nuestra disposición.

El segundo busca crear el observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios. Esta iniciativa propone generar una mayor disponibilidad de información pública de precios, así como detectar actos o conductas que pudieran generar distorsiones en el mercado.

En primer lugar, creemos en la necesidad de generar información fiable y sistemática, a través de órganos profesionales, que tengan continuidad y no se vean afectados por intereses políticos. Dicho esto, nos preguntamos: ¿por qué si existe el INDEC, que releva precios y costos, se requiere ahora la creación de un nuevo organismo con atribuciones tan amplias como para propiciar pedidos de información que puedan abarcar la casi totalidad de la información interna de una empresa? Artículo 3º, toda información relativa al giro comercial.

¿No es contradictorio que en los fundamentos el proyecto mencione entre sus objetivos brindar valores transparentes, ciertos y previsibles, cuando el INDEC no publica precios desde el mes de abril de 2008?

Por otra parte, nada se menciona sobre cómo se tratará la información, en muchos casos de carácter sensible –recuerdo la resolución 29, que hemos tenido la oportunidad de discutir en su momento y de adecuar con el señor secretario de Comercio–, si se mantendrá el secreto estadístico y cuál es la responsabilidad del funcionario respecto de la información que se le brinda. Entendemos que en estos aspectos, el proyecto debería ser analizado minuciosamente por los legisladores, no olvidando el debate que se tuvo en oportunidad de aprobarse la resolución 29 y, luego, su adecuación.

Vamos al tercer proyecto: nueva regulación de las relaciones entre producción y consumo. Consiste nada más y nada menos que en reinstalar la Ley de Abastecimiento, redactada en un contexto nacional e internacional absolutamente diferente al actual, lo cual hizo en la práctica que no haya tenido utilización, al menos, en los últimos veinte años. Como aquella anacrónica norma, este proyecto promueve las prácticas de intervenciones discrecionales en el proceso productivo, lo cual desincentiva la inversión, dificultando el ingreso de divisas y la generación de empleo.

Quiero decirle al distinguido orador que me precedió en el uso de la palabra que desde el sector privado estamos convencidos de que esto no ayuda a la inversión, al entorno favorable, a la empresa y al empleo, más allá de las funciones lógicas razonables que tiene el Estado de control.

Además, y para despejar cualquier duda al respecto, es necesario destacar que en el nuevo digesto jurídico no sólo la ley 20.680 figura como vigente, pues al mismo tiempo el decreto que la suspende, 2.284 del 91 también está vigente, conflicto normativo que no es nuevo y que de no resolverse legislativamente cabe a la Justicia dirimirlo.

Por otro lado, no se trata de un artículo u otro. Quiero que esto sea claro para los señores senadores. Es la esencia y contenido que va más allá de la excepcionalidad que justificaría medidas extraordinarias en circunstancias excepcionales, calificadas por el Poder Legislativo e implementadas por tiempo limitado y sobre base concreta. Señores: no hago más que referirme al artículo 76 de la Constitución Nacional, que no es un invento solamente para que valgan determinados artículos de la Constitución, sino para que el equilibrio entre todas las instituciones de la Constitución nos dé garantías a todos. La seguridad jurídica es el respeto a la Constitución. No hay nada más, pero tampoco nada menos.

Para ser concreto, vemos que hay una delegación discrecional que se materializa en un mandato discrecional, otorgando facultades discrecionales con, incluso, la posibilidad de aplicar discrecionalmente sanciones que de manera adicional serán irreversibles por el cepo que implica el principio de *solve et repete*.

Quiero reiterar que hay un cúmulo de discrecionalidades que no favorece la adecuada división de poderes ni la preservación de los derechos de los ciudadanos, porque, señores senadores, los empresarios también somos ciudadanos.

En efecto, la delegación abierta es tan discrecional que se efectúa sin condicionamiento de ningún tipo, ya que ni siquiera debe declararse previamente un estado de emergencia de abastecimiento, como sí requería la anterior Ley de Abastecimiento.

Cabe consignar que este tipo de instrumentos no sólo han sido desechados en la experiencia comparada, sino que resultan incompatibles con acuerdos bilaterales de inversión suscritos por nuestro país —pedimos que tomen especial atención a esta preocupación— y con principios del G20, al cual pertenece la Argentina.

Por otro lado, hay medios legales en la Ley de Defensa de la Competencia para corregir distorsiones, si es que se producen, en vez de que se presuman. En los considerandos de estas normas se presume en vez de verificar la distorsión.

Al otorgarse facultades al secretario de Comercio para involucrarse en todas las actividades económicas del país a su arbitrio, se lo habilita también para imponer multas, incluso, superiores a las del propio Código Penal y sin la intervención de un juez. Una vez dispuesta la multa, para recurrir y llegar a la instancia judicial, habrá que hacer el pago previo, lo que dejará en virtual estado de indefensión a quienes se encuentren alcanzados por tales sanciones.

Nos dicen que hablemos de cosas concretas, la ley es muy concreta. Por lo tanto, el sistema de la ley es difícil de objetarlo artículo por artículo, porque uno deja vigente el corazón de la ley, que son estas facultades discrecionales. Pero las sanciones pueden ser contra las empresas, sus directores, administradores y gerentes, con importes de hasta 10 millones de pesos. Incluso se puede aumentar hasta el triple de la ganancia obtenida

en la supuesta infracción. Y todo esto, como facultad no de un juez, sino del poder administrador.

En el caso que se intervengan determinadas mercaderías en presunta infracción, podrán ser vendidas sin necesidad siquiera de un juicio de expropiación.

A diferencia de la actual ley, en el proyecto se elimina la sanción de prisión, pero se habilita la clausura del establecimiento, inhabilitación de hasta dos años para el uso o renovación de créditos, decomiso de mercadería, pérdida de regímenes impositivos, concesiones, privilegios, etcétera. Y en caso de reincidencia pueden elevarse más los montos y la clausura, ser definitiva.

Señores senadores: estamos de acuerdo con la defensa del mercado y la libre competencia. Nadie más que nosotros las va a defender desde la Unión Industrial Argentina. Y no permitir los abusos y conductas monopólicas u oligopólicas. Pero éste claramente no es el camino a seguir, ni el que llevan adelante la mayoría de los países del mundo que fueron actualizando y modernizando su legislación.

Para ello insistimos: la Ley de Defensa de la Competencia es el camino idóneo y la instrumentación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, vigente por ley y aún no implementado, aparece como imposterable.

Antes de ahondar en otras implicancias de este proyecto, es menester contextualizar la situación actual en el marco en el que quiere promoverse esta ley.

No vamos a entrar en datos económicos, pero desde fines de 2011 hasta la actualidad la inversión ha caído y hoy se encuentra en niveles inferiores a los que se observaban en ese año, esperando que en 2014 ronde el 20 por ciento del PBI. Y nosotros pensamos que una tasa razonable para un país como el nuestro es 24, 25, 26, 27. Sin hablar de los niveles chinos del 40 por ciento.

Ahora, ¿por qué no hay inversión suficiente en la Argentina? ¿Por perversidad? ¿O vienen dadas por las condiciones económicas actuales?

La actividad industrial en particular finalizará en 2014 con una caída estimada del 2,5 al 3 por ciento. Esto, a la vez, genera dificultades para mantener el ritmo en la creación de nuevos puestos de trabajo.

No sabemos si dudan o no del compromiso que el empresariado argentino tuvo desde el año 2002 con la reconstrucción de la economía argentina a partir de la crisis que tuvimos.

No voy a entrar en datos —los ponemos a disposición de ustedes—, pero lo que decimos es que durante la década nosotros invertimos, crecimos en empleo, en exportaciones, en desarrollo. Ahora somos malos. En una coyuntura compleja, con precios regulados e incremento sostenido de los costos, una de las claves para que se recupere la dinámica de la actividad industrial consiste en revitalizar el crecimiento del producto, empleo y productividad vía mayor inversión productiva.

Encontrándonos en cualquier contexto, pero particularmente en el que estamos viviendo, la pregunta es:

¿este proyecto ayuda a mejorar la inversión necesaria para estimular el crecimiento y la generación de empleos de calidad?

Señores legisladores: estamos convencidos de que la respuesta es negativa. La aplicación de esta ley va a perjudicar severamente a las inversiones en el país, fundamentalmente por los poderes que otorga: definir precios y márgenes de utilidad sin criterio alguno; decomisar mercaderías y productos; definir cuánto debe producir una empresa y a qué precio; exigir información comercial estratégica sensible y operativa en cualquier momento; cancelar concesiones, beneficios; sancionar empresas cuando formaren existencias superiores a las necesarias. ¿Quién determina esa necesidad?

Dicho esto, si una decisión discrecional de un funcionario puede definir precios de venta, márgenes de utilidad, cantidades a producir, canales de distribución y regímenes de licencias comerciales, entre otras medidas de intervención, las preguntas inmediatas son: ¿cuál es el análisis que debe hacer el inversor para decidir sobre una futura inversión? ¿Cuál es el margen razonable o no abusivo, o cómo se define qué y cuánto se considera como apropiación indebida de la renta? ¿Cómo se mide la utilidad razonable? ¿Cómo van a determinar los precios y márgenes de una pyme en crecimiento? ¿Cómo se establecerán los de una empresa mediana o grande que por economías de escala requiera un mercado mayor? ¿El margen razonable se calculará producto por producto, sin considerar el diferente *mix* de productos y la estrategia comercial que cualquier compañía define? ¿Cuál es el nivel de *stock* que deberá mantenerse para no ser acusado de formar existencias superiores a las necesarias? ¿Y bajo qué condiciones una empresa deberá producir la cuota mínima que puede discrecionalmente...

Sr. Presidente (Fuentes). – Su tiempo, por favor.

Sr. Funes de Rioja. – Señor presidente: dijimos que estamos convencidos de que el proyecto será sumamente negativo para el desarrollo económico y social de del país. Para su crecimiento la Argentina debe mejorar la certidumbre que otorga su marco institucional. El país necesita incrementar sus inversiones y nosotros estamos dispuestos a ello. Con regulaciones que controlen precios, cantidades, márgenes, entre otras cuestiones, aquellos que estén dispuestos a invertir en el país tendrán que enfrentarse a un marco institucional de mayor incertidumbre.

A los industriales les interesa que la Argentina se desarrolle económica y socialmente. Y no hay país desarrollado que no sea industrial.

El proyecto de ley es claramente inconstitucional, inconveniente, inoportuno e irrazonable, otorgando a la Secretaría de Comercio y a los poderes ejecutivos provinciales –con ello concluyo–, funciones asignadas a otros poderes, violando el artículo 76 de la Constitución.

Por eso creemos que, en vez de ir a figuras cercanas a una estatización del mercado y que afectan no sólo

a la industria, sino también a todas las actividades del país, reiteramos nuestro acuerdo conceptual con los dos primeros proyectos y nuestro rechazo a éste, a la par que instamos a instrumentar el Tribunal de Defensa de la Competencia y expresamos nuestra voluntad de lograr, en el marco de un consenso y respeto institucional, los objetivos de conciliar los derechos constitucionales del consumidor con la transparencia del mercado y la libertad de empresa.

Sr. Presidente (Fuentes). – Doctor Ricardo Gil Lavedra.

Sr. Gil Lavedra. – Señor presidente: agradezco a toda la comisión la invitación para poder participar de este encuentro y dar opinión respecto de los proyectos que tienen bajo su consideración.

Me voy a referir muy brevemente, porque supongo que los expositores son muchos y los argumentos van a ser coincidentes en su sustancia, al mensaje 1.252, que es el referido a las modificaciones a la Ley de Abastecimiento.

Quiero decir que con este proyecto no está en juego o en discusión si el Estado puede regular la economía o no, sino cuáles son los límites y los alcances con que puede hacerlo. Y me anticipo a decir que son tan extremas las disposiciones de este proyecto que llegan, en la práctica, casi a suprimir el derecho que se pretende reglamentar.

Por supuesto que todos nosotros sabemos que en materia de regulación estatal se han ido sucediendo, desde la Constitución del 53, distintas etapas. Una primera declara prevalencia de una Constitución de un claro espíritu liberal y durante el siglo XX, cuando comienzan las concepciones sociales y aparecen incluso los derechos sociales y la necesidad de que el Estado los reconozca y los garantice, comienzan algunas etapas en las cuales el Estado empieza a intervenir cada vez más en la economía, no solamente para asegurar cuestiones de seguridad o salubridad, como hacía durante el siglo XIX, sino también para propender al bienestar general y poder satisfacer a alguno de los sectores postergados. Incluso, particularmente en situaciones de emergencia pública, que en la Argentina han sido usuales, reiteradas hasta el hartazgo, al punto que hace más de una década que vivimos en emergencia.

Decía que a esto responden los casos por todos conocidos que sucedieron en la década del 20 con relación a los alquileres, como en el caso “Ercolano”, y en la década del 30 cuando se trató de establecer un límite a los intereses de las hipotecas. Y por supuesto, cuando aparece también en la década del 40 la cuestión referente a los precios.

Debo decir, en este caso de la primera ley que estableció precios máximos –la 12.591–, que siempre fue referida a situaciones de emergencia pública y transitoria, atendiendo, en este caso, a las necesidades que traía la guerra. Pero nunca hasta ahora ha estado en discusión esta constante expansión de las facultades del Estado en materia regulatoria. Y esto ha tenido su

consagración con la enmienda constitucional de 1994, en la cual nadie discute hoy en día que se consagró, a través de esta reforma, un poder de policía amplio de parte del Estado. Pero esto no significa, de ninguna manera, que a través del poder de policía se pueda suprimir el derecho que se busca proteger o regular. Tiene que haber necesariamente cierta proporción de medio a fin entre lo que se limita y lo que se quiera preservar.

En el caso concreto de este proyecto, señor presidente, en el cual se mantiene el infausto precedente, que fue del año 1974, la primera Ley de Abastecimiento, se llega a suprimir. Digo que se suprimen absolutamente las libertades económicas de la Constitución.

Si se faculta al Poder Ejecutivo a decir qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce, dónde se vende y a cuánto se vende, me parece que el derecho de poder usar y disponer de su propiedad, que el derecho también a poder comerciar o ejercer industria con fines lícitos, queda absolutamente cancelado. Digo “cancelado” porque nada queda de él.

Desde ya que toda Constitución tiene que establecer un marco general donde puedan realizar sus políticas gobiernos de diferentes signos. Dentro de la Constitución pueden estar gobiernos más liberales, más conservadores, más progresistas, más intervencionistas, menos intervencionistas. Pero lo que no se puede nunca es alterar la herramienta o el piso de derechos básicos que establece la Constitución.

En el caso de este proyecto, lo que se deja de lado a través de estas potestades que se le otorga al Estado, es el principio básico de la propiedad y de la iniciativa privada. Esto no es regular el mercado y, por supuesto, nada tiene que ver con el caso de los consumidores.

Es más, todas las iniciativas tendientes a la regulación para asegurar la transparencia del mercado están intocadas, al punto que está incumplido, desde hace años, la conformación de este famoso Tribunal de Defensa de la Competencia respecto del cual nada se ha hecho.

En consecuencia, señor presidente, creo que esta ley claramente —digo que no es un tema de opinión— incumple el artículo 14, el 28; excede las facultades regulatorias que tiene el Estado en el artículo 75 en los incisos 18 y 19. Y, desde ya, que el test de razonabilidad necesario que tiene que hacerse para determinar su adecuación constitucional es imposible.

Díganme, de lo contrario, cuál es la relación, el vínculo que hay entre las medidas que se toman y los derechos que se suprimen. ¿Por qué éste es el medio necesario?

Por supuesto, también se ha dicho —lo escuché al expositor anterior— que no existe ninguna referencia a situación de emergencia. Y, es más, la delegación que trae —necesariamente, porque esto es materia legislativa— no cumple con el artículo 76; ni es limitada en el tiempo ni hay tampoco fases de delegación.

En consecuencia, para ir terminando, señor presidente, me parece que es un supuesto que es claro, que es evidente, que excede con mucho la política legislativa.

Sin duda, este proyecto va a ser invalidado por los tribunales, y los jueces lo van a declarar por estas razones que se han señalado, en cuanto a los defectos groseros que tiene la iniciativa.

Por lo tanto, más allá de que también hay otro proyecto en el que resulta discutible la “federalidad” de la cuestión, yo no creo que las provincias hayan delegado en el gobierno central todo lo atinente a las relaciones de consumo. Esto es desapoderarse de facultades que, al menos, son concurrentes con las jurisdicciones locales. Serían dignas de mejores esfuerzos, sin perjuicio, obviamente, de que no voy a hacer ninguna mención al contexto de oportunidad.

No creo, habida cuenta también de la pública y notoria ineficacia que tiene el Estado, que esto se llegue a regular.

En consecuencia, cabe preguntarse si las facultades que se confieren no funcionan más que como una suerte de amenaza; de decir, “bueno, está la posibilidad de hacerlo”, y esto es tratar de seguir interviniendo en la economía más de hecho que de derecho.

Muchas gracias por su atención, señor presidente.

Sr. Presidente (Fuentes). — Muchas gracias, doctor, por el respeto al tiempo acordado.

Tiene la palabra el doctor Sabsay.

Sr. Sabsay. — Muy buenas tardes a todos. Agradezco vuestra invitación. Y, más allá de lo que se ha dicho —coincido, por ejemplo, con lo que ha dicho el doctor Gil Lavedra— quiero extenderme en algunos puntos. Voy a hablar, fundamentalmente, de la Ley de Abastecimiento, es decir, de la reforma a la ley 20.680.

En tal sentido, coincido que se produce una delegación legislativa absolutamente abusiva que desconoce el artículo 76 de la Constitución Nacional, introducido por la reforma del 94. Recuerdo que, como principio general, prohíbe la delegación legislativa y la reserva sólo para materia de administración y de emergencia pública, dentro de un plazo establecido y dentro de las claves, dentro de las bases que la ley delegante establezca. Nada de eso se determina aquí.

No tiene en cuenta lo que ha ocurrido con esta ley 20.680, que ha seguido la suerte de un decreto que suspende, una ley que confirma y el digesto jurídico que incorpora. Es decir, para poder llevar a cabo alguna de estas medidas, es necesario que el Congreso previamente declare la emergencia de abastecimiento.

Viola la tutela efectiva de los derechos, que es la obra del derecho internacional de los derechos humanos, que se fueron incorporando a través de tratados desde 1983 y que tienen jerarquía constitucional.

Digo esto porque está dando, en manos de la Secretaría de Comercio, un poder judicial sustantivo respecto de todas las cuestiones que se estuvieron enumerando, sin que exista la mínima garantía propia del debido pro-

ceso. Es decir, nos retrotrae a la época de las cavernas en materia de derecho procesal constitucional.

Viola el principio de separación de poderes, por lo tanto, porque usurpa facultades legislativas y porque usurpa facultades de tipo judicial.

Viola la legalidad fiscal, porque entre las sanciones que puede imponer está la supresión de regímenes impositivos, a favor, precisamente, de aquellas empresas o personas que resulten sancionadas.

La exención es lo mismo que el establecimiento. Yo recuerdo, hace unos años, cuando fue el tema de la 125, que tuve que exponer exactamente en este lugar. Parecía que decía un disparate porque decía que, precisamente, las retenciones eran impuestos, y que los impuestos podían ser establecidos solamente por ley. Después tuvieron que sacar la ley; no era tan disparate lo que decía.

Se llame como se llame algo, tiene una naturaleza, tiene una funcionalidad. Y aunque a lo que es impuesto se lo llame “Quique”, no es “Quique”: es un impuesto. Y acá, por el simple hecho de El Príncipe, a una persona jurídica o a una persona física se la va a privar de un sistema de tipo impositivo, haciendo uso absolutamente de la potestad fiscal para el secretario de comercio.

Estamos retro trayéndonos en la historia del constitucionalismo antes de la Carta Magna, que precisamente impuso que no hay posibilidad de fijar tributos sin representación, sin que sea el órgano deliberativo el que lo haga.

Viola asimismo el principio de la intimidad, porque le da la posibilidad a este secretario de que se le presente todo tipo de documentación, inclusive entrando en su propiedad, hurgando sin ninguna orden judicial y sin ningún tipo de control. Es decir que viola también el artículo 19 o principio de reserva de la Constitución Nacional, que es una de las grandes conquistas del constitucionalismo.

Viola también la separación de poderes, y lo hace aludiendo la protección de los consumidores y usuarios, cuando hay también una atribución que denota que esto no va a ser así, porque da la posibilidad también, en relación a las ONG y demás asociaciones defensoras de consumidores y usuarios, de anularles la personería jurídica.

Al respecto, recuerdo que esto ya ocurrió, porque en realidad mucho de lo que se pone acá es lo que ya hacía el exsecretario de comercio Moreno, sin que estuviera escrito en ningún lado. Por ejemplo, al doctor Polino, como publicaba estadísticas que no se concedían con las que daba el INDEC, se le retiró la personería jurídica. Sin embargo, luego se la repuso judicialmente. Pasaron varios años. Es decir, ya tenemos el precedente. ¿Qué se está esperando? ¿Qué nuevamente intervenga la Justicia y que sea ella la que tenga que declarar la inconstitucionalidad de este tipo de facultades?

Lo mismo sucede en materia sancionatoria: esta norma es absolutamente regresiva. Se olvida del caso

Muriel, que es el célebre caso que terminó con los edictos de policía. Impidió que desde un organismo administrativo se impusieran sanciones que tienen carácter delictivo, que es una de las grandes garantías de la libertad de las personas. Acá no se ha tenido en cuenta el caso Muriel que, cuando enseñamos derecho, es uno de los casos emblemáticos, uno de los *leading case* como se dice en derecho constitucional.

¿Por qué? Porque efectivamente le está dando a un mero funcionario administrativo, aunque sea de jerarquía, la posibilidad de sancionar a través de tipos penales abiertos, con lo cual se viola también el principio de tipicidad. Ustedes saben que otra de las grandes garantías de la libertad física y de la libertad de la propiedad, si a uno le imponen una multa, es que precisamente, el hecho que se constituya en delito, que este perfectamente definido y no de posibilidad absolutamente de arbitrariedad o discrecionalidad en manos de quien tiene que aplicarlo, haciéndolo por una extensión analógica o porque simplemente no le gusta la cara de aquel al que tiene precisamente que juzgar. Y estamos hablando de juzgar, de un órgano administrativo, lo cual es un verdadero —discúlpenme— disparate.

Estoy convencido de que esta norma no resiste el más simple análisis de constitucionalidad y de convencionalidad. Es una norma que está destinada, igual que la de democratización de la Justicia, a ser rápidamente despedazada por la Justicia como pasó con aquella, en la cual se prometía que íbamos a tener el sistema más democrático de Justicia, que íbamos a votar. Ésa es una verdadera trampa. Acá la trampa es decir que se va a defender a los usuarios cuando en realidad se los va a perjudicar. Y se los va a perjudicar como a todos los argentinos, porque cuando se restringe arbitrariamente la libertad de las personas y cuando se deja en manos de un burócrata de turno la posibilidad de decidir sobre nuestra libertad y sobre nuestros bienes, todos estamos amenazados, no sólo un grupo. Eso es lo que está pasando aquí.

Todavía no se ha dicho que en realidad si se concreta esta iniciativa, absolutamente inconstitucional e “inconvenional”, lo que se estaría violando es el artículo 29 de la Constitución Nacional, que es un artículo muy olvidado. Voy a concluir leyéndolo para que se lo recuerde: “Artículo 29: El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). — Gracias por su brevedad.

Quiero aclarar una decisión del plenario de comisiones, de los señores presidentes de las mismas, dado situaciones que se han producido de representantes

invertidos de carácter de legislador. Por costumbre, aquellos que son diputados nacionales tendrán oportunidad, independiente de la asociación que representen, de debatir y hacer uso de la palabra en la cámara correspondiente. Pido disculpas si algún diputado nacional se ha sentido incómodo pero hemos sido coherentes con todos los diputados que se propusieron para hablar: no hablan en la reunión de senadores.

Tiene la palabra el doctor Carlos Cruz.

Sr. Cruz. – Gracias, señor presidente, gracias por habernos invitado a participar de este encuentro donde vamos a tratar de efectuar algunos aportes no al debate, sino a la comprensión del tema que nos ha convocado para esta reunión.

Quiero anticipar en general mi apoyo crítico a los tres proyectos de ley pero me voy a centralizar en los temas vinculados con las normativas en materia de precios y abastecimiento, reitero, con la idea de poder aportar a la comprensión objetiva de este tema. Desde ya, siempre una primera aclaración, todas las cuestiones vinculadas con políticas legislativas o con políticas judiciales –pronunciamientos judiciales– son cuestiones que implican tomas de posición y decisiones de tipo valorativo o de intereses. Esto es, como bien saben los señores legisladores, las decisiones legislativas. Y, como bien sabemos los abogados y los miembros del Poder Judicial, las decisiones judiciales no son decisiones o toma de posición fuera de contexto: siempre tienen que ver con asumir posturas en defensa de valores o de intereses.

Algunas aclaraciones históricas: si recorremos las normas en materia de legislación económica o de legislación penal económica, hay dos comportamientos que son clásicos y que se remontan por lo pronto al derecho romano, que son las vinculadas con las normas en materia de abastecimiento y precios. Históricamente, los distintos modos de producción han permitido constatar comportamientos a través de los cuales se ha querido acaparar mercaderías, distorsionar las relaciones de consumo o de compraventa, con el fin ulterior de incrementar los precios, muchas veces en forma injustificada. Éste es un tema clásico en todos los libros, tratados y manuales en materia de delincuencia económica.

Así podemos referirnos en esta materia a las disposiciones del digesto romano, precisamente a la ley Julia de Annona, la Ley de Abastecimiento, y podemos pasar por las normas francesas de 1791 y 1793 en este mismo sentido. O sea, siempre hubo en distintas sociedades intervención y regulación en esta materia. Llega la revolución industrial y con ella se desarrolla el modo de producción capitalista o, si queremos decir, el modo de economía de mercado. El gran teórico, la cabeza de la escuela clásica de economía que describe este sistema económico, es Adam Smith.

¿Qué sostiene Adam Smith? Estudia las motivaciones del ser humano y al analizarlas destaca especialmente el principio de egoísmo, el *selfishness* del ser

humano. Esto lo lleva a señalar que el hombre procura fundamentalmente satisfacer sus propias necesidades y sus propios intereses y que a partir de esto va a beneficiar los intereses de los demás. Esto lo expresa en la metáfora de “la mano invisible” en la economía. Dice que hay como una suerte de mano invisible donde cada hombre, queriendo defender sus intereses, termina defendiendo los intereses de los demás. Dentro del sistema capitalista Smith dice que hay que dejar que el hombre actúe en forma libre e independiente porque el mercado, en un sistema de competencia, va a armonizar las relaciones sociales y equilibrar las relaciones económicas.

Eso lo dice Smith en 1776 cuando publica su estudio sobre la naturaleza y el origen de las riquezas de las naciones. 1776, el paradigma de Smith es la economía capitalista, van en torno a la libre competencia.

Sin embargo, cien años después, la experiencia indicó que esa hipótesis optimista de Smith respecto al sistema de economía de mercado no fue tal. El sistema de economía de mercado apunta a la concentración económica y los mecanismos y sistemas de concentración económica generan desequilibrios, desigualdades y crisis.

Me voy a detener, entonces, en la crisis del 30. Es en la crisis del 30 donde el sistema de economía de mercado desarrolla como forma de respuesta a la salida de la crisis el mecanismo de Estado de bienestar. En este contexto está planteado este debate.

Frente a las crisis económicas, el modo de producción capitalista o la economía de mercado, o como la queramos llamar, ha dado tres tipos de respuestas, según la disponibilidad económica y según la forma y el grado de organización de las fuerzas populares: las políticas de ajuste con exclusión, las políticas del fascismo y las políticas del Estado de bienestar. Es en el marco de las políticas del Estado de bienestar que se construye el derecho penal económico o derecho penal administrativo económico de la modernidad, en cuyo marco se inscribe esta legislación que estamos viendo. Es un mecanismo de resolución de conflictos, de armonización de relaciones sociales, de preservación del consumo dentro del sistema de economía de mercado.

¿Cómo ingresan estas normas en la legislación argentina? Estas normas ingresan en la legislación argentina por pedido y sugerencia expresa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La primera ley de monopolio que se dicta en la Argentina es a instancia del Departamento de Estado, que decía que así como en Estados Unidos tenemos esta normativa, la Argentina tiene que tener una normativa similar porque va a ser en el ámbito en el cual van a venir a invertir las empresas de capital norteamericano. Esa matriz es la ley Sherman, la ley Clayton y la Federal Trade Commission, que son tres normas que constituyen la matriz ideológica y normativa de nuestras leyes en materia de abastecimiento. Ahí empieza la intervención normativa en esta materia por parte del Poder Legislativo.

Hay una aclaración que es importante realizar. Hablamos de la ley 20.680 en 1974 como si fuera la primera ley en la materia en la Argentina, lo cual no es así. No sé por qué se soslaya este tema en el debate.

Una breve referencia. La primera ley que podemos tomar como antecedente es la 12.830 de 1946, y especialmente la ley 16.454 que fue impulsada por el gobierno del presidente Illia en el año 1964. Ésta es la matriz en materia de precios y abastecimiento. Esa ley conocida como Ley A, Ley de Abastecimiento, que era muy similar a la ley 20.680, con la diferencia que incluía además graves penas privativas de libertad, más grandes y más graves que las que establece la ley 20.680. Ésa es la matriz a la que tenemos que referirnos. La ley 20.680, como este proyecto que se está analizando, morigeró algunos aspectos de la legislación radical.

Si nosotros vemos a veinte o cuarenta años vistas la experiencia de este tipo de normativas, no se llega a comprender por qué por parte de algunos sectores hay tanta preocupación cuando históricamente la aplicación de estas normas, con cuarenta años de experiencia, no ha generado las graves consecuencias, conclusiones que parecen atemorizarlos. Sí le ha dado al Estado un instrumental de control de las relaciones de consumo.

Acá también hay que hacer una aclaración. Las concepciones económicas modernas y las teorías económicas modernas en el marco de la teoría de la economía de mercado no son las de la década del 90. Hay que actualizar también la lectura.

Las normas actuales en materia de organización y control de la actividad económica impulsadas por Naciones Unidas y por la Comunidad Económica Europea apuntan a la transparencia del mercado, ponen el acento en la responsabilidad de la empresa, ponen el acento en la responsabilidad de los directivos de empresas y están constituyendo la matriz de las nuevas regulaciones y normas a nivel internacional. Este proyecto de ley —por eso digo que es un aporte crítico— en este punto se queda corto.

La propuesta de política legislativa de la Comunidad Económica Europea que podemos tomar como ejemplo, efectivizada hace poco, menos de nueve años, en el Código Penal español, contempla expresamente no sólo las cuestiones atinentes a defensa de la competencia sino de desabastecimiento, después de un largo debate, que retoman los antecedentes de la discusión del proyecto alternativo alemán de criminalidad económica del año 1972. Son viejas discusiones. Penaliza con pena privativa de la libertad a los empresarios que afecten la competencia, los precios y el abastecimiento de la población. Por eso digo que esta ley me parece que se queda corta. En todo caso, quedará reservado para una futura reforma de la legislación penal la incorporación de estos tipos penales tal como forma parte de las propuestas legislativas a nivel internacional.

Para finalizar, dos o tres aclaraciones.

En primer lugar, respecto a las cuestiones constitucionales, cabe referir en línea con lo que decimos que

en la actualidad tampoco se rescatan plenamente los principios y criterios propios de la filosofía o de la teoría de la década del 90, especialmente a partir de la reforma de 1994. Cuando analizamos la Constitución Nacional no sólo es el texto del legislador, del constituyente, sino que por el artículo 75, inciso 22, la incorporación a la misma de los tratados internacionales. Los tratados internacionales que están incorporados a nuestra Constitución, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional de Derechos Humanos señalan expresamente la función social de la propiedad. La propiedad ya no es la propiedad individual, acotada del legislador del siglo XIX, sino la propiedad en función social. Además, la reforma del 94 establece un mandato para el Poder Legislativo. La reforma del 94 le está diciendo al legislador en el artículo 42 que tiene que resguardar a los consumidores, a los usuarios, al mercado, al acceso a bienes y servicios y el control de los monopolios naturales y legales. Me parece que estos proyectos de reforma se encuentran en esa línea.

En lo que respecta puntualmente...

Sr. Presidente (Fuentes). — Su tiempo, por favor.

Sr. Cruz. — Muy breve.

Consideramos que la propuesta de modificación de la ley 20.680 merece algunos ajustes en distintos aspectos que tienen que ver con los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 12, 14, 16 y 17, aportes que procuran una mejor redacción y que fueran oportunamente presentados a las autoridades que están trabajando en el tema.

En síntesis, considero que esta norma se adecua a nuestro marco constitucional, se adecua a las modernas tendencias doctrinarias y jurisprudenciales internacionales, básicamente la normativa de euro delitos que tiene un amplio consenso en la Comunidad Económica Europea. Creo que en esa línea se insertan estos proyectos de reforma.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Fuentes). — Vuelvo a recordar a los señores expositores que, atento el número de oradores inscriptos y por respeto a todos, el tiempo pactado es de diez minutos para cada uno.

A los efectos de no coartar la libertad de expresión, está a disposición la secretaría de esta comisión para recibir por escrito las ponencias que están presentando y hacerlas circular antes del debate del pleno en las oficinas de los señores senadores.

Señor Daniel Moreira, Asociación Pyme...

Doctora Claudia Collado, representante de ADELCO.

Sra. Collado. — Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que desde ADELCO celebramos que exista un paquete de medidas que vayan a apoyar al consumidor. ¿Por qué decimos esto? Porque desde los años 90, 93 y 96 tuvimos un proyecto de menor cuantía que fue aprobado en Senadores y no fue aprobado en Diputados.

Entonces, venimos trabajando desde ADELCO en un proyecto de menor cuantía desde fines de los años 80 y hoy nos dicen que esto es revolucionario, cuando muchos de los que no apoyaron en su momento ese proyecto hoy nos dicen que esto es una novedad. Por lo tanto, tengo aquí nuestro proyecto amarillento esperando que esto ocurra.

De todas maneras, vamos a acercar nuestra postura por escrito porque el tiempo que se nos ha dado es muy breve; y me voy a referir a algunos temas fundamentales o en los cuales tenemos dudas.

Lo primero que tengo para decir es que atar el tema de la defensa de los consumidores a la Ley de Abastecimiento ha sido una estrategia que no nos parece adecuada. ¿Por qué? Porque hace una semana que estamos viendo en los medios el interés de los empresarios y el ojo puesto en la Ley de Abastecimiento y no en el avance que quizá pueda ser la defensa de los consumidores. Y ya ven aquí el interés. Los que hemos estado los días martes y miércoles, habrán visto que esto estaba atestado. Yo llegué y me dijeron que no podía pasar porque había lugar para una sola persona. Se trataba fundamentalmente de oír a los empresarios y de oír sus quejas respecto de la Ley de Abastecimiento. Hoy el interés es otro, y eso habla mucho de lo que somos los argentinos.

Yendo directamente a los proyectos, debo decir que...

Sr. Presidente (Fuentes). – Dado que ha hecho alusión a la metodología acordada, precisamente el método acordado fue una jornada de debate con los funcionarios nacionales, las cámaras y las corporaciones, y otra jornada con los representantes de las asociaciones de consumidores.

Sra. Collado. – Señor presidente: estoy de acuerdo con eso. Me refiero a la falta de interés de las personas. Si vemos los que estamos sentados aquí en relación a lo anterior...

No estoy en contra de la metodología; todo lo contrario.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene poco márketing.

Sra. Collado. – Tenemos poco márketing los consumidores, es así.

Yendo a los proyectos, me llama la atención que se hayan obviado algunos temas como el doble estándar; la educación al consumidor –se necesitan políticas públicas para educar a los consumidores en la Argentina–; la responsabilidad del Estado en muchos casos, sobre todo en la prestación de los servicios públicos; el control social y el fortalecimiento de las organizaciones de los consumidores.

Y, por otro lado, en relación a las empresas, creo que era el momento o la oportunidad de reconocer a algunas empresas el tema de la responsabilidad social, que no se puede regular por ley o, por lo menos, la mayoría de los países no lo hacen. Pero hubiera sido una gran oportunidad porque estamos acostumbrados a que las empresas nos digan que son responsables socialmente

y a que todos los fines de año nos lleguen libros con sus reportes, pero cuando los abrimos nos damos cuenta de que no se trata de empresas responsables, sino de empresas que simplemente hacen filantropía.

Yendo directamente a los proyectos, debo decir que hay algunas cosas que nos gustaría que se modifiquen. Muchas de las cosas se han dicho y las vamos a hacer llegar por escrito. Voy a referirme, por ejemplo, a los artículos 12, 13 y 14 que me parecen muy discutibles. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Comercio debe homologar o rechazar los acuerdos entre el consumidor y las empresas. Y no me estoy refiriendo a esta Secretaría de Comercio, pues estamos hablando de una ley y de los tantos secretarios de Comercio que la tengan que aplicar de aquí en más.

Entonces, estos artículos 12, 13 y 14 por los que la Secretaría de Comercio homologa o rechaza acuerdos, nos lleva a preguntarnos qué pasa si el consumidor está conforme con el acuerdo alcanzado con la empresa con la que tuvo problemas. ¿En ese caso la secretaría puede ir en contra de la decisión de las partes? ¿Cuáles van a ser los criterios cuando las partes insistan en que quieren ese acuerdo a pesar de que la Secretaría de Comercio observe ese acuerdo? Ahí tengo mis dudas de lo que se puede llegar a hacer.

En todo caso, creemos que las observaciones de la Secretaría de Comercio deberían ser facultativas o bien dar una solución a aquellos acuerdos en que el consumidor insiste en que está de acuerdo.

Tengo muchas cosas para decir, pero, en relación a la auditoría no entendemos por qué se baja el límite de salarios mínimos, porque en muchos casos las empresas podrán no acudir a realizar un acuerdo con el consumidor porque les va a convenir llegar a esa instancia de auditoría y poder pagar menos de 55 salarios y no 15 salarios. Seguramente debe haber alguna razón, pero no encontramos la razón de por qué se baja el monto de los salarios.

Por otro lado, para distintos ámbitos, por ejemplo para la resolución del auditor, para las sentencias definitivas y en relación a la modificación del artículo 54 de la ley 24.240, estamos viendo que se debe comunicar a la Secretaría de Comercio para que ésta tome las medidas que conciernen a su competencia. ¿Cuáles son esas medidas? Esto suena a algo discrecional. Y, como digo, esto es una ley para todos los secretarios de Comercio que pasen de aquí en más.

En relación al Tribunal de Defensa de la Competencia, obviamente estamos en desacuerdo. La experiencia en el mundo busca organismos de defensa de la competencia que sean independientes y autónomos, y aquí está sucediendo lo contrario.

Otra de las cosas que quería señalar, pues aquí está ocurriendo lo contrario, es que en la Argentina nos gustaría que esté sucediendo lo que sucede en Brasil.

En Brasil había una Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y se elevó al rango de secretaría, y en Brasil tienen un código de defensa del consumidor.

Aquí en lugar de tener una secretaría de defensa del consumidor como la que teníamos, le hemos bajado el rango a dirección nacional.

Entonces, son contradicciones. Por un lado, queremos proteger a los consumidores, pero por el otro damos señales de que esto no es tan así. Entonces, quisiéramos estar, de alguna manera, viviendo lo que se vivió en Brasil con la elevación del rango y con la discusión de un código de defensa del consumidor.

Con relación al Observatorio de Precios, el proyecto de ley establece sistematización de precios. Ahora pregunto, ¿cuál es la metodología que se va a aplicar para sistematizar precios? Este gobierno puede aplicar una metodología, el que viene otra y el que viene otra de acuerdo a las circunstancias y a la realidad coyuntural del momento. Entonces, queremos saber cuál va a ser la metodología para sistematizar precios.

Y en el mismo proyecto se dice que la Secretaría de Comercio va a elegir a las asociaciones de consumidores que van a integrar el observatorio. Nuevamente nos parece discrecional. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el criterio de la secretaría para designar a las asociaciones de consumidores para conformar el observatorio? Proponemos que esto sea por sorteo entre las organizaciones que están en el registro. De ese modo, vamos a evitar dos cosas: el amiguismo y los acuerdos políticos. De esa manera, vamos a tener la posibilidad de participar y no estar sujetos al amiguismo de siempre, que tanto nos ha perjudicado en la elección de representantes de consumidores en otros organismos.

Debería detenerme muchísimo más en el tema de la Ley de Abastecimiento, pero no lo voy a hacer. Creo que ha sido un error atar la defensa y protección de los derechos del consumidor a una Ley de Abastecimiento, porque el tema se ha diluido. Lo que ha dicho el doctor Sabsay, que me antecedió, es más o menos lo que ADELCO piensa de la Ley de Abastecimiento. Creemos que no es la solución. Y de ninguna manera, con esa Ley de Abastecimiento se asegura la protección y defensa de los consumidores.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias a usted por el respeto por el tiempo acordado.

Doctora Beatriz Buitrago, de Consumidores Argentinos.

Sra. Buitrago. – Gracias por la invitación para poder exponer.

Consumidores Argentinos entiende que los proyectos que hoy se están discutiendo en esta sala favorecen realmente a los consumidores. Y como ya se ha dicho, creemos que estamos ante un hecho histórico, la conformación de tribunales especiales para los consumidores.

No olvidemos que las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor, que justamente en estos momentos se están actualizando –y esperamos que la Argentina cumpla un rol en esa actualización de directrices–, llaman a los Estados a dictar normas

y crear mecanismos para una efectiva protección de los consumidores. En esas directrices se habla de que todos los consumidores deben tener garantizado el acceso a la Justicia.

Actualmente no existe ese acceso. Y este no acceso a la Justicia por parte de los consumidores influye en el comportamiento de los proveedores de bienes y servicios. ¿Por qué digo que influye? Porque, para un proveedor que puede incumplir la ley y que sabe que son remotas las posibilidades de que los consumidores vayan a la Justicia, a veces, los hace tomar decisiones equivocadas. Y cuando hay mecanismos, que hasta el día de hoy existen, en los cuales ellos tampoco tienen la obligación o pueden no ir a una audiencia ante la autoridad de aplicación y no les pasa nada, eso también los puede llevar a tomar decisiones erróneas. Sobre todo si, después de todo este procedimiento, se les aplica una sanción, y esa sanción la puede apelar y no pagar hasta tanto se resuelva en la Justicia. Esto también hace que puedan tomar decisiones erróneas.

Seamos sinceros, hasta el día de hoy, el acceso a la Justicia no existe para los consumidores. Es un verdadero acceso respecto del que los legisladores y el Estado se encuentran en deuda con los consumidores argentinos. Por ello, la sanción de estos proyectos está dirigida, orientada a subsanar esa deuda.

No voy a repetir lo que ya se ha expuesto acá por todos los que me precedieron. Nosotros también integramos ese grupo de organizaciones de las que habló el doctor Boada. Hemos presentado por escrito nuestras observaciones, para enriquecer los proyectos. Pero hay dos cosas que, quizás, no se han dicho y me parece importante resaltarlas. Están ligadas al tema de la posibilidad de evitar interpretaciones erróneas.

Proponemos que, en los artículos 15 y 17, referidos a los acuerdos, y debido a que en ellos sólo se hace referencia a la entrega de copia del acuerdo al proveedor, previo pago de honorarios al conciliador, se diga claramente que las copias serán entregadas siempre al consumidor y de un modo gratuito, sin que quede sujeto a ningún trámite previo.

También nos parece importante resaltar el hecho de que, en el artículo 53, el inciso I debe ser reformulado, porque desmejora la situación de los consumidores con relación a la actual previsión del artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece el procedimiento más abreviado en cada jurisdicción. Ese procedimiento es el sumarísimo, y el de la apelación es al sólo efecto devolutivo. Se presentaría la incongruencia de que, en los juicios por mayores montos, la apelación sería al sólo efecto devolutivo. Y, en este caso, no.

Se propone la siguiente redacción del artículo 53, inciso I: “La apelación se concederá con sólo efecto devolutivo salvo cuando el cumplimiento de la sentencia pudiese ocasionar un perjuicio irreparable, en cuyo caso se otorgará con efecto suspensivo”.

Creo que son muy importantes estos proyectos que se han presentado. Desde nuestra organización, venimos

luchando desde hace muchos años por la defensa de los consumidores y hemos visto que aún falta mucho por hacer. Esperamos que, con estos proyectos, realmente estemos ante políticas públicas de defensa de los consumidores, y que los empresarios finalmente entiendan que hay que respetar las normas y que nosotros, consumidores argentinos, somos tan buenos consumidores como cualquier consumidor de otra parte del mundo, donde se respetan estas mismas normas.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). – Muchas gracias.

Licenciada Inés Bienati, Federación Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo.

Sra. Bienati. – Señor presidente: agradezco la invitación y agradezco, también, a los senadores presentes por estar presentes realmente, porque me parece que esto significa un respeto muy grande a las organizaciones de defensa del consumidor, a los empresarios y a todo aquel que, en este momento, se está manifestando e intentando dar un apoyo o algunas críticas a estos tres proyectos de ley.

El mundo ha cambiado, lo dijeron hace un rato. Obviamente, la economía también. A fines del siglo XIX, en la Argentina había molinos de harina, por ejemplo, en toda la zona del noroeste del Chubut. En los diarios de París se decía que era una de las mejores harinas del mundo. Hoy, uno va por ahí, va por Corrientes, y tampoco están más los molinos de arroz, o hay muy pocos. Es decir, ¿qué ha pasado en todos estos años con toda esa economía local, profunda que, hoy, a lo sumo, es una economía de subsistencia, como pueden ser las huertas familiares? ¿Por qué? ¿Alguien tuvo la culpa? No sé. Quizás, sí. Quizás, no. Pero fundamentalmente fue cómo avanzó esta corporación internacional, o multinacionales que se fueron apropiando –no sólo en nuestro país, en general en muchísimos países– de toda la producción.

Hoy, los grandes molinos son de determinada empresa, las leches son de dos, aunque sean argentinas, no se trata solamente de cuál es su procedencia. Lo que han logrado es que toda esa pequeña industria y producción local y regional vaya desapareciendo.

Nosotros hacemos mucha capacitación. Como habrán oído, lo nuestro es una federación de mutuales, por lo tanto tenemos organizaciones mutuales de Tucumán, del Norte, de Jujuy, del Sur, de Santa Fe, de Entre Ríos, etcétera. Viajamos a esos lugares desde hace años, no de ahora. Esta federación es del año 80 y pico, y en el 97 pasó a ser de Buenos Aires, cambió su jurisdicción. Cuando vamos y hacemos la capacitación, hay dos problemas que desde hace rato son importantísimos. Uno es el transporte; eso no tiene nada que ver con esto, pero es un hecho real y concreto.

El otro tiene que ver, precisamente, con el tema de los precios y de las economías locales y regionales. Estas leyes, que estamos apoyando e, inclusive, ya hemos llegado a enviar algún tipo de sugerencias para algunas modificaciones o aclaraciones, realmente em-

piezan –esto va a durar muchos años– a transformar ese tipo de economías. ¿Esto es una locura de la Argentina, de algunos que se imaginan que hay que hacerlo? No, éste es un proceso que se viene dando en el mundo, y especialmente con mucha fuerza en América latina o Sudamérica, como ustedes quieran llamarla.

¿Qué es lo que está en juego en este momento? ¿Qué queremos, que se vayan los grandes supermercados? No, de ninguna manera porque dan mucho trabajo; son una fuente de trabajo enorme para muchísima gente. ¿Qué queremos, que las multinacionales o las corporaciones desaparezcan? No. Lo que queremos es que se adapten, que acepten que hay leyes en este país, que éste es un país soberano como tantos otros a los que sí respetan, pero que en nuestro caso parecería que no.

Ahora bien, por qué ese miedo, cuando en las directrices de la UNESCO, como se dijo recién, y como en casi todos los países del mundo –y justamente en los del Primer Mundo– todas estas leyes hace rato que existen. Por un lado, todo lo que tiene que ver contra los monopolios en sus distintas variantes no es ningún invento de este momento. Por el contrario, en este proyecto de ley se suavizan montones de situaciones. Y, justamente, por los valores de que se habla, por la importancia de las empresas y demás, no estamos hablando de las pequeñas empresas, de las pymes o de las minipymes. Estamos hablando de aquellas grandes empresas que, por un lado, han aceptado el tema de la responsabilidad social empresarial; pero, por el otro lado, cuando empezamos a ver si esa empresa verdaderamente tiene una situación social, nos damos cuenta de que eso no es así.

Ahora, ¿qué hay que hacer? Nosotros concurríamos muchas veces a los tribunales arbitrales –que fueron creados por una buena ley que quedó en el camino, porque lamentablemente fueron muy pocas las empresas que adhirieron a este sistema– y veíamos que, por ejemplo, las empresas de celulares –ustedes saben que hay como 40 millones de celulares dando vueltas por ahí–, cuando iban a la reunión, primero discutían un poco y hacían alguna chicanita con el hombre o la mujer que pedía un resarcimiento y, posteriormente, aceptaban, porque qué les importaba dar otro celular, o pagar cien o doscientos pesos. Por lo tanto, creo que el énfasis debemos ponerlo en la educación empresarial, así como también tuvimos que hacerlo –y lo seguimos haciendo– con nosotros mismos en cuanto a la educación de las organizaciones, en nuestro caso, de defensa del consumidor. Todos hemos tenido que aprender de los enormes cambios que se están dando y cómo todo esto tiene que favorecer al consumidor. ¿Quiénes son los consumidores? ¿Dos, cinco, veinte personas que están en el gobierno? No, somos todos los consumidores, aun estos señores empresarios que, aparentemente, tendrían tanto miedo o tanto temor de que estas leyes los desfavorezcan. Yo tampoco me olvido de que hace muchos años –mi edad me lo permite– hubo una ley de información para los sindicatos que trajo, más o menos, una polémica parecida. Y ni qué hablar

después de la ley de flexibilización laboral. Como mi pasado es sindical disculpen que tome los dos temas, pero acuérdense qué pasó con esas dos leyes, y ni qué hablar de las críticas que se hicieron, que fueron muy parecidas, lamentablemente, a éstas.

Ésta no es una cuestión partidaria. Estamos apuntando, por primera vez desde hace muchísimos años, a que el Estado tome en sus manos el tema de hacer proyectos a largo plazo. Esto no es algo que se verá dentro de tres meses, o que después de 2015 veremos qué hacemos; no. Tienen que quedar sentadas las bases para una nueva forma de relación. Y lo que me parece una maravilla—esto hay que pensarlo mucho y analizarlo—es que ya no es más abastecimiento; ya no debemos hablar más de esa palabra. Hay que hablar de relación del consumo con la producción, lo cual es fabuloso porque acá no hay enemigos. Ni el consumidor tiene que ser un enemigo para el empresario o para el productor ni el productor para nosotros, los consumidores. Tiene que haber una permanente red de comunicación, y no como hoy que, cuando vamos a los supermercados, en algunos a veces no nos dejan ni mirar los precios, a pesar de que de a poquito esto se va cambiando. Pero la relación tampoco es solamente ver un precio. Ustedes se acordarán de que, por ejemplo, hasta hace poco, el empresario ¿qué fabricaba?: lo que él sabía, lo que él creía o lo que le venía bien. Hoy, el empresario tiene que tener una mirada de qué es lo que quiere la gente, y entonces producir eso. Por ejemplo, eso se da en la moda, por eso se hacen pruebas, por eso hay un montón de gente que se dedica a ese comercio, a lo que sería el marketing, para saber por ejemplo si el olorcito del perfume o del desodorante les gusta a los consumidores.

Estos cambios son muy profundos, y que el Estado esté acompañando y regulando toda esta situación... Creo que hace más de diez años que no se habla de precios máximos; justamente jamás se habló de eso, contrariamente a lo que lamentablemente escuché hace un rato. Acá, de lo que se ha hablado es de precios de referencia para que sepamos nosotros, los consumidores, cuánto puede valer algo, y no que una botella de una gaseosa en Buenos Aires, en la terminal de Retiro por ejemplo—como un caso tremendo—, vale una fortuna, y a lo mejor en un lugar de Mendoza vale la mitad; todo esto ustedes lo tienen que saber. Además, tenemos que ir hacia las provincias, hacia las economías locales y regionales. No está la historia sólo acá, en Buenos Aires, o en el gran Buenos Aires, sino también en nuestro interior, con todo el tema tremendo que tiene en cuanto a los servicios. Ahí también hay empresas de todos los colores: hay empresas privadas grandes, hay empresas del Estado, hay empresas cooperativas. Todo eso tenemos que regularlo, y desde las organizaciones. Esto es lo que nos da la ley. No es que el Estado tiene que hacer todo eso; nos tiene que dar las herramientas, por ejemplo estas leyes, para que seamos las organizaciones las que podamos llevar adelante todas estas políticas que se están proponiendo.

Por otro lado, respecto del observatorio, así como digo que han cambiado las cosas—la economía y la sociedad, entre un montón de cosas—, a lo mejor es para discutir una Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Hoy puede verse mucho mejor si es un observatorio, porque hoy quizás lo más importante es este tema. A lo mejor en otro momento, de acá a equis años, el tema quizás sea otro. Hoy el tema son los precios. ¿Cómo puede ser que en toda América, incluso en Centroamérica, las campañas de los presidentes tengan que ver con los precios? ¿Qué pasó? ¿Todos ahora estamos locos con los precios? No, es que son las mismas multinacionales.

En relación con el fuero, no soy abogada, pero he oído a mis compañeros abogados, desde hace años, pelear por esto, por lo cual me parece fantástico.

En cuanto a la relación entre consumo y producción, quizás sean necesarios algunos cambios; ya hicimos algunas propuestas en el conjunto de observaciones. Pero, en general, eso también defiende al consumidor, porque no hacemos nada con hacer la denuncia si luego, lamentablemente, no pasa nada.

Sr. Presidente (Fuentes).—Tiene la palabra el señor Alberto Morelli.

Sr. Morelli.—Vengo a acercarles la visión de las cadenas de valor de productos de la Argentina, en nombre de las asociaciones de valor de la soja—ACSOJA—, del trigo—Argentrigo—, del girasol—ASAGIR—y el maíz y el sorgo argentino, Maizar.

El proyecto de ley que intenta modificar la conocida como Ley de Abastecimiento, 20.680, por la ley de nueva regulación sobre las relaciones de producción y consumo fue analizado por las instituciones que reúnen a los integrantes de las cadenas de valor de la soja, el trigo, el girasol y el maíz y el sorgo argentino.

El análisis fue realizado desde tres ópticas diferentes: en primer lugar, se examinó el impacto que tendría la ley sobre las actividades productivas y comerciales; en segundo lugar, se estudió el marco legal y regulatorio; y, por último, el debate social y las ideas que intentan instalarse en contra del desarrollo económico.

Para analizar el impacto que tendría sobre las actividades productivas y comerciales que realizan los integrantes de las cadenas de valor de la soja, el trigo, el girasol, el maíz y el sorgo en la Argentina, resulta fundamental repasar ciertas regulaciones que prevé este proyecto de ley con el pretexto de proteger el bienestar de la población, garantizándole sus necesidades básicas o esenciales.

Vemos en este caso el artículo 2º, que fija que la autoridad de aplicación—en este caso, la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, los gobernadores, inclusive el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, ¿qué podrán hacer? Podrán establecer para cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios; podrá disponer la continuidad en la producción, indus-

trialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también la fabricación de determinados productos dentro de los niveles o cuotas mínimas que se establecieron; requerir y secuestrar documentación relativa a la empresa económica sin que medie ninguna disposición judicial.

En su artículo 4º habla de las sanciones; y en el 5º, de las multas que pueden aplicarse, que van de 500 a 10 millones de pesos —este último límite puede inclusive triplicar la ganancia obtenida en la infracción—, la clausura del establecimiento y el decomiso de mercaderías y productos objeto de la infracción.

Señores senadores: la experiencia indica que la normativa que se intenta desarrollar y las facultades que se entregarán al Poder Ejecutivo sólo impactarán limitando las capacidades productivas y comerciales, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social.

En el caso de que este proyecto de ley pasara a recinto, proponemos, así como la ley prevé castigos para quienes inviertan y trabajan para desarrollar un proceso productivo o acciones que indican mala praxis, tal como se aplica en varias profesiones, que existan sanciones para aquellos funcionarios cuyas medidas o decisiones afecten negativamente el normal desarrollo productivo, provocando caídas en la oferta de productos o servicios que pongan en riesgo el normal abastecimiento.

En cuanto al marco legal y regulatorio, la Constitución argentina es bien clara en sus referencias a la libertad de ejercicio de toda industria lícita, y manifiesta que la libertad de comercio es la base de la libertad de trabajo; por lo tanto, esta ley que se intenta impulsar se basa en principios opuestos a la Constitución. Juan Bautista Alberdi, inspirador de la Constitución Nacional y uno de los más grandes pensadores argentinos, en 1853 preveía que en algún momento de la historia el gobernante, entendiendo que genera un beneficio al ciudadano común, podría intentar situarse sobre quienes intentaran desarrollar industrias que generen prosperidad a partir del trabajo, imposibilitando así el desarrollo de distintas actividades productivas creadoras de riqueza. En su libro *Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, según su Constitución de 1853*, escribió: “Son opresoras de la libertad del trabajo y contrarias a la Constitución en este punto, las leyes que prohíben ciertos trabajos moralmente lícitos; las leyes que se introducen a determinar cómo deben ejecutarse tales o cuales trabajos, con intención o pretexto de mejorar los procedimientos industriales...”.

El tercer punto tiene que ver con el debate social. Señores senadores, vemos con gran preocupación cómo en nuestro país se intenta desde distintos ámbitos instalar en la sociedad ideas contrarias al desarrollo económico y social: primero, que el comercio es una actividad negativa que no genera valor, sino que se apropia del valor generado por otros y, por ello, el comercio debe ser limitado y dominado por el Estado; segundo, que la fijación de precios por parte de un funcionario es más

eficiente que la formación de precios en un mercado en transparencia y competencia; y, por último, que aquel que trabaja sabe menos de su actividad que el funcionario y, por lo tanto, el funcionario debe ser quien decida sobre la producción y su destino.

Al analizar la historia reciente del mundo, nos topamos con el nacimiento del milagro económico alemán. En 1948, en tiempos de guerra, el asesor económico Ludwig Erhard convenció a las fuerzas de ocupación estadounidenses, británicas y francesas de no implementar el sistema de control sobre la producción y los precios que tenían planeados, y que, en cambio, se promueva el desarrollo de un mercado que funcione en transparencia y en competencia. En estas condiciones se gestó una era de desarrollo económico que transformó a Alemania, un país devastado después de la guerra, en un país desarrollado económicamente, como lo es en la actualidad.

En contraste, vemos en nuestro país que el espíritu de esta ley de nueva regulación sobre las relaciones de producción y consumo que se intenta implementar contradice los principios antedichos. Nuestro país podría gestar el milagro económico argentino si se evitasen medidas económicas abusivas de este tipo, que no han funcionado jamás en ningún país del mundo, y se brindaran las condiciones económicas necesarias para maximizar la producción y el comercio.

Nuestras asociaciones de cadena siempre estamos dispuestas al diálogo. Consideramos que nuestras acciones generan más producción, más empleo y más divisas para el país, impactando positivamente en los consumidores y la sociedad toda. Por esto, manifestamos nuestro rechazo a este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Fuentes). — Muy amable.

Tiene la palabra el señor Rodrigo Puértolas, de Consumidor en Acción.

Sr. Puértolas. — Gracias, señor presidente.

Voy a ser breve; no voy a tratar de ser breve.

Sr. Presidente (Fuentes). — Le agradezco.

Sr. Puértolas. — Por favor.

En primer lugar, la posición de la asociación que represento, Consumidores en Acción, es de apoyo pleno al proyecto de resolución de conflictos en la órbita de las relaciones de consumo. Creemos que el proyecto es innovador; recepta un montón de las cuestiones que venimos reclamando desde el movimiento “consumerista”.

Han sido bastante claros los colegas preopinantes de las diferentes asociaciones. Es muy positiva la creación del fuero del consumidor. Quienes defendemos intereses de los consumidores desde hace tiempo tanto en la órbita individual como colectiva nos hemos encontrado con una cantidad importante de jueces que todavía consideran las relaciones o los vínculos que se establecen a partir del consumo como vínculos entre pares, con lo cual siguen exigiendo la misma tendencia y la misma prueba, lo que dificulta muchísimo la

actividad de los miembros de las asociaciones y de los letrados que patrocinan a consumidores también de manera individual.

Sí voy a puntualizar dos cuestiones que, entiendo, deberían ser revisadas en el proyecto, sobre todo de manera aclaratoria, algunas de ellas. El doctor Blanco Muíño, que me precedió, estableció claramente que en el artículo 55 deberían hacerse algunas precisiones, tanto por la positiva o por la negativa, en relación con la gratuidad de las acciones derivadas de las relaciones de consumo. Se dan dos cuestiones. En primer lugar, se debe determinar e incluir a las asociaciones de consumidores como legitimadas activas para el desarrollo de las acciones; y, además, alcanzadas por el beneficio de gratuidad. El beneficio de gratuidad ya está establecido en la redacción actual de la Ley de Defensa del Consumidor, pero no se ha aclarado lo suficiente y ha generado divergencias doctrinarias importantes en relación con cuál es el alcance, es decir, si el beneficio de justicia gratuita conforme la ley alcanza únicamente a la tasa de justicia o se extiende también a las costas del juicio. Eso creemos que debe ser aclarado.

Es decir, si el beneficio de justicia gratuita, conforme la ley, alcanza únicamente a la tasa de justicia o se extiende también a las costas del juicio. Eso, consideramos, debe ser aclarado en un sentido amplio alcanzando no solamente la tasa de justicia sino también las costas inherentes al proceso.

En segundo lugar, se debería incluir en el proyecto la posibilidad de que el consumidor tenga un telegrama “consumeril” gratuito. Esto permitiría, además de garantizar la gratuidad que estamos proponiendo defender, evitar determinados conflictos que tal vez con una carta documento y una notificación fehaciente que se le hace al proveedor del servicio, que está incumpliendo algún servicio, ya pasa a un sector diferente de la empresa y no al sector que tal vez fue el culpable del problema que se estaba generando.

De modo que los dejo con estas dos inquietudes. En primer lugar, el alcance de la gratuidad e incluir específicamente a las asociaciones como legitimadas activas y, en segundo lugar, la posibilidad de que el consumidor tenga un telegrama para notificar de manera gratuita sobre el proveedor que está incumpliendo, como sucede en el fuero laboral.

Sr. Presidente (Fuentes). – Muchas gracias, cumplió su promesa.

Tiene la palabra el señor Ricardo Nasio, de Pro-consumer.

Sr. Nasio. – Señor presidente, señores senadores y demás participantes: Proconsumer está investido con el mismo perfil que establece el artículo 57 de la Ley de Defensa del Consumidor y no ha participado en sus veinte años de actividad política partidaria alguna y somos totalmente independientes de toda actividad profesional, industrial o comercial. Venimos acá a poner nuestra posición respecto al plexo de los proyectos presentados.

En primer lugar, creemos que los tres se tienen que sancionar. Si queremos una buena calidad de vida en la Argentina, tenemos que aceptar este proyecto y sancionarlo no solamente a favor de los consumidores sino de la calidad de vida en nuestro país.

Respecto de las relaciones de consumo tengo que establecer que si bien nos confiere legitimación activa a las asociaciones de consumidores en el artículo 51 han obviado el poder accionar judicialmente con los beneficios de litigar sin gasto. En efecto, no solamente se lo han obviado sino también se han confundido, en el proyecto, de expresar en el artículo 55, en donde habla de la gratuidad de las acciones judiciales del usuario y consumidor, de incluirmos. Y al expresar que es gratuita la acción judicial es un defecto que tenemos que subsanar.

En efecto, actualmente, pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya nos ha conferido el derecho de litigar sin gastos hay cuestionamientos. Por eso, sería buenísimo que en esta oportunidad se aclarara la modificación de los artículos 53 y 55 de la Ley de Defensa al Consumidor en su última parte, donde expresa beneficio de justicia gratuita de insertar la expresión “beneficio de litigar sin gastos”. Así lo exigimos, así lo solicitamos y así lo imploramos.

En segundo lugar, queremos recordar que hace más de veinte años las asociaciones de consumidores somos conciliadores por expresa norma del artículo 58 de la Ley de Defensa al Consumidor. En este momento, después de más de veinte años, no nos pueden dejar aparte de los conciliadores del nuevo sistema.

Por eso, solicitamos estar incluidos, no por un capricho, porque podemos detectar muchas infracciones que tenemos que modificar, hay muchos proyectos que queremos presentar. Queremos cambiar el sistema y ahí podemos ver y detectar muchas anomalías en las relaciones de consumo.

Gracias por escucharme.

Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra la señora Carolina Suárez.

Sra. Suárez. – Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes a todos.

Soy representante del Centro de Educación al Consumidor, como asociación civil en defensa de los usuarios y consumidores en estas casi dos décadas. Es para nosotros muy importante estar presentes hoy y debatir algunos aspectos para ser incluidos en este proyecto.

En primer lugar, como decía en relación al proyecto de creación del sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, consideramos que es importante destacar el avance en la creación de un fuero de consumo que haga que los jueces apliquen la normativa ya vigente en esta materia, la cual muchas veces no es tenida en cuenta, es ignorada pese a los veinte años que ya contamos con la ley 24.240.

Con relación a esto hay algunos aspectos que deben ser modificados; entre ellos, el proyecto en su artículo

2º sostiene que es elección del consumidor plantear su causa ante el COPREC o la autoridad instituida por la legislación específica. Este punto parece generar algún tipo de duda en torno a cuál sería la autoridad a la que se hace referencia.

Hay muchos temas que ya fueron mencionados por los que me antecedieron, así que no quiero ser reiterativa y voy a referirme a otros aspectos. Por ejemplo, sería importante incluir la legitimación de las asociaciones de consumidores para iniciar acciones de carácter colectivas.

Asimismo, respecto al daño punitivo, librar a la autonomía judicial su aplicación o no es arbitrario. Para nosotros esta nueva normativa copia el artículo 52 bis de la ley 24.240 al entender que el juez podrá aplicar este daño. Dados los parámetros de aplicación fijados jurisprudencialmente a lo largo de estos años, no tendría excusa para que el mismo no sea aplicado.

Respecto de la gratuidad en el acceso de la Justicia, que establece el artículo 55 y que ya fue mencionado por algunos de mis colegas, en relación a la actuación judicial de consumidores y usuarios, creemos que es importante incluir también la gratuidad de acceso a la Justicia de asociaciones civiles de defensa del consumidor para evitar futuros conflictos o interpretaciones equívocas.

Finalmente, con relación a este proyecto, quiero señalar que el artículo 59 del actual proyecto se sustituye por el artículo 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, el cual versa sobre el daño directo, una modificación en torno al ordenamiento de fondo que desentona con el resto del proyecto al sostener que los organismos de aplicación sólo fijarán indemnizaciones para daños materiales sufridos por el consumidor, lo cual a nuestro entender es menos protector que el artículo 40 vigente, el cual establece que el consumidor tiene derecho a que se le reparen los daños sufridos en su patrimonio, es decir, de tipo material, y así también como personas, hablando de carácter moral.

Con relación a otro de los aspectos está la creación de un fuero de denuncias. Notamos que muchas de las denuncias recibidas por defensa del consumidor no tienen un fácil acceso de la información relativa a qué tipo de reclamo son los que se reciben, cuál es el número de los mismos en cuanto a los casos que se resuelven favorablemente para los consumidores, y en cuántos se aplican sanciones, qué tipo de sanciones, cuántas de ellas se cumplen y cuántas son apeladas por el proveedor.

Por eso, consideramos que contar con esta información permitiría al consumidor no sentirse ajeno al proceso y ser parte de él, controlar su expediente y poder sobre sí, finalmente, conocer la información como usuarios.

Con relación al proyecto de la creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, se nos presenta un interrogante respecto del artículo 2, donde se establece cómo se integra el

observatorio y, entre los integrantes, que habrá tres representantes de asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas y debidamente registradas. Nos gustaría conocer cómo serán elegidos estos representantes de las asociaciones y con qué criterio. Adherimos a la posición de alguna asociación que decía que lo mejor era hacerlo por sorteo.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). – Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Isabel Novosad, de PADEC.

Sra. Novosad. – PADEC es una asociación de consumidores que se dedica a las irregularidades masivas bancarias desde el año 2002.

Vemos sumamente plausible ciertas modificaciones de la Ley de Defensa del Consumidor, que este año cumple 21 años y todavía es muy poco conocida por muchos jueces. Esta oportunidad permite que muchos jueces empiecen a conocerla.

Entendemos que la creación del fuero judicial especial también es sumamente importante, precisamente porque va a permitir la aplicación efectiva de esta ley, que recién ahora empieza a conocerse.

Con relación a la Ley de Abastecimiento y la observación de precios, que ha tenido tanta repercusión en las últimas semanas, me parece que los senadores deberían preguntarse si estamos ante la vigencia de transparencia de los mercados como bien público o si estamos ante la presencia de distorsión de mercados.

El artículo 42 de nuestra Constitución Nacional prohíbe toda distorsión de mercado. Desde el año 1994 tenemos este mandato constitucional y tengo para mí la observación de la falta de transparencia en muchos mercados. Básicamente, entiendo que tenemos una gran opacidad del mercado financiero y esto es una afectación al bien público; y, hasta ahora, no hemos oído a ningún legislador preocuparse.

Es un problema serio acerca del cual la ley del mercado, la denominada “ley del mercado” o “ley del más fuerte”, parece tener mayor potestad normativa que las mismas leyes emitidas por el Estado, que los mismos mandatos de la Constitución.

Me parece que este punto es sumamente delicado, porque, de hecho, sucede que la ley del más fuerte, la ley del mercado, termina imponiéndose por encima de las leyes dictadas por el Congreso y de la Constitución Nacional.

Si hay legisladores que consideren que la ley del mercado es la que debe regir por encima de la ley del Estado, me parece que deberían decirlo en forma expresa, claramente; de ese modo, los ciudadanos vamos a poder saber a qué tipo de poder constituido responden. Hasta donde sabemos, las leyes de mercado no son dictadas por ningún tipo de autoridad constituida en aras de la Constitución Nacional y su contenido tampoco se conoce. Son reglas fluctuantes de la ley del más fuerte, del ojo más fuerte, que termina quedándose con las

mayores partes de apropiación, lo que los economistas suelen denominar “transferencia de un sector a otro”.

La necesidad de robustecer la confianza en las instituciones públicas y privadas, la confianza en las instituciones como bien público para una sociedad basada en la confianza, requiere de reglas claras, donde cada uno sepa a qué atenerse y eso no lo proveen las reglas de mercado, sino las leyes del Estado.

¿Para qué están las leyes del Congreso si no es para cumplirlas? Hace años que está la ley 24.240, desde 1994. Muchas de sus normas no se cumplen espontáneamente y esto, como sabemos, erosiona la confianza en las instituciones democráticas en el Congreso, el Poder Judicial y los mercados.

Parece difícil que alguien pueda afirmar que en la Argentina tenemos mercados transparentes. Para mí, la falta de transparencia de los mercados se agudizó con el ritmo de la informática, que facilitó la contratación masiva de bienes y servicios. Pero este problema ya había sido señalado, destacado y analizado nada menos que hace 65 años en el ámbito del derecho. Lo hizo, en la década del 40 del siglo pasado, el gran civilista, profesor Marco Aurelio Risolia, quien también fue decano de la Facultad de Derecho de la UBA, en su famosa tesis doctoral *Soberanía y crisis del contrato en nuestra legislación civil*, que la editorial Abeledo Perrot editó en el año 1958. La falta de interés de este tema ha significado que no se vuelva a editar el libro, pero está en algunas bibliotecas.

¿Las leyes de mercado tienen, entonces, fuerza normativa como para derogar leyes del Congreso? ¿Las leyes de mercado imponen algún límite a los legisladores como poder constituido en materia de la Constitución Nacional? ¿Cuál es el contenido de las leyes de mercado? Si hoy, a más de 200 años de la Revolución Francesa, tenemos que hacernos estas preguntas, me parece que estamos en serios problemas conceptuales.

Un pequeño grupo económicamente fuerte o poderoso fija precios para el resto. Adviértase que en los últimos años las entidades bancarias, incluso, han incidido en la determinación de precios de muchos bienes y servicios. Vemos ofertas con un 40 por ciento de descuento, un 20 por ciento de descuento con una u otra tarjeta, y una determinada cantidad de cuotas sin interés. ¿Cuál es el precio verdadero? ¿Cuál es el precio real? Ningún comerciante puede decirlo.

Recordemos que el consumo está vinculado a la producción y las fuentes de trabajo. Cien pesos cobrados en forma abusiva a cada usuario en un contrato masivo, donde el grupo es de un millón de usuarios, representa un desplazamiento del derecho de propiedad por cien millones de pesos en un solo mes. Este importe puede representar dos millones de kilos de queso fresco o cuatro millones de kilos de arroz, si se quiere.

Ante estos datos de la economía real, tenemos que pedirles a los legisladores que se pregunten cómo les parece que esto impacta en los mercados de queso, de arroz y sus respectivas fuentes de trabajo en un solo

mes. Esto proyectado a doce meses ofrece un panorama escalofriante. Si le agregamos el multiplicador económico, es alarmante y penoso.

Hace poco, Joaquín Almunia, vicepresidente de la comisión europea a cargo de la política de defensa de la competencia, señaló que la competencia sana y la transparencia son cruciales para que los mercados financieros funcionen adecuadamente al servicio de la economía real y no para los intereses de unos pocos. Esto fue el 4 de diciembre del año 2013, cuando la comisión europea impuso una multa de 1.710 millones de euros a un grupo de bancos por “caracterizar” el mercado financiero, específicamente por manipular la tasa Libor, que es justamente el precio de todos los precios, tanto en el mercado financiero como en los demás mercados.

No sabemos cuál es el concepto de la autonomía de la voluntad de quienes utilizan y están a favor de la ley del más fuerte, pero se advierte que la noción de pacto libre es usada con prescindencia total del significado *consentire, convenire*, ir juntos y conscientes. Autores clásicos del derecho, desde San Agustín hasta Schopenhauer, señalaron que toda la vida consciente está gobernada por la voluntad. Esto lo señala Marco Aurelio Risolia en su tesis doctoral ya mencionada.

Por último, un dato para agregar, una frase del fundador de la economía moderna, nada menos que Adam Smith. Traje el libro por si alguien quiere consultarlo y le parece increíble. Dice así en la página 96: “Nuestros comerciantes y fabricantes se quejan generalmente de los malos efectos de los salarios altos, porque suben el precio y perjudican la venta de su mercancía, tanto en el interior como en el extranjero, pero nada dicen sobre las malas consecuencias de sus beneficios altos. Guardan un silencio profundo por lo que respecta a los efectos perniciosos de sus propios beneficios y sólo se quejan de los ajenos”.

Bueno, además de señalar estos elementos quiero agregar también que el problema de precios ya había sido incluido en el Código de Hammurabi 18 siglos antes de Cristo, es decir, no es nuevo, tiene mucho tiempo y en las últimas décadas se ha agudizado, a mi entender, por la cuestión informática.

Sr. Presidente (Fuentes). – Fueron 21 expositores. Voy a releer la lista a los efectos de que, si a posteriori de la convocatoria algunos de los que estaban anotados han llegado, puedan hacer uso de la palabra.

Doctor Raúl Daniel Aguirre Saravia, de la FACA; Roberto Ratti o Emilio Katz, de APYME; Carlos Palloti; Lazot, Ricardo; Horacio Berstein, Colegio Público de Abogados; Mónica Viviana Santos; Laura Pérez Bustamante.

A continuación hará su exposición Laura Pérez Bustamante, quien sería la última de las expositoras.

Sra. Pérez Bustamante. – Buenas tardes a todos.

Les agradecemos a las autoridades por la invitación y esta convocatoria.

Soy directora del posgrado en derecho del consumidor de la UBA y vengo en representación de diversas entidades, como Taller del Sur, con quienes hemos preparado este proyecto, y con la adhesión de Inducam, SACRA, Unión de Usuarios y Consumidores, DEUCO, Consumidores en Acción, Morecuma, Proconsumer y BIDECO.

Queremos empezar por expresar nuestro agrado por la iniciativa legislativa en materia de consumo. Hoy vamos a hablar específicamente de la ley de acceso de los consumidores a la Justicia.

Lo primero que tenemos que decir es que acompañamos el proyecto oficial, nos parece auspicioso y creemos que podemos realizar algunos aportes para la profundización de las instituciones que este proyecto está proponiendo. En primer lugar, y coincidiendo con anteriores oradores, creemos que no debe haber tope para el acceso a la justicia de consumo. La democratización de la Justicia y el proceso en el que está inserta requiere que todos los que tengan relaciones de consumo puedan acceder a la Justicia. Por eso proponemos la creación de un fuero de consumo de carácter federal con 50 juzgados y 10 salas. ¿Por qué este número? Porque si se estima que el 80 por ciento de las causas comerciales son de consumidores y a eso sumamos las causas civiles, las civiles y comerciales federales y las contencioso administrativas, debemos tener un fuero con suficiente infraestructura para dar una respuesta adecuada y que no se produzca un cuello de botella que nos lleve a los mismos problemas de lentitud que estamos tratando de superar con este proyecto. Además, creemos que es necesario que la justicia de consumo sea para todos los consumidores por una cuestión de seguridad jurídica, lo cual ya también resaltaron los anteriores expositores.

Si tenemos una justicia federal especializada, no podemos limitarnos a la menor cuantía y dejar las mayores libradas a los criterios aleatorios de los jueces con especializaciones distintas en los diferentes fueros que hoy en día entienden en materia de consumo. Se requiere una unidad de criterio basada en la especificidad de la materia del consumidor, en los presupuestos, sobre lo cual también quienes me precedieron en el uso de la palabra recordaron que tienen mucha coincidencia con el derecho laboral.

Es por eso que en este sentido también estamos proponiendo que la justicia de consumo, además de abarcar a todos los consumidores, sea improrrogable. La “improrrogabilidad” es un correlato del orden público de consumo. El proyecto actual no lo contempla. Es importante la previsión.

El tercer aspecto que queremos destacar es que si bien la justicia de consumo debe ser para todos los consumidores, la diversidad de causas de consumo amerita la creación de procedimientos diferenciados. Por eso estamos proponiendo un procedimiento de menor cuantía, muy parecido al del proyecto oficial, pero con más reglamentación, más acabado.

Estamos proponiendo también un procedimiento sumarísimo para las causas generales de consumo y también la profundización de las acciones de incidencia colectiva. Porque como todos sabemos, ha habido mucho progreso y avance en la utilización de esta modalidad de acceso a la Justicia, pero se necesita mayor control y mayor articulación entre los garantes del orden público de consumo. Por eso este proyecto contempla estas particularidades, especialmente la articulación entre el Ministerio Público, la autoridad de aplicación de defensa del consumidor y los jueces. Esto es algo a lo que estamos asistiendo hoy en día, después de los escándalos del año pasado. Pero que esté regulado como obligación normativa creemos que hace a una regulación acabada y no a un mero acto individual. Por eso acompañamos estas ideas, el proyecto original, el que está siendo trabajado, con las modificaciones que proponemos.

Y específicamente proponemos, en primer lugar, que haya asistencia letrada obligatoria para todas las instancias de justicia de consumo, sean las administrativas o las judiciales. Apoyamos la auditoría de consumo. Nos parece una herramienta moderna, apta y necesaria para los conflictos pequeños.

En cuanto a la justicia de consumo, como les decía hace un ratito, creamos una Justicia amplia. Regulamos las facultades de superintendencia, la competencia por materia, los casos especiales de competencias, la competencia exclusiva de los jueces de primera y de segunda instancia, la competencia territorial. Seguidamente tenemos un capítulo sobre normas procesales generales, donde se aplican todos los principios del derecho del consumidor en materia procesal aplicables a todos los procesos de consumo en general, la representación en juicio, el acta poder, la recusación de los jueces, las facultades en materia de sentencias, los incidentes, las medidas cautelares, los honorarios, y algo importante: la gratuidad de las acciones y la exención de gravámenes fiscales. La exención en caso de acuerdo conciliatorio, la asistencia jurídica gratuita, los requisitos de la demanda, los medios de prueba, los expedientes administrativos, el interrogatorio de testigos, la inapelabilidad en razón del monto y la revisión de los actos administrativos.

Seguidamente, en otro capítulo, tratamos los procesos de incidencia colectiva con base en la legislación y regulación vigente. Es decir, el procedimiento sumarísimo que ya rige. Y eximiendo de conciliación y mediación previa a todas las causas que actualmente requieren de pasar por la ley 24.573, sin perjuicio de lo regulado en el título anterior en relación al COPREC, por supuesto.

Por último, regulamos los procesos de menor cuantía, con una regulación bastante similar, aunque un poquito diferente al proyecto oficial, un poco más acabada.

En cuanto a las modificaciones legislativas —y con esto ya voy cerrando— lo que estamos proponiendo es

dejar el 40 bis, el daño directo, tal como se encuentra en la ley vigente.

El proyecto retoma los requisitos de la causa Ángel Estrada, la causa de corte, que es una causa que no es aplicable a las relaciones de consumo en el marco de la Secretaría de Comercio. ¿Por qué? Porque Ángel Estrada pide que los órganos administrativos que aplican daños para los usuarios o los consumidores sean organismos, entre otras cosas, independientes. Ninguna autoridad de aplicación, ni la nacional ni la local, es un organismo independiente. Somos dependientes del Ministerio de Economía. La naturaleza jurídica de un ente regulador, que es descentralizada, es absolutamente distinta a la de la Secretaría de Comercio, sea la nacional o las locales.

En consecuencia, si aplicamos la doctrina Ángel Estrada, ninguna autoridad de aplicación va a poder fijar daño directo, y esto sería bueno que lo entendamos de una vez por todas, porque tanto en este proyecto como en proyectos anteriores, como en la modificación del Código Civil, se insiste con modificar el daño directo y dejarlo de manera tal que sería inaplicable.

Entonces, proponemos la eliminación de la nueva redacción. Además, por otra razón. Porque trata de ceñir los daños –obviamente, siguiendo a Ángel Estrada– a los daños materiales, sin tomar en cuenta que muchas de las afectaciones que sufren los consumidores son a sus derechos personalísimos. Ejemplo: el 8 bis, trato equitativo y digno. Si yo entro a un comercio y me dicen: “¡A vos no te vendo, gorda!” Acá no tengo ningún daño material que me pueda resarcir la Secretaría de Comercio, pero sí tengo un enorme daño moral. Limitado a las cinco canastas básicas que dice la ley, pero entonces no puedo aplicar una doctrina que está pensada para entes reguladores, a la Secretaría de Comercio. Por eso insistimos en la redacción actual del 40 bis en esta ley.

Hasta aquí llegué. Espero haber hecho un uso del tiempo abreviado, porque deben estar todos cansados. Les agradezco mucho y acerco a la Presidencia el proyecto.

Sr. Presidente (Fuentes). – Muchas gracias. Con esta oradora hemos cerrado la lista de los inscriptos. Hemos escuchado en la jornada anterior más de veinte exposiciones, representantes de cámaras y corporaciones, y hoy son veintidós las exposiciones, principalmente de asociaciones de usuarios y consumidores.

Queda abierta la lista al debate de los señores senadores. Tengo anotado al senador Pichetto en primer lugar.

Sr. Pichetto. – Bueno, muy amable. En primer lugar, me parece que hemos concluido un debate realmente interesante, escuchando multiplicidad de voces y de sectores económicos, empresarios que pasaron por el ámbito de estas cuatro comisiones que trataron los tres proyectos de ley.

Indudablemente que de las conclusiones que sacamos hay dos temas que lograron un consenso importan-

te, tanto la creación del fuero especial administrativo y judicial como el observatorio. Creo que no ha habido manifestaciones en contrario. Creo que hay consenso en ambos temas.

Quizás el tema de mayor debate, de mayor contenido y de volumen que hubo, es indudable que fue en la denominada Ley de Abastecimiento.

Nosotros hemos escuchado con mucha atención a todos los exponentes y también las manifestaciones de distintos senadores –los senadores de nuestro bloque y senadores de la oposición–, como también a las entidades que hablaron aquí. Queríamos proponer algunas modificaciones. Lo va a hacer el secretario de Justicia, el doctor Julián Álvarez.

Hemos repartido un borrador. Hay algunos detalles que también vamos a ir corrigiendo sobre la marcha. Y yo le daría la palabra, presidente, si usted no se opone... Estamos haciendo más copias para darle a cada uno de los senadores. Pero si el presidente no se opone, le doy la palabra al doctor Álvarez para que exprese las modificaciones.

Sr. Presidente (Fuentes). – Adelante, doctor Álvarez.

Sr. Secretario de Justicia (Álvarez). – Muchas gracias, presidente; muchas gracias, senador Pichetto.

Conforme anunciaba recién el senador Pichetto, me toca intentar contar algunas modificaciones que estamos incorporando y que estamos circulando en el dictamen, que son producto del debate y de la discusión de estos dos largos días de debate y discusión, donde tuvimos la oportunidad de escuchar, el martes pasado, esencialmente a los empresarios y el día de hoy a los consumidores, a la vez que en ambos días escuchamos distintas referencias de juristas. Y particularmente el debate entre los senadores y los aportes que se pudieron realizar, que la verdad que fue muy rico, muy relevante y creo que van a hacer de los proyectos de ley normas que van a producir lo que queremos lograr, nuestra meta, nuestro objetivo, que es reglamentar el artículo 42 de la Constitución y que los consumidores tengan un sistema de derechos y garantías operativo.

Voy a enunciar las modificaciones según los proyectos de ley. Son tres proyectos de ley. Voy a empezar con el del Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo.

En la reunión del día martes la CAME particularmente manifestó la importancia de no exacerbar la competencia de los tribunales de defensa del consumidor en cuanto a la posibilidad de que un empresario, una pequeña o una mediana empresa tengan la necesidad de contratar un servicio jurídico en todo el país, si el reclamo lo quería hacer en su domicilio.

La verdad que nosotros, conforme fue aportado por los senadores, creemos que el aporte es correcto; que el domicilio del demandado, el domicilio de la citada en garantía y sobre todo el domicilio donde se produjo la relación de consumo –a la que el sujeto pudo acceder

porque llegó a ese lugar-, son suficientes para entablar la jurisdicción.

Por eso, modificamos el artículo 5° y el artículo 50 del Sistema de Resolución de Conflictos de las Relaciones de Consumo, eliminando, suprimiendo el domicilio del consumidor o usuario en ambos artículos. Uno se titula “Normas de procedimiento” y el otro “Juez competente”. El artículo 5° y el 50.

Con relación al artículo 41 –“Creación órganos jurisdiccionales”–, varios senadores plantearon el martes pasado la cuestión de la competencia de la justicia federal. El proyecto de ley enunciaba que intervendrá la justicia federal de primera instancia. Esto generaba efectivamente una confusión de si podía intervenir la justicia federal para todos los casos, y entonces las normas delegadas a las provincias, las normas procesales que son delegadas por la Constitución a las provincias entraban en contradicción con esta interpretación.

Por eso, suprimimos donde decía “por los jueces federales de primera instancia”, e incorporamos lo siguiente: “En el resto del país, para los casos previstos en los incisos b) y c) del artículo 45 se ejercerá por las Cámaras Federales de Apelaciones que correspondan”. Los incisos b) y c) del artículo 45 son los casos donde el auditor del consumo o la Secretaría de Comercio imponen específicamente sanciones. Es decir, sólo cuando la Secretaría de Comercio dispone una sanción determinada se puede ir a la justicia federal y a la Cámara Federal. En absolutamente todos los demás casos interviene la Justicia de cada una de las provincias.

Con relación al Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos Bienes y Servicios, el artículo 2° dice: “El secretario de Comercio convocará a los representantes de los ministerios enunciados en el párrafo primero, cuya intervención estime necesaria de acuerdo a las circunstancias particulares del caso. La convocatoria deberá comprender al menos a un (1) representante ministerial y a un (1) representante de las asociaciones de usuarios y consumidores. La concurrencia de los convocados tendrá carácter obligatorio”.

A pedido también de los senadores incorporamos el siguiente párrafo: “Asimismo invitará a los organismos locales o provinciales, públicos o privados, que por su competencia pudieran resultar interesados”. Esto significa la incorporación, aparte las asociaciones de defensa del consumidor y de los representantes de los distintos ministerios, de los representantes locales para cada una de las situaciones donde se dé la observación de un precio o la disponibilidad de insumos.

Cuando hablamos de “locales o provinciales” está clarísimo y cuando hablamos de “públicos o privados” estamos hablando también de las empresas, que lo solicitó la Cámara Argentina de Comercio y la CAME.

Con relación al tercer proyecto, quizás el más debatido, a la nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, claramente hubo consenso desde el primer día en excluir a las pequeñas y medianas empresas de la aplicación de lo que es esta reformulación

de la Ley de Abastecimiento. Esto lo planteo la CAME, la Cámara Argentina de Comercio, todos los senadores y también nosotros porque creíamos que no aplicaba ya que las pequeñas y medianas empresas no eran formadores de precios. Al respecto, nos contaron una serie de casos donde efectivamente existen medianas empresas que son formadoras de precios. Entonces, esto podía tener una aplicación extensiva y, si no explicitábamos bien la regulación que se le pretendía dar al tema, podía generar los efectos que denunciábamos en el debate.

Por eso, proponemos la incorporación de un párrafo en el artículo 1° que dice lo siguiente: “Quedan exceptuados del régimen establecido en la presente ley...” Les recuerdo que el artículo 1° establece cuál es el ámbito de aplicación de la ley. Dice: “Artículo 1°. –La presente ley regirá con respecto de la compraventa [...] cuando se satisfaga –directa o indirectamente– necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población. El ámbito de aplicación de esta ley comprende todos los procesos económicos relativos a dichos bienes...”

El tercer párrafo que se incorporaría dice lo siguiente: “Quedan exceptuados del régimen establecido en la presente ley los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas, de conformidad con lo previsto en la ley 25.300, siempre que no detenten posición dominante en los términos de los artículos 4° y 5° de la Ley de Defensa de la Competencia”. Dicha ley establece específicamente cuando una unidad económica se encuentra en posición dominante. Reitero, quedan excluidas las pymes siempre que no detenten posición dominante.

El artículo 2° del proyecto de ley específicamente decía: “Artículo 2°. – En relación a todo lo comprendido en el artículo 1°, en caso de ser estrictamente necesario, la autoridad de aplicación podrá...” Y empieza a enunciar inciso por inciso qué es lo que la autoridad de aplicación podrá hacer. También fue un planteo de la Cámara Argentina de Comercio y de los senadores delimitar el ámbito de aplicación, el tipo en el cual se aplicaría, en qué conductas de los empresarios se aplican, porque al decir “de ser estrictamente necesario...” ¿Cuándo es estrictamente necesario?

Entonces, lo que hicimos fue eliminar el párrafo “estrictamente necesario” e incorporar las conductas que establece el artículo 4° de la ley. Entonces, queda redactado de la siguiente forma: “En relación a todo lo comprendido en el artículo 1°, en caso de configurarse alguno de los supuestos previstos –y distinguimos en los incisos a), b), c), d) e), f) y g) porque los incisos h) e i) no hablan de conductas de los empresarios– en el artículo 4°. La autoridad de aplicación podrá...”

Entonces, se suprimió la frase “de ser estrictamente necesario” para decir que solamente podrá aplicarse cuando las empresas realicen las conductas que dice el artículo 4°. Que son las siguientes: inciso a) elevar artificialmente o injustificadamente los precios; inciso b) revaluar existencias; inciso c) acaparar materias

primas o productos; inciso *d*) intermediar o permitir intermediar innecesariamente o crear artificialmente etapas en la distribución y comercialización; inciso *e*) cuando destruyere mercaderías o bienes; inciso *f*) cuando negare o restringiere injustificadamente la venta de bienes; inciso *g*) cuando desviaren o discontinuare el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada. Tipificamos la conducta.

Todas estas modificaciones, como decía recién el senador Pichetto, hacen a un sistema que pueda respetar todas las garantías, la de los consumidores y también la de los empresarios.

Respecto a las modificaciones al artículo 2º, se habla de la discrecionalidad de la administración del Poder Ejecutivo y se enunció en el inciso: “*b*) Dictar normas que rijan la comercialización...” Esto podía significar una delegación normativa a la Secretaría de Comercio. Por eso, se propone una modificación y se incorpora: “Dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización...” Esto es para que quede bien explicitado cuál es el objetivo.

También se propone modificar el artículo 5º que dice: “Quienes incurrieren en actos u omisiones previstos en el artículo 4º, serán pasibles de las siguientes sanciones.” Es decir, quienes hagan las acciones que acabo de enunciar serán susceptibles de las siguientes sanciones, y empieza a enunciar una serie de sanciones. Una sanción era la inhabilitación especial de hasta 5 años para ejercer el comercio y la función pública. La otra sanción, que estaba en el artículo 6º, decía que “En caso de segunda reincidencia podrá llegarse a la clausura definitiva del establecimiento”.

Proponemos reconfigurar este sistema y dejar establecido que, en caso de inhabilitación especial o clausura temporal, la autoridad de aplicación, o sea, la Secretaría de Comercio, para poder efectivizar esa sanción, tendrá que requerir previamente la autorización judicial. Reitero, en caso de clausura temporal o inhabilitación especial –era el ejemplo de hasta 5 años– la Secretaría de Comercio tendrá que pedir previamente autorización judicial para proceder a la inhabilitación especial o a la clausura temporal.

Con relación a la posibilidad que expresaba el artículo 6º, de clausura definitiva por parte de la autoridad de aplicación, proponemos su eliminación, es decir, que no se pueda clausurar nunca definitivamente un establecimiento. Eso era algo que sí tenía la vieja Ley de Abastecimiento y que nosotros estamos derogando. La mayoría de las modificaciones que estamos realizando en este momento son un avance hacia la legislación sobre la que estamos convencidos y hemos jurídicamente razonado. Expresamos que se trata de una ley vigente y que estamos modificando... ¿Senador?

–No se alcanzan a percibir palabras formuladas por un senador fuera de micrófono.

Sr. Álvarez. – ¿De requerir judicialmente?

–No se alcanzan a percibir palabras formuladas por un senador fuera de micrófono.

Sr. Álvarez. – Sí, lo incluimos en el artículo 15 de la ley. Me adelanto y modificamos a pedido del senador Aníbal Fernández, que hizo la aclaración específica que el digesto Jurídico Argentino establecía que la delegación a la autoridad de aplicación no debía hacerse a un órgano específico y determinado sino al Poder Ejecutivo general, sacamos a la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación y pusimos que la autoridad de aplicación será el Poder Ejecutivo.

Por eso el artículo 15 queda redactado de la siguiente forma: “El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente ley en el ámbito nacional con facultades para dictar las normas complementarias que fueran menester para su cumplimiento. Las infracciones a la presente ley afectan los derechos e intereses económicos de los ciudadanos y la Nación. Las que se cometieren en territorio de jurisdicción nacional o cuando afectaren o pudieran afectar el comercio interjurisdiccional serán controladas y juzgadas en sede administrativa por la autoridad de aplicación, a excepción de las sanciones de clausura e inhabilitación especial para ejercer el comercio o la función pública, que serán impuestas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el juez nacional de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal y en las demás jurisdicciones a petición de la autoridad de aplicación por el juez federal correspondiente”.

Quiero destacar que en la ley solamente se permiten clausuras temporales, no clausuras definitivas. Por supuesto, el juez deberá analizar que la autoridad administrativa se sometió al principio de legalidad, analizar la situación en particular y después proceder a convalidar la decisión o a negarla.

El artículo 7º establece la fijación de sanciones, las condiciones para tener en cuenta cuando se fija una sanción. Nosotros hablamos de dos condiciones e incorporamos tres más. Fue planteado por la CAME, por la Cámara Argentina de Comercio y por los senadores que se reincorpore un párrafo que estaba en la anterior Ley de Abastecimiento que nosotros habíamos eliminado, que es lo relativo al capital en giro de la empresa para poder tener verdadera conciencia de cuál es la dimensión económica. Entonces, el inciso *a*) quedaría redactado de la siguiente forma: “La dimensión económica de la empresa, negocio u explotación atendiendo en especial al capital en giro”.

El artículo 12, inciso *e*), decía que la autoridad de aplicación puede clausurar preventivamente hasta tres días los locales en los que se hubiere constatado las infracciones cuando ello fuere indispensable para el mejor curso de la investigación o si existiese riesgo inminente de que continúe cometiendo la infracción. Y que la autoridad de aplicación podía extender esta habilitación por treinta días más. Nosotros proponemos –también fue propuesta de los senadores– la modificación de este último párrafo. Cuando la autoridad de aplicación

quiera extender la inhabilitación por treinta días más también se someta judicialmente. Por eso proponemos el siguiente párrafo: “La autoridad de aplicación podrá solicitar judicialmente la extensión de este plazo hasta un máximo de treinta días”.

De la misma forma que hablamos para la clausura temporal o para la inhabilitación cuando se clausura preventivamente hasta tres días, que sería la única facultad que le queda en términos “clausuratorios” a la autoridad de aplicación, si se quiere extender se tiene que pedir a la autoridad de aplicación.

Como dije recién, el artículo 15. Se elimina la autoridad de aplicación a la Secretaría de Comercio y se incorpora al Poder Ejecutivo.

También incorporamos tres modificaciones más que están los *papers* que se están distribuyendo en este momento. Una es un pedido de la Cámara Argentina de Comercio para reconsiderar la multa. Nosotros consideramos que estaba incorporado porque al incorporarse al régimen de procedimiento administrativo, ese régimen incorpora la reconsideración. Pero la anterior ley lo establecía y nosotros proponemos que se vuelva a establecer para que no quede dudas al respecto, de que en caso de ser interpuesta una multa se podrá interponer por la empresa una reconsideración total o parcial de la multa que se impone al empresario o a la unidad económica, en sede administrativa. El artículo que se incorpora con relación a esto es el 2º *in fine*.

Había otra propuesta de la Cámara Argentina de Comercio que es en caso de que la autoridad de aplicación obligue a la unidad económica a producir un determinado bien o servicio para abastecimiento pero esa producción se haga a pérdida. Incorporamos un artículo para que en el caso de que esa obligación a producir un determinado bien o servicio se haga a pérdida tenga facultad la unidad económica para pedir la compensación por esa pérdida. Es el artículo 2º, inciso c), que decía: La autoridad de aplicación podrá disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios. ¿Qué pasa cuando esa continuidad en la producción se tiene que realizar a pérdida? Entonces, nosotros incorporamos un último párrafo que dice: “La autoridad de aplicación en la disposición de la presente... deberá contemplar que la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios como también en la fabricación de determinados productos resulte económicamente viable. En su defecto, establecerá una justa y oportuna compensación”.

Después hay una serie de planteos con relación sobre todo al observatorio de precios y también a esta ley de regulación de las relaciones de producción y consumo. Los empresarios manifestaron que resultaba inconveniente la posibilidad de difundir el sistema de costos y rentabilidad de las empresas cuando no se necesitaba al efecto de establecer una multa determinada. Entonces, nosotros proponemos incorporar la obligación de infor-

mar a la Secretaría de Comercio, como está redactado en la actualidad, pero también de la obligación para la autoridad de aplicación de no difundir la información que suministran los empresarios, particularmente incluyendo una cláusula de confidencialidad.

Hay otras modificaciones menores. Éstas son las modificaciones generales a los tres proyectos. Estamos convencidos que estas modificaciones hacen a estos proyectos perfectibles, como siempre manifestamos que lo eran. No es lo mismo el envío simple de un proyecto que toda la sociedad debatiendo como se lo hizo en el seno de esta Cámara de Senadores sobre las propuestas que envió el Ejecutivo.

En verdad, creo que se atienden sino a todos a la mayoría de los reclamos y de las observaciones que nos han realizado por escrito después del debate del martes pasado las distintas cámaras y las distintas asociaciones de consumidores. Y, sobre todo, creemos también que es producto del debate que han realizado los senadores y de los aportes que iluminan y echan luz sobre determinadas cuestiones que nosotros, como Poder Ejecutivo, las dábamos como tales y podían dar lugar a distintas interpretaciones.

Así que creo que no tengo ningún artículo más por destacar. Están circulando los distintos dictámenes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos dispuestos a...

Sr. Presidente (Fuentes). – Perdón, senador Pichetto, usted estaba en uso de la palabra. ¿Terminó ya? Tengo anotado al senador Morales.

Sr. Pichetto. – Sí.

Sr. Morales. – Bueno, presidente, la verdad que hay varios cambios que minimizan o disminuyen la arbitrariedad que nosotros venimos planteando.

Sin perjuicio de ello, primero pregunto: ¿La idea es firmar el dictamen ahora? Bueno, nosotros anticipamos que vamos a estar suscribiendo un dictamen mañana. Nos acaba de llegar el borrador, por lo tanto vamos a estudiar las alternativas de cambios y algunos aportes que se han hecho.

Ahora bien, quiero decir que en el proyecto 298, vinculado con el establecimiento de algunos institutos para la defensa de usuarios y consumidores, en general lo compartimos. Deseamos agregar varias exposiciones, especialmente la última que creo que fue la de la representante de la UBA, la cual queremos mirar; y, además, producir algunas modificaciones en el esquema conciliatorio, en el tema del auditor y también en la creación del fuero. Todavía tenemos algunos reparos porque, sin perjuicio de que el último artículo manda a las provincias a establecer cambios en su normativa o a adherir al proyecto de ley, creemos que el concepto de la federalización planteado por la representante de la UBA está bastante más cerca de los reparos que nosotros hacíamos.

Así que vamos a trabajar bastante este tema. Más allá de ello, creemos que el capítulo o la parte vinculada

con estos tres institutos nos resulta positivo. Así que, seguramente haremos algunos cambios. Esto lo vamos a discutir en el bloque, pero nos llevará a tener alguna actitud de votar en general el primer proyecto.

Sin embargo, seguimos discutiendo la cuestión de las atribuciones que se otorgan al Ministerio de Economía, en la órbita de la Secretaría de Comercio, que se mantienen vigentes o al menos no escuchamos que hubiera cambios en cuanto a la modificación a la Ley de Ministerios; y la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, en la cual todavía mantenemos los reparos que teníamos respecto del Tribunal de Defensa de la Competencia. Pero, en general, los tres institutos de defensa de usuarios y consumidores nos parecen un avance. Así que diría que en general acompañaríamos ese proyecto, pero seguramente lo vamos a discutir en el bloque.

En cuanto al observatorio, seguimos en contra. Aun con este cambio que se ha planteado no se resuelven las objeciones que ya habíamos anticipado en la reunión anterior.

Y de este proyecto de ley, así, rápido, me surgen un par de temas que siguen poniéndole discreción al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, que el Poder Ejecutivo determine quién es la autoridad de aplicación, seguro la presidenta va a firmar después un decreto diciendo que es el secretario de Comercio. ¡Así que vamos a estar en la misma! Muchachos, no aporta nada ese cambio. Decimos que estamos ante el marco de una delegación de facultades, y nosotros creemos que hay una extralimitación en el Poder Ejecutivo con tantas facultades que tendrá el secretario de Comercio. Seguramente la presidenta va a firmar ese decreto, por lo que no creemos que resolverá la situación.

Después, mejoran bastante algunas cuestiones.

Me pide una interrupción el senador Pichetto.

Sr. Presidente (Fuentes). – Me distraje. Disculpeme, senador. Adelante.

Sr. Pichetto. – Respecto de la última ley y de las modificaciones propuestas me interesa, senador Morales, remarcar algo. Esta no es una norma abierta, es decir como ha quedado la modificación. Está fundada en la intervención estatal sobre la base de supuestos enunciados claramente en la norma.

Como bien dijo el doctor Julián Álvarez, hay una tipificación de conductas que abre el camino a la intervención del Estado. Si no se cumplen esas conductas, indudablemente no hay posibilidad de poner en marcha la aplicación de la ley. Me parece que ha habido un cambio estructural.

Yo quiero rescatar acá el aporte del senador Urtubey por la provincia de Salta, quien puso este tema en debate y me parece que es central. Tal cual estaba el diseño previo de la norma, era una norma que parecía como si fuera abierta. Sabíamos que nuestro gobierno iba a hacer un ejercicio prudencial de la norma. Pero me parece que como ha quedado redactado está la letra

expresa de la ley, que es la que va a determinar cuándo esta ley se pone en marcha; de lo contrario, no habrá posibilidad de aplicarla.

Creo que en este sentido hay un cambio profundo que ha surgido de esta discusión. Me parece que ustedes, como opositores, deberían tenerlo en cuenta y valorarlo cuando hagan la discusión dentro del bloque.

Sr. Morales. – A través suyo, presidente, le digo al presidente del bloque del Frente para la Victoria que sí lo valoramos, porque la verdad es que debe ser la primera vez que se produce un debate y que en la discusión en el Senado se produzcan cambios tan importantes y con la presencia de los funcionarios. Quiero reivindicar eso.

Han estado los funcionarios y ha habido una actitud en la mayoría de buscar cambios que, como dije al principio, han ido en la dirección que nosotros y también distintas instituciones planteamos, vinculados con los límites de cuáles son los excesos respecto de la arbitrariedad para el Estado.

Me parece que han agregado normas que tienen que ver con sujeción o resoluciones judiciales, como el tema de la clausura, de la inhabilitación especial que ha planteado el secretario de Justicia. Consideramos que esos son aportes. Incluso, el mecanismo de dejar sujeta la aplicación de los términos de la ley a que se cumplan los requisitos del artículo 4°.

Así, a simple vista, porque me acaba de llegar el borrador, quedan algunos temas en el artículo 4°, inciso a), algo que ha sido planteado también recurrentemente acá. Me refiero a donde dice “elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de costos u obtuvieran ganancias abusivas”. Estos siguen siendo temas esenciales que están en manos de la arbitrariedad del Estado o de algún funcionario –la presidenta resolverá quién será la autoridad de aplicación– que diga que acá hubo ganancia abusiva y se aplica toda la ley.

Sin perjuicio de esto, nosotros lo vamos a ver. Incluso, mantienen el tema del pago de la multa en el artículo 17. En efecto, hay un debate sobre el pago de impuesto; pero respecto de la multa para inhabilitar una acción judicial es como una obstrucción de la posibilidad de justicia, y eso va en contra de la Constitución desde nuestro punto de vista. Y esto no se ha modificado.

Por lo tanto, hay algunos puntos que todavía se mantienen y que, a simple vista, nos da para votar en contra del proyecto, sin perjuicio de reconocer que se han hecho avances. En este sentido, la eliminación de las pymes me parece que es muy importante. Asimismo, concentrar este objetivo, que se ha planteado el Poder Ejecutivo en cuanto a las situaciones de posición dominante y de concentraciones de mercado, como es obvio, todos lo compartimos. Además, nosotros decimos que no tiene que haber tanta discrecionalidad, pero este es un asunto para el debate de la Ley de Defensa de la Competencia; porque, aunque no se haya instituido o conformado el Tribunal de Defensa de la Competencia, tiene ese sentido.

En cuanto a lo que ha sido planteado por la señora representante de la UBA, entendemos que tiene que ver con estas cuestiones institucionales. Cuando se determinan cuerpos colegiados es porque se trata de decisiones centrales, esenciales, que no quedan en manos de una persona.

Cuando, desde otro punto de vista, la representante de la UBA planteó el tema de los entes reguladores, en este concepto que se ha desvirtuado... Porque, incluso, la Ley de Reordenamiento del Sistema Ferroviario ha desvirtuado el tema considerando que la Comisión Nacional de Regulación Transporte depende del ministro de Infraestructura. Ahora bien, la Comisión Nacional de Transporte tiene que estar afuera porque debe controlar también al ministro de Infraestructura. Asimismo, tiene que controlar al Estado y a las empresas, porque los entes reguladores tienen que garantizar los derechos de los usuarios y de los consumidores. Es decir que hay allí algunos elementos que siguen siendo materia de nuestra objeción, sin perjuicio de reivindicar el hecho de que aquí se ha producido un debate y que el Poder Ejecutivo ha tomado las sugerencias y realizado las modificaciones propuestas. Entiendo, por lo tanto, que esa es la mejor manera de construir legislación.

Así que, presidente, en síntesis, nos ha llegado recién el borrador. Ahora bien, sin perjuicio de ello, en general, estamos de acuerdo con el primer proyecto y vamos a plantear algunos cambios. Luego, también sin perjuicio de las objeciones que mantenemos en defensa de la competencia y modificación de Ley del Ministerio, estamos en contra del proyecto relativo al observatorio y del de abastecimiento. Sin embargo, reconocemos que se han producido cambios positivos que limitarán arbitrariedades.

Sr. Presidente (Fuentes). – ¿Algún senador más?

Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). – Solamente deseo dejar en claro, más allá de la voluntad de realizar algunas modificaciones que pueden ser interesantes, fundamentalmente en cuanto a...

–El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). – Presidente.

Sr. Presidente (Fuentes). – Adelante.

Sr. Morales. – Discúlpeme señor presidente de la comisión.

Me quedó en el tintero algo que había anotado acá relativo a que en el artículo 2º la autoridad de aplicación, en la disposición de la presente medida, deberá contemplar la continuidad de la producción, industrialización, comercialización, transporte, instrucción o prestación de servicio, como también en la fabricación de determinados productos, resulte económicamente viable. En su defecto, establecerá una justa y oportuna compensación.

En este ítem habrá empresarios que dirán que producen a pérdida y que quieren que se los compense. Este es un tema por el que no quisiera nombrar a algunos muchachos que son bastante... Pero también abre acá a alguna situación.

Sr. Presidente (Fuentes). – Menos mal, porque si no mañana el titular del diario va a ser: “Tanta armonía da asco”.

Sr. Morales. – Yo les comentaba a algunos senadores que este año se van a imprimir 180 mil millones de pesos. Entonces, si se van a emitir esos 180 mil millones de pesos, supongo que con esta norma van a terminar emitiendo más.

Bueno, no sé, está abierto el tema y lo vamos a pensar; pero nos hace surgir este planteo.

Sr. Presidente (Fuentes). – Senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). – Lo expresó muy bien el senador Morales.

Aun así, solamente deseo hablar sobre algunas cuestiones en cuanto a la clausura preventiva. Independiente de que la autoridad de aplicación, la Secretaría de Comercio, o quien resuelva el Ejecutivo, establezca criterios para la clausura preventiva, como ésta tiene naturaleza penal creo que, por más que sea de tres días, no puede un funcionario, por su sola voluntad, avanzar en tal sentido.

Por otra parte, también se pasan por alto algunas cuestiones que fueron preguntadas, por ejemplo, el tema de las ganancias abusivas. ¿Cuándo se consideran ganancias abusivas? Se trata de una cuestión de absoluta discrecionalidad que está en el marco del propio Poder Ejecutivo.

Asimismo, y fundamentalmente, entiendo que desde el punto de vista constitucional, para no ser reiterativo, tanto el doctor Gil Lavedra como el doctor Sabsay han hecho hincapié en la parte modular del proyecto, independientemente de lo que se ha modificado. Por ello, entiendo que atenta contra el propio espíritu de la Constitución, porque una cosa es lo relacionado con el primer proyecto, y me parece muy bien que contemplen la instancia de conciliación obligatoria; la necesidad de dejar en claro la jurisdicción local –porque no estaba muy en claro–; y las observaciones que nosotros podamos formular; ahora bien, en cuanto al criterio de la Ley de Abastecimiento y del observatorio, el núcleo central, independientemente de especificar que no afecta a la micro, pequeña y mediana empresa, en tanto y en cuanto no establezca posición dominante, también queda abierto.

–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). – Está bien, posición dominante puede ser un viejo mercado al por mayor...

—Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Fuentes). — Estimado senador, le pide una aclaración el señor senador Pichetto.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — Sí, cómo no.

Sr. Pichetto. — Está en la Ley de Defensa de la Competencia el significado de posición dominante. Y, en general, es muy excepcional que aparezca en una mediana empresa. Podría darse en algún perfil ligado al laboratorio de algún producto específico, es decir, un mercado indudablemente muy preciso donde puede haber, por parte de una mediana, dominio de mercado. Es bastante excepcional.

Esto se da, en reglas generales, en los que fijan cadena de valor arriba. Lo dejamos como una excepcionalidad porque puede aparecer, pero la verdad es que esa posibilidad es muy minoritaria.

Sr. Presidente (Petcoff Naidenoff). — Para terminar: minoritaria, pero independientemente de esos aportes, los ejes centrales de los aspectos por los que esta ley puede no tener mucho futuro, desde el punto de vista o ante un planteo jurisdiccional, se mantienen firmes.

Solamente quise aclarar eso.

Sr. Presidente (Fuentes). — Gracias.

Tiene la palabra la señora senadora Higonet.

Sra. Higonet. — Señor presidente, gracias.

Simplemente, quiero agradecer mucho y en forma sincera a las autoridades del Ejecutivo que han estado presentes escuchando todo el debate durante los dos días; asimismo, la participación de todas las entidades: de las asociaciones, de las empresas y de los industriales que nos han permitido escuchar todas y cada una de las posturas. Pero, fundamentalmente, deseo agradecer que hayan sido consideradas las observaciones que nos han hecho.

En ese sentido, estoy realmente muy satisfecha con las modificaciones, porque uno de los grandes pedidos que tenía desde mi provincia era la exclusión de las pymes. Entonces creo que voy a poder notificar con mucha alegría que el planteo ha sido escuchado, escrito, y claramente expresado, como así también ha sucedido con todas las otras modificaciones. Entonces, reitero, quiero expresar mi total agradecimiento y consideración.

Por otro lado, deseo decirle al senador Morales que no es la primera vez que luego de un debate se realizan modificaciones. Tengo presente algo que sucedió hace muy poquito tiempo: la ley de previsión jubilatoria que también se modificó. En efecto, se modificó lo relativo a las cuotas, porque ustedes habían dicho que no estaba previsto. Entonces, siempre, de alguna manera, escuchamos, aunque usted siempre dice que es la primera vez.

Así que, muchas gracias.

Sr. Presidente (Fuentes). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. — Señor presidente, gracias.

También deseo manifestarme a fin de agradecer desde el Interbloque Frente Amplio UNEN, la presencia de los funcionarios en estas dos jornadas intensas que se han tenido con la participación de las asociaciones de usuarios y de los sectores empresariales. Participación que ha enriquecido el debate y que, de alguna manera, ha sido tomada en algunos aspectos a fin de realizar la modificación de los proyectos del Poder Ejecutivo nacional.

En cuanto a lo que dijimos la semana pasada, nosotros vemos como un avance el expediente 298, que crea el fuero de los consumidores, un largo reclamo de las asociaciones de consumidores de la República Argentina, los mecanismos de conciliación planteados. Tenemos algunos aportes en particular, que hicimos, referidos a algunas modificaciones. Algunos fueron tomados, otros no. En términos generales, nos parece que esta ley es un avance y la vamos a acompañar.

Respecto de los otros dos proyectos, el del observatorio y el de la Ley de Abastecimiento, desde la mirada que tenemos en el Frente Amplio UNEN, creemos en la intervención del Estado, creemos que el Estado ha demostrado la necesidad de regular los términos económicos. La desregulación absoluta ha sido en las tres décadas del neoliberalismo ha sido una de las causantes de mayores desigualdades e injusticias, y de mayor concentración económica en pocas manos, en desmedro de las mayorías, en el mundo y en los distintos países.

Creemos que esta herramienta que se está proponiendo parte de un diagnóstico equivocado. No estamos de acuerdo con este remedio para el mal —que compartimos, en este momento— del estado económico del país, que es un estancamiento de la economía y una inflación que se mantiene por encima del 30 por ciento, es decir, en niveles muy importantes. Creemos que los términos virtuosos de la economía que significaron el superávit fiscal y superávit comercial, que se han perdido, y el dólar competitivo son los términos que hay que recuperar. Y no es esta la herramienta adecuada. Nuestra disidencia está dirigida, desde el punto de vista económico, al planteo que se hace hoy para abordar una situación complicada de la economía nacional.

Por estos conceptos generales y los que vamos a abundar en el debate parlamentario, la semana que viene, cuando lo tratemos en el recinto, adelantamos la posición del interbloque del Frente Amplio UNEN.

Gracias por su presencia. Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Fuentes). — ¿Alguien más? Agradeciendo la presencia de las distintas instituciones que expusieron, invitamos a los senadores a acompañar con la firma los tres dictámenes de mayoría que están a su disposición.

—Son las 18 y 3.

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DI PERNA

**Sistema de Resolución de Conflictos
en las Relaciones de Consumo
(O.D. N° 325/14)
Observatorio de Precios y Disponibilidad
de Insumos, Bienes y Servicios
(O.D. N° 326/14)
Regulación de las relaciones
de producción y consumo
(O.D. N° 327/14)**

Señor presidente:

Estos proyectos de ley fueron presentados por el Poder Ejecutivo nacional y tienen como base la aplicación estricta del artículo 42 de nuestra Constitución Nacional; a los fines de establecer y determinar un marco regulatorio específico mediante el cual se proteja y se defiendan los derechos de los consumidores y usuarios. Según la letra de la ley se señala que los mismos tendrán derecho en su relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, a la educación para el consumo y a la defensa de la competencia y al control de los monopolios naturales, entre otras cosas.

Por lo cual, en este contexto legislativo, el Estado se transforma en un “administrador” de un poder que fue delegado por voluntad popular, cuya finalidad debe ser la consolidación, garantía del bienestar general y propiciar la defensa del bien común.

Pero creo firmemente que para lograr un Estado de derecho consolidado, la intervención y el rol para esta consolidación es esencial; pero con límites que deben ser respetados “siempre”. Por ese motivo considero que la intervención del Estado en el funcionamiento del sistema económico, muchas veces puede ocasionar un efecto absolutamente negativo para el sistema de incentivos, al igual que para la generación de inversiones y empleo. Es verdad que uno de los fundamentos expresados por el Ejecutivo nacional y en el marco de este cuerpo de proyectos es “controlar” a aquellos grupos de producción concentrados que se apropian de parte del excedente de la riqueza, ocasionando el funcionamiento inapropiado en las cadenas de producción con tendencia a una concentración y a la formación de precios en detrimento del eslabón más débil de la cadena, como son los consumidores, usuarios o un pequeño o un mediano empresario o productor que no puede desarrollar libremente el comercio.

Pero también es verdad que el control sobre el funcionamiento de los monopolios en nuestro actual contexto económico puede resultar poco afortunado a largo plazo, incluso cuando existan problemas en la provisión de bienes y servicios.

En este proceso de intervención que persigue este proyecto, se destacan algunas cuestiones que me gustaría resaltar. La primera de ellas se basa en las manifestaciones efectuadas por el doctor Sabsay, quien expresó acertadamente que esta modificación a la Ley de Abastecimiento se realiza mediante una delegación legislativa que es contraria al artículo 76 de nuestra Constitución, ya que se mantiene en el Congreso nacional la facultad de declarar la emergencia de abastecimiento; violentando también el principio de la división de poderes esencial en un Estado de derecho.

Ahora bien, entrando en el análisis específico de los artículos, otra cuestión que quiero destacar se basa en la exclusión de sanciones de tipo penal al sustituirlas con la implementación de sanciones de carácter pecuniario, al igual que el incremento del monto de las multas; disponiendo el carácter administrativo para evitar el régimen en materia penal. Comparto los criterios de la doctrina vigente, al sostener que estas multas también serán de naturaleza penal, ya que la única diferencia que existe entre este tipo de sanciones es su carácter cuantitativo. No obstante, y aún de considerarse que es materia sancionatoria administrativa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los principios y garantías del derecho penal son enteramente aplicables en materia de sanciones administrativas. Por lo cual no existiría diferencia entre una multa y una pena de prisión para considerar que una es parte del derecho penal y la otra del administrativo. Asimismo critico enfáticamente que la enunciación de las sanciones previstas en este proyecto sea muy genérica y no taxativa, ya que cuando hablamos de facultades intervencionistas del gobierno de turno, sabemos que cuanto mayor generalidad exista, mayor será su facultad disciplinaria.

Con respecto al procedimiento específico que se establece para la aplicación de estas sanciones que funcionará en sede administrativa, en el proyecto se prevé que las pruebas se van a admitir solamente en caso de existir “hechos controvertidos” y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Considero que esta disposición no es clara y podría permitir algún tipo de arbitrariedad en el proceso sancionatorio por parte de quien determine la autoridad de aplicación; ocasionando una grave violación al derecho de defensa en juicio.

Sobre la revisión judicial de las sanciones impuestas por el Poder Ejecutivo nacional ante la Cámara de Apelaciones en lo Federal; se exige para esta alternativa recursiva el principio *solve et repete*, o sea el pago previo de la multa en sede administrativa. Manifiesto que este principio viene a vulnerar no sólo la defensa en juicio que ya he mencionado, en el sentido de restringir la garantía de la doble instancia, puesto que se obliga al sujeto a cumplir la pena antes de que su sentencia sea revisada por un tribunal. Menciono que si bien la Corte ha entendido que era “legítimo” exigir el pago de la multa antes de la revisión judicial, también es cierto que lo permite en la medida en que no represente un

gasto imposible de afrontar por la persona, situación que no fue prevista en este proyecto. De todos modos, la constitucionalidad de la obligación del pago previo al recurso es sumamente cuestionable, sin dejar de manifestar que rige en nuestro derecho el principio de inocencia hasta tanto una sentencia diga lo contrario.

Con respecto a las mercaderías que pueden ser vendidas, locadas o consignadas y su vulneración en el articulado al derecho a la propiedad privada, considero que el artículo 14 resultaría ser inconstitucional, ya que no podemos prescindir legislativamente de la expropiación. De no mediar la misma, la única forma que tiene el Estado para disponer de los bienes de un privado será sólo a través de una sentencia judicial, cuestión que no fue prevista por este proyecto de ley. Les recuerdo a los señores senadores presentes que nuestra Constitución prevé que “la propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada... y la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino...”.

Me manifiesto a favor de las modificaciones efectuadas en el proyecto de ley original, ya que considero que mantener a la “clausura definitiva” como una facultad y atribución disciplinaria de los funcionarios actuantes, hubiera significado continuar violentando el derecho a la propiedad privada. Y siguiendo este argumento, aplaudo la exclusión en este proyecto de ley de los agentes económicos considerados como micro, pequeñas o medianas empresas –mipymes–, aclarando que esta excepción será de tal carácter siempre y cuando “no” detenten una posición dominante en los términos de la Ley de Defensa de la Competencia. Resulta beneficioso y esperanzador que el oficialismo no transforme el tratamiento de estos proyectos legislativos en un mero trámite, desconociendo como ha hecho hasta el momento, de todas las voces; incluidas las de la oposición, que en reiteradas oportunidades se han manifestado en contra de iniciativas que solo buscan incrementar el poder del gobierno de turno. Afortunadamente, luego de las declaraciones efectuadas por diversas asociaciones que defienden a pequeños y medianos productores, el Poder Ejecutivo accedió a limitar sus facultades a “quienes resulten obligados por la aplicación de esta ley y que estimen que a consecuencia de ello sufrirán irreparables perjuicios económicos, pudiendo solicitar la revisión de las medidas que los afecten. Al igual que la autoridad de aplicación deberá contemplar que la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, resulte económicamente viable; o en su defecto establecerá una justa y oportuna compensación”.

En cuanto a la eliminación de la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación, no debo obviar que si bien fue eliminada, esto no significa garantía

alguna para que esta discrecionalidad llegue a su fin. Como sabemos, quien tiene la facultad para determinar por vía reglamentaria quien será el órgano encargado de llevar a cabo el cumplimiento de esta ley es la autoridad de aplicación. O sea que no es más que el mismo Poder Ejecutivo detentando nuevamente esta facultad regulatoria a su favor.

Y más aún cuando nuestro Congreso ya sancionó la Ley de Defensa de la Competencia que facilita herramientas para poder luchar contra los monopolios, las corporaciones y las concentraciones mediante la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, Tribunal que hasta la actualidad y luego de 15 años nunca se constituyó.

Para finalizar mi exposición, quiero colocar esta iniciativa en contexto, lo cual me parece imprescindible para fundar mi voto. Argentina, en estos últimos años, ha presentado significativos desequilibrios macroeconómicos y sociales, como ser, inflación creciente, caída de la calidad y cantidad de empleo, suspensiones y paralización de actividades dentro del sector industria, aumento de la pobreza, retracción del consumo, saldo comercial negativo, fuerte caída de las reservas del Banco Central, y una notable falta de ingreso de inversiones.

Todo esto sumado a la pérdida de credibilidad en las instituciones, como ser el INDEC, y de confianza en los actores económicos.

Por ello estoy convencida de que este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, no resolverá ninguna de estas problemáticas mencionadas, sino muy por el contrario, las agravará e impactará fuertemente en el desarrollo económico y social del país.

Por todo lo dicho es que no puedo acompañar esta iniciativa, y mi voto será negativo.

14

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MANSILLA

**Sistema de Resolución de Conflictos
en las Relaciones de Consumo
(O.D. N° 325/14)**

**Observatorio de Precios y Disponibilidad
de Insumos, Bienes y Servicios
(O.D. N° 326/14)**

**Regulación de las relaciones
de producción y consumo
(O.D. N° 327/14)**

Señor presidente:

Con esta iniciativa del Ejecutivo surge claramente la presencia del Estado nacional para asegurar la libertad económica de los agentes privados y la necesidad creciente de un sistema keynesiano en la economía frente al abuso de los grupos económicos inescrupulosos con posiciones dominantes, que buscan obtener pingües ganancias sin tener en cuenta los factores sociales que

intervienen en la sociedad plena vista con visión global integradora del elemento humano como eje fundamental de cualquier ciudadanía organizada.

Como se deja ver es vital la participación de uno de los factores que intervienen en la producción representado en la familia, en la gente, es ahí es donde se hace imprescindible que la participación del mismo no sea lesionado, no esté en desventaja, no sea asimétrico respecto de sus pares. Como forma de igualar entre los iguales, de manera de emprender senderos de crecimiento económico pero sin dejar inequidades, es fundamental el respeto de la Constitución Nacional y el andamiaje legal que asegurará un futuro para las generaciones venideras de jóvenes y ancianos, igualdad de oportunidades y principios básicos de funcionamiento del mercado para poder asegurar una distribución justa de la riqueza.

Destaco la labor incansable de la presidenta que se pone al frente de la labor y que lidera articulando los poderes para poder dar facultades de contralor y de árbitro, a un Estado que funciona, que no se da respiro y que trabaja incansablemente para poder dar a sus conciudadanos marco normativo y herramientas que bien empuñadas, dará solución rápida y eficaz de las disputas, evitará privilegios de sectores, dinamizará el comercio, garantizará la excedencia del consumidor y tratamiento adecuado a los excesos observados de público conocimiento.

En los países más desarrollados pueden apreciarse que las prácticas deshonestas, las actitudes discrecionales y los hábitos tendientes a apropiarse o adueñarse por parte de los oferentes de los derechos de los consumidores son punibles e inmediatamente separados mediante mecanismos legales que contribuyen a asegurar la justicia social evitando excesos, que contribuyen directamente a incrementar la inversión y el espacio en el mercado para empresas serias, capitales responsables y objetivos mancomunados que persigan elevar la calidad de vida y bienestar general.

La Argentina ha firmado convenios internacionales de comercio y tratados de derechos humanos en diversos ámbitos y en distintas circunstancias, estos proyectos colaboran, elevan y refrendan los mismos con fuerza de ley, asegurando el respaldo del Congreso de la Nación para que perdure, para que no decaiga, dando un encendido compromiso y mensaje, para todas las personas de bien.

Por lo expuesto doy mi voto afirmativo y apoyo en todos los términos estos proyectos de ley.

15

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU

**Proyecto de ley de reestructuración de la deuda
2005-2010 y el pago soberano local
(O.D.- N° 328/14)**

Señor presidente:

Los problemas de endeudamiento argentino tienen una historia signada por el padecimiento de gran parte

de la población, la que sufrió los cambios operados en la economía, apertura, desregulación y ajustes implementados bajo el mensaje de políticas de salvación frente a las vicisitudes que la deuda pública ocasionaba.

Llegar al juicio fue producto y consecuencia de esa historia y, para comprender los efectos económicos que conlleva el fallo pronunciado por el juez Griesa para la sociedad argentina y, a la vez para los tenedores de bonos de cambio y del sistema financiero internacional, solo sería necesario repasar como se generó esa deuda, y como se llegó a su inevitable reestructuración, la cual no hace falta repetir, ya que es un tema que ha sido debatido y conocido por todos, puesto que en los últimos tiempos tomó notoriedad el fenómeno de los fondos buitres a raíz del juicio que está enfrentando la República Argentina por las acciones legales iniciadas por esos actores financieros. Asimismo, es de público conocimiento que el fallo del juez Griesa fue a favor de los fondos buitres.

El proyecto que se presenta propone declarar de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en los años 2005 y 2010, así como también, el pago en condiciones justas y equitativas al ciento por ciento de los tenedores de títulos; situación esta que lograría que una vez aprobado no se darian mejores condiciones que las que incluye esta propuesta de ley, que es la cláusula *pari passu*, la que se encuentra en todo acuerdo sobre emisión de deuda pública y que se traduce como igualdad de rango o trato igualitario, en referencia a los derechos legales o de pago. El Estado no puede clasificar una deuda en un nivel inferior a otra ni cambiar unilateralmente esta condición.

Autorizar al Ministerio de Economía a remover al agente fiduciario que, en este caso, es el Banco de Nueva York para salir de un *default* selectivo en el que cayó por el bloque judicial de los fondos, es insuficiente.

El mecanismo puede permitir que algunos de los acreedores de los bonos canjeados en 2005 y 2010, puedan sortear el cerrojo impuesto al país por la Justicia de los Estados Unidos al bloquear fondos de pago en el agente fiduciario oficial, el Bank of de New York – BONY–; si se aprueba este proyecto algunos podrían cobrar, pero no todos, y esto no saca al país del *default* e, incluso, lo aleja más de los mercados.

Señor presidente, el camino ahora empantanado lo ha iniciado el gobierno prescindiendo de este Senado, como ha prescindiendo en otras tantas negociaciones, vedando el acceso a los acuerdos con el Club de París, a las concesiones sobre Vaca Muerta y, ahora cuando se encuentran en una encerrona, remiten este proyecto de forma innecesaria ya que el Ejecutivo puede y debe llevar adelante las reestructuraciones necesarias.

Adhiero a las propuestas y observaciones efectuadas por el miembro informante de la Unión Cívica Radical.

16

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO

**Proyecto de ley de reestructuración de la deuda
2005-2010 y el pago soberano local
(O.D.- N° 328/14)**

Señor presidente:

Antes de avanzar con esta alocución, quiero adelantar que mi voto será favorable al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional para declarar de interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010 y el pago soberano local que comprenda al cien por ciento de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.

Primeramente, considero que la situación que hoy nos convoca, sale de cualquier parámetro normal de una negociación financiera, de sentencias judiciales y del sentido común.

Pero, más grave es la invasión a nuestra soberanía para administrar nuestras cuentas públicas. Esta pretensa decisión judicial avasalla nuestra soberanía nacional, intenta agobiar las cuentas públicas de la Argentina, amenaza un supuesto *default* orquestado por los fondos buitres en connivencia con el juez del distrito sur de la ciudad de Nueva York y con la convalidación de los Estados Unidos.

Lo que pretenden es lograr poner de rodillas a nuestro país para poder continuar con el saqueo de nuestras riquezas que solamente tuvo un freno a partir de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández.

El Estado nacional ha venido pagando desde la primera etapa de la presidencia de Néstor Kirchner todos sus compromisos internacionales conforme los fue resolviendo.

Y es más, los ha pagado por medio del crecimiento del país y la prosperidad del pueblo argentino. Porque nadie puede decirme que los habitantes de nuestro país están en peores condiciones que en el año 2003.

Ciertamente esta situación nos ha llevado a tener que enfrentar una sentencia judicial de un juez norteamericano que pretende, en forma determinada, llevar a nuestro país a una cesación de pagos con todos los bonistas que se acogieron a las renegociaciones de los años 2005 y 2010, que como sabemos ascienden al 92,6 por ciento de la deuda entrada en *default* por un presidente efímero y millonario en el año 2001.

Estos condicionantes han modificado la estrategia de desendeudamiento de la Argentina. Pero no han logrado modificar la política de Estado desarrollada por este gobierno, puesto que nuestro país reafirma la voluntad, facultad y capacidad de pago de la deuda reestructurada.

Ante esta realidad, el Poder Ejecutivo nos ha acercado la herramienta para sortear el cerrojo judicial que pretende afianzar este juzgado americano.

El proyecto que hoy tratamos propicia la implementación de distintos instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes ya no al 92,6 por ciento de los tenedores de bonos que ingresaron al canje 2005/2010. Sino que implementa una salida para el 100 por ciento de los tenedores de bonos “*defaulteados*” en 2001 y aún no ingresaron en la reestructuración de la deuda pública argentina.

Señor presidente, no vamos a poner al pueblo argentino como esclavo de los capitales especulativos y naciones abusivas que pretenden el hambre del pueblo y el saqueo de nuestros recursos naturales.

Esta es la lucha que hoy enfrentamos con el exterior, ahora no podemos luchar entre hermanos. Esta es la solución conducente para no entregar el país y caer ante la extorsión de los fondos buitres.

La mezquindad de pequeños sectores no puede contagiar al resto, cuando el futuro de nuestros recursos y la seguridad social de nuestros compatriotas están puestos en la mesa de los grandes especuladores externos. Sólo los grupos de privilegio pueden mantenerse al margen o fogonear los espurios intereses de quienes desde afuera pretenden ponernos de rodillas.

Senadores y senadoras, no permitamos que se hipoteque el futuro de nuestros hijos, nuestro país tiene que seguir creciendo y la región también, pero por fuera de la tutela extranjera.

En este momento, más que nunca, debemos mantenernos unidos, solidarios y generosos, porque en este momento sí está en juego la patria y el único modo de salir adelante es la unión de todos los argentinos.

Y no nos olvidemos que Néstor Kirchner nos hizo recuperar el respeto a nosotros mismos y se sentó a negociar sobre la base de condiciones justas, equitativas, legales y sustentables, que son las que se pretenden continuar a partir de la sanción del presente proyecto de ley.

Por ello, señor presidente, reitero mi voto afirmativo para acompañar la aprobación de esta iniciativa.

17

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO

**Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo
(O.D. N° 325/14)
Observatorio de Precios y Disponibilidad
de Insumos, Bienes y Servicios
(O.D. N° 326/14)**

Señor presidente:

Como es mi costumbre, señalo de antemano mi posición favorable en cuanto a los tres proyectos de ley

traídos a consideración en esta sesión, dejando asentado que mi voto es afirmativo para los tres proyectos.

Por lo cual, deseo expresar las convicciones que me llevan al voto positivo. Estamos reglamentando el artículo 42 de la Constitución. La legislación que se está proponiendo le permitirá al gobierno cumplir con este mandato constitucional, estableciendo procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Por tanto, el rol del Estado, el funcionamiento de la cadena de valor y la manda constitucional son los tres elementos en que se sustentan estos tres proyectos de ley.

Me parece importante regular el funcionamiento de las cadenas de valor en la República Argentina y las disputas por la apropiación de los excedentes de dicha cadena.

Se observa que en nuestro país existe un funcionamiento inadecuado de las cadenas de valor que tienden a generar injusticias en la apropiación del excedente por parte de grupos concentrados, respecto de los eslabones más débiles de la cadena, y eso se observa objetiva y claramente. Y esta circunstancia, genera un funcionamiento inapropiado de las cadenas de producción con tendencia a una concentración, a su vez se promueve formación de precios, y esa formación de precios no solamente perjudica a los dos extremos de la cadena sino que perjudica el proceso de formación de precio.

O sea, si hay un grupo concentrado de la economía que genera un proceso de intervención unilateral en la formación de precios tiene doble efecto. Primero, reduce el poder adquisitivo del consumidor con su mayor precio y, en segundo lugar, disminuye el sistema de compensación del precio del productor con menor precio. Entonces, existe una cadena de intermediación que tiende a la concentración y que, a su vez, perjudica las dos puntas del eslabón de la cadena. Y si en ese sentido no existe capacidad regulatoria del Estado, finalmente tendemos a una mayor concentración de la economía, a una estructura de precios relativos de la economía en forma distorsiva que genera una distribución inequitativa del ingreso y que a su vez perjudica el poder adquisitivo del consumidor y los sistemas de compensación de precios al productor.

En este contexto considero que es absolutamente fundamental la acción regulatoria del Estado, para terminar con esa situación de inequidad.

Creo, señor presidente, que el primer escenario de debate en la República Argentina tiene que ver con el rol del Estado. Existen quienes creen que el Estado no debe tener función regulatoria en el funcionamiento del sistema económico, como ocurrió en la década del 90, en la cual gobernó el neoliberalismo, y los mercados

—en manos de las corporaciones poderosas económicamente— eran quienes regulaban la economía en contra de los intereses de las mayorías desprotegidas.— No es esta nuestra posición, por el contrario entendemos que en la economía moderna el Estado cumple un rol absolutamente insoslayable, fundamentalmente para establecer los parámetros de distribución equitativa y justa de la riqueza.

Y esa facultad regulatoria que el gobierno tiene de la economía, está dada sobre la base de un mandato popular y es la voluntad popular la que elije los gobiernos por un plazo determinado en el marco del acatamiento irrestricto a la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio.

Por eso el rol del Estado en el ejercicio de la capacidad regulatoria tiene la legitimidad de origen de un gobierno elegido por la voluntad popular.

Básicamente, el rol del Estado tiene por objetivo garantizar el bienestar general, propiciar la defensa del interés general y promover el bien común, y en ese contexto nosotros tenemos que defender a los que no tienen voz, a los más débiles de la cadena.

Y para ello es absolutamente necesario contar con herramientas idóneas, apropiadas, que permitan finalmente resolver los problemas, y estas leyes precisamente tienen por finalidad dotar al Estado de esos instrumentos. Eso le permitirá al Estado intervenir para proteger los intereses de los más débiles.

Asentadas estas consideraciones preliminares, expreso mi visión de la ley específica de creación del observatorio de precios y disponibilidad de bienes y servicios ¿Cuál es el objetivo de la creación de este observatorio?

La facultad de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en todo el territorio de la nación. Y este sentido debe existir el máximo nivel de transparencia.

Señor presidente, hoy la tecnología permite que el sistema informático pueda verificar cualquier transacción a través de la automatización de los procedimientos. O sea, hoy un consumidor va a cualquier tipo de expendio de un supermercado, genera la adquisición del bien, tiene el código de barras, tiene el sistema de registro automático del nivel de precios, registra la operación y ese registro de operación también constituye en forma paralela la documentación respaldatoria para el cumplimiento de las obligaciones de carácter impositivo y/o previsional.

Definitivamente, lo que entendemos es que el observatorio de precios no tiene otro sentido que el verificar el comportamiento desde el punto de vista de producción de insumos, bienes y precios sobre la base de la información disponible.

Obviamente, este observatorio de precios puede hacer un nivel de evaluación desde el punto de vista de comportamiento de precios. Es absolutamente in-

dispensable garantizar la transparencia en el funcionamiento de precios; precios que determinen la evolución de cada uno de los componentes en el desenvolvimiento de la actividad económica, porque eso hace a la verificación del comportamiento de las cadenas de valor, las cadenas productivas y la matriz de insumo-producto que es la base para garantizar la competitividad de la economía y el uso eficaz y eficiente de instrumentos de política económica para adoptar una perspectiva de crecimiento sostenido de la economía.

La implementación del fuero del consumidor. Esta medida lo que hace es establecer una etapa conciliatoria previa que permite una instancia administrativa para la auditoría de las relaciones de consumo y un nuevo fuero en el ámbito de la justicia federal y nacional en las relaciones de consumo.

La instancia conciliatoria es obligatoria, previa, gratuita para el consumidor y entenderá en reclamos por montos hasta 55 salarios mínimos vitales y móviles. Los acuerdos serán homologados por la Secretaría de Comercio y en caso de incumplimiento se prevé la ejecución ante el nuevo fuero.

Y éste es el dato más significativo de la relación. Primero, ¿en qué situación estábamos hoy? Situación en donde un consumidor hacía un reclamo y verdaderamente pasan años y años y no había un sistema de penalización respecto a su reclamo, ni una reparación de sus reclamos o si la había no era sobre lo que efectivamente pretendía el consumidor respecto a esa reparación del daño. En consecuencia, lo que nosotros hoy establecemos es un sistema de conciliación obligatoria, de intervención vía juez administrativo, de resolución rápida y eventualmente una apelación de carácter judicial, a los efectos de resguardar y hacer cumplir efectivamente los derechos del consumidor.

La justicia federal y nacional en las relaciones de consumo se regirá por algunos principios que son esenciales: celeridad, intermediación, economía procesal, oralidad, gratuidad y protección para el consumidor. Y obviamente entenderá en reclamos de hasta 55 salarios mínimos, vitales y móviles.

El nuevo fuero especial es un proceso más breve que el sumarísimo, inclusive. Se concentrará en una sola audiencia en la que el juez podrá dictar sentencia. O sea, celeridad más rápida que el juicio sumarísimo y una capacidad efectivamente para resolver el problema.

Se crean en la Capital Federal ocho juzgados de primera instancia y en la Cámara de Apelaciones dos salas, y la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo entenderá en los recursos deducidos contra las sanciones establecidas en el marco de las leyes de defensa del consumidor de lealtad comercial y de defensa de la competencia.

Señor presidente, por lo expuesto, expreso mi voto afirmativo a los tres proyectos traídos en consideración a esta Cámara, e invito a los senadores a que me acompañen con su voto.

18

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
HIGONET

**Proyecto de ley de reestructuración de la deuda
2005-2010 y el pago soberano local
(O.D. N° 328/14)**

Señor presidente:

La presidenta de la Nación anunció por cadena nacional el envío de un proyecto de ley para declarar de interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010 y el pago soberano local, que comprenda al ciento por ciento de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.

En virtud de ello, la presidenta fundamentó claramente la medida diciendo: En ejercicio de su poder como Estado soberano, la República Argentina reafirma la voluntad, facultad y capacidad de pago, y el compromiso de honrar sus obligaciones. La sanción de la norma legal que se propone por la presente resulta necesaria, ya que la República Argentina ha visto bloqueado el procedimiento para el cobro de los tenedores de títulos de la deuda pública reestructurada en los años 2005 y 2010, por las ilegítimas e ilegales medidas adoptadas por la justicia de los Estados Unidos de América en la causa “NML Capital Ltd. et al v. Republic of Argentina” –las órdenes *pari passu*–, en trámite por ante el Juzgado de Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América; sin precedentes en ningún lugar del mundo. A través de esta iniciativa se propicia la implementación de distintos instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al ciento por ciento de los títulos emitidos en el marco de la reestructuración de deuda soberana 2005-2010, y de los que en el futuro se emitan en reemplazo de aquellos que aún no ingresaron a dicha Reestructuración.

En el ámbito del derecho internacional, los Estados poseen igualdad jurídica soberana, por lo cual, entre otras cosas, sus bienes no pueden ser sometidos a medidas ejecutorias, a menos que se presenten ciertas excepciones. Esta norma consuetudinaria del derecho internacional fue receptada por diversos Estados en sus ordenamientos jurídicos internos, entre ellos Estados Unidos de América, que adoptó en el año 1976 la *Foreign Sovereign Immunities Act* –FSIA–.

Luego de un extenso y trabajoso proceso de diálogo y negociación con sus acreedores, la República Argentina abrió el canje 2005. Así, a través del decreto 1.735/04, se dispuso la reestructuración de la deuda del Estado nacional mediante una operación de canje nacional e internacional, que tuvo una adhesión superior al 76 por ciento. Posteriormente, la ley 26.017 dispuso que el Poder Ejecutivo nacional no podría, respecto de los bonos a que se refiere esa norma, reabrir el proceso de canje establecido en el decreto 1.735/04

mencionado, así como también le prohibió al Estado nacional efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de dichos bonos.

La ley 26.547 suspendió la vigencia de los artículos 2º, 3º y 4º de la citada ley 26.017 hasta el 31 de diciembre de 2010 o hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, declarase terminado el proceso de reestructuración de los títulos públicos alcanzados por la referida norma, lo que ocurriese primero. Y, además, autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos –artículo 2º–, disponiendo en el artículo 3º que los términos y condiciones financieros que se ofrecieran no podrían ser iguales ni mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el decreto 1.735/04. Asimismo, estableció que los tenedores de títulos públicos elegibles para el canje interesados en participar de la operación de reestructuración, debían renunciar a todos los derechos y reclamos que les pudiesen corresponder en virtud de dichos títulos. Y le prohibió al Poder Ejecutivo nacional la posibilidad de ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo, un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho. En uso de dicha autorización, el Poder Ejecutivo nacional abrió el Canje 2010, mediante el dictado del decreto 563/10, que dispuso la reestructuración de la deuda del Estado nacional instrumentada en los títulos públicos que fueran elegibles para el canje dispuesto en el decreto 1.735/04, el cual permitió que la adhesión al proceso de reestructuración de la deuda argentina llegara a un 92,4 por ciento.

Posteriormente, en el marco del mencionado proceso de reestructuración de deuda soberana, en el año 2013 se sancionó la ley 26.886, por la cual se autorizó al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos que hubieran sido elegibles para el canje dispuesto en el decreto 1.735/04 y sus normas complementarias que no hubiesen sido presentados al mismo ni al canje dispuesto por el decreto 563/10, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156 de administración financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, con el fin de adecuar los servicios de dicha deuda a las posibilidades de pago del Estado nacional en el mediano y largo plazo –artículo 1º–. Asimismo, a través de su artículo 2º se limitaron las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo nacional, al establecer que los términos y condiciones financieros que se ofrecieran no podrían ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el decreto 563/10, y se mantuvieron las condiciones y limitaciones previstas en el artículo 5º de la ley 26.547. Finalmente, a través del artículo 7º,

fue suspendida la vigencia de los artículos 2º, 3º y 4º de la ley 26.017, hasta tanto el Congreso de la Nación declare terminado el proceso de reestructuración de los títulos públicos alcanzados por la referida norma. La República Argentina ha buscado desde un principio una solución definitiva, justa, equitativa, legal y sustentable de su deuda con todos los bonistas que no ingresaron aún en los canjes de la República. Sin embargo, una solución global no puede, por definición, priorizar los reclamos por aproximadamente 1.650 millones de dólares estadounidenses de los demandantes que cuentan con las órdenes del 23 de febrero de 2012, que representa menos del 1 por ciento de la deuda de la República elegible para los canjes, o para esos efectos, reclamos adicionales por más de 2.400 millones de dólares estadounidenses que sólo estos demandantes tienen en otras acciones judiciales.

Creo totalmente necesario y constitucional que este proyectó nos involucre como cuerpo y nos interpele. Así como salimos a buscar el acompañamiento y entendimiento de países de la región como de otros países de otros continentes y de realidades muy distintas a las nuestras en el convencimiento y defensa de que este fallo así como pone en vilo al futuro de nuestro país también afecta la reestructuración de futuras deudas del sistema financiero global. Tuvimos el acompañamiento unánime de G77 más China, Parlatino, OEA, entre otros. Como este Senado, este Congreso no va a tratar y acompañar un proyecto que “rebalsa” de soberanía, que representa un país en pie, que nos muestra como un gobierno ante la adversidad busca nuevos instrumentos para seguir cumpliendo sus obligaciones, sus compromisos de pago de una deuda que no contrajo sino que heredo, pero sin dejar de crecer, sin dejar de incluir sin dejar que los sueños de todos y cada uno de los argentinos presentes y futuros se frustren, sin dejar de defender el bien común de un pueblo que ya sufrió mucho las consecuencias de esta deuda. Por ello, mi voto es positivo total y absolutamente convencido.

19

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DI PERNA

**Proyecto de ley de reestructuración de la deuda
2005-2010 y el pago soberano local
(O.D. N° 328/14)**

Señor presidente:

Como Congreso Nacional nos encontramos ante un debate que marcará la historia y la economía de nuestro país. Todos los ciudadanos cargamos con la mochila de nacer en un tiempo, en un lugar, en una familia y en una sociedad. Ni siquiera un recién nacido es un papel en blanco o una tabla rasa. Y los recién nacidos de la República Argentina cargan con la mochila de la deuda externa.

Lamentablemente, el proyecto que estamos tratando hoy no aborda el tema de la historia de la deuda, sino que plantea una salida en esta coyuntura, la cual considero inviable desde el punto de vista operativo.

Estamos perturbados por la inflación que nos aqueja y por el efecto que tiene la “precarización” del trabajo que se registró en el último tiempo. Sabemos que el pleno empleo es fundamental para combatir la pobreza y así generar un crecimiento ininterrumpido de la economía. La clase trabajadora está siendo perseguida por la excesiva carga tributaria, política del gobierno oficialista ante el enorme gasto público.

Esto sumado a la pérdida de las inversiones, al deterioro de nuestra moneda, el cepo sobre el mercado de divisas y la posible pérdida de las condiciones de financiación internacional, coloca a nuestro país en una situación de fragilidad extrema que no tendrá piedad al medir sus consecuencias.

La Argentina ha perdido credibilidad en sus instituciones. Una manipulación constante de las estadísticas sobre inflación que publica el INDEC y los interminables cuestionamientos al Poder Judicial, por interpretar que la división de poderes sólo debería existir en los libros de historia pero no en los hechos, no hacen más que aumentar el conflicto existente entre el gobierno y el resto de la sociedad que los legitimó por voto popular.

Infelizmente nos enfrentamos al riesgo de un grave deterioro en nuestras condiciones de financiación internacional hacia el futuro. Tenemos tres fallos de la justicia americana en contra de nuestro país. Y si no recuperamos la credibilidad internacional o, por lo menos, la de quienes están interesados en este tema, no vamos a poder negociar. O caso contrario, en condiciones cada vez más perjudiciales y en detrimento del país y su pueblo.

Por eso, el Congreso de la Nación debe reconquistar sus facultades en lo que es competencia en esta materia y legislar para no volver a cometer los errores que se cometieron.

Considero que este proyecto tiene inconsistencias que deberían haber sido tratadas con más profundidad, por los efectos perjudiciales que conllevará la sanción de esta ley.

Con el artículo 1º nos están solicitando que convalidemos las dos últimas negociaciones del canje de 2005 y 2010, sabiendo que las mismas están bajo sospecha y siendo investigadas. En este artículo declaramos de interés público esta refinanciación. O sea, esto implica que estará por encima de cualquier interés particular y libre de cualquier investigación que se intente hacer sobre el tema por la relevancia que lo caracteriza. Y más aún cuando simultáneamente creamos una comisión bicameral con atribuciones investigativas sobre esta refinanciación, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el primer canje del gobierno kirchnerista. Por lo cual, interpreto, como muchos de los senadores aquí presentes, que declararlo de interés público no tiene otra

finalidad más que evitar que este Congreso cumpla con esa función, excluyendo de la investigación al último canje, ya que de aprobar este proyecto, sin modificar ese aspecto, quedará ratificado. Creo que esto es una cuestión incompatible. Nos habría gustado también que la comisión que se conformare considerara no solamente el tratamiento de la deuda externa, sino también la deuda interna, que año a año lamentablemente crece a pasos agigantados.

Considero que la propuesta que hizo en líneas generales el senador Basualdo merecía un debate más profundo para poder analizar la posibilidad de lograr una operatoria que tuviera otra salida frente a esta situación. Es así como el senador plantea la opción de las tres jurisdicciones para poder canjear la tenencia de los bonos espejo, con las mismas condiciones y con una cláusula reversible para que, cuando solucionemos el problema, esos tenedores de bonos puedan volver al Banco de Nueva York para pedir sus certificados de propiedad. Es decir que les estaríamos dando facilidades para que lo puedan hacer. Se propone para esto a la Caja de Valores, organismo que cuenta con más experiencia que el nuevo fondo Nación Fideicomiso. Y además se prevé que los pagos sean a través del Banco Nación Uruguay, ya que de esta manera no podrán embargar nuestros bienes, conforme lo dispuesto en el fallo “Morresi Castro, Ernesto c/Rep. Argentina-Embajada Rca. Argentina en Montevideo- Demanda por Cobro de bonos Impagos- causa Diplomática”.

Pero volviendo al proyecto del Poder Ejecutivo, otro de los problemas que se presenta es la imposibilidad de identificar a los tenedores reestructurados de esos títulos por cobrar. Por lo cual, por más que modifiquemos la jurisdicción de pago, no vamos a saber a quién pagarle.

Señor presidente, nos encontramos debatiendo este tema porque existe una sentencia de un tribunal internacional, al cual nos sometimos voluntariamente, que nos obliga a pagar una millonaria suma de dinero, dejándonos al borde del desacato. Sabemos que de no cumplir con este fallo nuestro país perderá credibilidad en sistema financiero, nos dejará fuera de futuros créditos y estaremos muy observados por el mercado financiero internacional. Por lo cual es absolutamente necesario que esta ley pueda dar una señal de credibilidad hacia la República Argentina que nos permita sentarnos a negociar y salir de esta situación de la mejor manera posible.

Todas las naciones cargan con la mochila de su historia. El antecedente directo a esta grave situación se basa en el incumplimiento en el año 2001 de las obligaciones contraídas por nuestro país al haber declarado la suspensión del pago de la deuda externa soberana por un valor superior a los 100.000 millones de dólares.

Pero no es momento de lamentar y de discutir sobre lo que se pudo hacer y no se hizo.

Es fundamental que nuestro país sanee la economía, que pueda haber inversiones, que no se pierdan fuentes

de trabajo, que el país esté en el concierto de las naciones en desarrollo, que no esté aislado.

Deberíamos dar una señal esperanzadora, tratar de recuperar la credibilidad mediante estadísticas confiables; y terminar con los superpoderes. Realmente, la credibilidad la daríamos con medidas que nos permitieran volver a ser una República con instituciones creíbles. Es cierto que la sentencia judicial a favor de los fondos buitres “NML Capital y Aurelius” nos perjudicó de manera insospechada, sentencia que ponderó la obtención de millonarios beneficios a favor de unos pocos; en contra de los derechos de una Nación soberana y en contra de sus ciudadanos. Pero es muy probable que si no cumplimos con el fallo, nuestro país pueda incurrir en un posible desacato, hecho que generará una incertidumbre absoluta a nuestra sociedad, más de la que existe actualmente.

Señor presidente, lamento que las propuestas ofrecidas por el bloque opositor no hayan podido ser analizadas, sino que fueron, de alguna manera, denostadas por quienes consideran que tienen la solución a esta problemática. Realmente, yo creo que no es así.

La Argentina necesita darle un tratamiento integral a toda su deuda, interna y externa. Pero para ello es fundamental dar señales absolutamente claras, tanto de institucionalidad, confianza y credibilidad; situación que no logrará el proyecto del Ejecutivo.

Por lo expresado, manifiesto que mi voto es negativo.

20

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
HIGONET

**Sistema de Resolución de Conflictos
en las Relaciones de Consumo
(O.D. Nº 325/14)**

**Observatorio de Precios y Disponibilidad
de Insumos, Bienes y Servicios
(O.D. Nº 326/14)**

**Regulación de las relaciones
de producción y consumo
(O.D. Nº 327/14)**

Señor presidente:

Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho al control por parte de los estados, encargados de velar por el bien común.

Por cierto que en este sentido es enviado este paquete de iniciativas legislativas por el Ejecutivo, que requiere darnos, en primer lugar, la discusión en torno a las distintas modalidades de intervención del Estado y qué objetivos se persigue con cada modalidad. Es decir: si queremos un Estado activo, fuerte, que proteja

los eslabones más débiles, es necesario que cuente con herramientas para garantizar que todos los consumidores accedan a los bienes y servicios producidos en el país en cantidades, calidades y precios razonables; es decir: que los consumidores puedan comprar lo que necesitan y quieren comprar. Y que, en caso de que lo que compren o contraten no esté en buenas condiciones o no coincida con lo que se comprometieron al ofrecérselo, exista un esquema ágil donde reclamar y lograr solucionar sus problemas.

Es el Estado quien debe supervisar que no se produzcan abusos en el ámbito de la producción, la distribución y la comercialización. Si queremos un estado mínimo que sólo busca el fortalecimiento de los sectores más concentrados que no necesitan la protección del Estado: “No olvidemos que aquello que no se legisla explícita y taxativamente a favor del débil, queda legislado implícitamente a favor del poderoso. No es el poderoso quien necesita amparo legal. Él tiene su ley en su propia fuerza” –Scalabrini Ortiz–. El Estado mínimo, desregulador y flexibilizador no se retira del mercado, sino que naturaliza las reglas de juego de los más fuertes; defiende “la iniciativa privada” de estos grupos, al tiempo que hace la vista gorda a los atropellos cometidos contra “la iniciativa privada” de todos los demás jugadores. Esto es lo que estos sectores concentrados denominan con el eufemismo de “reglas claras”, cuando en realidad lo que piden son las reglas que les gustan a ellos.

En un contexto como el que aún subsiste en la economía argentina de una fuerte concentración en grupos monopolios u oligopólicos en muchos sectores claves, tanto productores de insumos difundidos como de bienes de consumo masivo.

Ante esta elevada concentración el Estado encuentra limitaciones para arbitrar en las relaciones de consumo y producción, por ello es que son necesarios los tres proyectos enviados a este Congreso, que son el proyecto de ley estableciendo una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, estableciendo un sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo y creando el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios.

Con respecto al primer y segundo proyecto que mencioné. Se propone reglamentar el artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice:

“Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

”Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios

públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

“La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.”

Con ello, se trata de prevenir abusos en perjuicio de la parte vulnerable en las relaciones de consumo. Es un proyecto de resolución de conflictos en el ámbito del consumo. Para esto propone tres mecanismos nuevos.

Crea el COPREC, la auditoría en las relaciones del consumo, y un fuero nuevo: la justicia federal y nacional en las relaciones de consumo.

Poco antes de que se cumplan 20 años de la última reforma constitucional, el gobierno presentó su proyecto de ley para reglamentar por primera vez aquel artículo 42 que establece los derechos de los consumidores de todo el país.

El texto establece como principal objetivo garantizar el acceso a una resolución de conflictos que actúe con “celeridad, intermediación, economía procesal, oralidad, gratuidad y protección para el consumidor”.

El COPREC –el Servicio de Conciliación Previa en las relaciones de consumo– es un servicio de conciliación previa obligatoria y gratuita en las relaciones de consumo. Es creado en el ámbito de la Secretaría de Comercio. A fin de buscar organismos y antecedentes análogos, podríamos decir que se prevé la creación de un servicio de mediación que operará como una mezcla entre los tribunales arbitrales de consumo y el SECCO que funciona en materia laboral en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Los reclamos ante el COPREC no podrán ser superiores a los 200 mil pesos aproximadamente –equivalente a 55 salarios mínimos, vitales y móviles de hoy– y gozarán del beneficio de gratuidad para el consumidor. El consumidor no necesitará contar con patrocinio letrado obligatorio, pero podrá solicitar patrocinio jurídico gratuito, ya sea de los existentes, o de los que al efecto se crearan en la órbita de la Secretaría de Comercio.

La instancia del COPREC es previa y obligatoria a cualquier reclamo administrativo o judicial. El COPREC tendrá un registro de conciliadores propio, para presentarse en ese registro hay que ser mediador y tener conocimientos en el área de consumo presentarse ante el Ministerio de Justicia quien será el encargado de habilitarlos. Los conciliadores se designarán en cada reclamo, por sorteo o por acuerdo de partes.

Los acuerdos que se alcancen en el COPREC deberán ser sometidos a homologación de la Secretaría de Comercio de la Nación, quien tendrá facultades para observar el acuerdo arribado. El plazo máximo para lograr una solución es de 30 días, pero puede ser

prorrogado por otros 15 días más si el conciliador lo considera necesario.

Para evitar lo que hoy sucede, cuando muchas veces las compañías optan por no presentarse a las audiencias para dilatar las denuncias, se establecerá una multa de 3.600 pesos, para todas aquellas empresas que falten sin motivo a los encuentros. De esa penalidad, el 30 por ciento se entregará al demandante y el resto se utilizará para pagar los gastos y consolidar el nuevo Fondo de Financiamiento, que en parte sostendrá el gobierno con partidas para los ministerios de Economía y Justicia. Si el consumidor se da por satisfecho con ese dinero o si consiguió llegar a un acuerdo con la compañía, el conflicto se dará por cerrado. Pero si considera que ese resarcimiento no es suficiente o si no llegó una solución satisfactoria, tendrá otras dos instancias a las que podrá recurrir: la Auditoría en las Relaciones de Consumo –ARC, la nueva designación de la instancia administrativa en el orden nacional– y la justicia federal y nacional en las relaciones de consumo. Las auditorías en las relaciones de consumo son una suerte de jueces administrativos, en el ámbito del Ministerio de Economía, quienes serán designados por el Ejecutivo a través de un concurso público con 6 jueces de diferentes organismos del Estado y deberán ser abogados con 4 años de ejercicio de la profesión y dedicación exclusiva. El procedimiento administrativo del proyecto es sustancialmente diferente al vigente en tanto se prevé una audiencia de prueba inmediata, oral y con registro filmico. Se podrá acudir con o sin asistencia letrada. Se podrá optar por este procedimiento en el caso de que el daño reclamado sea menor a 54.000 pesos, si lo reclamado supera esta cifra debe acudirse a la justicia. En la audiencia, o dentro de los cinco días de la misma, el auditor de Relaciones de Consumo dictará resolución definitiva, la que podrá ser recurrida ante el nuevo fuero del consumidor que el proyecto crea, con efectos suspensivos, como principio general.

Con respecto a la Justicia de las relaciones de consumo, este fuero intervendrá en los conflictos de consumo que no superen el límite patrimonial referido anteriormente –200 mil pesos; aproximadamente, 55 salarios mínimos, vitales y móviles hoy– y, en la Ciudad de Buenos Aires, estará conformado por ocho juzgados de primera instancia y una cámara de apelaciones con dos salas. También crea fiscalías y defensorías oficiales ante el nuevo fuero. Por último también se crea por ley un observatorio de precios y disponibilidad de bienes y servicios. Será un organismo técnico con el objeto de asistir al secretario de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el país. El observatorio estará compuesto por representantes de distintos ministerios y representantes de asociaciones de consumidores.

Me voy a referir a la vigencia de la Ley de Abastecimiento que tantas dudas trajo. La ley 20.680, Ley de Abastecimiento, se encuentra vigente desde su dictado

en 1974. En el año 1991 el decreto 2.284/91 –conocido como decreto de desregulación económica– suspendió las facultades otorgadas por la ley al Poder Ejecutivo. Sólo podían utilizarse si el Poder Legislativo dictaba la emergencia en abastecimiento. En el año 1999, el decreto 722/99 declara la emergencia de abastecimiento y restablece las potestades de la ley 20.680. Debe destacarse que el restablecimiento de las facultades que hizo esta norma en ningún momento se limitó a la duración de la emergencia de ese momento. De acuerdo con la interpretación efectuada por el procurador del Tesoro de la Nación, en el dictamen 288 del año 2007, el decreto 722/99 rehabilitó las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por la ley 20.680 y estas se hallan vigentes a la fecha. No puede interpretarse que esta rehabilitación se hizo sólo por el tiempo de la emergencia declarada en el decreto 722/99 ya que la ley tiene vocación de permanencia. Además, no existe ninguna disposición o comentario en este decreto que limite el restablecimiento de las facultades otorgadas por la ley 20.680 a la duración de la emergencia declarada en aquél año. Es principio básico del derecho que no debe limitarse o interpretarse restrictivamente una decisión en el caso en que no se disponga expresamente. Además, la ley 20.680 fue incorporada al digesto Jurídico Argentino como norma vigente en el país.

Algunas de las reformas son, en el artículo 1º donde se exceptuó a las pymes del régimen, agregando el siguiente párrafo: “Quedan exceptuados del régimen establecido en la presente ley, los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas, siempre que no detentan posición dominante”. Con respecto a las infracciones, en el artículo 4º de la iniciativa en tratamiento se modifica el artículo 5º de la 20.680 –de las sanciones a los infractores del 4º–: en el inciso a) se incrementa el límite superior de las multas pasando de 1.000.000 de pesos a 10.000.000 de pesos, queda vigente la posibilidad de que sea el triple de la ganancia generada por la infracción. Se elimina el in-

ciso b), que dispone el arresto del empresario infractor. El inciso e) elimina el tope mínimo de la inhabilitación del infractor. En la ley vigente dice “inhabilitación de entre 1 y 5 años”, en la nueva dice “de hasta 5 años”. En el artículo 8º, que modifica el 9º, se elimina la sanción de prisión para aquellos que obstruyan la tarea sancionatoria o de investigación de la autoridad de aplicación, poniéndolo en línea con la eliminación de las sanciones penales. Lo mismo establece el artículo 10º de la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional, que elimina el inciso h) del artículo 12 de la ley vigente, eliminando lo referente a la pena de prisión.

Por último defender y empoderar al consumidor mediante los cambios en la Ley de Defensa del Consumidor, sin trabajar sobre la Ley de Relaciones del Consumo y la Producción, implica tener un tratamiento parcial sobre sus derechos. Imaginemos que el Congreso vota la ley que crea el nuevo Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo pero no vota la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo. Esto implicaría que el Estado tendría herramientas para defender a los consumidores cuando realizaran una compra, pero permitiría abusos sobre él o sobre su entorno al no velar por relaciones de producción justas con iguales condiciones para todos sus participantes. Esto significa que el Estado podría brindarle protección si comprara un producto fallado, pero nada podría hacer si su precio fuera demasiado alto respecto a los costos que enfrenta la empresa para su realización.

Para evitar que se perpetúe la desigualdad e inequidad resultantes de semejantes niveles de concentración, el Estado debe intervenir en las relaciones de producción y consumo con regulaciones y políticas que protejan a los eslabones más débiles, que son las empresas pymes y los consumidores. Este es el camino que se adoptó desde hace más de una década y que alimentó el proceso de crecimiento con inclusión social.